

# DIARIO DE SESIONES

**Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba**

**04 de Mayo de 2011**

---

**16ª REUNION – 15º SESION ORDINARIA**

---

Vicegobernación:	<b>CAMPANA</b> , Héctor Oscar
Presidente Provisorio:	<b>BUSO</b> , Sergio
Vicepresidente:	<b>CARBONETTI</b> , Domingo (h)
Vicepresidente 1ª:	<b>NICOLÁS</b> , Miguel
Vicepresidente 2ª:	<b>BISCHOFF</b> , Eduardo
Secretario Legislativo:	<b>ARIAS</b> , Guillermo
Secretario Administrativo:	<b>DIB</b> , Héctor Daniel
Secretario de Coordinación Operativa y de Comisiones:	<b>DANIELE</b> , Fredy
Secretaría Técnica Parlamentaria:	<b>PASTOR</b> , Graciela del Carmen
Prosecretaría Legislativa:	<b>STIMOLO</b> , Christian
Prosecretaría Administrativa:	<b>SIMONIAN</b> , Elizabeth
Prosecretario de Coordinación Operativa y de Comisiones:	<b>ELLENA</b> , Armando
Prosecretario Técnico Parlamentario:	<b>MANZUR</b> , Horacio

---

**Legisladores presentes:**

ALARCIA, María Leonor.	GENESIO DE STABIO, Modesta M. Teresa
ALBARRACIN, Raúl Humberto	GENTA, Mabel del Carmen.
ALESANDRI, Carlos.	GIAVENO, Carlos José.
ALTAMIRANO, Alfredo.	GUDIÑO, Italo.
ASBERT, Enrique Mario.	HEREDIA, Dante Fortunato
BIRRI, Roberto César.	IPÉRICO, Nelson José.
BISCHOFF, Eduardo Efraín.	JIMÉNEZ, Raúl Ernesto.
BRESSAN, Estela Beatriz.	LIZZUL, Nancy Fabiola
BRUGGE, Juan Fernando.	LOBO, Héctor Reinaldo.
BUSO, Sergio Sebastian.	LÓPEZ, Ricardo Hector.
CALVO AGUADO, María Soledad	MAIOCCO, José Antonio.
CARBONETTI, Domingo Angel (h)	MATAR, María Alejandra.
CARGNELUTTI, Alicia.	MONIER, José Omar.
CARRERAS, José Benito.	NARDUCCI, Alicia Isabel.
CHIOFALO, María Amelia	NICOLÁS, Miguel Osvaldo.
CID, Juan Manuel.	NIETO, Gladys del Valle.
CUELLO, Hugo Oscar.	OCHOA ROMERO, Pedro.
CUGAT, Alfredo Jesús.	PAGLIANO, Roberto Oscar.
DANDACH, Kasem Merched.	PASSERINI, Daniel Alejandro.
DÍAZ, Sara Cristina Aurelia	PODVERSICH, Norberto Luís.
DRESSINO, Ana María.	PONCIO, Norma María.
FERAUDO, Evelina Margarita.	POZZI, Hugo Alberto.
FERNÁNDEZ, Nadia Vanesa.	RIVERO, Silvia Graciela.
FLORES, Ernesto Ramón.	RODRIGUEZ, Esmeralda del Tránsito.
FROSSASCO, Horacio Marcelo.	ROGANTI, Alejandro Antonio.
GAMAGGIO SOSA, Marisa.	ROSSI, Dante Valentín.

ROSSO, Milena Marina.  
 RUIZ, Omar Antonio.  
 SAIEG, Walter  
 SCARLATTO, José Luís.  
 SECULINI, César Omar.  
 SELLA, Orlando Enrique  
 SENN, Horaldo Alejo.  
 SERNA, Rodrigo Leandro.  
 SERRA, César Miguel José  
 VALAROLO, Mirtha del Carmen.  
 VÁSQUEZ, Mario Alberto.  
 VEGA, Horacio Daniel.  
 VILLENA, José Eduardo.

#### **Legisladores ausentes**

##### **Justificados:**

CORIA, Adela. *(Se le prorrogó su licencia por treinta días a partir del 01/04/11, conforme el artículo 15 del Reglamento Interno por R-2364/11))*  
 MANZANARES, María Graciela.  
 OLIVERO, María Liliana.  
 RAZZETTI, Edmundo.  
 SOLUSOLIA, Walter Osvaldo.

#### **Legisladores ausentes**

##### **no justificados:**

---

## **SUMARIO**

- 1.- Izamiento de la Bandera Nacional.....1113
- 2.- Versión taquigráfica. Aprobación .....1113
- 3.- Asuntos entrados:

I.- Comunicaciones oficiales .....1113

#### **De los señores legisladores**

II.- Plan Provincial de Manejo del Fuego. Fondos. Demora en la distribución. Pedido de informes. Proyecto de resolución (7375/L/11) del legislador Seculini .....1114

III.- Plan Provincial de Manejo del Fuego. Gobierno provincial. Omisión de pago de la deuda que mantiene con los cuarteles de bomberos voluntarios. Preocupación. Proyecto de declaración (7382/L/11) de los legisladores Calvo Aguado, Poncio, Matar, Giaveno, Dressino, Pozzi, Nicolás y Cargnelutti .....1115

IV.- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Montos anunciados. Acreditación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (7383/L/11) de los Legisladores, Matar, Giaveno, Dressino, Cugat, Poncio, Cargnelutti, Gudiño, Pozzi, Nicolás y Rossi .....1115

V.- Departamento Cruz del Eje. Sequía. "Zona de desastre". Decreto. Solicitud. Proyecto de declaración (7384/L/11) de los legisladores Matar, Giaveno, Gudiño, Cugat, Cargnelutti, Poncio, Calvo Aguado, Dressino, Rossi y Nicolás .....1115

VI.- Localidad de La Población, Dpto. San Javier. Fiestas Patronales. Adhesión. Proyecto de declaración (7386/L/11) de los legisladores Gudiño, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Poncio, Giaveno, Matar, Rossi y Nicolás.....1115

VII.- Publicidad o campaña oficial con nombres propios de quienes ejercen la representación de los tres poderes del Estado y entes descentralizados, agencias y sociedades del Estado. Prohibición. Proyecto de ley (7387/L/11) de los legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi y Dressino .....1115

VIII.- XX Encuentro Nacional de Poetas, en la ciudad de Brinkmann, Dpto. San Justo. Interés legislativo. Proyecto de

declaración (7388/L/11) de los legisladores Giaveno, Rossi, Poncio, Calvo Aguado, Gudiño, Cargnelutti, Dressino, Matar y Pozzi.....1115

IX.- Srta. Melina Garione, de la ciudad de Brinkmann. Participación en el 2º Encuentro Austral del Deporte, Arte y Producciones Especiales. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (7389/L/11) de los legisladores Giaveno, Rossi, Poncio, Calvo Aguado, Gudiño, Cargnelutti, Dressino, Matar y Pozzi .....1115

X.- Sra. María Eva Duarte de Perón. Natalicio. 92º Aniversario. Homenaje. Proyecto de declaración (7392/L/11) del legislador Ochoa Romero .....1115

XI.- Día del Coraje Civil. Adhesión. Proyecto de declaración (7394/L/11) del legislador Birri .....1116

XII.- Paraje Los Espinillos. Futura planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Situación actual. Pedido de informes. Proyecto de resolución (7395/L/11) de los legisladores Rodríguez y Seculini .....1116

XIII.- Escritor Ernesto Sábato. Fallecimiento. Profundo pesar. Proyecto de declaración (7396/L/11) de los legisladores Rodríguez y Seculini .....1116

XIV.- Escuela Miyazato de Karate-Do, sucursal Huinca Renancó. Metodología para mejorar aspectos físicos, psíquicos y sociales en personas con Síndrome de Down. Implementación. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (7399/L/11) del legislador Pagliano .....1116

XV.- VI Congreso Internacional de Municipios y Servicios Públicos "Camino a las Ciudades Sustentables". Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (7401/L/11) de la legisladora Chiofalo ...1116

XVI.- Gobierno provincial. Deuda con distintos organismos provinciales. Pedido de informes. Proyecto de resolución (7402/L/11) de los legisladores Lizzul y Jiménez .....1116

XVII.- Localidad de Italó, Dpto. General Roca. 103º Aniversario. Adhesión y

beneplácito. Proyecto de declaración (7403/L/11) del legislador Pagliano .....	1116
XVIII.- Himno Nacional Argentino. Sanción. Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (7405/L/11) de la legisladora Rodríguez .....	
XIX.- 25º Fiesta Provincial de la Soja, en la ciudad de Río Segundo. Interés legislativo. Proyecto de declaración (7408/L/11) de los legisladores Gamaggio Sosa y Busso .....	1117
XX.- IV Festival Internacional de Danza Contemporánea en Paisajes Urbanos (Pulso Urbano), en la ciudad de Córdoba. Beneplácito. Proyecto de declaración (7409/L/11) de la legisladora Bressan .....	1117
XXI.- Seminario de Formación de Ludo Educadores, en la ciudad de Río Cuarto. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (7410/L/11) de la legisladora Rosso .....	1117
XXII.- Expocampo 2011, en la localidad de Las Vertientes, Dpto. Río Cuarto. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (7411/L/11) de los legisladores Rosso y Vega .....	1117
XXIII.- Asignación por Embarazo para Protección Social. Implementación. Reconocimiento y beneplácito. Proyecto de declaración (7412/L/11) de los legisladores del bloque Concertación Plural .....	1117
XXIV.- EPEC. Bonos emitidos para financiar la nueva central de Pilar. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (7413/L/11) de los legisladores Pozzi, Cugat, Dressino, Cargnelutti, Matar y Poncio .....	1117
XXV.- Sr. Ndaba Mandela. Visitante Ilustre. Declaración. Proyecto de resolución (7414/L/11) del legislador Passerini .....	1117
XXVI.- Curso de Formación de Acompañante Terapéutico, organizado por la Fundación CIVIS. Interés legislativo. Proyecto de declaración (7416/L/11) del legislador Cuello .....	1117
XXVII.- CET S.A. Explotación y funcionamiento de las slots. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (7417/L/11) de los legisladores Roganti y Birri .....	1117
XXVIII.- Fiestas Patronales en honor a Jesús Misericordioso, perteneciente a la Parroquia de Villa de Soto, Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (7418/L/11) del legislador Monier .....	1118
XXIX.- Científico y escritor Ernesto Sábato. Desaparición física. Profundo pesar. Proyecto de declaración (7419/L/11) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical .....	1118
XXX.- Estudiantes universitarios. Residencias en distintas ciudades del interior provincial. Construcción. Disposición. Proyecto de ley (7421/L/11) del legislador Dandach .....	1118

#### **Del Poder Ejecutivo**

XXXI.- Localidad de Colonia Bismarck, Dpto. Unión. Radio municipal. Modificación. Proyecto de ley (7391/E/11) del Poder Ejecutivo .....	1118
---	------

XXXII.- "Salas de Honor y Malvinas" de la Escuela de Aviación Militar, de la ciudad de Córdoba. Lugar de interés provincial. Declaración. Proyecto de ley (7422/E/11) del Poder Ejecutivo .....	1118
XXXIII.- Peticiones y asuntos particulares .....	1118
XXXIV.- Despachos de comisión.1118	
4.- Legisladora Adela Coria. Licencia. Prórroga. Solicitud. Nota oficial (7420/N/11). Se considera y aprueba .....	1119
5.- "Salas de Honor y Malvinas" de la Escuela de Aviación Militar, de la ciudad de Córdoba. Lugar de interés provincial. Declaración. Proyecto de ley (7422/E/11) del Poder Ejecutivo. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba en general y en particular. Entrega de placa recordatoria .....	1120
6.- A) Ministerio de Salud. Sistema de recupero de gastos prestacionales (Ley Nº 8373). Pedido de informes. Proyecto de resolución (6234/L/10) de los legisladores Dressino, Poncio y Rossi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....	1124
B) Ministerio de Salud. Políticas en salud reproductiva y planificación familiar. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6363/L/10) de los legisladores Nicolás, Gudiño, Cugat, Razzetti, Dressino, Matar, Pozzi, Poncio y Giaveno, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....	1124
7.- A) Emprendimiento inmobiliario Puerto del Aguila, Club -Country Náutico, Los Molinos-Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6742/L/10) de los legisladores Coria, Birri y Olivero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....	1124
B) Radar Doppler para detección temprana de fenómenos meteorológicos. Incorporación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6515/L/10) del legislador Bischoff, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....	1124
C) Transporte interurbano. Decreto 1425/10, de aumento escalonado de la tarifa. Incumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6644/L/10) de los legisladores Rossi, Giaveno y Dressino, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....	1124
D) Ley 9814, de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6123/L/10) de los legisladores Coria, Birri, Genesio de Stabio, Asbert, Rivero, Olivero y Fernández, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....	1124
E) Prevención de la drogadicción y lucha contra el narcotráfico en la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6561/L/10) de los legisladores Pozzi, Cugat, Dressino, Cargnelutti, Calvo Aguado, Rossi y Gudiño, con moción de preferencia. Moción de vuelta	

a comisión, con preferencia. Se aprueba.....1124

F) Comunidad Regional San Justo. Fondos anunciados y/o enviados para obras. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6677/L/10) de los legisladores Giaveno, Dressino, Rossi, Matar, Cugat y Gudiño, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba....1124

G) Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de Obras de Infraestructura para Municipios y Comunas y Mancomunidades Regionales. Asignaciones presupuestarias en el período 2009-2010. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6121/L/10) de los legisladores Seculini y Lizzul, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1125

H) Fondo 1,5 % de Ayuda Financiera a Municipalidades y Comunas (ATP). Asignaciones presupuestarias en el período 2009-2010. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6122/L/10) de los legisladores Seculini y Lizzul, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1125

I) Ley Nº 9696, de prohibición de uso de bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional. Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6825/L/10) de la legisladora Lizzul, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ..1125

J) IPEM Nº 343, de Los Cocos. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (7075/L/11) de los legisladores Lizzul, Birri, Díaz, Seculini, Varas y Bischoff, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1125

K) Sistema educativo provincial. Mecanismos de asignación de recursos destinados a su financiamiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (7094/L/11) del legislador Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1125

**8.-** A) Planes de Vivienda iniciados en el período 2008-2010. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6076/L/10) de los legisladores Giaveno, Cugat, Calvo Aguado, Matar y Dressino, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba....1126

B) Plan de Ordenamiento Territorial en los Embalses de Río Tercero, Los Molinos y Piedras Moras. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5155/L/10) del legislador, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1127

C) Construcción de viviendas desde el año 1999. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6135/L/10) de los legisladores Calvo Aguado y Gudiño, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ..1127

D) Construcción de la Autopista Córdoba - Jesús María. Proyecto. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6148/L/10) de los legisladores del bloque de la Unión

Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1127

E) Canal Los Molinos – Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6260/L/10) de los legisladores Cugat, Giaveno, Pozzi, Dressino, Matar, Cargnelutti, Nicolás, Calvo Aguado y Rossi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1127

F) Cuenca del Lago San Roque. Almacenamiento y trasvasamiento de aguas y obras del Plan de Abastecimiento de Agua para la ciudad de Villa Carlos Paz y zona de influencia. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6429/L/10) del legislador Ruiz, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.....1127

G) Programa Hogar Clase Media. Fondos afectados, selección de adjudicatarios y reintegros por parte de la Nación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6430/L/10) del legislador Ruiz, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1127

H) Programa de erradicación de viviendas-ranchos. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6437/L/10) del legislador Bischoff, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba....1127

I) Plan Tu Casa, en La Carlota, Dpto. Juárez Celman. Funcionamiento. Diferentes aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6446/L/10) de los legisladores Rossi, Giaveno, Poncio, Matar y Calvo Aguado, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1127

J) Empresa Aguas Cordobesas S.A. Reclamos por la calidad de agua potable. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6600/L/10) de la legisladora Díaz, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ..1127

K) Obra: Mejoramiento del Sistema de Riego del Dique La Viña, en Las Tapias, Dpto. San Javier. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6684/L/10) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1127

L) Arroyo San Antonio. Régimen del caudal de agua. Permisos de perforaciones otorgados y medidas de precaución tomadas por la Subsecretaría de Recursos Hídricos para la preservación de las cuencas. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6858/L/11) del legislador Serna, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1127

M) Obra de Estación Transformadora Arroyo Cabral y obras asociadas. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6309/L/10) de los legisladores Giaveno, Cugat, Matar, Dressino y Pozzi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ..1127

N) Defensa y costanera, en Miramar, Dpto. San Justo. Construcción. Pedido de

informes. Proyecto de Resolución (5540/L/10) de los legisladores Giaveno, Matar, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Poncio, y Gudiño, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1127

O) Crisis hídrica. Programas o medidas de emergencia adoptadas. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (4017/L/09) de la legisladora Olivero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1127

P) Obra: Provisión de agua potable a las localidades de Puesto Castro e Isla Larga, del Plan Agua para todos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5838/L/10) de los legisladores Rossi y Giaveno, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ..1127

Q) Asociación Civil Córdoba Nuestra. Rendición de cuentas por obras públicas del Plan Sectorial. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5840/L/10) de los legisladores Giaveno, Rossi, Pozzi y Dressino, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1127

R) Programa Federal de Viviendas I y II - Hogar Clase Media, en Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5597/L/10) del legislador Ruiz, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.....1127

S) EPEC. Administración de los fondos recaudados para la construcción de la "Obra Estación Transformadora Arroyo Cabral, Obras Asociadas y Obras Complementarias". Pedido de informes. Proyecto de resolución (5132/L/10) del legislador Bischoff, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .1127

T) EPEC. Planta transformadora de la Comuna de San Antonio de Arredondo. Estudio de impacto ambiental para la instalación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5935/L/10) de los legisladores Ruiz, Birri y Coria, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1127

U) Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Diversos aspectos. Convocatoria a los Ministros de Finanzas y de Obras y Servicios Públicos para informar. Proyecto de resolución (6362/L/10) de los legisladores Seculini, Lizzul, Rodríguez y Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ..1127

V) Construcción de viviendas en la Provincia de Córdoba. Programas ejecutados. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6753/L/10) de las legisladoras Calvo Aguado y Poncio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1127

W) Ciudad de Río Cuarto. Detención de un menor por no identificarse. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5908/L/10) del legislador Birri, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.....1127

X) Máquinas tragamonedas o slots. Instalación y explotación en la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6161/L/10) del legislador Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1127

Y) "Impuesto a la valija". Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6192/L/10) de la legisladora Lizzul, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1127

Z) Autovía Ruta Nacional N° 19. Proyecto de Construcción. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6885/L/11) de la legisladora Lizzul, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .1127

A') Planta de Clasificación, Procesamiento, Tratamiento y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos, en el predio de Cañada Grande, Dpto. Calamuchita. Construcción. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6892/L/11) de la legisladora Díaz, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1127

B') Política de turismo. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6943/L/11) de la legisladora Coria, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1127

C') Barrio La Perla de la ciudad de Alta Gracia. Basural a cielo abierto. Instalación de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6963/L/11) de la legisladora Coria, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1128

D') Ciudad de Villa Carlos Paz. Casino. Reemplazo de los juegos de paño por máquinas slots o tragamonedas. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6965/L/11) del legislador Ruiz, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1128

E') Calle Lino Spilimbergo de la ciudad de Córdoba. Tala de diversas especies de árboles. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6967/L/11) de la legisladora Díaz, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.....1128

F') Administración Pública. Contrataciones – locaciones para garantizar su funcionamiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6972/L/11) de los legisladores Díaz, Seculini, Jiménez y Birri, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.....1128

G') Ministerios, secretarías y dependencias trasladadas de la anterior Casa de Gobierno. Teléfonos y direcciones. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6973/L/11) de los legisladores Seculini, Jiménez, Birri y Díaz, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1128

H') Programa de Juego Responsable de la Provincia. Línea telefónica gratuita. Funcionamiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6987/L/11) del legislador Serna, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1128

I') Programa de Juego Responsable de la Provincia. Formulario de solicitud de autoexclusión de salas de juegos de azar. Funcionamiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6988/L/11) del legislador Serna, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1128

J') Ruta Provincial Nº 3, tramo Bell Ville – Justiniano Posse. Estado. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6989/L/11) de las legisladoras Lizzul y Rodríguez, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ..1128

K') Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo. Créditos Productivos para Emprendedores de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6991/L/11) del legislador Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.....1128

L') Ley Nº 9821, de adhesión a la Ley Nacional Nº 25.761. Falta de reglamentación. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6992/L/11) de los legisladores Dressino, Cugat, Cargnelutti, Nicolás, Poncio, Pozzi y Razzetti, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1128

M') Autovía Río Ceballos – Valle Hermoso. Construcción. Impacto ambiental. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6996/L/11) de los legisladores Díaz y Serna, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.....1128

N') Ministerio de Finanzas. Montos abonados a la firma Kolektor en el período 2007-2010. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6548/L/10) del legislador Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.....1128

O') Boncor I, II y III. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6364/L/10) de los legisladores Pozzi, Giaveno, Rossi, Razzetti, Nicolás, Gudiño y Matar, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1128

P') Cuenta de Inversión 2009 y Ejecución Presupuestaria 2010. Rubro venta de activos y venta del ex Batallón 141 del Ejército Argentino. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6641/L/10) de los legisladores Dressino, Pozzi, Gudiño, Calvo Aguado, Rossi, Giaveno y Razzetti, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.....1128

Q') Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba y la Provincia. Compensación de deudas recíprocas. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6750/L/10) del legislador Varas, con moción de preferencia.

Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1128

R') Ex Museo de Ciencias Naturales, en la ciudad de Córdoba, y alguna otra propiedad del Gobierno provincial. Posible dación de pago a empresa privada del inmueble. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6895/L/11) de los legisladores Dressino, Pozzi, Calvo Aguado, Matar, Giaveno, Nicolás, Poncio y Razzetti, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.....1128

S') Lotería de Córdoba. Ley 9505. Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (7038/L/11) del legislador Maiocco, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1128

T') Gabriela Pujana. Detención en la Comisaría de Río Tercero. Pedido de informes. Proyecto de resolución (7099/11) de los legisladores Birri y Seculini y Olivero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.....1128

U') Empresa AGIMED SRL. Compras realizadas por la Provincia en el período 2007-2010. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5347/L/10) de los legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Birri, Rivero y Ruiz, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1128

V') Ley 9331, Compre Córdoba. Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5656/L/10) de los legisladores del bloque del Frente Cívico y Social, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1128

W') Disposición final de residuos sólidos de la ciudad de Bell Ville. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6146/L/10) de los legisladores Matar, Poncio, Gudiño, Cugat, Rossi, Dressino, Calvo Aguado, Pozzi, Razzetti y Cargnelutti, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1128

X') Cuenca hídrica del Río Suquía, en la Ciudad de Córdoba. Saneamiento, control y grado de contaminación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (7053/L/11) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1128

Y') Convenio para forestación entre la Provincia y la organización gubernamental israelí Keren Kayemet Leisrael (KKL). Pedido de informes. Proyecto de resolución (5590/L/10) de los legisladores del bloque Concertación Plural, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1128

Z') Ríos de la Provincia. Extracción de áridos y otros sedimentos en cursos y riberas. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (5902/L/10) de los legisladores Cugat, Gudiño, Pozzi, Cargnelutti, Calvo Aguado, Nicolás, Dressino, Giaveno, Poncio, Rossi y Razzetti, con

moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba....1128

A") Casa de Gobierno. Demolición y construcción del nuevo Centro Cívico. Impacto ambiental. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (6929/L/11) de los legisladores Lizzul y Seculini, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1128

B") Hospital Vicente Agüero, de Jesús María. Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (7202/L/11) del legislador Jiménez. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1128

C") Ministro de Desarrollo Social. Informe sobre diversas medidas implementadas en el PAICOR. Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos. Citación. Proyecto de resolución (7206/L/11) de los legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti, Cugat, Pozzi, Matar, Giaveno y Razzetti. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....1128

D") Programas o tareas preventivas de la Ambliopía u "Ojo Vago". Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (7219/L/11) de los legisladores Giaveno, Matar y Dressino. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.....1129

E") Frigorífico Estancia La Trinidad, de Oncativo. Tratamiento de efluentes cloacales y vertedero. Pedido de informes. Proyecto de resolución (7254/L/11) de las legisladoras Lizzul, Rodríguez y Díaz. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba....1129

**9.-** Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Establecimiento. Proyectos de ley compatibilizados (6484/L/10 y 5351/L/10) del Poder Ejecutivo y de los legisladores del Frente Cívico y los legisladores Pozzi, Ruiz, Olivero, Fernández y Rivero, respectivamente, con despacho de comisión. Se considera y aprueba en general y en particular .....1137

**10.-** Asuntos entrados a última hora:

XXXV.- Conservatorio Superior de Música "Félix Tomás Garzón". Centenario. Beneplácito. Proyecto de declaración (7431/L/11) de la legisladora Genesio de Stabio .....1224

XXXVI.- Crucero ARA General Belgrano. 29º Aniversario del hundimiento. Homenaje. Proyecto de declaración (7432/L/11) de todos los legisladores integrantes del Cuerpo .....1224

XXXVII.- Selectivo de Menores para el Mundial de Padel 2011. Interés legislativo. Proyecto de declaración (7434/L/11) de la legisladora Lizzul .....1224

XXXVIII.- Despachos de comisión.....1224

**11.-** A) X Congreso Nacional de Ciencias Políticas "Democracia, Integración y Crisis en el Nuevo Orden Global: Tensiones y desafíos para el análisis político", en la ciudad de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de declaración (7321/L/11) del legislador Passerini. Tratamiento conjunto en virtud del

artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba .....1224

B) Obra de teatro "El Garra", de Eva Bertaina. Interés legislativo. Proyecto de declaración (7351/L/11) de la legisladora Olivero. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba .....1224

C) XX Encuentro Nacional de Poetas, en la ciudad de Brinkmann, Dpto. San Justo. Interés legislativo. Proyecto de declaración (7388/L/11) de los legisladores Giaveno, Rossi, Poncio, Calvo Aguado, Gudiño, Cargnelutti, Dressino, Matar y Pozzi. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones .....1224

D) Srta. Melina Garione, de la ciudad de Brinkmann. Participación en el 2º Encuentro Austral del Deporte, Arte y Producciones Especiales. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (7389/L/11) de los legisladores Giaveno, Rossi, Poncio, Calvo Aguado, Gudiño, Cargnelutti, Dressino, Matar y Pozzi. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba .....1224

E) Sra. María Eva Duarte de Perón. Natalicio. 92º Aniversario. Homenaje. Proyecto de declaración (7392/L/11) del legislador Ochoa Romero. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba.....1224

F) Día del Coraje Civil. Adhesión. Proyecto de declaración (7394/L/11) del legislador Birri. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones .....1224

G) Ernesto Sábató, científico y escritor. Fallecimiento. Profundo pesar. Proyectos de declaración compatibilizados (7396/L/11 y 7419/L/11) de los legisladores Rodríguez y Seculini y de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical, respectivamente. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba .....1225

H) Escuela Miyazato de Karate-Do, sucursal Huinca Renancó. Metodología para mejorar aspectos físicos, psíquicos y sociales en personas con Síndrome de Down. Implementación. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (7399/L/11) del legislador Pagliano. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba .....1225

I) VI Congreso Internacional de Municipios y Servicios Públicos "Camino a las Ciudades Sustentables". Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (7401/L/11) de la legisladora Chiofalo. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba .....1225

J) Localidad de Italó, Dpto. General Roca. 103º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (7403/L/11) del legislador Pagliano. Tratamiento conjunto en virtud del artículo

157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba .....1225

K) Himno Nacional Argentino. Sanción. Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (7405/L/11) de la legisladora Rodríguez. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba .....1225

L) IV Festival Internacional de Danza Contemporánea en Paisajes Urbanos (Pulso Urbano), en la ciudad de Córdoba. Beneplácito. Proyecto de declaración (7409/L/11) de la legisladora Bressan. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones .....1225

M) Seminario de Formación de Ludo Educadores, en la ciudad de Río Cuarto. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (7410/L/11) de la legisladora Rosso. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones.....1225

N) Expocampo 2011, en la localidad de Las Vertientes, Dpto. Río Cuarto. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (7411/L/11) de los legisladores Rosso y Vega. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones .....1225

O) Asignación por Embarazo para Protección Social. Implementación. Reconocimiento y beneplácito. Proyecto de declaración (7412/L/11) de los legisladores del bloque Concertación Plural. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba.....1225

P) Sr. Ndaba Mandela. Visitante Ilustre. Declaración. Proyecto de resolución (7414/L/11) del legislador Passerini. Tratamiento conjunto en virtud del artículo

157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba .....1225

Q) Fiestas Patronales en honor a Jesús Misericordioso, perteneciente a la Parroquia de Villa de Soto, Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (7418/L/11) del legislador Monier. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones .....1225

R) Conservatorio Superior de Música "Félix Tomás Garzón". Centenario. Beneplácito. Proyecto de declaración (7431/L/11) de la legisladora Genesio de Stabio. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba .....1225

S) Crucero ARA General Belgrano. 29º Aniversario del hundimiento. Homenaje. Proyecto de declaración (7432/L/11) de todos los legisladores integrantes del Cuerpo. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones .....1225

T) Selectivo de Menores para el Mundial de Padel 2011. Interés legislativo. Proyecto de declaración (7434/L/11) de la legisladora Lizzul. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones .....1225

**12.-** Federación Agraria Argentina. Proyecto de ley presentado ante el Congreso de la Nación. Adhesión al contenido. Aprobación. Solicitud a los legisladores nacionales. Proyecto de declaración (0459/L/08) del legislador Ruiz. Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción de reconsideración. Se rechaza.....1242



---

## PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION - 04-V-2011

---

– En la ciudad de Córdoba, a 4 días del mes de mayo de 2011, siendo la hora 15 y 56:

**-1-**

### IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

**Sr. Presidente (Busso).**– Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro abierta la 15º sesión ordinaria del 133º período legislativo.

Invito al señor legislador Horacio Frossasco a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

– Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Frossasco procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

**-2-**

### VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

**Sr. Presidente (Busso).**– Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la versión taquigráfica de la sesión anterior.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Busso).**– Aprobada.

**-3-**

### ASUNTOS ENTRADOS

**Sr. Presidente (Busso).**– Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos, pudiendo solicitar el giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías en los respectivos proyectos.

#### I

### COMUNICACIONES OFICIALES

**7376/N/11**

**Nota del Ministerio de Obras y Servicios Públicos:** Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 66, 200, 215 y 240/10, referidas a modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al Plan de Inversiones Públicas.

**A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda**

**7390/N/11**

**Nota del Señor Legislador Vásquez:** Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:

**4680/L/10**

**Proyecto de Ley:** Iniciado por el Legislador Vásquez, por el que promueve la forestación y reforestación en zonas adyacentes a autovías, rutas y caminos provinciales, propiciando la conservación de especies autóctonas.

**A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización**

**7393/N/11**

**Nota del Señor Legislador Brügge**

Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:

**5082/L/10**

**Proyecto de Ley:** Iniciado por los Legisladores Brügge y Passerini, por el que establece el régimen legal y crea el Colegio Profesional de licenciados Técnicos Profesionales y Auxiliares de Enfermería de la Provincia de Córdoba.

**A las Comisiones de Salud Humana, de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización**

**7398/N/11**

**Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones:** Remitiendo al archivo, de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, diversos proyectos de Ley, de Resolución y de Declaración de los años 2007 al 2010.

**Al Archivo**

**7400/N/11**

**Nota de la Señora Legisladora Fernández**

Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto N°:

**4957/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que establece el “Código de Ética Parlamentaria” e incorpora modificaciones a los artículos 57 y 65 del Reglamento Interno, referidos a la exclusión o apartamiento unilateral de legisladores de un bloque parlamentario y a las atribuciones de la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, respectivamente.

**A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización**

**7404/N/11**

**Nota del Señor Legislador Maiocco**

Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto N°:

**8331/L/05**

**Proyecto de Ley:** Iniciado por el Legislador Maiocco y por los Legisladores (MC) Gaumet y Guzmán, por el que instituye un Sistema de Protección Integral de las Personas Trasplantadas tendientes a asegurar el acceso a los derechos sociales y laborales.

**A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales**

**7406/N/11**

**Nota del Ministerio de Finanzas:** Remitiendo fotocopias autenticadas del Decreto N° 174/10, suprimiendo las Tasas Retributivas de Servicios previstas en el artículo 55 de la Ley N° 9875; y de las Resoluciones N° 466/10, 43, 44, 45, 49, 52, 53, 60, 61, 63 a la 70, 74, 76, 78 a la 83, 88, 90, 91, 97, 99, 100, 101, 103, 105 a la 108 y 110/11, referidas al incremento del Cálculo de Ingresos, modificaciones en las asignaciones de Recursos e Ingresos Financieros y Humanos, incorporación de categorías para reparaciones edilicias del IPEM N° 190, incremento en las Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto de la Administración Pública.

**A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda**

**7407/N/11**

**Nota del Ministerio de Salud:** Remitiendo fotocopias autenticadas de las Resoluciones N° 283, 284, 285, 287, 289 a la 292/11, referidas a modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al Plan de Inversiones Públicas del Presupuesto de la Administración Pública.

**A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda**

**7415/N/11**

**Nota del Señor Legislador Pozzi**

Solicitando la rehabilitación del Proyecto N°:

**5084/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cargnelutti, Calvo Aguado, Gudiño, Matar, Dressino y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la accidentología vial, monto recaudado por multas por parte de la Policía Caminera en el año 2009 y primer trimestre del año 2010.

**A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización**

**7397/P/11**

**Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego:** Solicitando acuerdo para designar a la Señora María Raquel Sauri, como Juez de Paz correspondiente a la sede General Roca, departamento Marcos Juárez.

**A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos**

**PROYECTOS DE LOS  
SEÑORES LEGISLADORES**

**II**

**7375/L/11**

---

## PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION - 04-V-2011

---

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por el Legislador Seculini, por el que solicita a la Secretaría de Ambiente (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la demora en la distribución de los fondos provenientes del Plan Provincial de Manejo del Fuego.

**A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización**

### III

**7382/L/11**

**Proyecto de Declaración:** Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Matar, Giaveno, Dressino, Pozzi, Nicolás y Cargnelutti, por el cual expresa preocupación por la omisión del Gobierno Provincial de cumplir con el pago de la deuda que mantiene con los cuarteles de bomberos voluntarios, originada en el desarrollo del Plan Provincial de Manejo del Fuego.

**A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización**

### IV

**7383/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores, Matar, Giaveno, Dressino, Cugat, Poncio, Cargnelutti, Gudiño, Pozzi, Nicolás y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP), informe si el Gobierno Nacional ha acreditado al Gobierno Provincial los montos anunciados por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

**A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables**

### V

**7384/L/11**

**Proyecto de Declaración:** Iniciado por los Legisladores Matar, Giaveno, Gudiño, Cugat, Cargnelutti, Poncio, Calvo Aguado, Dressino, Rossi y Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, decreta "zona de desastre" por la sequía al departamento Cruz del Eje en el marco de la Ley Nº 7121 y sus complementarias.

**A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables**

### VI

**7386/L/11**

**Proyecto de Declaración:** Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Poncio, Giaveno, Matar, Rossi y Nicolás, por el cual adhiere a las Fiestas Patronales de la localidad de La Población, departamento San Javier, cuyo acto celebratorio se desarrollará el 13 de mayo.

**A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunes**

### VII

**7387/L/11**

**Proyecto de Ley:** Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi y Dressino, por el que prohíbe en los tres poderes del Estado hacer publicidad o campaña oficial haciendo figurar los nombres propios de quienes ejercen la representación, ordenando dejar de hacerlo al momento de sanción de esta Ley.

**A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunes y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización**

### VIII

**7388/L/11**

**Proyecto de Declaración:** Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Poncio, Calvo Aguado, Gudiño, Cargnelutti, Dressino, Matar y Pozzi, por el cual declara de Interés Legislativo el "XX Encuentro Nacional de Poetas", a desarrollarse del 4 al 6 de agosto en la ciudad de Brinkmann, departamento San Justo.

**A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática**

### IX

**7389/L/11**

**Proyecto de Declaración:** Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Poncio, Calvo Aguado, Gudiño, Cargnelutti, Dressino, Matar y Pozzi, por el cual adhiere a la participación de la Srta. Melina Garione, de la ciudad de Brinkmann, en el "2º Encuentro Austral del Deporte, Arte y Producciones Especiales", a desarrollarse en el mes de junio en Colombia.

**A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación**

### X

**7392/L/11**

**Proyecto de Declaración:** Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual rinde homenaje a la memoria de Eva Duarte de Perón, al conmemorarse el 7 de mayo el 92º aniversario de su natalicio.

**A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática**

**XI**

**7394/L/11**

**Proyecto de Declaración:** Iniciado por el Legislador Birri, por el cual adhiere al "Día del Coraje Civil", en homenaje a la primera marcha de las madres de Plaza de Mayo, el 30 de abril de 1977.

**A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos**

**XII**

**7395/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Rodríguez y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual de la futura planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que piensa construir la Municipalidad de Mina Clavero en un campo de 65 ha. que posee en el paraje Los Espinillos.

**A la Comisión de Asuntos Ecológicos**

**XIII**

**7396/L/11**

**Proyecto de Declaración:** Iniciado por los Legisladores Rodríguez y Seculini, por el cual expresa pesar por el fallecimiento del escritor Ernesto Sábato el pasado sábado 30 de abril.

**A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática**

**XIV**

**7399/L/11**

**Proyecto de Declaración:** Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual expresa beneplácito por la implementación de metodología para mejorar aspectos físicos, psíquicos y sociales en personas con Síndrome de Down por parte de la Escuela Miyazato de Karate Do, Sucursal Huinca Renancó.

**A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos**

**XV**

**7401/L/11**

**Proyecto de Declaración:** Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual adhiere al VI Congreso Internacional de Municipios y Servicios Públicos "Camino a las Ciudades Sustentables", a desarrollarse del 4 al 7 de mayo en el Complejo Ferial Córdoba.

**A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunes**

**XVI**

**7402/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Lizzul y Jiménez, por el que solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre la deuda que registra el Gobierno Provincial al 31 de diciembre de 2010 con distintos organismos provinciales.

**A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda**

**XVII**

**7403/L/11**

**Proyecto de Declaración:** Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 103º aniversario de la localidad de Italó, departamento General Roca, conmemorado el día 3 de mayo de 2011.

**A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunes**

**XVIII**

**7405/L/11**

**Proyecto de Declaración:** Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual adhiere a un nuevo aniversario de la sanción del Himno Nacional Argentino, que fuera aprobado y sancionado por la Asamblea General Constituyente del año 1813.

**A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática**

**XIX**

**7408/L/11**

**Proyecto de Declaración:** Iniciado por los Legisladores Gamaggio Sosa y Busso, por el cual declara de Interés Legislativo la 25º Fiesta Provincial de la Soja, a realizarse el 4 de junio en la ciudad de Río Segundo.

**A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables**

**XX**

**7409/L/11**

**Proyecto de Declaración:** Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual expresa beneplácito por la realización del IV Festival Internacional de Danza Contemporánea en Paisajes Urbanos – Pulso Urbano, a realizarse del 5 al 7 de mayo en la ciudad de Córdoba.

**A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática**

**XXI**

**7410/L/11**

**Proyecto de Declaración:** Iniciado por la Legisladora Rosso, por el cual adhiere al "Seminario de Formación de ludo Educadores", a realizarse del 6 al 12 de julio en la ciudad de Río Cuarto.

**A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática**

**XXII**

**7411/L/11**

**Proyecto de Declaración:** Iniciado por los Legisladores Rosso y Vega, por el cual adhiere a la "Expocampo 2011", a realizarse del 5 al 7 de mayo en la localidad de Las Vertientes, departamento Río Cuarto.

**A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables**

**XXIII**

**7412/L/11**

**Proyecto de Declaración:** Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el cual expresa beneplácito por la implementación de la Asignación por Embarazo para Protección social.

**A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos**

**XXIV**

**7413/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat, Dressino, Cargnelutti, Matar y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la emisión de los bonos emitidos por la EPEC para financiar la nueva central de Pilar.

**A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía**

**XXV**

**7414/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por el Legislador Passerini, por el que declara "Visitante Ilustre" al Sr. Ndaba Mandela, nieto del ex Presidente sudafricano Nelson Mandela, que visitará Córdoba entre el 6 y el 16 de mayo.

**A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos**

**XXVI**

**7416/L/11**

**Proyecto de Declaración:** Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual declara de Interés Legislativo el "Curso de Formación de Acompañante Terapéutico" en la ciudad de Córdoba.

**A la Comisión de Salud Humana**

**XXVII**

**7417/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Roganti y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la explotación y funcionamiento de las slots y cargo de CET SA.

**A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda**

**XXVIII**

**7418/L/11**

**Proyecto de Declaración:** Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere a las Fiestas Patronales en honor a Jesús Misericordioso, perteneciente a la Parroquia de Villa de Soto, departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 8 de mayo.

**A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunes**

**XXIX**

**7419/L/11**

**Proyecto de Declaración:** Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual expresa pesar por la desaparición física del científico y escritor Ernesto Sábato, acaecido el pasado 30 de abril.

**A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática**

**XXX**

**7421/L/11**

**Proyecto de Ley:** Iniciado por el Legislador Dandach, por el que dispone la construcción de residencias para estudiantes universitarios en distintas ciudades del interior provincial.

**A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda**

**PROYECTOS DEL  
PODER EJECUTIVO**

**XXXI**

**7391/E/11**

**Proyecto de Ley:** Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la localidad de Colonia Bismarck, departamento Unión.

**A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunes y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización**

**XXXII**

**7422/E/11**

**Proyecto de Ley :** Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara Lugar de Interés Provincial a las "Salas de Honor y Malvinas" de la Escuela de Aviación Militar de la ciudad de Córdoba.

**A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunes y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización**

**XXXIII  
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES**

**7420/N/11**

**Nota de la Señora Legisladora Coria:** Solicitando prórroga de la licencia por razones de salud, otorgada oportunamente hasta el día 18 de mayo inclusive, de conformidad con el artículo 16 del reglamento interno.

**En Secretaría**

**XXXIV  
DESPACHOS DE COMISIÓN**

**Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos**

**1)6952/P/11**

**Pliego:** Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor Gonzalo Oscar Astudillo, como Juez de Paz correspondiente a la sede Santa Catalina - Río Pinto, departamento Totoral.

**Al Orden del Día**

**2)7236/P/11**

**Pliego:** Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al abogado Damián Abad, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia de Tercera Nominación de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Bell Ville.

**Al Orden del Día**

**Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización**

**7241/E/11**

**Proyecto de Ley:** Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, con competencia en Ejecuciones Fiscales en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.

**Al Orden del Día**

**Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda**

**7342/E/11**

**Proyecto de Ley:** Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: "Duplicación de calzada en Ruta Provincial Nº E-53 –Tramo: Intercambiador Avenida Padre Luchesse – Río Ceballos–, un inmueble ubicado en el lugar denominado Nuevo Río Ceballos departamento Colón.

**Al Orden del Día**

**-4-**

**LEGISLADORA ADELA CORIA. LICENCIA. PRÓRROGA. SOLICITUD.**

**Sr. Presidente (Busso).**- Se encuentra reservada en Secretaría una nota de la legisladora Adela Coria por la que solicita prórroga de la licencia oportunamente otorgada por este Cuerpo.

A continuación se dará lectura a la nota.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

Córdoba, 3 de mayo de 2011.

**Señor Presidente de la Legislatura Provincial  
Vice Gobernador de la Provincia de Córdoba  
Héctor Oscar Campana  
Presente**

Me dirijo a usted a fin de solicitarle, según lo prescripto por el artículo 16 del Reglamento Interno de la Legislatura, la prórroga de la licencia a mí otorgada el pasado mes de abril, hasta el día 18 de mayo inclusive, por razones de enfermedad que certifico con documentación adjunta.

Solicito tenga a bien considerar mi pedido y lo ponga votación del Pleno de la Legislatura en la sesión del correspondiente al día 4 de mayo de 2011.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con la debida consideración.

**Adela Coria**

Legisladora provincial

**Sr. Presidente (Busso).**- En consideración la solicitud de prórroga de licencia presentada por la legisladora Adela Coria.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Busso).**- Aprobada.

**COMUNICACIÓN OFICIAL – 7420/N/11**

**TEXTO DEFINITIVO**

**LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA**

**RESUELVE:**

**Artículo 1º.- PRORROGAR** hasta el 18 de mayo inclusive, la licencia oportunamente otorgada en virtud de lo establecido por el artículo 15 del Reglamento Interno a la Legisladora Adela CORIA, a partir del día 1 de mayo de 2011.

**Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE**, comuníquese y archívese.

Córdoba, 4 de mayo de 2011.-

**Sergio Sebastián Busso**

Presidente Provisorio de la Legislatura  
de la Provincia de Córdoba

**R-2392/11**

-5-

**“SALAS DE HONOR Y MALVINAS” DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR,  
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. LUGAR DE INTERÉS PROVINCIAL. DECLARACIÓN.**

Tratamiento sobre tablas

**Sr. Presidente (Busso).**- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones, vamos a alterar el orden del tratamiento sobre asuntos para pasar a considerar el proyecto 7422/E/11, declarando de interés provincial a dos salas de la Escuela de Aviación Militar.

Por Secretaría se dará lectura al pedido de tratamiento sobre tablas.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

Córdoba, 4 de mayo de 2011.

**Señor Presidente del  
Poder Legislativo  
Héctor Oscar Campana  
S. / D.**

De mi consideración:

En mi carácter de presidente del bloque de Unión por Córdoba, y en mérito de lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto 7422/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se declara de interés provincial a las Salas de Honor y Malvinas Argentinas de la Escuela de Aviación Militar de la ciudad de Córdoba.

Resulta oportuna la aprobación de la presente iniciativa, rescatando la esencia de mantener vivo el homenaje hacia todos los excombatientes de Malvinas, a los que siguen el camino y a los que entregaron sus vidas con honor y dignidad.

Sin otro particular saludo a usted atentamente.

**Daniel Passerini**  
Legislador provincial

**Sr. Presidente (Busso).**- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Busso).**- Aprobada.

Por no contar con despacho corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Busso).**- Aprobado.

**-CÁMARA EN COMISIÓN-**

**Sr. Presidente (Busso).**- Informo a los señores legisladores que con motivo de la sanción de la presente ley nos honran con su presencia el brigadier Luis María Cismondi, jefe de la Guarnición Aérea Córdoba; el comodoro Eduardo Latorre, Subdirector de la Escuela Militar Córdoba; el comodoro Mario Marelli, Jefe de la Plana Mayor de la Guarnición Aérea Córdoba; el vicecomodoro Ramón Galván, Jefe de Relaciones Públicas de la Escuela de Aviación; y el Suboficial Manuel Delmonte, responsable de la Sala Malvinas Argentinas, a quienes les damos la bienvenida en este recinto.

Para informar el proyecto en tratamiento, tiene la palabra el señor legislador Passerini.

**Sr. Passerini.**- Señor presidente: el mes de mayo es fundamental a la hora de recordar y conmemorar fechas importantes en lo que refiere a la historia fundacional de la Argentina, pero también en la historia reciente.

El 1º de mayo, en Argentina, no solamente se conmemora el Día del Trabajador sino también, desde el 1º de mayo de 1982, el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, en la recordada, triste y emocionada gesta de Malvinas.

Antes de llegar a la fundamentación por la cual hoy estamos reunidos aquí tratando este proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo declarando de interés provincial a la Sala de Honor y a la Sala Malvinas de la Escuela de Aviación Militar de la ciudad de Córdoba, me parece importante hacer una breve reseña histórica de lo que es la Fuerza Aérea Argentina y la aviación en nuestro país, para llegar a este momento histórico.

La Fuerza Aérea Argentina es desde principios del siglo XX uno de los estandartes de la defensa territorial de nuestro país. Haciendo una apretada síntesis de más de cien



años de historia, es válido destacar que en nuestro país la actividad aeronáutica comenzó como un deporte de algunos pocos que competían por cruzar el Río de la Plata o la Cordillera de Los Andes en globos aerostáticos de aire caliente, allá por 1860.

Es el ingeniero Jorge Newbery quien impulsa y profesionaliza la actividad a principios del siglo pasado. Graduado de ingeniero en 1895, en 1897 ingresa en la Armada Argentina –en tiempos del conflicto limítrofe con Chile- como ingeniero electricista.

En 1910 Jorge Newbery obtiene su licencia de piloto pero continúa realizando ascensiones en globo hasta 1912. A partir de ese año, se dedica exclusivamente a la aviación hasta que el día 10 de agosto de 1912 el Presidente Roque Sáenz Peña crea la Escuela Militar de Aviación, primera fuerza aérea militar de Latinoamérica. Así, el civil Jorge Newbery y el teniente coronel Enrique Mosconi –luego director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales- son los primeros directores de la Escuela Militar de Aviación instalada en el Palomar de Caseros.

La Fuerza Aérea Argentina tiene desde sus orígenes la misión de organizar, mantener y alistar las fuerzas aéreas de la Nación con el fin de contribuir a la defensa nacional ejerciendo la soberanía en el espacio aéreo.

En 1927, se crea la Dirección General de Aeronáutica con el objetivo de coordinar la aviación militar del país. En el mismo año, en nuestra Córdoba se funda la Fábrica Militar de Aviones, convertida con el tiempo en el corazón de la industria aeronáutica argentina.

Los primeros pasos para la formación de la fuerza independiente fueron dados el 11 de febrero de 1944, cuando el Estado nacional crea el Comando Aeronáutico, que el 4 de enero de 1945 se convierte en la Fuerza Aérea Argentina.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea inició un proceso de modernización de su flota convirtiéndose en la primera fuerza aérea de América Latina equipada con aeronaves de propulsión a reacción.

La Fábrica Militar de Aviones recibió un gran impulso por esos años a partir de una fuerte decisión política soberana nacional con proyectos de aviones a reacción, que se cristalizarían después en los Pulqui 1 y Pulqui 2, máquinas íntegramente fabricadas por personal argentino.

En 1947, la Argentina realiza sus primeras actividades en la investigación espacial y la Fuerza Aérea; a través de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, lleva a cabo lanzamientos de cohetes.

Entre todos estos hitos de la historia de la aviación argentina no se puede olvidar mencionar el FMA IA-58 Pucará –en quechua, fortaleza-, un bimotor turbohélice de diseño y construcción argentina, que voló por primera vez el 20 de agosto de 1969. El Pucará, orgullo argentino, es el único avión producido por la Fábrica Militar de Aviones que recibió su bautismo de fuego en un conflicto internacional.

Durante la década del setenta, la Fuerza Aérea Argentina continuó intensamente con su labor. En este sentido, los aviones Hércules C-130 llenaron también de orgullo a la institución ya que en 1971 se realizó el primer vuelo directo desde Buenos Aires hacia la base aérea Vicecomodoro Marambio, y el 4 de diciembre de 1973 se realizó el primer vuelo transpolar bicontinental uniendo el continente americano con Oceanía.

Algunos años después, el 2 de abril de 1982, la Argentina inicia la operación tendiente a la recuperación de las Islas Malvinas. La Fuerza Aérea participa de esa tarea y en el posterior conflicto con Gran Bretaña, que se prolonga hasta el 14 de junio. Durante el conflicto, la Fuerza Aérea recibe el bautismo de fuego el 1º de mayo, y desde entonces hasta el fin de las hostilidades realiza operaciones que causaron la admiración del mundo por su audacia y las condiciones adversas a las que debió sobreponerse.

Es de destacar la profunda influencia que ha tenido la aviación militar en nuestra Provincia, además de su rol como fuerza armada de la Nación, como uno de los pilares del desarrollo industrial y tecnológico y madre de industrias, que supo a lo largo de su historia formar un estrecho vínculo con la sociedad.

Las Salas de Honor y Malvinas Argentinas de la Escuela de Aviación Militar reciben a diario visitas de escuelas, colegios e instituciones civiles que las recorren, viendo en ellas el patrimonio histórico cultural que ha legado y sigue legando la actividad aeronáutica a nuestra Patria, en especial a nuestra Provincia de Córdoba.

Por estas razones, señor presidente, creemos altamente justo este homenaje que, además, implica, a través de un proyecto de ley, nombrar lugar de interés provincial las Salas de Honor y Malvinas Argentinas de la Escuela de Aviación Militar de la Ciudad de Córdoba –en su artículo 1º- y que el Poder Ejecutivo provincial, a través de la Secretaría de Cultura –o el organismo que en el futuro la sustituya-, suscriba con las autoridades

nacionales los acuerdos que se requieran en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

Me parecía importante y procedente, señor presidente, y con el permiso de los señores legisladores, dar lectura a un artículo de un notable impacto emotivo, que fue publicado con el título "La audacia de los pilotos argentinos en los combates del Atlántico Sur" por el diario ABC de Madrid, de su corresponsal José María Carrascal: "Son sólo unos centenares –o eran- pero llevan sobre sus hombros el último peso de esta guerra, no menos cruenta por no estar declarada. Parece, sin embargo, no importarles la muerte de sus camaradas o la posibilidad de perder la suya en la próxima salida. Pocas veces se ha visto tanta gallardía ante la vida, tanta responsabilidad ante la muerte, tanta consideración ante los propios, tanta audacia ante lo ajeno.

Actúan en condiciones extremas con el objetivo a quinientos kilómetros y el carburante justo para estar sobre él tres o cuatro minutos y regresar. Un ojo puesto en el blanco, el otro, en la aguja del depósito, olvidándose de los misiles que llegan por todas partes, de los barcos, de los aparatos enemigos, de las baterías de tierra.

La mayoría de sus reactores no tienen radar todo tiempo, lo que les obliga a actuar de día, y dejar las nubes, a esquivar la niebla. Otros como los Super Etendard, tienen que ser repostados en vuelos, tan corto es su radio de acción. No importa. Como aquel príncipe de Gracián que suplía la cortedad de su espada dando un paso adelante, ellos bajan un poco más hasta rozar los palos de las fragatas inglesas, aunque eso signifique consumir más combustible. Lo hacen una y otra vez, como si fueran meros ejercicios.

Como si no se jugaran la vida –con bastantes posibilidades de perderla- en cada misión. En máquinas revisadas por los mecánicos a la carrera. Tras ser recargadas de bombas, cohetes y combustible. Con el tiempo justo de echar una cabezada, tomarse un café, examinar las siluetas de los navíos enemigos que aún quedan. Y salir de nuevo.

Sin alardes, sin hablar siquiera. Dejando a los ingleses la cuenta de los derribos y de los impactos. Ellos se limitan a protagonizarlos. Sin aspavientos ni petulancia. Como si fuera la cosa más natural del mundo.

No está de moda en nuestros días el panegírico de las glorias militares y no estoy nada seguro que esta crónica lo sea; es la calidad humana de los pilotos argentinos lo que inspira. En un mundo como el nuestro, donde la norma es exigir pero no dar, el ejemplo de estos aviadores, dándolo todo sin pedir nada, ni siquiera un aplauso, es de tal sobria elegancia que deslumbra en su lucidez. La mente moderna necesita hacer un esfuerzo para abarcarlos y aun así no lo consigue.

No dan la vida, naturalmente, por la Junta. Ni siquiera la dan –cree uno- por conceptos abstractos, como el honor o la patria. La dan por algo muy concreto, muy precioso, por su comunidad, que les ha encomendado su defensa, y en último término, por algo tan simple como el cumplimiento del deber. Individuos así ennoblecen toda especie. En este caso particular nos ennoblecen sobre todo a los hispanos, a los latinos, a quienes tan mal nos va en los últimos tiempos. ¡Con qué dolor y orgullo lee uno esos dobles apellidos españoles e italianos, casi de lápidas antiguas!

No sé si el sacrificio de estos pilotos devolverá las Malvinas a su país. Pero sé otra cosa, tal vez más importante, porque las Malvinas tarde o temprano, y el mundo gira hoy muy rápido, serán argentinas. Sé que cuando en adelante se imagine uno al argentino, ya no pensará en el gaucho típico, en el engominado cantante de tangos o en la presidente de revista. Pensará en esos pilotos que han sabido morir por saber por qué vivían, privilegio hoy al alcance de muy pocos.

Es lugar común decir que Argentina ha sido bendecida por todos los dones del Cielo y de la Tierra. Pero sobre todo, ahora lo vemos, por sus hijos que se hicieron aviadores".

Nada más, señor presidente. (Aplausos).

**Sr. Presidente (Busso).**- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la adopción, como despacho de la Cámara en comisión, el proyecto presentado.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Busso).**- Aprobada.

Corresponde levantar el estado de la Cámara en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Busso).**- Aprobado.

**-CÁMARA EN SESIÓN-**

**Sr. Presidente (Busso).**- En consideración en general el proyecto, tal como fuera despachado por la Cámara en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Busso).**- Aprobado en general.

A los efectos de la votación en particular, lo vamos a hacer por número de artículo.

– Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

**Sr. Presidente (Busso).**- Siendo el artículo 3º de forma, queda entonces aprobado el proyecto en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Voy a pedirles a los señores presidentes de bloque de esta Cámara y a las autoridades de la misma que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria de parte de esta Legislatura para la Guarnición Aérea Córdoba.

– Así se hace. (Aplausos).

#### PROYECTO DE LEY – 07422/E/11

##### MENSAJE

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la declaración de Lugar de “Interés Provincial” a la Salas de Honor y Malvinas de la Escuela de Aviación Militar.

Motiva la presente iniciativa la solicitud de la Dirección de la Escuela de Aviación Militar, a iniciativa de los Cadetes de dicha Institución, como medio de mantener vivo el permanente recuerdo y meta a alcanzar en su formación como soldados de la Patria, tomando como ejemplo de quienes cumplieron su deber de defender la Patria hasta perder su vida.

En las Salas se encuentran numerosos objetos, testimonios, presentes y elementos que hacen a la historia de la Fuerza Aérea Argentina, su desarrollo en el tiempo, y la incorporación de material de la Gesta Heroica de Malvinas, destacándose una bandera capturada al enemigo inglés entre otros trofeos de la guerra del Atlántico Sur, obtenidos con el costo de la sangre de quienes se formaron en la Escuela de Aviación Militar con asiento en la ciudad de Córdoba, indiscutidos héroes contemporáneos.

Asimismo, es de subrayar la profunda influencia que ha tenido la aviación militar en nuestra Provincia, además de su rol como fuerza armada de la Nación, y uno de los pilares del desarrollo industrial, tecnológico, y madre de industria, que supo a lo largo de su historia formar un estrecho vínculo con la sociedad.

Las Salas de Honor y Malvinas de la Escuela de Aviación Militar, reúnen a diario visitas de Escuelas, Colegios e Instituciones Civiles que las recorren viendo en ellas el patrimonio histórico cultural que ha legado y sigue legando la actividad aeronáutica a la Provincia.

Por las razones expuestas, las disposiciones de la Ley N° 5543 y su Decreto Reglamentario N° 484/83, solicito a Ud., ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.

**Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.**

#### LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

**ARTÍCULO 1º.-** Declárase Lugar de Interés Provincial las “Salas de Honor y Malvinas” de la Escuela de Aviación Militar de la ciudad de Córdoba.

**ARTÍCULO 2º.-** Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a suscribir con las autoridades competentes, los acuerdos que se requieran en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

**ARTÍCULO 3º.-** Comuníquese al Poder Ejecutivo.

**Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.**

#### PROYECTO DE LEY – 7422/E/11

##### TEXTO DEFINITIVO

#### LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 9943

**Artículo 1º.-** Declárase Lugar de Interés Provincial las Salas “de Honor” y “Malvinas” de la Escuela de Aviación Militar de la ciudad de Córdoba.

**Artículo 2º.-** Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a suscribir con las autoridades competentes los acuerdos que se requieran en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

---

## PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION - 04-V-2011

---

**Artículo 3º.-** Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE.

**Sergio Sebastián Busso**  
Presidente Provisorio de la Legislatura  
de la Provincia de Córdoba

-6-

**A) MINISTERIO DE SALUD. SISTEMA DE RECUPERO DE GASTOS PRESTACIONALES (LEY N° 8373). PEDIDO DE INFORMES.**

**B) MINISTERIO DE SALUD. POLÍTICAS EN SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR. PEDIDO DE INFORMES.**

Moción de vuelta a comisión, con preferencia

**Sr. Presidente (Busso).**- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.

**Sr. Passerini.**- Muchas gracias, señor presidente.

De acuerdo a lo establecido en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria del día de ayer, solicito que los expedientes correspondientes a los puntos 44 y 45 del Orden del Día vuelvan a comisión con preferencia por 7 días, esto significa que sean tratados en la 16º sesión ordinaria.

**Sr. Presidente (Busso).**- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 16º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 44 y 45 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Busso).**- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 16º sesión ordinaria.

### PUNTO 44

#### Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

**6234/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Dressino, Poncio y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el sistema de recupero de gastos prestacionales, en virtud de la Ley N° 8373, por parte del Ministerio de Salud, desde el año 2007 al 2009.

**Comisión:** Salud Humana

### PUNTO 45

#### Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–

**6363/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Nicolás, Gudiño, Cugat, Razzetti, Dressino, Matar, Pozzi, Poncio

y Giaveno, por el que solicita al Sr. Ministro de Salud (Art. 102 CP), informe sobre políticas del Ministerio a su cargo en materia de salud reproductiva y planificación familiar.

**Comisión:** Salud Humana

-7-

**A) EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO PUERTO DEL ÁGUILA, CLUB - COUNTRY NÁUTICO, LOS MOLINOS-CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.**

**B) RADAR DOPPLER PARA DETECCIÓN TEMPRANA DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS. INCORPORACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.**

**C) TRANSPORTE INTERURBANO. DECRETO 1425/10, DE AUMENTO ESCALONADO DE LA TARIFA. INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.**

**D) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS. PEDIDO DE INFORMES.**

**E) PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.**

**F) COMUNIDAD REGIONAL SAN JUSTO. FONDOS ANUNCIADOS Y/O ENVIADOS PARA OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.**

**G) FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS Y MANCOMUNIDADES REGIONALES. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL PERÍODO 2009-2010. PEDIDO DE INFORMES.**

**H) FONDO 1,5 % DE AYUDA FINANCIERA A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS (ATP). ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL PERÍODO 2009-2010. PEDIDO DE INFORMES.**

**I) LEY Nº 9696, DE PROHIBICIÓN DE USO DE BOLSAS DE POLIETILENO Y TODO OTRO MATERIAL PLÁSTICO CONVENCIONAL. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.**

**J) IPEM Nº 343, DE LOS COCOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.**

**K) SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL. MECANISMOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS A SU FINANCIAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.**

Moción de vuelta a comisión, con preferencia

**Sr. Presidente (Busso).**- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.

**Sr. Passerini.**- Señor presidente: en el mismo sentido, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 11, 23, 24, 29, 48, 49, 50, 51, 55, 57 y 58 del Orden del Día vuelvan a comisión con preferencia de 14 días, es decir, que sean tratados en la 17ª sesión ordinaria.

**Sr. Presidente (Busso).**- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 17ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 11, 23, 24, 29, 48, 49, 50, 51, 55, 57 y 58 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Busso).**- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 17ª sesión ordinaria.

#### **PUNTO 11**

##### **Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6742/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado los Legisladores Coria, Birri y Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el emprendimiento inmobiliario Puerto del Águila, Club-Country Náutico, Los Molinos- Córdoba.

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

#### **PUNTO 23**

##### **Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–**

**6515/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se incorporará un radar tipo doppler o con qué otro proyecto cuenta el gobierno para la detección temprana de fenómenos meteorológicos.

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

#### **PUNTO 24**

##### **Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6644/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación del aumento escalonado de la tarifa del transporte interurbano de pasajeros dispuesto por Decreto Nº 1425/10.

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

#### **PUNTO 29**

##### **Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6123/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Coria, Birri, Genesio de Stabio, Asbert, Rivero, Olivero y Fernández, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la Ley Nº 9814, de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.

**Comisión:** Asuntos Ecológicos

#### **PUNTO 48**

##### **Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6561/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat, Dressino, Cargnelutti, Calvo Aguado, Rossi y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la prevención de la drogadicción y lucha contra el narcotráfico en la Provincia.

**Comisión:** Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación

**PUNTO 49**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6677/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Giaveno, Dressino, Rossi, Matar, Cugat y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a fondos anunciados y/o enviados para obras a la Comunidad Regional San Justo.

**Comisión:** Asuntos Institucionales, Municipales y Comunes

**PUNTO 50**

**Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–**

**6121/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Seculini y Lizzul, por el que solicita al Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las asignaciones presupuestarias del período enero de 2009 a septiembre de 2010 como coordinador del Fondo Permanente para la financiación de proyectos y programas de obras de infraestructura para municipios y comunas.

**Comisión:** Asuntos Institucionales, Municipales y Comunes

**PUNTO 51**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6122/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Seculini y Lizzul, por el que solicita al Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las asignaciones presupuestarias del período enero de 2009 a septiembre de 2010 sobre coordinación del Fondo 1,5% de ayuda financiera a municipalidades y comunas, Ley Nº 8663.

**Comisión:** Asuntos Institucionales, Municipales y Comunes

**PUNTO 55**

**Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–**

**6825/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al cumplimiento de la Ley Nº 9696 -de Prohibición de uso de bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional-.

**Comisión:** Asuntos Ecológicos

**PUNTO 57**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**7075/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Díaz, Seculini, Varas y Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la situación del IPEM Nº 343 de la localidad de Los Cocos que no cuenta con edificio propio, dictándose clases en condiciones de insalubridad.

**Comisión:** Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

**PUNTO 58**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**7094/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a los mecanismos de asignación de recursos destinados a financiar el sistema educativo provincial.

**Comisión:** Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

**-8-**

**A) PLANES DE VIVIENDA INICIADOS EN EL PERÍODO 2008-2010. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.**

B) PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS EMBALSES DE RÍO TERCERO, LOS MOLINOS Y PIEDRAS MORAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

C) CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DESDE EL AÑO 1999. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

D) CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA CÓRDOBA - JESÚS MARÍA. PROYECTO. PEDIDO DE INFORMES.

E) CANAL LOS MOLINOS – CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

F) CUENCA DEL LAGO SAN ROQUE. ALMACENAMIENTO Y TRASVASAMIENTO DE AGUAS Y OBRAS DEL PLAN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ Y ZONA DE INFLUENCIA. PEDIDO DE INFORMES.

G) PROGRAMA HOGAR CLASE MEDIA. FONDOS AFECTADOS, SELECCIÓN DE ADJUDICATARIOS Y REINTEGROS POR PARTE DE LA NACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

H) PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS-RANCHOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

I) PLAN TU CASA, EN LA CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FUNCIONAMIENTO. DIFERENTES ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

J) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS S.A. RECLAMOS POR LA CALIDAD DE AGUA POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.

K) OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DIQUE LA VIÑA, EN LAS TAPIAS, DPTO. SAN JAVIER. PEDIDO DE INFORMES.

L) ARROYO SAN ANTONIO. RÉGIMEN DEL CAUDAL DE AGUA. PERMISOS DE PERFORACIONES OTORGADOS Y MEDIDAS DE PRECAUCIÓN TOMADAS POR LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LAS CUENCAS. PEDIDO DE INFORMES.

M) OBRA DE ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL Y OBRAS ASOCIADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

N) DEFENSA Y COSTANERA, EN MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

O) CRISIS HÍDRICA. PROGRAMAS O MEDIDAS DE EMERGENCIA ADOPTADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

P) OBRA: PROVISIÓN DE AGUA POTABLE A LAS LOCALIDADES DE PUESTO CASTRO E ISLA LARGA, DEL PLAN AGUA PARA TODOS. PEDIDO DE INFORMES.

Q) ASOCIACIÓN CIVIL CÓRDOBA NUESTRA. RENDICIÓN DE CUENTAS POR OBRAS PÚBLICAS DEL PLAN SECTORIAL. PEDIDO DE INFORMES.

R) PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS I Y II - HOGAR CLASE MEDIA, EN CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

S) EPEC. ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS RECAUDADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA "OBRA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL, OBRAS ASOCIADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS". PEDIDO DE INFORMES.

T) EPEC. PLANTA TRANSFORMADORA DE LA COMUNA DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA INSTALACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

U) EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA A LOS MINISTROS DE FINANZAS Y DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.

V) CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PROGRAMAS EJECUTADOS. PEDIDO DE INFORMES.

W) CIUDAD DE RÍO CUARTO. DETENCIÓN DE UN MENOR POR NO IDENTIFICARSE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

X) MÁQUINAS TRAGAMONEDAS O SLOTS. INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

Y) "IMPUESTO A LA VALIJA". DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

Z) AUTOVÍA RUTA NACIONAL Nº 19. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

A') PLANTA DE CLASIFICACIÓN, PROCESAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EN EL PREDIO DE CAÑADA GRANDE, DPTO. CALAMUCHITA. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

B') POLÍTICA DE TURISMO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

C') BARRIO LA PERLA DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA. BASURAL A CIELO ABIERTO. INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. PEDIDO DE INFORMES.

D') CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. CASINO. REEMPLAZO DE LOS JUEGOS DE PAÑO POR MÁQUINAS SLOTS O TRAGAMONEDAS. PEDIDO DE INFORMES.

E') CALLE LINO SPILIMBERGO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. TALA DE DIVERSAS ESPECIES DE ÁRBOLES. PEDIDO DE INFORMES.

F') ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CONTRATACIONES – LOCACIONES PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.

G') MINISTERIOS, SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS TRASLADADAS DE LA ANTERIOR CASA DE GOBIERNO. TELÉFONOS Y DIRECCIONES. PEDIDO DE INFORMES.

H') PROGRAMA DE JUEGO RESPONSABLE DE LA PROVINCIA. LÍNEA TELEFÓNICA GRATUITA. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.

I') PROGRAMA DE JUEGO RESPONSABLE DE LA PROVINCIA. FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTOEXCLUSIÓN DE SALAS DE JUEGOS DE AZAR. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.

J') RUTA PROVINCIAL Nº 3, TRAMO BELL VILLE – JUSTINIANO POSSE. ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.

K') MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO. CRÉDITOS PRODUCTIVOS PARA EMPRENDEDORES DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

L') LEY Nº 9821, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 25.761. FALTA DE REGLAMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

M') AUTOVÍA RÍO CEBALLOS – VALLE HERMOSO. CONSTRUCCIÓN. IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.

N') MINISTERIO DE FINANZAS. MONTOS ABONADOS A LA FIRMA KOLEKTOR EN EL PERÍODO 2007-2010. PEDIDO DE INFORMES.

O') BONCOR I, II Y III. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

P') CUENTA DE INVERSIÓN 2009 Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2010. RUBRO VENTA DE ACTIVOS Y VENTA DEL EX BATALLÓN 141 DEL EJÉRCITO ARGENTINO. PEDIDO DE INFORMES.

Q') CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE CÓRDOBA Y LA PROVINCIA. COMPENSACIÓN DE DEUDAS RECÍPROCAS. PEDIDO DE INFORMES.

R') EX MUSEO DE CIENCIAS NATURALES, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, Y ALGUNA OTRA PROPIEDAD DEL GOBIERNO PROVINCIAL. POSIBLE DACIÓN DE PAGO A EMPRESA PRIVADA DEL INMUEBLE. PEDIDO DE INFORMES.

S') LOTERÍA DE CÓRDOBA. LEY 9505. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

T') GABRIELA PUJANA. DETENCIÓN EN LA COMISARÍA DE RÍO TERCERO. PEDIDO DE INFORMES.

U') EMPRESA AGIMED SRL. COMPRAS REALIZADAS POR LA PROVINCIA EN EL PERÍODO 2007-2010. PEDIDO DE INFORMES.

V') LEY 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

W') DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE BELL VILLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

X') CUENCA HÍDRICA DEL RÍO SUQUÍA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SANEAMIENTO, CONTROL Y GRADO DE CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

Y') CONVENIO PARA FORESTACIÓN ENTRE LA PROVINCIA Y LA ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL ISRAELÍ KEREN KAYEMET LEISRAEL (KKL). PEDIDO DE INFORMES.

Z') RÍOS DE LA PROVINCIA. EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS Y OTROS SEDIMENTOS EN CURSOS Y RIBERAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

A'') CASA DE GOBIERNO. DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO CÍVICO. IMPACTO AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

B'') HOSPITAL VICENTE AGÜERO, DE JESÚS MARÍA. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

C'') MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL. INFORME SOBRE DIVERSAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN EL PAICOR. COMISIÓN DE SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN.



**D'') PROGRAMAS O TAREAS PREVENTIVAS DE LA AMBLIOPÍA U "OJO VAGO". DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.**

**E'') FRIGORÍFICO ESTANCIA LA TRINIDAD, DE ONCATIVO. TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES Y VERTEDERO. PEDIDO DE INFORMES.**

Moción de vuelta a comisión, con preferencia

**Sr. Presidente (Busso).**- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.

**Sr. Passerini.**- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1º al 10 inclusive, 12 al 22 inclusive, 25 al 28 inclusive, 30 al 43 inclusive, 46, 47, 52, 53, 54, 56, 59 al 66 inclusive y 68 al 71 inclusive del Orden del Día vuelvan a comisión con moción de preferencia por 21 días, esto significa que sean tratados en la 18º sesión ordinaria.

**Sr. Presidente (Busso).**- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 18º sesión ordinaria, de los proyectos enumerados por el legislador Passerini, que corresponden al Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Busso).**- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 18º sesión ordinaria.

Tiene la palabra el señor legislador Roganti.

**Sr. Roganti.**- Señor presidente: solicito que el proyecto 7417/L/11 sea considerado como de autoría de la totalidad del bloque del Frente Cívico.

Muchas gracias.

**Sr. Presidente (Busso).**- Así se hará, señor legislador.

Tiene la palabra el señor legislador Podversich.

**Sr. Podversich.**- Señor presidente: solicito que los puntos 38 y 39 del Orden del Día, en tratamiento, correspondientes a los proyectos de resolución 6987 y 6988/L/11 respectivamente, ambos iniciados por el legislador Serna y asignados a la Comisión de Salud Humana, sean remitidos a la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación por ser los dos expedientes tema de su estricta incumbencia.

Muchas gracias.

**Sr. Presidente (Busso).**- Así se hará, señor legislador.

Tiene la palabra el señor legislador Roberto Pagliano.

**Sr. Pagliano.**- Señor presidente: solicito que en el proyecto 7403/L/11 se incorpore como coautor al legislador Edmundo Razzetti por ser justamente el aniversario de su localidad.

**Sr. Presidente (Busso).**- Así se hará, señor legislador.

#### **PUNTO 1**

##### **Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6076/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cugat, Calvo Aguado, Matar y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a planes de viviendas que se iniciaron en el período enero de 2008 al 31 de agosto de 2010.

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

#### **PUNTO 2**

##### **Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**5155/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan de Ordenamiento Territorial en los Embalses de Río Tercero, Los Molinos y Piedras Moras.

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

#### **PUNTO 3**

##### **Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6135/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a construcción de viviendas desde el año 1999, especificando la mora en el pago de las mismas.

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

#### **PUNTO 4**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6148/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción de la Autopista Córdoba - Jesús María.

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

**PUNTO 5**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6260/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Cugat, Giaveno, Pozzi, Dressino, Matar, Cargnelutti, Nicolás, Calvo Aguado y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al proyecto Canal Los Molinos - Córdoba.

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

**PUNTO 6**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6429/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a posibles obras para almacenar o trasvasar aguas a la cuenca del lago San Roque, relacionadas al Plan de Abastecimiento de Agua para la ciudad de Villa Carlos Paz y zona de influencia.

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

**PUNTO 7**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6430/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al mecanismo de selección y adjudicación de las 1000 viviendas del Programa Hogar Clase Media que financiará el Gobierno Provincial, y sobre las medidas a tomar para lograr el reintegro de las erogaciones por parte de la Nación.

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

**PUNTO 8**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6437/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el programa de erradicación de viviendas-ranchos.

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

**PUNTO 9**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6446/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Poncio, Matar y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos relacionados al plan "Tu Casa" de la ciudad de La Carlota, departamento Juárez Celman, implementado a través del Banco de Córdoba.

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

**PUNTO 10**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6600/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al servicio de agua potable prestado por la Empresa Aguas Cordobesas SA.

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

**PUNTO 12**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6684/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos

---

## PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION - 04-V-2011

---

aspectos relacionados a la obra "Mejoramiento del Sistema de Riego del Dique La Viña", ubicado en jurisdicción de la localidad de Las Tapias, departamento San Javier.

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

### PUNTO 13

#### Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

**6858/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la falta de agua del arroyo San Antonio y los probables responsables del vaciamiento de su cuenca.

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

### PUNTO 14

#### Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

**6309/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cugat, Matar, Dressino y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Obra Estación Transformadora Arroyo Cabral y obras asociadas.

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

### PUNTO 15

#### Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

**5540/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Giaveno, Matar, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Poncio y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la construcción de la defensa y costanera en la localidad de Miramar, departamento San Justo.

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

### PUNTO 16

#### Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes–

**4017/L/09**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el plan del gobierno para enfrentar la crisis hídrica.

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

### PUNTO 17

#### Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

**5838/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Rossi y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra de provisión de agua potable a las localidades de Puesto Castro e Isla Larga.

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

### PUNTO 18

#### Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

**5840/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Pozzi y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan Sectorial -financiación de obras públicas en la ciudad de Córdoba-.

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

### PUNTO 19

#### Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

**5597/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a empresas adjudicatarias del Programa Federal de Viviendas I y II - Hogar Clase Media, de la ciudad de Córdoba.

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

### PUNTO 20

#### Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

**5132/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la administración por parte de la EPEC de los fondos recaudados para la construcción de la "Obra Estación Transformadora Arroyo Cabral, Obras Asociadas y Obras Complementarias".

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

**PUNTO 21**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**5935/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Ruiz, Birri y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la planta transformadora de la EPEC a ser instalada dentro del ejido de la Comuna de San Antonio de Arredondo cuenta con el estudio de impacto ambiental, conforme la Ley Nº 7343.

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

**PUNTO 22**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6362/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Seculini, Lizzul, Rodríguez y Varas, por el que solicita la comparecencia de los Sres. Ministros de Obras y Servicios Públicos y de Finanzas en el recinto (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre política energética y situación económica de la EPEC.

**Comisiones:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda

**PUNTO 25**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6753/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado las Legisladoras Calvo Aguado y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los programas ejecutados que tienen como finalidad la construcción de viviendas en nuestra Provincia.

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

**PUNTO 26**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**5908/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la detención de un menor de edad el día 24 de agosto de 2010 en la ciudad de Río Cuarto.

**Comisión:** Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

**PUNTO 27**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6161/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la instalación y explotación de slots en la Provincia.

**Comisión:** Economía, Presupuesto y Hacienda

**PUNTO 28**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes–**

**6192/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al llamado "Impuesto a la valija".

**Comisión:** Economía, Presupuesto y Hacienda

**PUNTO 30**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6885/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al proyecto de construcción de la Autovía Ruta Nacional Nº 19 que une las ciudades de Córdoba y San Francisco.

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

**PUNTO 31**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6892/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción de una Planta de Clasificación, Procesamiento, Tratamiento y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos en el predio de Cañada Grande, departamento Calamuchita.

**Comisión:** Asuntos Ecológicos

**PUNTO 32**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6943/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la gestión de la política de turismo.

**Comisión:** Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional

**PUNTO 33**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6963/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el basural a cielo abierto del barrio La Perla de la ciudad de Alta Gracia, y respecto a la instalación de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos con estación de transferencia regional proyectada para la citada ciudad y zona de influencia.

**Comisión:** Asuntos Ecológicos

**PUNTO 34**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6965/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible decisión de levantar los juegos de paño del casino de la ciudad de Villa Carlos Paz para reemplazarlos por máquinas slots o tragamonedas.

**Comisión:** Economía, Presupuesto y Hacienda

**PUNTO 35**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6967/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tala de diversas especies de árboles en calle Lino Spilimbergo de la ciudad de Córdoba.

**Comisión:** Asuntos Ecológicos

**PUNTO 36**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6972/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Díaz, Seculini, Jiménez y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a las contrataciones-locaciones realizadas para garantizar el funcionamiento de la administración pública, hasta tanto se produzca el traslado a las nuevas dependencias.

**Comisión:** Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

**PUNTO 37**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6973/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Seculini, Jiménez, Birri y Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe domicilio y teléfonos de los diferentes ministerios, secretarías y demás dependencias de la provincia trasladadas de la anterior Casa de Gobierno.

**Comisión:** Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

**PUNTO 38**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6987/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el funcionamiento de la línea gratuita 08007772983, del Programa de Juego Responsable de la Provincia.

**Comisión:** Salud Humana

**PUNTO 39**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6988/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el funcionamiento del formulario de solicitud de autoexclusión de salas de juegos de azar, dependiente del Programa de Juego Responsable de la Provincia.

**Comisión:** Salud Humana

**PUNTO 40**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6989/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Rodríguez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el estado de la Ruta Provincial Nº 3, en el tramo Bell Ville y Justiniano Posse.

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

**PUNTO 41**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6991/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la entrega de créditos productivos para emprendedores de Córdoba.

**Comisiones:** Promoción y Desarrollo de la Economías Regionales y Pymes y de Industria y Minería

**PUNTO 42**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6992/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Dressino, Cugat, Cargnelutti, Nicolás, Poncio, Pozzi y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se reglamentó la Ley Nº 9821, de adhesión a la Ley Nacional Nº 25.761, de régimen legal para el desarmado de automotores y venta de sus autopartes y si se hacen los controles que determina la ley.

**Comisión:** Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

**PUNTO 43**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6996/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Díaz y Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el impacto ambiental provocado por la construcción de la autovía Río Ceballos – Valle Hermoso.

**Comisión:** Asuntos Ecológicos

**PUNTO 46**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6548/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos relacionados con la firma Kolektor desde el año 2007.

**Comisión:** Economía, Presupuesto y Hacienda

**PUNTO 47**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6364/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Pozzi, Giaveno, Rossi, Razzetti, Nicolás, Gudiño y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la emisión de los denominados Boncor I, II y III.

**Comisión:** Economía, Presupuesto y Hacienda

**PUNTO 52**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6641/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Dressino, Pozzi, Gudiño, Calvo Aguado, Rossi, Giaveno y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Cuenta de Inversión 2009 y a la Ejecución Presupuestaria al 3º trimestre, explicando especialmente la operatoria en la venta del ex Batallón 141 del Ejército Argentino.

**Comisión:** Economía, Presupuesto y Hacienda

**PUNTO 53**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6750/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la compensación de deudas recíprocas entre la Provincia y la Caja de Jubilaciones de Córdoba en el año 2010.

**Comisión:** Economía, Presupuesto y Hacienda

**PUNTO 54**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6895/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Dressino, Pozzi, Calvo Aguado, Matar, Giaveno, Nicolás, Poncio y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible dación de pago a una empresa privada del inmueble en que funcionaba el ex Museo de Ciencias Naturales en la ciudad de Córdoba, así como de alguna otra propiedad del Gobierno provincial.

**Comisión:** Economía, Presupuesto y Hacienda

**PUNTO 56**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**7038/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley N° 9505 por parte de la Lotería de Córdoba, a través de Casinos de la Provincia y Compañía de Entretenimientos y Turismo (CET).

**Comisión:** Economía, Presupuesto y Hacienda

**PUNTO 59**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**7099/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a la detención de Gabriela Pujana en la comisaría de la ciudad de Río Tercero el 4 de marzo de 2011.

**Comisión:** Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

**PUNTO 60**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**5347/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Birri, Rivero y Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las compras que la provincia realizó en el período 2007-2010 a la empresa AGIMED SRL, mecanismo de contratación, pagos, destino de los equipamientos y aplicación de la Ley N° 9331 -Compre Córdoba-.

**Comisiones:** Industria y Minería y de Salud Humana

**PUNTO 61**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**5656/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley N° 9331 -Compre Córdoba-.

**Comisiones:** Industria y Minería y de Promoción y Desarrollo de la Economías Regionales y Pymes

**PUNTO 62**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6146/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Matar, Poncio, Gudiño, Cugat, Rossi, Dressino, Calvo Aguado, Pozzi, Razzetti y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los trámites iniciados por la Municipalidad de Bell Ville y las gestiones realizadas por el Gobierno Provincial relacionados a la disposición final de residuos sólidos de esa ciudad.

**Comisión:** Asuntos Ecológicos

**PUNTO 63**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**7053/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al saneamiento, control y grado de contaminación de la cuenca hídrica del Río Suquía, en todo su recorrido por la ciudad de Córdoba.

**Comisión:** Asuntos Ecológicos

**PUNTO 64**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**5590/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el convenio para forestación firmado con la organización gubernamental israelí Keren Kayemet Leisrael.

**Comisión:** Asuntos Ecológicos

**PUNTO 65**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**5902/L/10**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Cugat, Gudiño, Pozzi, Cargnelutti, Calvo Aguado, Nicolás, Dressino, Giaveno, Poncio, Rossi y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la extracción de áridos y otros sedimentos en cursos y riberas de los ríos de la provincia.

**Comisión:** Asuntos Ecológicos

**PUNTO 66**

**Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes**

**6929/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Lizzul y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al impacto ambiental que producirá la construcción del nuevo Centro Cívico y la consecuente demolición de la Casa de las Tejas.

**Comisión:** Asuntos Ecológicos

**PUNTO 68**

**Pedido de Informes–Artículo 195**

**7202/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento del Hospital Vicente Agüero de la ciudad de Jesús María.

**Comisión:** Salud Humana

**PUNTO 69**

**Pedido de Informes–Artículo 195**

**7206/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti, Cugat, Pozzi, Matar, Giaveno y Razzetti, por el que cita al seno de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos al Señor Ministro de Desarrollo Social (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos medidas implementadas en el PAICOR.

**Comisión:** Solidaridad y Derechos Humanos

**PUNTO 70**

**Pedido de Informes–Artículo 195**



**7219/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por los Legisladores Giaveno, Dressino y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con programas o tareas preventivas de la Ambliopía u "Ojo Vago".

**Comisión:** Salud Humana

**PUNTO 71**

**Pedido de Informes–Artículo 195**

**7254/L/11**

**Proyecto de Resolución:** Iniciado por las Legisladoras Lizzul, Rodríguez y Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el tratamiento de efluentes cloacales y el vertedero del frigorífico Estancia La Trinidad de la ciudad de Oncativo.

**Comisión:** Asuntos Ecológicos

**-9-**

**LEY DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. ESTABLECIMIENTO.**

**Sr. Presidente (Busso).**- Corresponde el tratamiento del punto 67 del Orden del Día, proyectos de ley 6484/E/10 y 5351/L/10, compatibilizados, referidos a la Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que cuentan con despacho, al que damos ingreso.

Antes de otorgar la palabra al legislador Alesandri, quiero informar que con motivo del tratamiento de este proyecto se encuentran presentes la señora Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, licenciada Raquel Krawchick y su equipo de colaboradores.

Tiene la palabra el señor legislador Carlos Alesandri.

**Sr. Alesandri.**- Señor presidente: como presidente de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos, voy a fundamentar el despacho de los proyectos de ley 6484/E/10 y 5351/L/10, en lo referente a la creación del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual fue tratado conjuntamente con las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

Quiero comenzar recordando que el artículo 75, inciso 22), de la Constitución nacional otorga a la Convención sobre los Derechos del Niño jerarquía constitucional, y es esta Convención la que proclamó y reconoció que los Niños, Niñas y Adolescentes son ciudadanos, es decir, sujetos portadores de derechos, y estableció un conjunto de responsabilidades de las familias, las comunidades, las instituciones y el Estado para poner esos derechos en vigencia.

En el año 2005, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes que adecua nuestra legislación interna a las pautas de la Convención de los Derechos del Niño; y en ese contexto esta Legislatura aprobó, en el año 2007, la Ley provincial 9396, de adhesión a la Ley nacional 26.061. Justamente fue la Ley 9396 el instrumento que nos permitió hacer la transición de 50 años de protección judicial de la niñez en nuestra Provincia, y poder llegar hoy a aprobar este proyecto que pone a la Provincia de Córdoba entre las más avanzadas del país en esta materia.

No digo esto sólo por los instrumentos legales sino, principalmente, por el conjunto de prácticas que se han podido institucionalizar durante todo este período, las cuales nos permiten ser muy optimistas en esta transición porque hemos presenciado, desde el trabajo de la Comisión, los sucesivos pasos que se han ido dando en los últimos años: primero, como acabo de afirmar, a fines de 2007, con la sanción de la Ley 9396 y con la creación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia –con jerarquía de Secretaría de Estado mediante la Ley Orgánica provincial 9454–, que depende directamente del Gobernador, única en su tipo en el país –lo cual no es un detalle menor porque da cuenta del compromiso de nuestro Gobierno con las políticas públicas de infancia, adolescencia y familia constituyéndola en una política de Estado.

Más adelante, en el año 2008, nos tocó debatir el proyecto de ley de Creación del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia. En ese momento, tuvimos oportunidad de recibir, por primera vez, a todos los actores involucrados en la temática de niñez, los mismos que hemos recibido durante estas semanas, y así pudimos escuchar las distintas visiones y opiniones sobre el proceso de transición que había abierto la aprobación de la Ley nacional 26.061. Pudimos contar con la perspectiva del Poder Judicial, que se preparaba para el cambio, y de las organizaciones no gubernamentales, que pugnaban por una transición más acelerada. También

escuchamos al Defensor del Niño y a la Secretaria de Niñez, y esas diferentes perspectivas se reflejaron en el tratamiento de la ley que tuvo un intenso debate, principalmente en orden a determinar quiénes debían ser los actores que integren dicho Consejo, habiéndonos inclinado por una posición a favor de una amplia representatividad en el mismo.

Luego, en el año 2009, se venció el plazo de dos años que preveía la Ley 9396, y el Poder Judicial dictó la Acordada 987/2009, modificada por la 98 Serie "A" de 2010, mediante las que transfirió una serie de competencias al Poder Ejecutivo, quien a su vez dictó el Decreto 1153/09, que creó el Organismo de Protección de Derechos y puso en marcha las unidades de desarrollo regional como delegaciones en el interior provincial.

También se procedió a la implementación y conformación de una Comisión Interministerial, a los fines de articular acciones entre los distintos estamentos del Estado provincial con relación a los derechos que conforman el Sistema de Protección Integral, dando así lugar al ámbito concreto y jerarquizado para generar las condiciones de aplicabilidad de la ley nacional.

Finalmente, en el año 2010 tomaron estado parlamentario dos proyectos de ley – uno del Poder Ejecutivo y otro firmado por presidentes de distintos bloques de esta Legislatura–, mediante los cuales se establece la creación, con rango de ley, del Sistema Integral de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez, propiciando la derogación de la Ley 9053.

Quero destacar todo este proceso, señor presidente, porque lo considero sumamente valioso, sobre todo con relación a la actuación del resto de los actores involucrados, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, así como de las organizaciones no gubernamentales –como el Defensor del Niño– y los municipios y comunas, que se ven las caras cotidianamente tratando de aportar su mejor esfuerzo para la construcción de una política de niñez más integradora.

Personalmente, me causa una profunda satisfacción observar con qué nivel de responsabilidad este proceso ha sido llevado adelante en Córdoba, sobre todo teniendo en cuenta desandar 40 ó 50 años de justicia de menores en una provincia como la nuestra.

Siempre escuchamos a los actores que estudian y trabajan sobre el tema de la infancia y tengo la seguridad de que cada uno, desde su lugar, hace un esfuerzo sincero, más allá de las diferentes posiciones que se adoptan para lograr una transición ordenada en una materia tan delicada como la que nos ocupa.

Me detengo en el contexto de estos proyectos, señor presidente, porque creo que el instrumento que estamos por aprobar, si bien es muy importante, es un escalón más en el marco del esfuerzo social que implica la construcción de una nueva mirada sobre la niñez. Muchas veces resulta fácil hablar acerca de la edad de imputabilidad, observando algún caso resonante difundido a través de los medios de comunicación, o decir que mediante el viejo paradigma se judicializaba la pobreza; ahora bien, lo que no resulta sencillo de expresar es en qué medida vamos a comprometernos para hacernos responsables, como sociedad, de las obligaciones que nos impone la Convención sobre los Derechos del Niño.

La Secretaria de Niñez, que hoy nos acompaña junto a todo su equipo, licenciada Raquel Krawchick, nos refirió el esfuerzo realizado en materia de capacitación para la construcción de una nueva mirada, tanto en lo que respecta al propio personal de la Secretaría como a otros actores de la sociedad. Esta tarea llegó a incluir reuniones con periodistas del interior y de Capital para que adviertan cuál es la responsabilidad que tienen los medios respecto de la toma de conciencia por parte de toda la sociedad, que requiere esta transición para poder trabajar sobre cierta visión de los medios con relación a algunas cuestiones vinculadas con la niñez.

Por su parte, la doctora Cafure nos habló del esfuerzo permanente que debemos hacer para no volver a las viejas categorías. Todos tenemos que cambiar la estructura mental de interpretación, puesto que ya no es sólo el Poder Judicial el que va a tutelar los derechos de los menores en situación de riesgo, ya que esa tarea le corresponde también al Poder Ejecutivo por el principio universal de no judicialización de los problemas de los niños, ya que se considera estigmatizante la entrada al Poder Judicial de chicos en situaciones en las que no hay conflictos con la ley penal.

Al analizar los antecedentes de estos últimos años, se puede apreciar cuánto hemos avanzado en la creación de un contexto de aplicabilidad de la ley que nos permita hacer efectivos los preceptos de la Convención. Sólo por citar algunos de los datos más representativos, desde la vigencia de la Ley 9396 se disminuyó al 50 por ciento la cantidad de chicos institucionalizados –debido a las políticas de revinculación y

fortalecimiento familiar–, se permitió el retorno de los niños a sus familias y el egreso autónomo en el caso de los jóvenes.

Al inicio de esta gestión había en Córdoba cerca de dos mil niñas, niños y adolescentes institucionalizados por problemas sociales o familiares en lo que se conocía como el área prevencional, y al cierre de 2010 eran aproximadamente mil los que se encontraban en esa situación. También, al iniciar la gestión el Estado provincial tenía a su cargo veintisiete institutos de menores en los que se alojaban niñas, niños y adolescentes con problemas familiares o sociales, por decisión de los jueces; y al finalizar 2010 el Gobierno administraba veinte residencias en las que temporariamente se aloja a los niños mientras transcurre el proceso de restitución a sus hogares y centros de vida, y siete centros socioeducativos abiertos a la comunidad en los que se ofrecen servicios de apoyo escolar, actividades recreativas, charlas sobre temas de interés, talleres artísticos, capacitaciones, etcétera.

Todo este camino recorrido es lo que ha permitido la paulatina transferencia de facultades del Poder Judicial al Ejecutivo, y culmina con el presente proyecto que deja en manos del Poder Ejecutivo todo el tratamiento de la situación de la niñez con derechos vulnerados hasta alcanzar, inclusive, las llamadas medidas excepcionales que, en último término, autorizan la separación del niño de su grupo familiar, medida que es automáticamente revisada por el Poder Judicial. Es justamente este proceso de maduración el que permite suponer que la transferencia de estas últimas competencias será a favor de un sistema lo suficientemente desarrollado y con experiencia para llevar adelante satisfactoriamente las responsabilidades asignadas por la presente ley.

Con respecto al análisis del proyecto, quiero referirme puntualmente a los tres niveles de intervención del Sistema de Protección Integral de la Niñez, previstos en el Título IV, a partir del artículo 41. Por un lado, tenemos las medidas de primer nivel, que son aquellas de promoción del derecho de prevención de su vulneración y están destinadas al desarrollo armónico de la infancia y la adolescencia en familia, mejorando los niveles y la calidad de la educación, de la salud física y mental, del hábitat, de la cultura, de la recreación, del juego, del acceso a los servicios y de la seguridad social generando la adecuada inclusión social.

Luego tenemos las medidas de segundo nivel, que son de protección de derechos, aquellas que se adoptan ante la amenaza o violación de los derechos o garantías de un niño individualmente considerado para preservar o restituir al mismo el goce y el ejercicio de los derechos amenazados o vulnerados, o la reparación de las consecuencias de su vulneración. En ningún caso estas medidas podrán consistir en la separación del niño.

Por último, en el artículo 48 están contempladas las medidas excepcionales o de tercer nivel, que proceden sólo ante el fracaso de las de primer y segundo nivel, y autorizan la separación del niño de su grupo familiar.

La autoridad de aplicación, incluida en las unidades de desarrollo regional, es el único organismo con competencia para dirigir el procedimiento y para declarar y disponer, fundamentalmente, alguna medida de protección excepcional. En todos los casos deben contar con la intervención jurídica a través de la Dirección de Asuntos Legales quien, con posterioridad a la adopción de la medida, la fundamentará legalmente y elevará el respectivo informe a la autoridad judicial competente a los efectos del debido control de legalidad. Para ello se prevé que las actuaciones administrativas sean puestas a disposición del juez con competencia en la materia a los fines de la realización del control de legalidad en el siguiente día hábil de adoptada la medida excepcional.

Para el mejor cumplimiento de estas responsabilidades, sobre todo en lo que respecta a la ejecución de las medidas de primero y segundo nivel, se creó la Comisión Interministerial de la Niñez, Adolescencia y Familia, integrada por miembros cuyo cargo no puede ser inferior al de Director de Jurisdicción o, en su caso, nivel equivalente, uno por cada ministerio y secretaría perteneciente a la estructura orgánica del Poder Ejecutivo que estuvieren relacionados directamente con la protección de los derechos establecidos mediante la presente ley, que se encarga de articular los esfuerzos de todas las áreas del Gobierno para mejor aprovechamiento de los recursos y la mayor satisfacción de los derechos del niño.

Por otra parte, la ley prevé la descentralización regional en el territorio de la Provincia, mediante las unidades de desarrollo regional, UDER, que descentralizan la toma de decisiones y la ejecución de las medidas, y que se encuentran encargadas de articular con los servicios locales de niñez de los distintos municipios el diseño y articulación de programas y la intervención directa en las situaciones de vulneración de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus familias.

Es importante mencionar que la Secretaría de Niñez promueve intensamente la formación de estos servicios locales de promoción y protección de derechos, por ejemplo, durante el año 2010 la Secretaría de Niñez destinó alrededor de un millón de pesos para facilitar la creación o fortalecimiento de servicios locales de infancia en 26 municipios de la Provincia.

Entonces, podemos ver que junto a las unidades de desarrollo regional, creadas en el año 2009 -en este momento son 12- también se están armando 50 áreas locales de infancia en distintos puntos de la Provincia, donde los recursos humanos de los diferentes municipios trabajan con esta nueva mirada. También se promovió la constitución de cerca de 80 consejos locales de niñez en todo el territorio provincial, en un trabajo articulado con municipios, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas, y se impulsó la creación de cerca de 40 foros de participación de niñas, niños y adolescentes en distintas localidades.

También es muy alentador, sobre todo en el interior provincial, ver cómo se constituyen las redes necesarias para dar cumplimiento a los derechos de los niños, ya que es mucho más fácil articular a los distintos actores sociales relacionados o interesados en materia de niñez. Dichos espacios permiten dar forma a la aplicación del nuevo paradigma de acuerdo con las particularidades características que en cada comunidad manifiestan los distintos actores sociales involucrados, todo ello con la natural facilidad con que se dan estos procesos de agregación colectiva en las comunidades del interior provincial. Esto me hace recordar a unas ideas que me enseñaron -hace unos cuantos años- tanto en la forma de organizar la comunidad como en la materia y en el sentido al cual se orienta.

Para ir terminando, quiero destacar que por el artículo 64 se crea la figura del juez de niñez, juventud y violencia familiar, quien es competente para conocer y resolver en el control de legalidad de las medidas de protección excepcional adoptadas respecto a las niñas, niños y adolescentes por el órgano administrativo competente y en el conocimiento y resolución de casos de violencia familiar, conforme a la Ley 9283 y su articulado, entre otras competencias asignadas; también el artículo 113 establece que los actuales jueces de menores, en lo prevencional y civil, se desempeñarán en adelante como jueces de niñez, juventud y violencia familiar, y por el artículo 121 se deroga la Ley 9053 y los artículos 2, 3, 16 y 20 bis de la Ley 9396.

Para finalizar, quiero mencionar que el proyecto de ley contempla, a partir del artículo 82, un título relativo al procedimiento penal juvenil. No se nos escapa que se planteó en comisión la oportunidad de separar el presente capítulo de la ley, con motivo del tratamiento por parte del Congreso de la Nación de un proyecto para un nuevo régimen penal juvenil, que tiene media sanción de la Cámara de Senadores y que fija la edad de imputabilidad en los 14 años.

Debemos decir que éste es un tema que se viene debatiendo desde hace más de 10 años y recientemente, en setiembre de 2010, la Cámara de Diputados emitió un dictamen elevando la edad de imputabilidad a los 16, con lo cual se torna incierto el futuro de dicho proyecto, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de una materia muy sensible a la opinión pública.

Por lo expresado, solicito a mis compañeros de bancada que me acompañen con el voto favorable en esta parte de la ley, valorando el significativo avance que implica la incorporación del Fiscal Penal Juvenil, tal como lo fue en su momento para el régimen procesal para mayores, a la espera de una eventual reforma del régimen penal de fondo por parte de la Nación, tal como lo destacaron los jueces de menores del interior que nos acompañaron en la reunión de comisión del día de ayer.

Por último, quiero agregar que se han incorporado en el despacho de comisión tres artículos referidos a la asignación de recursos y las partidas presupuestarias al sistema integral de protección de la niñez, asegurando la correcta identificación de los programas, el origen de los recursos y la afectación específica, a la vez que se declara la intangibilidad de los recursos que anualmente se asignen para el financiamiento del sistema -contemplado en el artículo 115-, algo que era reclamado por la mayoría de los invitados a la comisión y que figura en el proyecto 5351/L/10.

Fruto del debate también se pudo tratar en los artículos 64 y 68 la reasignación de la competencia en materia de violencia familiar, principalmente en el caso de los jueces del interior provincial, que enfrentan una situación muy distinta a la de sus colegas de la Capital de la Provincia. Del mismo modo, se trabajó en la fijación de un límite máximo a la duración de las medidas excepcionales en el artículo 48, entre otras modificaciones.

Señor presidente, señores legisladores: solicito el acompañamiento al presente proyecto de ley porque estoy convencido de que estamos dando un gran paso adelante en materia de políticas de infancia.

He tratado de reseñar apretadamente todo lo que hemos avanzado en los últimos años gracias a la aprobación de la Ley 9396, que adhirió a la Ley nacional 26.061 del año 2007, y este tiempo en que hemos convivido con la Ley 9053 no ha sido un período fácil de transitar, pero sin duda, gracias al esfuerzo y al profundo sentido de responsabilidad de los actores involucrados, hemos tenido una transición ordenada y pacífica, tal como se manifestó en el tratamiento del proyecto en comisión.

Debemos tener en cuenta que enfrentamos un cambio profundo en la mirada de la niñez; que este cambio implica una toma de conciencia por parte de toda la sociedad, en especial de los sectores directamente vinculados con las viejas prácticas. Ese es el desafío que nos toca enfrentar, necesitamos la aprobación del presente proyecto de ley para consolidar todo lo que hemos avanzado hasta el presente y profundizar este proceso en el que todavía queda mucho camino por recorrer.

Pero contamos con muy buenas razones para pensar que cada día estamos un poco más cerca de generar las condiciones que nos permitan cumplir con la obligación de restablecer los derechos que les corresponden a nuestros niños.

Muchas gracias. (Aplausos).

**Sr. Presidente (Busso).**- Tiene la palabra la señora legisladora Ana Dressino.

**Sra. Dressino.**- Señor presidente: por el proyecto en tratamiento se crea un marco jurídico establecido por una ley por la cual garantizaremos a los cordobeses, definitivamente, la plena vigencia del sistema de promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Este sistema va a estar integrado –como lo expresa el texto de la norma– por organismos públicos de distintos poderes y jurisdicciones, por organizaciones de la sociedad civil y por instituciones, quienes, con políticas articuladas, concertadas y descentralizadas, deberán garantizar definitivamente la promoción, protección y restitución de los derechos vulnerados. Finalmente, los cordobeses vamos a dejar atrás el viejo patronato.

Como decía el miembro informante que me precedió en el uso de la palabra, con la reforma constitucional del año 1994 la Convención de los Derechos Internacionales del Niño se incorpora y obtiene rango constitucional en nuestro país. Posteriormente, la Nación procede a la sanción de la Ley 26.061, con la que se deroga el patronato.

En la Provincia de Córdoba avanzamos con la sanción de la Ley 9396 a través de la cual la Provincia adhiere, a mediados del año 2007, a la Ley 26.061, creando la figura del Defensor de los Derechos del Niño.

Señor presidente: para nosotros este es un día importante, porque si algo discutimos en el marco de la sanción de la Ley 9396 era justamente la posibilidad de que el oficialismo entendiese que los cordobeses estábamos – o debíamos estar – en condiciones de establecer un régimen jurídico legal que garantizara el sistema de protección integral a través de los organismos, recursos y procedimientos que la ley nacional imponía, aunque en ese momento entendíamos excesivo el plazo que el Poder Ejecutivo se daba para poner esta ley en práctica. Esto fue así porque no queríamos que transcurriese tanto tiempo, aunque debemos reconocer que se dictaron instrumentos jurídicos, y a través de decretos se fueron organizando e instituyendo algunos de los organismos a los que hoy, definitivamente, esta Legislatura les dará un marco legal.

En esa oportunidad discrepábamos, señor presidente, y seguimos sosteniendo esa postura en el día de la fecha, con que si precisamente la adhesión a la Ley 26.061 era terminar con la judicialización en materia de menores, la Ley 9396 nunca podía dar competencia al Ministerio de Justicia por ser absolutamente contradictorio a la esencia misma de la adhesión a la Ley 26.061.

Finalmente, señor presidente, el tiempo transcurrió y hoy estamos en condiciones de decir que vamos a tener un marco jurídico y legal al respecto, esperando votar un instrumento jurídico importante, aunque sabemos que tenemos que avanzar aún mucho más, para no desandar el camino iniciado hace algunos años.

Señor presidente: la ley está estructurada en varios títulos, de los cuales el primero hace referencia a los aspectos fundamentales de la ley y, por supuesto, determina el objeto y los sujetos comprendidos, sobre los que no me voy a extender porque es clara y precisa.

El Título II de la ley determina los principios, derechos y garantías sobre los que debe regir. Es importante destacar que el artículo 8º, cuando la ley habla de las responsabilidades, establece expresamente la responsabilidad indelegable del Estado; ello significa que el Estado provincial deberá controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas que aseguren efectivamente que el sistema de promoción y protección integral de los derechos sea una norma de cumplimiento diario en el ámbito del Estado provincial.

Siguiendo con el Título II que, como dije, establece los principios, derechos y garantías, son prácticamente iguales a lo establecido en la ley nacional. No obstante, debemos decir que si a esta Legislatura se le desliza algún error en el reconocimiento de algún derecho, garantía o principio, el marco legal vigente en la jurisdicción del país es el de la ley nacional y de los tratados internacionales. Por lo tanto, si nuestra legislación lo omitiese de algún modo, los niños, niñas y adolescentes de la Provincia de Córdoba entrarían bajo el paraguas de la Convención de los Derechos del Niño.

En cuanto a los derechos, debemos destacar algunos –aunque todos son importantes- trascendentes, por lo que vale la pena hacer alguna apreciación. El derecho a la convivencia familiar y comunitaria. Este es un derecho que significa, nada más y nada menos, que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a vivir dentro de su grupo de origen familiar y sólo excepcionalmente, para aquellos casos en que resulte imposible, lo harán bajo un grupo familiar alternativo. Por supuesto, sabemos que para que ello ocurra, en los sectores más desprotegidos, más carenciados y con menos recursos económicos la mano tendida del Estado deberá estar presente todos los días para que los chiquitos puedan crecer y desarrollarse junto a su familia de origen.

Por otra parte, hay otras cuestiones interesantes en el articulado referidas a la educación. El Estado provincial garantiza la educación pública y gratuita, la permanencia y el acceso en los establecimientos educativos más cercanos a su domicilio. Si bien ello parece una obviedad, muchas veces vemos a las mamás recorriendo los establecimientos educativos porque deben ser trasladados por falta de capacidad dentro de la estructura del sistema educativo para contener a los chiquitos que viven en el barrio. Seguramente, y como la esencia de esta ley es la integralidad y el trabajo conjunto, articulado, mancomunado y descentralizado de todos los órganos del Estado provincial en las jurisdicciones, deberá haber un fuerte trabajo de la comisión intersectorial, que integran todos los Ministerios del Estado provincial, a los efectos de que, articulando las distintas políticas de Estado, podamos dar respuesta integral a políticas públicas que nos demandan y exigen en materia de niñez.

Otro de los derechos absolutamente importante –con el que sabemos, a veces hay problemas- es el de los niños discapacitados, a los cuales el Estado debe garantizar el pleno desarrollo de todas sus potencialidades –cualquiera sea el grado de discapacidad- porque los establecimientos educativos que ofrecen estos servicios muchas veces son muy costosos y los papás no tienen posibilidades de llevarlos.

Otra de las cuestiones importantes es el artículo que hace referencia al derecho a la libertad, de tener sus propias creencias, sus ideas y su culto. El inciso b) dice: “Expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la familia, la comunidad y la escuela”, y continúa diciendo: “expresar su opinión como usuario de todos los servicios públicos con las limitaciones de la ley, en todos los procesos judiciales y administrativos que puedan afectar sus derechos”. Esto hace a la esencia del nuevo paradigma de las políticas públicas de la niñez, hace a la esencia de entender que los niños son sujetos activos de derecho y, como tales, son portadores de los mismos. Este derecho a ser oído en todos los procesos judiciales administrativos se complementa con el artículo 27, que establece el mandato de que su opinión tenga especial consideración por parte de los funcionarios y magistrados antes de adoptar alguna medida.

Después continúa el capítulo referido a las garantías, en el cual tiene especial consideración el deber de los funcionarios al momento de receptar la denuncia; la misma debe ser receptada por un agente público, sea que la haga el menor o cualquier otra persona. El trámite debe ser inmediato, gratuito y si se hace en sede judicial, inmediatamente ésta debe ponerla en conocimiento del órgano administrativo porque éste es, precisamente, otro de los puntos esenciales de la ley. Anteriormente, frente a la vulneración de un derecho del menor, quien tomaba participación era uno solo de los Poderes del Estado, el Judicial; hoy, ante esta situación toma participación el órgano administrativo que, en el caso de la Provincia, la jerarquía parte de la Secretaría, que fue creada oportunamente con rango de ley y, a partir de allí, las unidades regionales o las locales. El funcionario que no tome la denuncia –ya sea que la misma sea formulada por parte del menor o de otra persona- quedará incurso en la figura que le corresponde como un hecho grave en el cumplimiento de los deberes de funcionario público y, por supuesto, señor presidente, si hubiese alguna cuestión penal inmediatamente a las autoridades judiciales que son competentes en la materia.

El Título III hace referencia genéricamente al sistema, a los organismos que lo componen –en este caso, a los organismos de todas las jurisdicciones-, a las entidades, a la obligación que tienen los organismos, a los requisitos que demanda la política en el sistema en cuanto a políticas, programas, organismos, medidas y recursos.

Continúa con la autoridad de aplicación, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, oportunamente creada por ley. Entre las cuestiones esenciales que le competen está: diseñar, instrumentar y ejecutar políticas bajo el concepto de descentralización, articulación y coordinación.

Las funciones de la Secretaría las determina el artículo 37 -algunas muy importantes, como las políticas de difusión de los derechos y garantías, coordinar y celebrar convenios con organismos públicos, fortalecimiento de las familias-, desde el inciso a) al y), entre los que me interesa destacar: la promoción de la articulación con los servicios locales de promoción -absolutamente fundamental e importante-, para los cuales la ley misma establece que los municipios deberán suscribir convenios con la Secretaría de Niñez y Familia; la modificación que se hizo en este último artículo está referida a la suscripción de los convenios, porque si la ley fija en el artículo 1º que la misma es de orden público, de ningún modo pueden los municipios tener la facultad de adherir o no. La ley rige y es de orden público; lo que tendrán los municipios es la facultad de suscribir convenios o no suscribir convenios, nunca de dejar de adherir a esta ley.

La Comisión se llamaba Comisión Interministerial. La verdad es que esta comisión deberá ser un instrumento importante para la coordinación y ejecución de políticas; por supuesto, la Secretaría es quien cuenta con el trabajo de esta comisión.

En cuanto a las autoridades regionales, quien me precedió en el uso de la palabra manifestó que estos servicios deben también coordinar y articular políticas, y tanto el orden provincial, regional como local no sólo deben articularse entre sí sino que es fundamental la tarea que se desarrolle a través de las organizaciones no gubernamentales.

Las organizaciones no gubernamentales tienen un capítulo especial por el cual se establecen las condiciones mínimas que deben reunir en cuanto a personería; la función fundamental debe ser precisamente trabajar en políticas de niñez, la obligación de rendir cuantos recursos reciban del Estado provincial y la creación de un registro provincial para aquellas que trabajen coordinadamente con la Provincia.

Luego las medidas, muy bien explicitadas por quien me precedió en el uso de la palabra, son de primer nivel y de segundo nivel. Las primeras son precisamente de promoción y de prevención; las segundas son ante la amenaza o la violación de un derecho. Éstas tienden a preservar, restituir o reparar las consecuencias de la vulneración de un derecho.

Es importante destacar que las medidas de protección determinadas en el artículo 45 de la presente ley, que de modo alguno son taxativas, nunca, en ningún caso, pueden significar la separación del niño de su familia, excepto cuando la permanencia signifique una amenaza directa a la vida del menor.

Las del tercer nivel, son las medidas excepcionales, que también la comisión procedió a su adecuación porque se las determinaba como medidas tutelares excepcionales, adecuando a las mismas la terminología de la ley nacional, quedaron como medidas estrictamente excepcionales, son aquellas últimas medidas. Cuando con las medidas de promoción y protección no se logra restituir un derecho, se llega a la última instancia. La ley determina en forma clara y precisa que son provisionales, limitadas en el tiempo, que nunca significan la privación de la libertad y, tomadas estas medidas por parte de los organismos administrativos, debe procederse a su comunicación al órgano judicial a los efectos de que se produzca lo que se denomina "control de legalidad".

No me extenderé en el control de legalidad, señor presidente, pero lo más importante y trascendente es que al niño siempre se lo debe escuchar, y la opinión del niño siempre debe ser tenida en especial consideración por parte de los magistrados, ya sea que ratifiquen o rechacen la medida que la autoridad administrativa ha tomado.

Debo decir también que los integrantes de las comisiones que trabajaron en este proyecto tenían una importante preocupación, cual era la de buscar algún mecanismo que dé garantías. El Poder Judicial no está estructurado ni tiene los mismos recursos en el interior de la Provincia que en la Capital, y sabemos que en la Capital hay jueces prevencionales y correccionales mientras que en muchas jurisdicciones del interior hay jueces que tienen ambas competencias, y en otras muchas jurisdicciones hay jueces que, además del viejo prevencional y correccional, tienen control, faltas y hasta electoral, lo que nos preocupaba porque entendíamos que realmente podía haber un desmedro en el tiempo que los jueces pueden dedicar, precisamente, a resolver las cuestiones que afectan específicamente a los menores.

En ese caso, señor presidente, con las modificaciones que se hicieron al artículo 68 y con la incorporación que se hizo al artículo 122, entendemos que damos garantía

suficiente para que los juzgados del interior que tienen más de una competencia puedan seguir brindando el mejor de los servicios y que las cuestiones de violencia familiar seguirán siendo competencia de los magistrados que hasta el día de la fecha lo son. Esto hasta tanto –como decíamos- avancemos en la implementación de esta ley.

Tengo la convicción, además, de que también hay que dar un debate en el marco del Poder Judicial porque la ley nacional establece que deben ser los jueces de familia quienes tengan competencia en la materia –concepto que nosotros compartimos.

En la Provincia de Córdoba está estructurada la justicia de menores y ésta ha sido la puerta para encaminarnos en este primer paso que estamos iniciando, pero seguramente deberemos marchar hacia la competencia otorgada a los jueces de familia.

El punto en el que no hemos podido coincidir es el “procedimiento penal juvenil”. Entendemos que esta ley representa la total adecuación al sistema que prevé la Ley 26.061, en donde el procedimiento penal juvenil no está contemplado. Si bien es cierto que el artículo 82 del proyecto de ley en tratamiento tuvo una modificación cuando se establecieron los objetivos del sistema penal juvenil, nosotros creemos, señor presidente, que el artículo 87 de esta ley es la ratificación al viejo sistema que definitivamente queremos abandonar, sistema por el cual la privación de la libertad de un menor se deba a cuestiones que no sean estrictamente por la comisión de un hecho delictivo, sino que se trate por cuestiones sociales, familiares o personales. El inciso d) del artículo 87 establece expresamente la posibilidad de que durante la investigación el juez pueda disponer provisoriamente por el interés del niño, niña y adolescente, su atención integral y excepcional en un establecimiento cuyo régimen incluya medidas que impidan la externación por su propia voluntad.

Señor presidente: todos los organismos internacionales que nos han visitado en este ámbito –salvo el Poder Judicial que sostiene esta tesitura-, el Defensor de los Derechos del Niño, la Universidad Nacional de Córdoba y Naciones Unidas sostienen, por unanimidad, que impedir la externación por su propia voluntad en estas condiciones es privación de la libertad. Nosotros creemos que aunque el sistema avanza con la creación de la figura del fiscal –como acá se dice-, pasando del sistema inquisitorio al sistema acusatorio, esta norma del artículo 87 no hace más que confirmar el viejo paradigma.

Lo que no se discutió en el Senado y en Diputados del Congreso de la Nación, señor presidente, es que el objeto de la nueva ley de responsabilidad penal juvenil es establecer la responsabilidad del niño al momento de la comisión del hecho, un hecho tipificado como delito; confirma la teoría de la responsabilidad y no de las condiciones socio-económicas, personales o socio-ambientales para tomar viejas medidas de carácter tutelar disfrazadas.

Por supuesto que, frente a la doctrina de la responsabilidad, si el sustento es la responsabilidad penal hay que darle el marco de garantía plena de derechos y deberes, como en cualquier proceso penal.

Señor presidente: la Corte Suprema de Justicia ha instado al Congreso de la Nación para que termine en este país lo que ella considera como la “hipocresía de la tutela”.

Con respecto a la ley que estamos debatiendo disiento, específicamente, con el contenido de las pautas del título “Régimen Penal Juvenil”, donde se otorga hasta dos años para su implementación. Habiendo un proyecto con media sanción en el Congreso de la Nación, por honestidad intelectual debemos decir que el proyecto no nos otorga certeza alguna.

Compartimos lo que sostiene García Méndez, un conocido profesional en la materia: “Confundir al niño-víctima o vulnerado en sus derechos, con el adolescente sujeto activo de una infracción penal y aplicar la misma solución punitiva para todas las situaciones, consistente en disponer discrecionalmente de las niñas, niños y adolescentes, cuando estuviesen material o moralmente abandonados, sin considerar la edad ...”. Señor presidente, bajo esta premisa no vamos a acompañar el título que hace referencia, precisamente, al régimen penal juvenil.

Queremos expresar preocupación por la figura del Consejo Consultivo. Sabemos que nuestra Provincia cuenta con un Consejo Provincial de Niñez y Familia y, en verdad, nos preocupa que se superpongan ambos organismos. Si bien entendemos que el Consejo Provincial de la Niñez tiene esencialmente la función de marco de concertación consultivo para poder desarrollar políticas públicas básicas universales, y el Consejo Consultivo que actualmente se crea tiene esencialmente que analizar la puesta en vigencia de la ley, la práctica de la ley, la ley en acción, ambos, de alguna manera, tienen como eje fundamental en la pirámide que están precedidos por la Secretaría; por eso, entendemos que hubiese sido mejor fusionarlos en un solo organismo y que en ese organismo, donde están representados todos los sectores, todos los niveles, todas las



instituciones, se puedan generar dos ámbitos específicos, uno que trabaje sobre políticas y el otro que haga el control de la política. Hubiésemos preferido que así ocurra porque tenemos miedo de que en la superposición haya inconvenientes. Esperamos que así no sea, pero nos preocupa, señor presidente.

Por último, con respecto a los recursos decimos que nos parece importante la incorporación de la intangibilidad porque la ley no la preveía en su proyecto originario, y también es importante la afectación específica.

Seguramente, en algún tiempo demandaremos -porque nos parece trascendente, si bien los programas están correctamente especificados y se determinan los importes de los mismos- la información suficiente para que se haga un desagregado de los subprogramas para tener una visión integral dentro de cada programa y que no solamente haya un monto o un recurso sino que podamos saber qué comprenden específicamente estos subprogramas.

Vamos a acompañar esta ley; compartimos y somos militantes por un sistema de protección integral. Sabemos que, seguramente, se puede mejorar mucho más y que además de las observaciones que se hicieron e incorporaron en el seno de la comisión hubiese sido bueno incorporar algunas más.

Ratificamos el pedido que hicimos al bloque de la mayoría, en el ámbito de la comisión, para que postergue para otra instancia, porque no tienen por qué aprobar en forma conjunta las normas referidas al nuevo Régimen Penal Juvenil, que no es otra cosa que ratificar el actual régimen con alguna mínima variante para seguir con lo mismo, señor presidente.

Muchas gracias.

**Sr. Presidente (Busso).**- Tiene la palabra el señor legislador Roberto Birri.

**Sr. Birri.**- Señor presidente: quiero sumarme a la bienvenida de la licenciada Raquel Krawchick, a su equipo de trabajo y, particularmente, a mi coterránea riocuartense Cristina Juárez.

Como primer punto, quiero expresar que si afirmo que estamos tratando el proyecto de ley -por ahora- más importante de esta gestión legislativa en estos casi cuatro años -al menos en lo que hace a la temática social e institucional de la Provincia de Córdoba- estoy prácticamente seguro de no equivocarme. La falta de adecuación de la legislación provincial a la Ley nacional 26.061 era una vieja deuda; una asignatura pendiente para aquellos que tenemos responsabilidades en la función pública para con el conjunto de los cordobeses.

Creo que, a pesar de algunos disensos que naturalmente existen cuando se trata de una normativa sensible, importante y compleja, está claro que la Legislatura hoy se pone a la altura de la circunstancia y la exigencia que este tiempo nos demanda.

También quiero rescatar -porque muchas veces cuestionamos el funcionamiento de las comisiones o el tratamiento que el oficialismo le da a la discusión de los temas importantes que la Provincia nos entrega para su debate y tratamiento legislativo- el ejercicio de participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil y el debate entre los legisladores que integran las distintas comisiones que se han abocado al tratamiento de este tema por casi 60 ó 90 días.

Voy a hacer un breve repaso de algunas cuestiones que nos parecen importantes tratando, en todo caso, de evitar repeticiones porque creo que ha sido bastante explícito el miembro informante del oficialismo como también quien me antecedió en el uso de la palabra, pero me parece que no puede faltar en el desarrollo, al menos en lo que tiene que ver con la posición del bloque del Frente Cívico y Social. Lo primero es decir que, efectivamente, en Córdoba, en el año 2007, se sancionó la Ley 9396, de adhesión a la ley nacional; y que un año después se creó, por Ley 9591, el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia. Si bien -y no por una mirada complaciente sino objetivamente- ello significó un paso adelante, la vigencia de esas leyes en paralelo con la Ley 9053, de Protección Judicial del Niño, cuyo contenido es hasta este momento -espero que dentro de un rato ya no- totalmente opuesto a la Ley nacional 26.061 y, fundamentalmente, a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, llevaba a que, en la práctica, la ley nacional no se pudiera aplicar, al menos en lo que tiene que ver en sus contenidos esenciales.

Sin haberse creado legislativamente el Sistema de Protección Integral, con la estructura administrativa y las articulaciones que él implica, y sosteniéndose la vigencia de una ley tutelar que ha respondido, hasta ahora, al paradigma anterior del Patronato del Menor, en Córdoba nos encontrábamos con una situación ambivalente, ambigua e, incluso, contradictoria que ha venido impidiendo hasta el momento el abordaje de la vulneración de los derechos de los niños y jóvenes a través de las medidas y acciones

que tienen previstas tanto la ley nacional como los tratados internacionales que regulan esta temática.

También creemos que flaco aporte hacía a esta ambivalencia, a esta ambigüedad y a estas contradicciones la participación del Tribunal Superior de Justicia que de manera contradictoria –como ya lo expresáramos y si la memoria no me es infiel– a lo que prescribían las normas mencionadas en los años 2009, primero, y 2010 después, dictó acordadas donde unilateralmente determinaba qué competencias le derivaba al Poder Ejecutivo provincial y qué competencias se seguía reservando en el ámbito de la Ley 9053 cuando, en realidad, la autoridad de aplicación de la ley es la Secretaría de Niñez y Adolescencia, dependiente del Poder Ejecutivo provincial.

Está claro que, por estos motivos, urgía –y así lo entendimos con diversos legisladores y organizaciones de la sociedad civil, allá por el mes mayo del año pasado– la derogación de la Ley 9053 en su aspecto prevencional, ya que su vigencia implicaba la continuidad del abordaje judicial de los problemas de la niñez de conformidad a la ley nacional, lo que significaba, en la práctica, que los conflictos sociales en los que se encuentran los niños y las familias más vulnerables se deriven, hasta el día de hoy, a un juez de menores quien, desde un poder discrecional, decide unilateralmente qué medidas tutelares impone, lo que en la mayoría de los casos consiste en la separación del niño de su familia y su posterior institucionalización. Huelga decir que en este proceder subyace la vieja mirada centrada en una actividad judicial decidida a controlar, informar, diagnosticar, e indicar tratamientos, antes que la de restituir derechos, lo que últimamente hemos venido planteando como la expresión más clara de la subsistencia del viejo paradigma. Cuando hablamos de paradigmas, quienes hemos tenido inquietudes sociales a lo largo de nuestra vida personal y, en algún momento de nuestra actividad política, como funcionarios públicos, siempre traemos a colación la vieja definición de Thomas Kuhn: “considero los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas, que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica”.

La ley nacional vigente es clara al establecer que el modo de restituir los derechos vulnerados de la infancia es a través de políticas públicas integrales y medidas de protección de derechos fijadas por la administración pública, que corresponde que sólo sean controladas por el Poder Judicial cuando exista oposición por parte de la familia del niño o cuando implique la separación de éste de su grupo familiar. La ley nacional no sólo nos propone la articulación de la sociedad civil, la familia y el Estado en todo lo que atañe a la vida de niños y adolescentes, sino también la participación de estos últimos en las decisiones sobre las políticas públicas que los afecten.

Por estos motivos, señor presidente, ratificamos lo que en aquel momento consideramos –vemos con beneplácito, por supuesto, que el proyecto 6484 también contemple este aspecto–, en el sentido que era fundamental adecuar la ley provincial a los postulados de la ley nacional, de manera tal que no siguieran existiendo esas ambigüedades y contradicciones, que traían aparejadas confusiones no sólo en el ámbito de la aplicación de la ley sino también en el de la familia y de los distintos operadores del sistema, sin que se definieran claramente cuáles eran las responsabilidades que les cabían a cada una de las jurisdicciones del Estado.

Por medio del presente proyecto de ley, se proponen órganos administrativos descentralizados para fijar las políticas públicas con una real articulación con los diversos actores que integran la sociedad civil, a la vez que regionaliza la mirada de nuestra niñez, teniendo en cuenta las diferentes demandas y realidades que existen en el interior provincial. Por eso, se estipula la creación de organismos, instancias y formas de protección y participación en los derechos de nuestros niños.

Uno de los legisladores que me precedió en el uso de la palabra aludió a Emilio García Méndez –indudable referente nacional respecto de las realidades vinculadas con las políticas sobre la niñez, por lo que me parece importante citarlo sin la menor ambigüedad–, quien, respecto de la precitada ley nacional, expresó: “La Ley 26.061 constituye la innovación jurídica más importante en materia de infancia, por lo menos desde el retorno de la democracia hasta hoy. Tanto es así que, si la conciencia jurídica media se encontraba antes de la reforma muy por delante de la vergonzosa Ley Agote, de 1919, la profundidad de los cambios que encierra la nueva ley ha colocado a la conciencia jurídica –ini hablemos de las prácticas!– muy por detrás de los desafíos que encierra la Ley 26.061”. En tal sentido, debo decir que ratifico cada uno de estos términos, que hago extensivos al tratamiento de este tema en el ámbito provincial, haciendo abstracción, por supuesto, del Capítulo VII –al que me referiré brevemente–, con cuya incorporación en este texto normativo naturalmente no coincidimos.

En este contexto y por muchísimas más motivaciones, en el mes de mayo y en el marco de la organización de unas jornadas nacionales que se llevaron a cabo en nuestra ciudad, presentamos el proyecto 5351, que no sólo fue con el aporte de legisladores de distintos bloques de esta Unicameral sino también fruto de los aportes de distintos sectores involucrados en la problemática, especialmente del denominado Colectivo Cordobés por los Derechos del Niño, conformado por distintas organizaciones de la sociedad civil como la CECOPAR, CEAR, CERVIPRO, CENAP, La Minga, Programa del Sol, Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, foros de ONG de promoción y desarrollo, entre otras, que legitiman más aún el tratamiento de estos proyectos y muchas de las cuales han estado colaborando con las distintas comisiones de trabajo, particularmente las presididas por el legislador Alesandri, prácticamente hasta el mediodía de hoy, en el cierre del debate parlamentario en comisión.

A partir de ahí, creemos y estamos convencidos de que tanto la Ley nacional 26.061 como la iniciativa que ahora nos ocupa van en la misma línea tanto de la convención como de los acuerdos internacionales precitados, razón por la cual adelanto la opinión que el bloque del Frente Cívico y Social va a solicitar al resto de los legisladores el voto favorable en general al proyecto de ley en tratamiento. Proyecto con el cual tenemos, más que discrepancias, diría algunas objeciones que puntualmente hemos referido a lo largo del debate en las comisiones, y quizás tengan que ver con el ámbito de competencia del Poder Judicial cuando, al menos en lo referido a la Primera Circunscripción Judicial, extrae la competencia de los Juzgados de Familia en violencia familiar para pasarla a los nuevos juzgados, antes de Menores, que se llamarán de Niñez, Juventud y Violencia Familiar, porque en alguna medida tememos que esto pueda implicar la continuidad de la judicialización en el tema de niñez bajo los nombres de violencia, maltrato, falta de atención de los padres, etcétera.

Tampoco nos parece conveniente ni adecuado que al control de la legalidad de las medidas excepcionales lo hagan los Jueces de Menores Prevencionales y no los Jueces de Familia como plantea la Ley 26.061, y que los Jueces de Menores Prevencionales, cuando quizás el estadio ideal sería que se transformen en Jueces de Familia, sólo cambien de nombre y se mantengan dos tipos de juzgados con diferentes competencias, lo cual –advierto– tiene un efecto que va mucho más allá de la organización del Poder Judicial, porque objetivamente, por un lado, vamos a tener un Juzgado de Familia para cuestiones vinculadas a las guardas, los divorcios, los juicios de adopción, de patria potestad, y otro juzgado, también con competencia en temáticas de familia, para los problemas de violencia, malos tratos, control de legalidad de medidas excepcionales por lo que, de esta manera, sigue planteándose la exteriorización de dos infancias diferentes: la pobre, con más derechos vulnerados, y la otra.

Está claro, y vale la pena recordarlo aunque sea en forma repetitiva, que lo que plantea el nuevo paradigma –claramente establecido en la ley nacional– y el enfoque de derechos es que haya un solo tipo de juzgados: los Juzgados de Familia que intervengan cuando corresponde sobre una misma infancia.

Hecha esta salvedad, quizás lo que causa una mácula al tratamiento y segura aprobación de este texto normativo tiene que ver con la existencia, en definitiva, de consideraciones referidas a la existencia del Capítulo VII, vinculado a los jóvenes en conflicto con la ley penal.

Creemos que hay una clara contradicción con la Ley 26.061, que no incluye la parte penal juvenil, que está en actual debate en el Congreso de la Nación –como aquí se expresó– y de la que existe media sanción por el Senado, cuyo contenido es distinto al planteado aquí; que no se integran en el contenido del proyecto principios y garantías procesales fundamentales como el de la legalidad, lesividad, presunción de inocencia, libertad, dignidad personal, derecho de defensa, mínima intervención, plazo razonable, doble instancia y control judicial suficiente. Asimismo, plantea el sometimiento a proceso penal de los menores no imputables, no se determinan claramente sanciones penales alternativas, la privación de libertad ni medios alternativos de solución de conflictos como mediación, citación, suspensión del juicio a prueba; no se garantiza la defensa técnica del joven sospechoso de ser actor de un delito en todas las etapas del proceso; no se regula en absoluto el modo de ejecución de las sanciones privativas de la libertad ni de los derechos y garantías que deben respetarse.

En fin, queda demostrado, con la incorporación de este –diría yo “desafortunado”– Capítulo VII, la existencia de una incompatibilidad manifiesta entre una parte del proyecto de ley, que responde al paradigma de la protección de los derechos del niño, con ese Capítulo VII, que responde en parte al viejo paradigma contrario al principio de

responsabilidad penal juvenil que sigue considerando a los niños y jóvenes como personas sujetas a tutela por un tiempo indeterminado.

Por otro lado, hubo ausencia de un necesario debate independiente de un proyecto de ley que modifique el actual procedimiento correccional en Córdoba, que tenga fundamentalmente en cuenta los principios de un sistema de responsabilidad penal juvenil conforme a los contenidos que hoy están en plena discusión en el Congreso de la Nación, y que no tengo dudas que va a incidir, en grado sumo, en los procedimientos penales provinciales y que seguramente en un rato se terminará aprobando.

La verdad es que esa parte del texto normativo no solamente ofrece una mirada distinta sino que parece haber estado escrito por otra mano, como si en este Poder Legislativo hubiera un legislador, el legislador número 71, no visible, casi un fantasma, que en algún lugar hizo un trazo distinto pero con la suficiente fortaleza o influencia en el poder político como para que no pudiéramos tocar una coma en ese desafortunado capítulo, y la verdad es que es una lástima.

Hoy, en nuestra reunión de bloque, cuando junto con la legisladora Esmeralda Rodríguez informábamos al resto de nuestros pares del Frente Cívico y Social las bondades de este proyecto y por qué recomendábamos a nuestro bloque apoyarlo, más allá de ser autor de uno de los dos proyectos que hoy se compatibilizan, decíamos que era un muy buen producto legislativo, que era un proyecto fundamental en esta etapa de la Legislatura de Córdoba pero que lamentablemente tenía una mácula, una mancha, como si un artista terminando su obra de arte salpicara la tela con un manchón de tinta.

Está claro que el árbol no nos va a tapar el bosque, pero no quiero dejar de señalar el extraño hábito que tienen el Gobierno del contador Schiaretto y el oficialismo legislativo, este extraño comportamiento de arruinar las cosas que hace bien, encima que son muy pocas.

Tengo varios casos para recordar porque no son muchas las cosas que hicieron bien, por ejemplo, el proyecto de reforma política. Una reforma política superadora, innovadora, que vamos a poner en marcha el 7 de agosto, pero que, a último momento, un sticker o la suspensión de la parte vinculada al financiamiento privado, terminó poniéndole una mácula a un avance legislativo indudable.

O cuando tratamos la Ley de Bosques, oportunidad en que el Gobernador hizo trabajar a la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos durante un año y medio, la cual hizo un trabajo sensacional pero que a último momento se cambió.

También está la Ley de Educación, una ley superadora que tuvo un pequeño defecto, una mácula: se olvidaron de consultar a los estudiantes, lo que produjo un enorme rechazo social.

Con esta iniciativa pasa casi lo mismo. Se trata de un proyecto sumamente superador, que pone a Córdoba a la altura de las circunstancias, pero donde alguien, en forma traviesa, le puso la mancha de tinta para salpicar la tela.

Sin embargo, como decíamos hace un rato, el árbol no nos va a tapar el bosque, vamos a suscribir con las dos manos la parte general del proyecto en tratamiento y le pedimos al Secretario que desde ya incorpore el voto negativo en particular del Capítulo VII; porque, en definitiva, al igual que el amigo García Méndez, se trata de uno de los proyectos que más innovación va a traer, al menos desde el '83 a la fecha, y tal vez más trascendente en materia de políticas de la niñez y de la infancia.

Muchas gracias.

**Sr. Presidente (Busso).**- Señor legislador, oportunamente, en el momento de la votación, se tendrá en cuenta su observación.

Tiene la palabra la señora legisladora Silvia Rivero.

**Sra. Rivero.**- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural estamos en condiciones de decir que estamos comenzando un nuevo capítulo en materia de prevención de la vulnerabilidad de los derechos del niño, a partir de la sanción de esta ley.

Este paso que hoy se da, comenzó de manera visible en el mundo allá por el año 1979, con la Declaración de los Derechos del Niño. Digo de manera visible porque para llegar a ese hito del año '79 numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales debieron antes luchar, cada una en sus ámbitos y con sus herramientas, para llegar finalmente a esbozar esa declaración.

En nuestro país, esa Declaración fue incorporada 15 años después, con la reforma constitucional de 1994, en el artículo 75, donde se le dio rango constitucional, entre otras, a esta Declaración de los Derechos del Niño.

Entre los años 1979 y 1994, con esa incorporación ya circumscripita al contexto de nuestro país, siguió habiendo un colectivo numerosísimo de personas y organizaciones

luchando por esa incorporación con rango constitucional, tratando por todos los medios de que esa declaración tuviera una bajada a tierra a través de una norma de fondo como es la Constitución nacional.

Sin embargo, a partir de esa incorporación y de esa toma de conciencia del mandato supremo del país, como es la Constitución nacional, debieron pasar alrededor de once años para que en año 2005 se sancionara la Ley 26.061.

Entre aquella bajada constitucional de la Declaración de los Derechos del Niño y la sanción de la Ley nacional 26.061, también existieron numerosas organizaciones de la sociedad civil y distintos organismos gubernamentales trabajando en la materia para que esa declaración, con rango constitucional, pasara a ser parte de una ley que permitiera que instituciones de la Nación se adecuara a ese marco constitucional.

Pensar que desde el año 2005 a hoy, año 2011, es decir, cinco años y algo más después de aquella sanción, después de aquel abrazo simbólico al Congreso de la Nación de las organizaciones que defendían los derechos del niño en octubre de 2005, que significó la culminación de esos dos procesos previos, uno a nivel mundial en la declaración del año 1979 y otro a nivel nacional para la sanción de la Ley 26.061, hoy finalmente le estamos dando una bajada importante, trascendente en nuestra Provincia, tanto de la ley nacional, de la norma de la Constitución nacional como a la Declaración Internacional de los Derechos del Niño.

Por eso es importantísimo el tratamiento de hoy; por eso no podemos permitir que se cuelen ejes de campañas, chicanas groseras. Hoy hay que estar a la altura de las circunstancias porque se está dando un paso fundamental en la promoción y protección de los derechos de los niños.

Con la sanción de esta ley se va a otorgar un marco jurídico a los esfuerzos de muchísimas organizaciones no gubernamentales, pero también desde los propios órganos de Gobierno -como el hoy presente, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia- ya vienen adecuando desde el proceso de regionalización la factibilidad para que esta ley ni bien se publique en el Boletín Oficial sea letra activa; vienen empujándonos desde la acción para que sancionemos esta ley y es bueno reconocerlo, ya que los hechos nos vienen llevando por delante para que finalmente arribemos a la sanción de la ley.

Se hace impostergable la sanción de esta ley, es por eso que desde este bloque la consideramos tan importante, queriendo remarcar que hoy estamos dando un marco legal para la institucionalización de derechos tan importantes como los que se enuncian en el Capítulo II: el derecho a la vida, el derecho a la dignidad y a la integridad personal, el derecho a la convivencia familiar y comunitaria, el derecho a la documentación, el derecho a la identidad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, la gratuidad de la educación, la prohibición de discriminar por estado de embarazo, maternidad y paternidad. Las medidas de protección a la maternidad y paternidad, el derecho a la libertad, el derecho al descanso, recreación, deporte y el juego, el derecho al ambiente saludable, el derecho a la dignidad, el derecho a la libre asociación, el derecho a opinar y a ser oído, el derecho al trabajo de los adolescentes en el marco legal y a la protección contra la explotación laboral y el derecho a la seguridad social.

Para ser completos, me atrevo a decir que sólo le faltaría el derecho a la formulación del proyecto de vida. Si bien no está en la Constitución ni en la Declaración de los Derechos del Niño, desde 1979 hasta hoy va de suyo y cae de maduro que debemos asumir que desde niño hay que fomentar la formulación del proyecto de vida, por más que parezca una barbaridad. No podemos esperar que un niño llegue a los 18 años para que se dé cuenta que tiene que ejercer un proyecto de vida. Debe haber ido formulándolo y siendo respetado en esa formulación, para que pueda ganar confianza en sí mismo y la madurez en las etapas necesarias, sin apuros de último momento; para que pueda ir cimentando sus expectativas en la formulación de ese derecho al proyecto de vida.

Es un desafío que tenemos de aquí para adelante porque, precisamente, esto es un proceso, y las declaraciones, las Constituciones y las leyes nacionales y provinciales son etapas de ese proceso que vamos viviendo.

En ese marco, por supuesto que desde este bloque estamos convencidos de que hay que acompañar y festejar este proyecto. Hay que ponerlo no en letra muerta ni en letra expuesta, sino que hay que ponerlo en funcionamiento, darle fuerza, impulso y publicidad. En ese sentido, es importantísimo el deber de comunicar consignado en el artículo 32 de la ley. En el mencionado artículo se establece que los miembros de los establecimientos educativos, de salud, públicos o privados, los agentes y funcionarios

públicos que tuvieran conocimiento de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes deben comunicar esta circunstancia a la autoridad administrativa.

Todo ciudadano debe comunicar las irregularidades a la autoridad administrativa. Todos los ciudadanos, ciudadanas, organizaciones, gubernamentales o no deben comunicar estas vulneraciones, porque esto necesita del soporte de la información para no convertirse sólo en una enunciación.

Seguramente –para no sentirnos luego frustrados por las circunstancias- habrá una mayor cantidad de casos denunciados de vulneración de niños, niñas y adolescentes, tal como ocurrió con violencia familiar. No en vano hoy están saturados los Juzgados que atienden estos últimos casos, casi imposibilitados de actuar en los tiempos que la ley exige. Es por ello que entendemos –a pesar de que lo observamos como un aspecto que no debiera ser- que se incluya un Capítulo como el VII, donde se incluye un Régimen Penal Juvenil. Aunque no debiera incluirse en esta misma ley, sin embargo, lo entendemos en términos de premura y de necesaria preparación para esa ola de crecimiento de casos de vulneración de derechos que sabemos van a ser denunciados porque existen, pero hay ciudadanos y ciudadanas que no saben que tienen el deber de informar. A partir de ahora va a ser ley, y a partir de su sanción vamos a pedir al Ejecutivo que le dé amplia publicidad al artículo 32, porque es vital para que no sea inequitativa su aplicación.

En cuanto a los organismos que se prevén -como dije- ya está avanzado el esquema de regionalización desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia; seguramente, van a seguir regionalizando, desagregando y descentralizando para dar una mayor celeridad al tratamiento de las causas y una mejor respuesta a la sociedad.

También nos parece importante la Comisión Interministerial porque en estos temas donde el derecho vulnerado aparece como segmentado en actuaciones de distintos ministerios se hace vital volver a la centralidad del intercambio, a trabajar interdisciplinariamente e interministerialmente en la atención de los distintos casos. En ese sentido, nos parece que esta comisión va a cobrar importancia para la adecuada atención y prevención de la vulneración de derechos.

En esta ley tenemos establecidas tres medidas, que no voy a repetir porque muy bien las mencionó el miembro informante y también las desarrolló la legisladora Dressino, en todo caso, voy a remitirme al desagregado que ellos hicieron de estos tres niveles de atención para la aplicación del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Respecto del Capítulo VII, si bien pensamos que no debería estar incluido en esta ley y que le faltó profundizar o encarar la responsabilidad penal juvenil de quienes hayan cometido faltas o delitos, vamos a remitirnos a la versión taquigráfica de la Comisión de Solidaridad cuando estuvieron presentes miembros del Tribunal Superior de Justicia, quienes expresaron la necesidad imperiosa y premura en la aplicación de este Capítulo VII, para dar una respuesta suficiente a los casos que llegaran a instancia judicial y dar un soporte al tercer nivel para que fuera efectivo.

Coincidimos con la legisladora Dressino en que cuando en las normas transitorias se deja en suspenso por un año –más que dejar en suspenso se le da un año para la aplicación a este Capítulo VII-, en realidad, este Capítulo prácticamente pasa a ser íntegro una norma transitoria que se irá adecuando, en la medida de las posibilidades de la estructura del Poder Judicial y de los distintos juzgados de nuestra Provincia.

En ese sentido, queremos destacar que tenemos un desafío, y vamos a tener que estar a la altura de esas circunstancias, que es la readecuación del sistema judicial a los efectos de poder dar efectivo cumplimiento a las normas, una estructura en materia de disponibilidad y distribución de juzgados que pueda dar efectiva celeridad al cumplimiento de los plazos que están establecidos en las distintas normas, incluida ésta que hoy estamos tratando.

Desde el año 2001, cuando se aprobó en esta Legislatura la Ley de Mediación, ya se hablaba de la necesidad de agilizar el tratamiento de los diversos temas judicializados en la órbita del Poder Judicial y que la mediación venía a poner, en ese sentido, una instancia para acelerar esos trámites. Desde 2001 está pendiente la recreación y la creación de nuevos juzgados y el redimensionamiento del Poder Judicial, de acuerdo a la cantidad de población, su distribución y las estadísticas de casos que se manejan en la Justicia.

Si íbamos a hacer esa observación, era una observación a nosotros mismos: como Poder Legislativo tenemos que estar a la altura de esas circunstancias; es un desafío que se nos impone, no podemos mirar para otro lado. Este capítulo está incluido –casi diría indebidamente- en este texto legal, porque se requiere por una cuestión de urgencia, entonces, debemos estar a la altura de las circunstancias y ponernos a repensar el

sistema judicial para que dé una efectiva respuesta y haya una igualdad de acceso a la justicia por parte de todos los ciudadanos de la Provincia de Córdoba.

Dicho esto, y para no abundar en temas que ya han sido tratados, vamos a acompañar gustosos con el voto de este bloque de Concertación Plural el proyecto en tratamiento, y solicitamos sean tomadas las observaciones para que luego podamos ponernos a pensar y formular debidamente las leyes que hagan falta a los efectos de readecuar el sistema jurídico.

Gracias, señor presidente.

**Sr. Presidente (Busso).**- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.

**Sr. Maiocco.**- Señor presidente: con referencia a esta ley sostuvimos, desde el principio, que este proyecto claramente pudo ser dividido en dos partes ya que cada una responde a paradigmas bien definidos.

Una primera parte del proyecto tiene por objeto la promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la Provincia de Córdoba, reconocidas por la Ley nacional 26.061. La segunda parte, referida al procedimiento penal juvenil, responde a un paradigma totalmente distinto y superado, ya que se basa en el control social y está dentro del Patronato de Menores.

No se puede estar en disidencia en lo que respecta a la primera parte del proyecto legislativo; distinto es el caso de la segunda parte, en la cual tenemos diferencias que expondremos.

Estamos de acuerdo con la primera parte por cuanto se está adecuando nuestra legislación provincial a las convenciones internacionales y a la legislación nacional en la materia. No obstante, debemos poner de resalto algunas diferencias con el proyecto ya que esas cuestiones deberían haber sido expresamente contempladas. Tal el caso del artículo 17 -la obligación de garantizar el derecho a la salud-, que expresamente se debió establecer la garantía a la salud reproductiva, para no dejar a la conciencia del médico el asegurarla. Fíjese, señor presidente, que a nivel nacional se dictó un decreto salvando las cuestiones de conciencia.

En el artículo 21 se debió contemplar en forma expresa la mención que efectuó el propio doctor David, Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, referida a la protección del embarazo y del parto, a partir de fallos jurisprudenciales y de la legislación nacional, precisamente de la Ley 26.472 que amplía los alcances de la Ley 24.660. Nos estamos refiriendo específicamente a la prisión domiciliaria de la madre de un niño menor de 5 años o de una persona con discapacidad a su cargo.

También nos hubiera gustado darle mayor participación a los municipios en los espacios de concertación de políticas públicas, como el caso del Consejo Provincial de la Niñez, mayor participación y articulación a los municipios en la ejecución de las políticas de la infancia con las unidades de desarrollo regional y -a nuestro criterio- en el proyecto debió haberse establecido expresamente que debe haber por lo menos una unidad de desarrollo regional por cada departamento de la Provincia, hoy sólo hay dos.

Sin perjuicio de lo expuesto, por honestidad intelectual debemos decir que al proyecto se incorporaron partidas presupuestarias y la intangibilidad de los recursos; además, vemos con agrado que se ha salvado la difícil situación de los jueces del interior de la Provincia.

Respecto a la segunda parte del proyecto, que se refiere al Procedimiento Penal Juvenil, en el Título Segundo, a partir del artículo 82, estamos en desacuerdo -y lo dijimos desde un primer momento- en que se trate en el mismo proyecto legislativo con la promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Provincia de Córdoba, ya que -como dijimos- ambos parten de paradigmas distintos. El procedimiento penal juvenil responde al paradigma de control social y de tutela de menores, que era el que fundaba el Patronato de Menores.

Entendemos, señor presidente, que el proyecto debió haberse desdoblado en dos: un proyecto referido a la promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y otro proyecto que regule el procedimiento penal juvenil.

Además, estamos en desacuerdo con que se trate el procedimiento penal juvenil, por cuanto actualmente en el Congreso de la Nación está en tratamiento un proyecto de procedimiento penal juvenil, que ya tiene media sanción -por unanimidad- del Senado y que hoy está siendo tratado en Diputados.

No coincidimos con que este proyecto sea para la transición hasta tanto se sancione a nivel nacional la ley, porque si así fuera no se otorgaría al Poder Judicial -en el artículo 119- un plazo de dos años para la instrumentación. Si algo es transitorio es para que sea aplicado y para que rija de inmediato, y no con ese plazo que -a nuestro criterio- es excesivo. Fíjense que en este sentido el propio doctor Héctor David expresó claramente que era un error sancionar un procedimiento penal juvenil cuando en la

Nación está en tratamiento un proyecto sobre la misma materia, e incluso manifestó que era un desacierto otorgarle dos años al Poder Judicial porque ya se le había dado un plazo para la adecuación de la estructura judicial, y no la había efectuado hasta el presente.

Pero, señor presidente, para ser honestos y reconociendo el trabajo que se hizo en las comisiones y lo que se discutió, reconociendo también la voluntad que hubo en su momento de prorrogar por una semana más para que se pudiera seguir discutiendo el proyecto, y más allá de que en algunos puntos podemos no estar de acuerdo y para no abundar, porque quienes me precedieron en el uso de la palabra han explicado sobradamente el proyecto, debo decir que creemos es un avance en la materia y, por lo tanto, adelanto el voto afirmativo del bloque de la Unión Vecinal Federal.

Gracias, señor presidente.

**Sr. Presidente (Busso).**- Tiene la palabra el legislador Ruiz.

**Sr. Ruiz.**- Señor presidente: en el mismo sentido que varios –o todos- los legisladores expresaron su acompañamiento al proyecto de ley que establece el Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba, quiero destacar el proyecto, como lo han hecho otros legisladores, diciendo que se trata de una de las leyes más importante tratadas por esta Legislatura; fundamentalmente este proyecto nos permite pasar del paradigma de la tutela al paradigma de la protección.

Nos comprometemos con este proyecto porque somos firmantes con otros legisladores del proyecto 5351, que se ha unificado en el tratamiento legislativo con el presentado por el Poder Ejecutivo provincial.

Asimismo, como lo han hecho otros legisladores, queremos destacar el trabajo en comisión y la actitud de la presidencia de la comisión –legislador Alesandri- y de todos los demás integrantes en el sentido que se ha trabajado muy bien y que ha habido una gran apertura para escuchar y para prorrogar el tratamiento del tema, lo que demuestra una voluntad de trabajo conjunto por parte de esta Legislatura.

No queremos reiterar todas las consideraciones vertidas por el legislador Birri y por la legisladora Dressino. Ésta última ha destacado la estructura y el objeto de la ley, y el sistema de derechos y garantías para los niños. Creemos que corresponderá al Estado provincial el papel de llevar adelante las políticas públicas que permitan que los niños no sólo sean sujetos de derechos civiles sino fundamentalmente sujetos de derechos sociales. Esta es una tarea para toda la Provincia, para todos los ciudadanos, destinada a los niños, niñas y adolescentes, a fin de que podamos construir una ciudadanía social en la Provincia de Córdoba, lo cual significa darles prioridad a los más chicos; en ese sentido está el compromiso por parte de esta Legislatura.

Creemos que el proyecto es un avance y que, si bien hay aspectos que vamos a cuestionar o a señalar con preocupación, estamos en una transición de un sistema o un paradigma a otro.

Vamos a acompañar en general el proyecto pero, como lo han señalado otros legisladores, no vamos a votar el procedimiento penal juvenil. Vamos a destacar la participación y la voluntad que hubo en el tratamiento de este tema por parte del presidente de la comisión, lo que se vio claramente reflejado en el Colectivo integrado por las ONG CEAR, CECOPAL, CERVIPRO, CENAP, Programa del Sol, La Minga y la Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, a quienes agradecemos su colaboración en los proyectos que hemos presentado.

La Ley 26.061 no incluye el procedimiento penal juvenil; como aquí se dijo, está actualmente en debate en el Congreso de la Nación y tiene media sanción del Senado. El contenido de la parte que está hoy en el despacho de comisión que tiene que ver con el procedimiento penal juvenil es contrario a lo que plantea la Convención de los Derechos del Niño y las reglas internacionales. Esto sin perjuicio de alguna atenuación que pueda producirse por la figura del fiscal penal juvenil, pero de todas maneras nosotros creemos que esta parte de la ley tendría que tener otro tratamiento. Señalan ellos que, a diferencia del proyecto del Poder Ejecutivo provincial, el proyecto de ley nacional de régimen aplicable a las personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal establece, en su artículo 1º, que “la presente ley tiene por objeto establecer la responsabilidad de las personas menores de 18 años de edad y menores de 14 años – esto es lo que tiene media sanción- al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito de acción pública en el Código Penal y leyes especiales”. Es decir, se somete a juicio al joven menor de 18 años por haber cometido un delito y no por analizar su personalidad; es lo que se conoce como derecho penal de autor.



En otro documento ellos señalan la existencia de incompatibilidad manifiesta entre una parte del proyecto de ley que responde al paradigma de la protección de los derechos del niño, que está en el punto primero; aquí se señala el artículo 75, que después ha sido reformulado en el despacho, hasta el artículo 81, y del 82 en adelante, hasta el 109, corresponde al paradigma tutelar contrario al principio de responsabilidad penal juvenil, que sigue considerando a los niños como personas sujetas a condena por tiempo indeterminado, y que plantea como objetivo de los procesos penales la asistencia y protección a través de la privación de la libertad.

En el punto b), el Colectivo señala el necesario despacho independiente de un proyecto de ley que modifique el actual procedimiento correccional en Córdoba, que tenga en cuenta los principios de un sistema de responsabilidad penal juvenil conforme a los contenidos que hoy están en pleno debate en el Congreso de la Nación que, indefectiblemente, influirán en los procedimientos penales provinciales.

Finalmente, sostienen la separación del Capítulo VI de este proyecto de ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, reservado para el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, nos sumamos a la interpretación que hizo el legislador Birri acerca del "legislador número 71". Decimos esto porque en el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo provincial, en las tres páginas en las que está desarrollada y fundamentada la nota de elevación del proyecto de ley, no hay ningún párrafo sobre la Ley de Procedimiento Penal Juvenil, y esto llama la atención. Por eso, como el Poder Ejecutivo no asume esto en su argumentación, en su nota de elevación, y si no está en la mayoría de las voluntades de los legisladores –sabemos que a muchos les cuesta aprobar esta ley así como está en tratamiento, sin separar el procedimiento penal juvenil-, adherimos a la interpretación que hizo el legislador Birri y pedimos que reflexionemos en el tratamiento de futuras leyes en este recinto.

Finalmente, señor presidente, quiero cerrar esta argumentación a favor del proyecto en general; en particular, vamos a votar en contra de este título.

Quiero leer una parte del Preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, que dice: "Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad".

Muchas gracias.

**Sr. Presidente (Busso).**- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.

**Sra. Genesio de Stabio.**- Gracias, señor presidente.

Porque entendemos que ya ha sido suficientemente debatido el tema, tanto en el recinto como en las comisiones, destacamos la preferencia de 7 días que se ha dado para continuar con el debate y haremos una breve fundamentación.

Desde el bloque del Vecinalismo Independiente, vemos con agrado y gran expectativa las modificaciones legislativas que se introducen con relación a la promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, incorporadas mediante el proyecto de ley 6484/E/10 y compatibilizado, en su mayor parte, con el proyecto de ley 5351/L/10.

Entendemos, por lo que hemos escuchado, que se ha logrado un consenso casi general con relación a la necesidad de adecuar la normativa provincial a los principios establecidos en la Convención sobre Derechos del Niño, la Ley nacional Nº 26.061 y su Decreto Reglamentario Nº 415/06, que son de aplicación obligatoria en la República Argentina.

En este marco, consideramos que es un progreso la derogación de la Ley 9053 y las modificaciones realizadas a la Ley 9396.

Consideramos acertada e importante la incorporación de nuevos roles y funciones de los organismos administrativos relacionados con la promoción y protección de los derechos de los niños, los que entendemos gozarán de mejores estructuras y recursos humanos interdisciplinarios para atender las necesidades y garantizar el goce de los derechos de los niños, circunscribiendo al Poder Judicial el control de legalidad de las medidas excepcionales adoptadas por la administración con tal fin, a través de la competencia asignada al Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar.

Aplaudimos, en este sentido, el cambio de paradigma adoptado siguiendo la doctrina de la protección integral de los niños, abandonando los institutos propios del ya derogado Patronato de Menores logrando así, en gran parte, la desjudicialización de los niños que en muchos casos ni siquiera se encuentran en conflicto con la ley penal.

Pero a pesar de lo expuesto, compartimos las observaciones realizadas por los pares con relación a la derogación de la Ley 9053, Régimen Judicial del Niño y el Adolescente, en la parte que regula el procedimiento correccional, que hasta hoy tiene por objeto la protección y asistencia de los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, siendo reemplazada por el Procedimiento Penal Juvenil contemplado en el Título VII del proyecto que estamos analizando.

En este sentido, creemos que es inoportuno agregar el referido Título ya que se encuentra en tratamiento –como también se dijo oportunamente- un proyecto de ley nacional que modificaría el Régimen Penal Juvenil, por lo que estimamos conveniente esperar a que esto ocurra para luego modificar y adecuar el procedimiento judicial. En base a estos argumentos no acompañamos este Título VII.

A pesar de ello, creemos que con el resto del proyecto nos encontramos frente a un importante avance legislativo con la sanción del proyecto de ley 6484/E/10 y, por lo tanto, votamos la aprobación de los demás capítulos.

Muchas gracias.

**Sr. Presidente (Busso).**- Tiene la palabra la señora legisladora Nadia Fernández.

**Sra. Fernández.**- Señor presidente: en principio, la idea es ir al grano y centrarnos en algunas cosas que han hecho un poco de ruido en este proyecto.

Debo decir que se ha venido amasando institucionalmente una realidad como para llegar a este proyecto de ley que hoy está en tratamiento. Seguramente es perfectible – como todo proyecto-, por eso creo que hay que limar y perfeccionarlo.

Pero quiero aclarar que tampoco es tan fácil sacar de un paradigma a un Estado, a las instituciones y a la sociedad; ese es un proceso cultural que se irá dando con el tiempo. Pero si todavía no se ha librado una batalla cultural anclada en la teoría de la defensa social donde “si sos morocho o si sos pobre ó si sos adolescente entre los 12 y 18 años te convertís en un ser peligroso”, francamente, va a ser muy difícil alcanzar, desde este Poder Legislativo junto con los otros Poderes, una legislación adecuada y profundamente constitucional y garantista.

Me voy a referir a algunos artículos –rápidamente- sabiendo que es nuestra obligación armonizar lo máximo posible nuestra legislación provincial al Derecho Internacional y a la Ley 26.061 y, generalmente, en estos proyectos –en la parte declarativa- todos estamos de acuerdo, oficialistas y opositores.

Pero yendo concretamente al asunto y, puntualmente, a algunos artículos, tomo por ejemplo aquel que titula respecto del Juez Penal Juvenil, que más precisamente, en uno de sus incisos –creo que es el d)- se refiere a los menores de 16 años, que deben ser resocializados, reinsertados, reeducados y asistidos con tratamiento en casos de enfermedad o adicciones. Hay que aclarar que estas medidas –y no está de más decirlo- bajo ningún punto de vista hoy pueden ser consideradas como retributivas porque, en definitiva, la retribución o el resarcimiento hace a la esencia de la pena; y tratándose de menores de 16 años, están fuera de la facultad punitiva que pueda tener el Estado. Cualquier medida de protección que se adoptare sólo debe aplicarse como consecuencia de la comisión de un delito y nunca por situaciones del niño, porque, si no, caemos en esto que es tan común –y que muchos recién expresaron- de confundir el derecho penal de autor y el derecho penal de acto, error que está muy de moda, incluso en muchos dirigentes políticos que quieren candidatearse a Gobernador por la Provincia de Buenos Aires, a Jefe de Gobierno Porteño y demás. Aunque sean inimputables es indispensable, antes de tomar cualquier medida de la naturaleza que sea, acreditar que el hecho existió y que el chico participó en el hecho, en tanto son personas titulares de derecho. Y ayuda en algo la creación del Fiscal Penal Juvenil porque es una manera de equiparar los derechos que tenemos los adultos respecto de los derechos que tienen los niños, puesto que consideramos que un debido proceso es en sí mismo una garantía. Y aquí viene lo profundamente inconstitucional y el “ruido” que aparece en estas situaciones: luego, en uno de los artículos –creo que es el artículo 76- de este proyecto se expresa acerca del objeto primordial, pero el objeto no puede ser la protección del niño sino que debe ser establecer, en este caso también, la verdad de los hechos y la participación de los chicos en ese hecho. Esto también es importante porque el objeto de todo procedimiento penal, en un Estado de derecho, siempre debe ser el descubrimiento de la verdad real de lo ocurrido.

Otra cuestión es la referida al artículo 87 respecto de las medidas tutelares provisorias. En este artículo se permite aplicar medidas tutelares provisorias fundadas en estudios pertinentes, pero aquí se vuelve, a nuestro criterio, a una aplicación de restricciones de los derechos del niño, inocente en tanto y en cuanto se demuestre lo contrario. Porque, si no, seguimos anclados en esto que –vuelvo a decir- es un

paradigma del prejuicio y de la potencial peligrosidad del niño. Por eso, “hay que guardarlo”; fíjense lo tramposo de esta terminología jurídica, “hay que protegerlo”.

Considero pertinente en este sentido –como es mucho más grave me parece que antes hay que decir esto– que se establezca un plazo probable de privación de libertad de hasta 6 meses y que, incluso, se pueda prorrogar. Consideramos pertinente advertir que acá el Magistrado para aplicar estas medidas debería contar con pruebas legítimas y llegar a un estado de probabilidad en cuanto a la existencia o no del hecho, y debe modificarse esto de 6 meses prorrogables que, en algunos casos, son de privación de la libertad ambulatoria.

También debemos recordar que respecto del arresto de mayores se exige que no dure más de 24 horas, y que en el caso de la aprehensión debe ser sorprendido in fraganti en la comisión de un delito de acción pública que merezca pena privativa de la libertad.

En el párrafo 88, que trata de la hipótesis y la no comparecencia y fuga, debería expresamente considerarse los requisitos dispuestos para los mayores para proceder a la detención; es decir, que haya bastante motivo, que existan pruebas que lleve al juzgador a un estado psicológico de duda para sospechar que el chico participó en la comisión de un delito o no.

Al momento de la sentencia, en el artículo 90, debería incluirse expresamente que en ningún caso debe imponerse una medida definitiva sin la plena convicción de que este hecho ocurrió y de que el autor es menor. Digo esto para no vulnerar este principio de inocencia.

Además de otras correcciones, que consideramos deberían incluirse a otros artículos respecto de lo procesal, penal, juvenil, me interesa sobre todo tener presente algo porque aquí hay una cuestión que es necesario resaltar: nosotros tenemos la responsabilidad, como Poder Legislativo, de avanzar en esta materia y, por lo tanto, tenemos la obligación de armonizar en cuanto a la normativa del Derecho Internacional y a la normativa nacional –que deja todavía mucho que desear porque tiene principios, incluso, dictatoriales y porque, además, como sociedad, estamos anclados en el Patronato que, al igual que el paradigma tutelar, es inquisitorial y medieval.

La realidad indica que hay una dirigencia política manejada incluso por consultores que dicen que a la hora de hablar de seguridad es mejor no hablar de minoridad; asimismo, expresan que es mejor no hablar de “condenas”. Por nuestra parte, decimos exactamente lo contrario, esto es, lo políticamente incorrecto, ya que para nosotros hay garantía en la procesabilidad; por eso, lleva a una discusión tramposa hablar de “imputabilidad” porque para nosotros siempre hay garantías en el debido proceso. Si por mí fuera que me procesen y que me juzguen desde los dos años de edad o desde el momento de la concepción –si es que alguien cree que hay vida a partir de ésta– porque, tal como viene la mano, si te van a condenar a pena de muerte es mejor que te procesen y te juzguen.

Esto depende, por supuesto, de qué considera cada quién: si consideran que la niñez comienza a los doce años, debemos saber que en este país, y en particular en esta Provincia, por un mismo hecho un adulto puede salir bajo fianza por unos pocos pesos, en tanto que un menor de catorce años queda preso e institucionalizado hasta cumplir dieciocho años. Esta es la profunda desigualdad que existe.

En parte, creo que este proyecto puede mejorarse mediante la iniciativa legislativa y asumimos, incluso, el compromiso de llevarla adelante, aunque debo admitir que acercamos un poco tarde algunas sugerencias al respecto. Me interesa, sobre todo, responderles a aquellos partidarios de la “seguridad cool” y del autoritarismo “cool”, que en definitiva están instalando un discurso profundamente pedofóbico, en que la peligrosidad está centrada en el adolescente –esta sociedad necesita un chivo expiatorio–, como también lo están toda la fuerza y las facultades punitivas con que cuenta el Estado.

En este Poder Legislativo todavía no podemos saldar esta discusión y el Poder Judicial tampoco alcanza a resolverla, pero debe solucionarse aquí, legislativamente, sin preguntarle nada a éste ni al Poder Ejecutivo. A veces, me pregunto qué pasaría si “soltáramos” a todos los menores que están “guardados” en los institutos; seguramente, un magistrado se vería ante la gran dificultad de tener que resolver si tiene que protegerlos de la institucionalización o del gatillo fácil; si tiene que protegerlos de aquellos que enarbolan el discurso de la seguridad “cool” o del patronato.

Respecto de aquellos que todavía consideran que hay que rescatar algunos elementos del patronato –porque supuestamente son humanitarios ya que se encubren detrás de un lenguaje humanitario–, me permito decir que éste fracasó por inquisitorial. Si recurrimos a la historia, veremos que se tuteló a las mujeres, a los indios, a los locos

y a los pibes. Por eso, creo que es necesario seguir discutiendo el sistema procesal penal juvenil, continuar empoderando al Estado para que pueda articular con otros poderes, con el Estado nacional y con los municipios para fortalecer medidas lo suficientemente integradoras para prevenir estas situaciones porque, en definitiva, somos los mayores los responsables.

Todos sabemos que gran parte de las privaciones de la libertad en los chicos comienza con las detenciones policiales, que no necesariamente están fundadas en el delito sino en cuestiones estrictamente asistenciales; que los encierran justamente para protegerlos es inquisitorial y medieval. El sistema tutelar, en definitiva, es ese que saca al chico del proceso penal porque supuestamente el Estado hará todo lo bueno y necesario para proteger a ese niño, pero termina no haciéndolo. Esa es la razón en la que se justifica o se asienta un paradigma tutelar: en la fortaleza de un Estado que cree resolverlo todo.

Por todo esto y lo que acompañaré por escrito, vamos a acompañar en general el proyecto pero no los artículos 59, 76, 81, 88, 90, 91, 93, 95 y 98.

Muchas gracias.

**Sr. Presidente (Busso).**- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.

**Sr. Ochoa Romero.**- Señor presidente: es regla de este legislador, por el orden que le corresponde en el uso de la palabra, ser absolutamente breve en sus exposiciones, pero ésta va a ser la excepción, de manera tal que voy a pedir prudencia porque no voy a ser breve en esta oportunidad ya que me parece que amerita, a pesar de que algunos aspectos han sido desarrollados por los legisladores que han hecho uso de la palabra, una revisión detallada del proyecto de ley y también dejar asentados algunos aspectos que paso a citar.

Señor presidente: se compatibilizan los proyectos 5351 y 6484, que tratan la problemática en cuanto a la promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Antes de hacer un recorrido por la normativa, quiero destacar el trabajo en comisión que se ha venido realizando, especialmente por el señor presidente de la Comisión de Solidaridad, legislador Carlos Alesandri, y me refiero concretamente al grado de apertura que ha demostrado ante las inquietudes que se formularon por parte de los distintos bloques que participaron de las reuniones de comisión. Va de suyo que no hablo en representación de ninguno de ellos porque sería imprudente de mi parte, pero sí lo hago en nombre del Frente para la Victoria, y destaco ese aspecto porque me parece fundamental a la hora de debatir un tema como el que nos ocupa, que es de demasiada trascendencia para mejorar sustancialmente la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestra Provincia.

Hecha esta aclaración, voy a describir la normativa que hoy se debate tratando de realizar, en primer lugar, un análisis estructural del proyecto en consideración. La norma plantea como objetivos: las disposiciones en su carácter de orden público; y la promoción y protección integral de niños, niñas y adolescentes mediante la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos del niño, los que deben entenderse como complementarios a los derechos y garantías reconocidos en el ordenamiento jurídico provincial, nacional y los tratados internacionales en los que la Nación sea parte.

Si bien es cierto que los objetivos, y en general el proyecto en tratamiento, son compartidos por el Frente para la Victoria, también es menester dejar constancia expresa de que no acompañaré la parte del proyecto en lo atinente al procedimiento penal juvenil, esto es, desde el artículo 82 al 109, de lo que pido se tome debida nota en la oportunidad que corresponda por Secretaría Legislativa. En este marco voy a dar algunas razones, no sin antes decir, con el permiso de la legisladora Dressino, que comparto fundamentalmente las razones que en este aspecto esgrimió, y que no voy a repetir por motivos de brevedad.

Respecto de los objetivos planteados en la presente ley, en el artículo 1º se dan pautas de que esta norma es de orden material, es decir, ratifica derechos y obligaciones atinentes a los niños, niñas y adolescentes previstos en nuestro ordenamiento jurídico superior, en especial la Ley 26.061, de ello se infiere que no abarca normas de carácter procedimental correccional. Entonces, nosotros no tenemos que ir más allá de los objetivos expresamente planteados.

En este ámbito de la norma lo que se hace es una trasposición casi idéntica de la Ley 9053, de la Protección Judicial del Niño y del Adolescente, dictada en noviembre del año 2002, cuatro años antes del dictado de la Ley 26.061, que fue en abril del año 2006, lo que -a mi criterio- amerita un tratamiento exhaustivo por cuerda separada porque estamos hablando del lugar de los jóvenes dentro de un proceso de su protección y de

su seguridad. No podemos abordar esta temática del modo indebido por su envergadura, por su importancia, menos aún incluyendo una normativa que no contempla los paradigmas sentados por la Ley 26.061 y la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

En materia correccional de niños, niñas y adolescentes se encuentra en este momento en tratamiento en el Congreso de la Nación el proyecto 187/09 que tiene por objeto expreso la adecuación de los procedimientos a todos los tratados internacionales, tales como reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad; a modo de ejemplos cito la Resolución del 14 de diciembre del año 1990, la regla de Beijing, del 29 de noviembre de 1985, etcétera.

Si en el orden nacional se está tratando una adecuación, no veo por qué nosotros debemos apresurarnos a instituir un procedimiento correccional en base a una norma anterior al dictado de la Ley 26.061.

No se me escapa que la Provincia se ha reservado el poder de dictar normas procedimentales, y en materia correccional deberá hacerlo oportunamente. Quiero aclarar que mi cuestionamiento es de orden temporal y sustancial, razón por la cual deberíamos diferir el tratamiento de este procedimiento penal juvenil para otro momento, que entiendo debería ser a posteriori de la adecuación procedimental de orden nacional.

Le voy a pedir, señor presidente, que solicite guardar silencio porque es difícil poder concentrarse.

**Sr. Presidente (Busso).**- Solicito silencio a los presentes.

Continúa en el uso de la palabra, legislador Ochoa Romero.

**Sr. Ochoa Romero.**- Gracias, señor presidente.

Por último, entiendo que la ley de origen en esta materia, la 9.053, luce desactualizada, responde a paradigmas en materia de menores anteriores a los instituidos mediante la Convención de los Derechos del Niño. Por eso es que planteo al Pleno esta observación y, sobre todo, en cumplimiento del segundo párrafo del artículo 1º de este proyecto, última parte, que reza: "Los derechos y garantías que se enumeran en la presente norma deben entenderse como complementarios de los derechos y garantías reconocidos en el ordenamiento jurídico provincial, nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte". Va de suyo el respetar los objetivos de esta ley.

La razón de lo que esbozo está dada, en el ámbito temporal, nada más ni nada menos que en el artículo 119 de esta ley, que otorga dos años para su implementación, lo que estimamos que da cuenta de que no hay apuros en esta materia y que podemos, en defensa de los jóvenes, tomarnos un tiempo para sancionar una norma procesal independiente, desprendida de las implicancias del patronato y sus consecuencias, porque simplemente forman parte del pasado.

Dicha esta observación no menor procederé a describir estructuralmente la norma que debatimos. El Título I fija el carácter de orden público y sus bondades colaterales, en este caso hablo del carácter de irrenunciable, indivisible e intransigible; el artículo 2º deja aclarado los sujetos comprendidos, sujetos pasivos normativos, a los niños y adolescentes hasta los 18 años, en consonancia con los tratados de derechos internacionales de los niños.

Asimismo, el artículo 3º pauta el carácter comprendido en la expresión "interés superior", su alcance e implicancia, estableciendo el artículo 5º el deber del Estado de fijar políticas públicas universales, integrales y específicas, pautando expresamente las vías de dichas políticas y complementándose en el artículo 6º, otorgando a la Secretaría de la Niñez la calidad de autoridad de aplicación en la temática tratada, con la responsabilidad de la misma de implementar y aplicar las políticas públicas de modo conjunto en coordinación con los Ministerios de Estado, según reza el artículo 7º.

El Estado, en sentido amplio, debe garantizar el cumplimiento de las políticas públicas adaptadas en la presente ley, a tenor del artículo 8º, para el cumplimiento respetuoso de la preservación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

A su vez, este artículo establece un orden de prelación de las implicancias de las prioridades en esta materia y articula la participación de las comunas y municipios.

Asimismo, el artículo 9º destaca como grupo privilegiado de los niños, niñas y adolescentes al plexo familiar, y la responsabilidad indelegable de esta institución. Quiero detenerme en este artículo porque, sin lugar a dudas, la familia es la base institucional de la sociedad y el Estado está obligado a colaborar para que ese niño crezca dentro de una familia que, biológica o no, es el hábitat natural de los pequeños y jóvenes.

Deseo detenerme en este título, a instancias del artículo 6º, que reza: "es autoridad de aplicación de la presente ley y del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba, la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia o el organismo que en el futuro la sustituya ..."

También quiero hacer una reflexión acerca de la responsabilidad que le cabe a la SENAF –Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia- en esta materia, un organismo joven que tendrá en sus manos el desafío, nada más ni nada menos, que de resguardar a los niños, niñas y adolescentes, y que deberá tener una trayectoria impecable y valerse de equipos interdisciplinarios de excelencia porque serán, en adelante, la cara visible de los niños, niñas y adolescentes.

Resulta indudable que, a partir de la sanción de la presente ley, la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia cobra un papel fundamental en la problemática, porque uno de los objetivos de la presente ley es desjudicializar el proceso en protección de los niños, niñas y adolescentes. Y resulta imperioso resguardar la gran experiencia que poseen los jueces de menores y los equipos técnicos de los juzgados de menores, y conocer en qué medida van a seguir actuando y con qué estructura cuenta a ese nivel hoy la Secretaría que va a entender de esta problemática, si se realizó valoración sobre los profesionales actuantes, etcétera, todas incógnitas que planteo y dejo formuladas con la esperanza que se tengan en cuenta por la vía reglamentaria.

El Título III de este libro instituye los principios, derechos y garantías, correspondiendo al Capítulo I la categorización de principios regentes en materia de niños, niñas y adolescentes, tales como el principio de no discriminación e igualdad y el de la efectividad de la norma.

El Capítulo II del mismo Título, desde el artículo 13 al 29 enumera los derechos de todo este estrato social, entre otros, el de la vida, integridad y dignidad, que da cuenta de la necesidad de proteger a los menores; los derechos de documentación, de la propia imagen, de la identidad, de la libertad de expresión, etcétera, todos proclamados en estos artículos.

Se instituyen explícitamente sus derechos, agregando la protección de la salud de los niños y adolescentes, en consonancia con la normativa internacional; el derecho a la dignidad, a la no explotación en materia laboral, devinientes del Pacto de San José de Costa Rica.

Para hacer valer estos principios y derechos era necesario instituir garantías, y así lo hace el Capítulo III, que en los artículos 30 a 33 expresamente otorga la garantía de inscripción en los registros de las personas de la Provincia en modo gratuito y de fácil acceso, de procedimientos administrativos y judiciales, y el deber por parte de todos de comunicar cualquier vulneración de derechos a los niños, niñas y adolescentes y, respectivamente, el deber de todo funcionario de receptar las respectivas denuncias y actuar en consonancia.

En el Título III, "Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes", en el Artículo 34, su conformación, se mencionan además los medios por los cuales se construirá este sistema mediante políticas, programas y medidas de promoción y protección de derechos; procedimientos de protocolos de intervención; medidas de protección excepcional de derechos; organismos administrativos de protección de derechos, cuyas funciones sean acordes a lo prescripto por la Ley nacional 26.061 y organismos judiciales de control de la legalidad de las medidas excepcionales y recursos económicos específicos, fijando el artículo 36 como autoridad administrativa del Programa a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Por su parte, el artículo 37 otorga las competencias en lo inherente a planes y programas de esta Secretaría en general y en particular, a la que se le atribuyen 27 funciones que, por haber sido analizadas en las reuniones de las Comisiones conjuntas de Solidaridad, de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, no detallaré.

Asimismo, el artículo 38 del mismo Libro dispone una Comisión Interministerial de la Niñez, Adolescencia y Familia, la cual colaborará con la Secretaría de la Niñez, designando su integración interministerial, a saber: un miembro por cada Ministerio y Secretaría de Estado del Poder Ejecutivo provincial; este artículo expresamente dice: "... que estuvieren relacionados directamente con la protección de los derechos establecida en la presente ley –en mi concepto todos- y presidida por el titular de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia".

En cuanto a las funciones de la Comisión Interministerial, el artículo 39 las fija.

En definitiva, señor presidente, este Título III trata las medidas de promoción de derechos y prevención de su vulneración, en las cuales la SENAF, el Consejo Provincial

de Niñez, la Comisión Interministerial, los municipios y comunas y los consejos locales de Infancia con representación de los miembros de la sociedad civil, se articulan y coordinan para desarrollar planes y programas de promoción y prevención.

En el Título IV tenemos la aplicación del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y aquí las divide en diferentes niveles que ya fueron citados: el Nivel Primero, el Segundo Nivel, y el Tercero, que es el que realmente considero más importante y también delicado, ya que trata de las Medidas Excepcionales, es decir, aquellas medidas a adoptar cuando el niño esté privado de su seno familiar. Estas medidas son limitadas y siempre que se den las condiciones previstas en los artículos 41 y 42 de la norma, y fija con buen tino un límite temporal máximo de 90 días a los fines de llevar a cabo las medidas. Estipula también el artículo 49 el bagaje conceptual de lo que debemos entender por medidas excepcionales a los fines de esta ley, los objetivos y los organismos facultados para tomarlas, siempre con el control de legalidad por parte del órgano judicial.

El artículo 53 esboza el carácter de estas medidas, restrictivo por cierto, que debe quedar plasmado en la resolución que justifique una medida excepcional de protección y que una vez tomada, a tenor del artículo 55, deberá ser controlada en su legalidad por las autoridades judiciales.

En el Capítulo IV, el proyecto bajo tratamiento engasta en la etapa jurisdiccional. Veamos cuál es el rol que les cabe a los jueces en esta materia: bajo el ropaje del “control de legalidad” desembarca en la problemática la figura judicial. El juez debe dar razones de las medidas excepcionales adoptadas en etapa administrativa; para ello debe, según el artículo 56, llamar a una audiencia a todos los que tuvieren interés legítimo en la medida y al Ministerio Público a los fines de escucharlo y otorgar una resolución fundada en la legalidad de las medidas excepcionales dictadas.

Puede suceder que el juez ratifique las medidas por las cuales le otorga legalidad o que las rechace, en cuyo caso se notifica a las partes interesadas y se restituye a la niña, niño o adolescente a su familia. La resolución adoptada por el juez en este control puede ser apelada y resuelta por ante la Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar.

No podemos desconocer que el control jurisdiccional es necesario, sobre todo en este tipo de medidas, medio por el cual se le otorga garantía al niño, niña o adolescente y a la comunidad toda. No podemos desconocer la vasta experiencia de los jueces, por entonces llamados “de menores”.

No menos importante luce la creación de una Cámara que actuará en segunda instancia y que aparece como una doble opción de control de legalidad.

El Título V habla de organizaciones no gubernamentales y tiene un único capítulo, “De las Funciones y Obligaciones”. Por el artículo 58, la norma fija el criterio de interpretación acerca de lo que se entenderá por organizaciones no gubernamentales, fijando sus obligaciones mediante el artículo 60. El artículo 61, por su parte, prescribe acerca de la formación de un registro de las mismas, dependiente de la Secretaría de la Niñez.

En el Título VI se establecen los órganos judiciales, divididos en capítulos. En el Capítulo I se esgrimen las competencias. Cabe destacar aquí la creación de la Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar, el Juzgado que lleva el mismo nombre, dado por el artículo 64 del proyecto en cuestión, y el Juez Penal Juvenil, fijando sus atribuciones en el artículo 65.

Respecto del artículo 64 del proyecto bajo tratamiento, hemos de destacar que hubo adecuaciones que surgieron de lo expuesto por jueces del interior en oportunidad del trabajo en las comisiones conjuntas. De esta manera, el Juez de Niñez, Juventud y Violencia posee atribuciones pertinentes esgrimidas en 7 incisos, bajo el enclave de que el Tribunal Superior de Justicia podrá asignar o reasignar la competencia de los actuales Jueces de Violencia Familiar con el objetivo de mejorar el servicio de Justicia.

También esgrime la creación de la figura del Fiscal Penal Juvenil y del Asesor de Niñez y Juventud. En ambos casos, los artículos 66 y 67 expresan sus respectivas funciones.

De la reunión de comisión surgió la reformulación del artículo 68 del proyecto para los Tribunales del interior en que no hubiera Juzgados de Niñez o Penales Juveniles en competencia exclusiva. Para estos casos, es competente el Juez de Control, a excepción de la función de violencia familiar, que estará a cargo de los jueces en lo Civil o de Familia de turno.

En cuanto al hecho de que no hubiere Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar, las competencias asignadas serán ejercidas por la Cámara Criminal y la Cámara Civil, de acuerdo con la materia.

Esta solución otorgada, si bien no es lo óptimo, logra un equilibrio de la administración de Justicia entre los jueces en la temática de los nuevos paradigmas de la niñez y la adolescencia.

Entiendo que la problemática se subsana con la creación de juzgados de niños y adolescentes también en las cabezas jurisdiccionales de la Provincia. Es el único modo de descomprimir la competencia material excesiva de los juzgados del interior.

No obstante, y de acuerdo a lo que en la fecha he tomado conocimiento, estimo muy conveniente que la SENAF esté ya interactuando en el interior, esperando sea de una especial colaboración en esas localidades. El objetivo que traemos es tener niños sin problemática social en todos los puntos de nuestra Provincia.

El Capítulo II se refiere al trámite y actuaciones judiciales, incluyendo los artículos 69 al 82. Este es un tópico a tener en cuenta en materia jurisdiccional en cuanto a la creación de estos nuevos juzgados, porque agregamos la figura del Juez de Niñez, Juventud y la temática de violencia familiar.

Me abstendré de hablar acerca de los artículos 82 en adelante, respecto del procedimiento penal juvenil, por las razones esgrimidas supra.

Debo hacer expresa mención de que el Frente para la Victoria acompañará este proyecto a excepción del Título VII, Capítulos I, II y III del proyecto en tratamiento.

Por último, y para no redundar en detalles, destaco las reformas introducidas en el artículo 122, donde estipula expresamente la transitoriedad, hasta tanto se instrumente la Cámara de Niñez y Juventud en la Circunscripción Capital y los Juzgados Penales Juveniles del interior, las competencias seguirán siendo ejercidas por los actuales órganos judiciales que las vienen cumpliendo. De esta forma, otorgamos un lapso prudencial al Poder Judicial para que la reestructuración que esgrime esta ley sea adecuada y eficiente.

Asimismo, en virtud del artículo 125, se incorpora en la Ley de Presupuesto General para la Administración Pública Provincial el Sistema de Promoción y Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, sus programas y los recursos intangibles, otorgando en el mismo artículo un cuadro de asignación por programa.

Cabe destacar que en un principio estos aspectos no se encontraban reflejados en el proyecto de origen remitido por el Poder Ejecutivo, lo cual también refleja el grado de apertura con que se ha trabajado en las comisiones respectivas, hecho que ya destacara precedentemente.

Por último, deseo expresar a este Pleno que, aún con las objeciones y consideraciones planteadas en mi alocución, acompañaré este proyecto en general en la convicción de que se trata de un avance para la protección de los niños y jóvenes cordobeses, en manos de quienes se encuentra el futuro de nuestra Provincia.

Gracias, señor presidente.

**Sr. Presidente (Busso).**- Tiene la palabra el señor legislador Brügge.

**Sr. Brügge.- Sr. Brügge.**- Señor presidente: celebro que hoy la Legislatura de la Provincia de Córdoba esté dando un paso significativo en la normativa referida a la protección integral de la niñez y la adolescencia.

Todos los bloques han coincidido en la necesidad de adecuar la legislación provincial a los avances que se han hecho a nivel nacional y, sobre todo, a la Convención de los Derechos del Niño.

Mi intervención se va a circunscribir a determinar el porqué dentro del despacho de la comisión se ha incluido el Título VII, referido al procedimiento penal juvenil, que ha sido objeto de críticas de parte de la mayoría de los bloques de la oposición, en el sentido de que estaríamos avanzando en aspectos que corresponden al Congreso de la Nación, o que no sería oportuno que sancionáramos una norma al respecto dado de que a nivel federal se está tratando un proyecto de ley sobre procedimiento penal juvenil.

Queremos señalar que no compartimos el criterio tanto jurídico como de oportunidad señalados por los legisladores preopinantes, dado que en los debates del Congreso de la Nación, como en los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se señala que en materia referida a penal juvenil rige un viejo Decreto Ley 22.278 del año 1980, legislación del gobierno de facto; y decimos que no los compartimos porque, yendo a las cláusulas de nuestra Constitución nacional, entendemos que es claro el deslinde de competencia en lo que es materia de derecho de fondo de aquella que es de derecho procesal. En ese sentido, tanto los artículos 5, como el 75 inciso 12), el 121 y concordante de la Constitución nacional, les reconoce a las provincias la facultad para dictar normas de procedimientos.

En este aspecto, si bien hay una temática -Derechos del Niño- en la que el Gobierno Federal ha avanzado a través de la Ley 26.061 -que no contiene un vacío legislativo como aquí se ha mencionado-, ha dejado librado a que sean las provincias,



dentro de su ámbito y competencias, las que puedan dictar normativas al respecto. En el proyecto se ha hecho eco de la necesidad de implementar un procedimiento que esté en concordancia -en forma sistemática con los principios que vamos a aprobar- con los Títulos I y II del proyecto de ley en cuestión.

De ahí que este Título VII no se puede interpretar aisladamente sino sistemáticamente, por ello voy a hacer mención a que las supuestas críticas que se hacen a la falta de contemplación en el proyecto de lo que es el debido proceso, la defensa en juicio, el principio de inocencia o la posibilidad de la doble instancia están perfectamente contemplados en el texto del proyecto en cuestión en los artículos 92 y 97, donde en todo momento se dice que el procedimiento se debe desarrollar conforme a las normas constitucionales y a las leyes en la materia, e incluso se hace una remisión expresa en forma subsidiaria al Código Procesal Penal de la Provincia, en donde están contempladas las garantías.

Por eso, no entendemos ese planteo de que estamos en presencia de una norma procedimental, olvidando las garantías constitucionales; ello no podría ser así, por una sencilla razón: por aplicación del artículo 31 de la Constitución nacional, y del artículo 39 de la Constitución provincial con sus concordantes, que tienen todo un Capítulo referido a garantías individuales.

Otro cuestionamiento que también se formuló es sobre el artículo 87, inciso e), del despacho de comisión, cuando trata de las medidas provisorias. Dentro de este título destinado al procedimiento penal juvenil, se hace referencia a la facultad al juez para entender en forma excepcional en una medida que impida la internación de un menor. Este inciso está en coincidencia con lo prescripto por los artículos 37, 20 y 3º, inciso 3), de la Convención de los Derechos del Niño, a punto tal que se efectúa una reglamentación más específica -de lo principista que es la Convención- cuando se refiere al plazo máximo en que se puede tomar esta medida. No solamente eso, sino que este inciso e) es el último inciso del artículo 87 y dice "en su atención integral y excepcional en un establecimiento ..." como última opción, no como una alternativa posible entre varias.

Por ello, consideramos que este inciso e) del artículo 87 está de acuerdo con los principios constitucionales porque se trata de una medida que se debe tomar en forma excepcional, razonable y que tiene una adecuada proporcionalidad en el tiempo, establecido un máximo en seis meses.

Hacemos estas aclaraciones porque la norma que estamos a punto de aprobar es superadora y pionera en la materia en muchos aspectos a nivel del Derecho Público Provincial argentino; la inclusión en el procedimiento penal juvenil de un fiscal les da mayores garantías a aquellos procesos que tienen como uno de sus sujetos a los jóvenes y adolescentes, y con esta norma estamos dando cumplimiento a un mandato de la Constitución provincial -cláusula que viene del año 1987-, y que expresamente señala en el artículo 25 que "el niño tiene derecho a que el Estado mediante su responsabilidad preventiva y subsidiaria le garantice el crecimiento, el desarrollo armónico y el pleno goce de los derechos especiales cuando se encuentre en situación desprotegida, carenciada o bajo cualquier forma de discriminación o de ejercicio abusivo de autoridad familiar". Con la norma prescripta, con los procedimientos en el ámbito penal juvenil regulados damos cumplimiento al precepto constitucional citado.

Por todo lo desarrollado por el señor miembro informante del presente proyecto, damos el voto favorable al proyecto en tratamiento y hacemos augurios para que nos acompañe el resto de los bloques en su aprobación.

Gracias, señor presidente.

**Sr. Presidente (Busso).**- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en general el proyecto tal como fuera despachado.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Busso).**- Aprobado en general.

La votación en particular se realizará por título.

- Se vota y aprueba el Título I, artículos 1º al 9º.

- Se vota y aprueba el Título II, artículos 10 al 33.

- Se vota y aprueba el Título III, artículos 34 al 40.

- Se vota y aprueba el Título IV, artículos 41 al 57.

- Se vota y aprueba el Título V, artículos 58 al 61.

- Se vota y aprueba el Título VI, artículos 62 al 81.

- Se vota y aprueba el Título VII, artículos 82 al 109.

**Sr. Presidente (Busso).**- Dejo constancia de la disidencia del voto que se va a consignar del bloque de la UCR, del bloque del Frente Cívico y Social, del legislador

Ochoa Romero, de la legisladora Nadia Fernández, del legislador Ruiz y de la legisladora Genesio de Stabio.

– Se vota y aprueba el Título VIII, artículos 110 al 126.

**Sr. Presidente (Busso).**– El artículo 127 es de forma.

Queda aprobado el proyecto en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).

#### PROYECTO DE LEY – 06484/E/10

##### MENSAJE

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que preside, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba.

La aprobación en 1989 de la Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito Internacional, fue la culminación de un proceso progresivo de reconocimiento y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, desarrollados durante el siglo XX. En el año 1990 dicha Convención fue aprobada en nuestro país por la Ley 23849, y con la Reforma a la Constitución Nacional en el año 1994, se le otorgo Jerarquía Constitucional de acuerdo a lo establecido por el artículo 75 inciso 22.

Luego de catorce años, se sancionó en Argentina la Ley Nacional Nº 26061 que refuerza los principios de la Convención a través de una Norma Nacional Interna, y a mediados de 2007 la Provincia de Córdoba adhirió a sus postulados de manera expresa, mediante la Ley Provincial Nº 9396.

La Ley Nacional Nº 26061, derogó la Ley Nº 10903 de Patronato de Menores, y sometió a revisión la Ley Provincial Nº 9053 de Protección Judicial del Niño y el Adolescente, y la Ley Nacional Nº 22278 que regula el Régimen Penal de Minoridad. En Córdoba, el Sr. Gobernador de la Provincia, en cumplimiento de su programa de gobierno, mediante la Ley de Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo Provincial Nº 9454 con vigencia a partir de finales del año 2007, en su artículo 38 creó La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Esta reviste entre otras, las siguientes competencias fundamentales: a) Reconstruir el entramado Social, diseñar y proponer políticas públicas dando respuestas efectivas y viables a las problemáticas que atraviesan los niños, niñas, adolescentes y familias. b) Fortalecer, Promover y atender las políticas relacionadas con los niños, niñas, adolescentes, mejorando los mecanismos familiares, comunitarios e institucionales en procura de su desarrollo integral. c) Difundir y hacer cumplir los derechos y garantías expresados en la Convención Internacional por los Derechos del Niño – tal como lo formulan la Constitución de la Nación Argentina y la Constitución de la Provincia de Córdoba- a través de la Ley Nacional 26061. Este marco legal puso en marcha medidas de acción directas en procura de la protección integral de los derechos de la niñez, adolescencia y familia.

Ha transcurrido un periodo más que importante para la definitiva consolidación de los derechos de los niños reconocidos en la Convención y la legislación referida.

A partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Ley Nacional Nº 26061 y de la Ley Provincial Nº 9396, comenzó una nueva conciencia jurídica, moral y social, que dio nacimiento a la doctrina de la Protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la cual supone una concepción superadora basada en las siguientes premisas: 1) Reconocer como trascendental el Interés Superior del niño, como una obligación/compromiso para el Estado y para la sociedad en general. Esto significa asumir que no existe nada más importante que el derecho de los niños, niñas y adolescentes, con privilegio incluso sobre los derechos del propio Estado, de la Familia, de la Comunidad, y de cualquier otro individuo adulto. 2) Considerar a la infancia/adolescencia como un todo coherente, sin discriminar entre aquellos que tienen sus necesidades básicas satisfechas y quienes no. 3) Considerar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos. 4) Asegurar jurídicamente el principio básico de igualdad ante la ley, entendiéndolo como necesidad ineludible. 5) Reducir las internaciones no vinculadas a la Comisión de delitos. 6) Escuchar y tener en cuenta la opinión de niños, niñas y adolescentes, siendo consecuentes con la concepción de que son sujetos plenos de derechos. 7) Concretar los mecanismos de exigibilidad y protección efectiva de los derechos contenidos en la Convención. 8) Garantizar una protección complementaria o supra protección de sus derechos, que presupone y supera la protección jurídica general. Es por ello que ante la necesidad de poner en plena vigencia la doctrina de la protección integral, las leyes enumeradas proponen un salto trascendental en el orden jurídico interno, cumpliendo con la obligación internacionalmente asumida de adaptar nuestra legislación a los postulados de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 9) Reforzar el Interés Superior del Niño, como pauta que rija la elaboración de políticas públicas, la preparación de estructuras y procesos y la realización de actividades por parte de organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil. Estos deben coadyuvar a la necesaria equidad de todos los niños, niñas y adolescentes, sin distinción de ninguna naturaleza, propendiendo al reconocimiento de su condición como sujetos plenos de derechos. Los derechos de la infancia deben ser interpretados sistemáticamente, asegurando la debida protección de los derechos a la vida, la supervivencia y el desarrollo armónico. 10) Impulsar el fortalecimiento de la familia como primer eslabón para la contención de los problemas y de la necesaria integración social. Esto implica plantear un abordaje estructural del problema que se pretende resolver, asegurando el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en familia, como primer paso hacia la inserción en sociedad. Es decir, cambiar el eje de la intervención Estatal. 11) Proponer una posición activa del estado, dando un giro a la mirada predominante, y propendiendo al cumplimiento efectivo de los

enormes principios jurídicos consagrados legislativamente.

Con la sanción de la Ley 26061, y la adhesión dispuesta por Ley provincial Nº 9396, se comenzó a crear el escenario indispensable para la definitiva puesta en vigencia del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes cuya implementación normativa se propicia mediante el presente proyecto de Ley puesto a vuestra consideración.

Ya estamos dotados de la normativa de orden nacional que cerró definitivamente el debate antes expuesto, como así también de la Ley Provincial de adhesión que hizo posible dar los primeros pasos. Por otro lado ya se ha construido el escenario provincial necesario a los fines del Sistema de Protección Integral de Derechos, plasmado a través de distintas acciones emprendidas desde la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, tales como : 1) Haber coadyuvado activamente en la creación del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, Ley 9591, como espacio consultivo, multisectorial e interdisciplinario relacionado a los derechos de la niñez, 2) La instrumentación de Planes, Programas y Proyectos de Políticas Públicas con eje fundamental en el Sistema de Protección de Derechos, tales como : "Intervención Comunitaria", "Línea 102", "Egreso y Su Fortalecimiento", " El Deporte Te Educa", "Nocaut a las Drogas", "Taller de Padres", "Santa Catalina", "Conociendo Córdoba", "Programa Sofía", "Centro Socio Educativo Puertas Abiertas Pable Freire", "Medidas Alternativas al Encierro", "Programas de Servicios en Beneficio de la Comunidad", "Programa Trabajo de Responsabilidad Comunitaria", "Programa de Asistencia en Libertad", "Trabajo por mi Futuro", "Creciendo Juntos", "Por Otra Calle"; "Familias para Familia", "Familias Acogedoras", Escuela Lelikelen", "Programa OGA", "Programas de Capacitación en las Escuelas", "Programa de Fortalecimiento Familiar", entre otros, 3) Se procedió también a concretar, mediante la creación de Delegaciones Regionales, la Descentralización necesaria para que los derechos se hagan una realidad en los respectivos territorios de pertenencia de los niños, niñas y adolescentes, 4) Creación de los Consejos Locales de Niñez y Adolescencia, 5) Dictado del Decreto Nº 1153/09 que creó el Organismo de Protección de Derechos y puso en marcha las UDER como Delegaciones regionales en el Interior Provincial. 6) Se procedió a la implementación y conformación de una Comisión Interministerial a los fines de articular acciones entre los distintos estamentos efectores del Estado Provincial en relación a los distintos derechos que conforman el Sistema de Protección Integral.

No obstante lo apuntado, son variados los inconvenientes que se advierten para que la doctrina de la protección integral sea aplicada en la realidad imperante. Como forma de coadyuvar en esta transición es que creemos necesaria la sanción de la Ley que se propicia por la presente, y detectar sobre que normas se posicionan los actores que intervienen en la niñez dentro del ámbito de la Provincia de Córdoba, para la modificación que resulte pertinente. Para concretar, el Proyecto contempla la derogación de la Ley 9053, la modificación de las Leyes 7676, y 9396, y las adecuaciones normativas que corresponden a la órbita del Poder Judicial. Podríamos afirmar sin temor a yerro alguno, que las normas que se propician constituyen la Sistematización de las Normas de Protección Integral de Derechos de la Niñez y la adolescencia, necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos que se consagran. a través de un solo cuerpo legal.

Finalmente es de destacar que si bien es cierto el marco legal vigente tanto a nivel Nacional como Provincial, consagra la doctrina de la Protección Integral – Ley Nacional 26061, Ley de Adhesión Provincial Nº 9396 y Decreto Nº 1153/09 paradójicamente también se aplican diversas leyes que regulan ciertos aspectos vinculados a la niñez y adolescencia, todavía no enroladas en la doctrina de la Protección Integral, todo lo cual nos exige el dictado de la presente Ley a fin de poner el orden y la sistematización necesarias a esos efectos.

Asimismo, es dable señalar que el nuevo enfoque propuesto por la ley, no se va a instaurar mágicamente por su vigencia, sino que resulta imprescindible el compromiso de la sociedad en su conjunto, y que el Estado Provincial trabaje arduamente con todos los actores sociales involucrados, para que cada uno asuma el rol que le corresponde desde su sector, convergiendo y comprometiéndose para transformar en realidad y dar efectividad a los principios, derechos y garantías, de los niños, niñas y adolescentes y propugnando una institucionalidad única para nuestra infancia.

Los fundamentos vertidos en el presente, serán ampliados al momento del tratamiento parlamentario que se otorgue al presente proyecto

Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.

Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.

**Juan Schiaretti, Raquel Krawchik, Jorge Eduardo Córdoba.**

**LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CORDOBA  
SANCIONA CON FUERZA DE  
LEY:**

**PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS  
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA**

**TÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES**

**ARTÍCULO 1º.-** Objeto. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles, intransigibles y tienen por objeto la promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la Provincia de Córdoba, mediante la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de sus derechos.

Los derechos y garantías que se enumeran en la presente deben entenderse como complementarios de los derechos y garantías reconocidos en el ordenamiento jurídico provincial, nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte.

**ARTÍCULO 2º.-** Sujetos comprendidos. A los efectos de esta ley quedan comprendidas todas las personas, niñas, niños y adolescentes, hasta los dieciocho (18) años de edad.

**ARTÍCULO 3º.-** Interés superior. A los efectos de la presente Ley, se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta Ley y los que en el futuro pudieren reconocérsele. La determinación del interés superior debe respetar:

- a) Su condición de sujeto activo y portador de derechos.
- b) Su derecho a ser oído cualquiera sea la forma en que se manifieste y a que su opinión sea tenida en cuenta.
- c) El respeto al pleno desarrollo personal, armónico e integral de sus derechos en su medio familiar, social y cultural.
- d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales.
- e) El equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y las exigencias del bien común.

f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida de la niña, niño y el adolescente, a la residencia y/o lugar donde ellos hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustará el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores, cualesquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse. Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.

**ARTÍCULO 4º.-** Aplicación obligatoria. Para la aplicación e interpretación de la presente ley, de las normas y las medidas que se adopten, en las que intervengan organismos públicos o privados, órganos legislativos, judiciales o administrativos, la familia y la sociedad civil en general, se considerará en forma primordial el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Las normativas que regulan y/o repercuten en el acceso y/o ejercicio de derechos reconocidos a niñas, niños y adolescentes deberán adecuarse al principio rector de niño sujeto activo de derechos. La Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Nacional Nº 26.061, su Decreto Reglamentario Nº 415/06 y esta Ley son de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas comprendidas en la presente.

Los órganos Administrativos locales de los Municipios y Comunas deben revisar y adecuar la normativa a los postulados referidos en la presente ley.

Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos.

**ARTÍCULO 5º.-** Políticas públicas integrales - Autoridad de aplicación. -Objetivos. El Estado Provincial adoptará las medidas tendientes a efectivizar los derechos reconocidos por esta ley, adecuando sus políticas públicas a los efectos de garantizar los principios y normas aquí contenidas.

Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley y del Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Poder Ejecutivo de la Provincia, o el Organismo que en el Futuro la sustituya.

La Autoridad de Aplicación será la encargada de la implementación y aplicación de las Políticas Públicas para la promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en coordinación con los demás Ministerios y Secretarías de Estado, y las mismas comprenderán:

a) Políticas Públicas Provinciales, dirigidas a la niñez y la adolescencia, que tengan en cuenta el fortalecimiento de la familia como ámbito natural de cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, aplicándose el concepto de "familia ampliada", es decir, el de todo ámbito familiar, por consanguinidad, por afinidad, o de otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad, o ámbitos familiares considerados como de convivencia alternativa.

b) Gestión asociada entre los distintos organismos de gobierno, ya sea Nacional, Provincial y/o Municipal o Comunal, y la sociedad civil que se realicen en marcos adecuados de capacitación, fiscalización y promoción para el cumplimiento de los derechos establecidos.

c) Procurar la efectivización de redes locales, articulando espacios públicos y privados de promoción y protección de derecho.

d) Los Municipios y Comunas procederán a la creación de organismos locales de promoción, prevención, protección y cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a los efectos de la presente Ley.

e) Coordinar las políticas públicas provinciales con las políticas implementadas en el ámbito nacional, municipal y comunal.

f) Articular transversalmente las acciones públicas en la elaboración, ejecución y evaluación de planes y programas entre Ministerios y Secretarías del Gobierno Provincial mediante la Comisión Interministerial.

g) Promover la participación activa de las niñas, niños y adolescentes en los ámbitos en que

se efectivicen las políticas públicas.

**ARTÍCULO 6º.-** Responsabilidad gubernamental. Los Organismos del Estado, ya sea Provincial y/o Municipal o Comunal, tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas. En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación, es prioritario para los Organismos del Estado mantener siempre presente el interés superior de las personas amparadas por esta ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos que las garanticen.

Las políticas públicas de los Organismos del Estado deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

La prioridad absoluta implica:

- 1.- Protección y auxilio en cualquier circunstancia;
- 2.- Prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas;
- 3.- Preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas públicas;
- 4.- Preferencia de atención en los servicios esenciales.

**ARTÍCULO 7º.-** Responsabilidad familiar. La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías.

Los progenitores tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos.

Los Organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones.

## **TÍTULO II PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS**

**ARTÍCULO 8º.-** Principio de igualdad y no discriminación. Las disposiciones de esta Ley se aplicarán por igual a todos las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos raciales, de sexo, color, edad, idioma, religión o creencias, opinión política, cultura, posición económica, origen social o étnico, capacidades especiales, apariencia física o impedimento físico, de salud, de nacimiento o cualquier otra condición del niño o de sus padres o de sus representantes legales.

**ARTÍCULO 9º.-** Principio de efectividad. Los Organismos del Estado, la sociedad y la familia deben adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de otra índole, para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos reconocidos en esta ley y en todo el ordenamiento jurídico nacional, provincial, municipal y comunal.

**ARTÍCULO 10.-** Derecho a la vida. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de vida.

**ARTÍCULO 11.-** Derecho a la dignidad y a la integridad personal. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo; a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral.

La persona que tome conocimiento de malos tratos, o de situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, o cualquier otra violación a sus derechos, debe comunicar dicha situación a la autoridad local de aplicación de la presente Ley.

Los Organismos del Estado deben garantizar programas gratuitos de asistencia y atención integral de todas las niñas, niños y adolescentes.

**ARTÍCULO 12.-** Derecho a la convivencia familiar y comunitaria. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados y desarrollarse dentro de su grupo familiar de origen y con sus vínculos afectivos y comunitarios. Sólo excepcionalmente, y para los casos en que ello sea imposible, tendrán los mismos derechos en un grupo familiar alternativo, de conformidad con la ley.

Se entiende por grupos familiares alternativos, la familia en todas sus modalidades, las familias de la comunidad donde la niña, niño y adolescente reside habitualmente u otras familias.

El Estado, junto a la familia receptora, debe fortalecer y apoyar a la familia de origen en el afianzamiento de los vínculos entre ésta y el niño, para que en el plazo más breve posible se produzca la consolidación de la relación familiar.

El Estado debe garantizar orientación y apoyo a las familias receptoras a través de programas y políticas públicas a los fines de fortalecer el desempeño de su rol.

En toda situación de institucionalización de alguno de los progenitores, los Organismos del Estado deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes el vínculo y el contacto directo y permanente con aquellos, siempre que no contrarie el interés superior del niño.

Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales.

**ARTÍCULO 13.-** Derecho a la identidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia, salvo la excepción prevista en los artículos 327 y 328 del Código Civil.

Los Organismos del Estado deben facilitar y colaborar en la búsqueda, localización u obtención de información, de los padres u otros familiares de las niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar. Tienen derecho a conocer a sus padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres, aun cuando éstos estuvieran separados o divorciados, o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia, salvo que dicho vínculo, amenazare o violare alguno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que consagra la ley.

**ARTÍCULO 14.-** Derecho a la documentación. Las niñas, niños, adolescentes y progenitores indocumentados, tienen derecho a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la normativa vigente y en los términos que establece el procedimiento previsto en la Ley Nº 24.540.

**ARTÍCULO 15.-** Derecho a la salud. Los Organismos del Estado deben garantizar:

a) El acceso a servicios de salud, respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por la familia y la comunidad a la que pertenecen siempre que no constituyan peligro para su vida e integridad;

b) Programas de asistencia integral, rehabilitación e integración;

c) Programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia;

d) Campañas permanentes de difusión y promoción de sus derechos dirigidas a la comunidad a través de los medios de comunicación social.

Toda institución de salud deberá atender prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes y mujeres embarazadas.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud.

**ARTÍCULO 16.-** Derecho a la educación. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo, respetando su identidad cultural y lengua de origen, su libertad de creación y el desarrollo máximo de sus competencias individuales; fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por los derechos humanos, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente.

Tienen derecho al acceso y permanencia en un establecimiento educativo cercano a su residencia. Por ninguna causa se podrá restringir el acceso a la educación, y en el supuesto de carecer de documentación que acredite su identidad, se los deberá inscribir provisoriamente, debiendo los Organismos del Estado arbitrar los medios idóneos para la tramitación y entrega del mismo.

Las niñas, niños y adolescentes con capacidades especiales tienen todos los derechos y garantías consagrados y reconocidos por esta ley, además de los inherentes a su condición específica.

Los Organismos del Estado, la familia y la sociedad deben asegurarles el pleno desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, así como el goce de una vida plena y digna.

**ARTÍCULO 17.-** Gratuidad de la educación. La educación pública será gratuita en todos los servicios estatales, niveles y regímenes especiales, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.

**ARTÍCULO 18.-** Prohibición de discriminar por estado de embarazo, maternidad y paternidad. Prohíbese a las instituciones educativas públicas y privadas imponer por causa de embarazo, maternidad o paternidad, medidas correctivas o sanciones disciplinarias a las niñas, niños y adolescentes.

Los Organismos del Estado deben desarrollar un sistema conducente a permitir la continuidad y la finalización de los estudios de las niñas, niños y adolescentes.

La mujer privada de su libertad será especialmente asistida durante el embarazo y el parto, y se le proveerán los medios materiales para la crianza adecuada de su hijo mientras éste permanezca en el medio carcelario, facilitándose la comunicación con su familia a efectos de propiciar su integración a ella.

**ARTÍCULO 19.-** Medidas de protección de la maternidad y paternidad. Las medidas que conforman la protección integral se extenderán a los progenitores durante el embarazo, el parto y al período de lactancia, garantizando condiciones dignas y equitativas para el adecuado desarrollo de su embarazo y la crianza de su hijo.

**ARTÍCULO 20.-** Derecho a la libertad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad.

Este derecho comprende:

a) Tener sus propias ideas, creencias o culto religioso según el desarrollo de sus facultades y con las limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico y ejercerlo bajo la orientación de sus padres, tutores, representantes legales o encargados de los mismos;

b) Expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la familia, la comunidad y la escuela;

c) Expresar su opinión como usuarios de todos los servicios públicos y, con las limitaciones de la ley, en todos los procesos judiciales y administrativos que puedan afectar sus derechos.

Las personas sujetos de esta ley tienen derecho a su libertad personal, sin más límites que los establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. No pueden ser privados de ella ilegal o arbitrariamente.

La privación de libertad personal y ambulatoria, entendida como ubicación de la niña, niño o

adolescente en un lugar de donde no pueda salir por su propia voluntad, debe realizarse de conformidad con la normativa vigente.

**ARTÍCULO 21.-** Derecho al descanso, recreación, deporte y juego. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, recreación, deporte y juego. El ejercicio de estos derechos debe estar dirigido a garantizarles el descanso integral.

Los Organismos del Estado con la activa participación de la sociedad, deben establecer programas que garanticen el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a la recreación, esparcimiento, juegos recreativos y deportes, debiendo asegurar programas específicos para aquellos con capacidades especiales.

**ARTÍCULO 22.-** Derecho al ambiente saludable. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a la preservación y disfrute del paisaje.

**ARTÍCULO 23.-** Derecho a la dignidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen.

Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar.

**ARTÍCULO 24.-** Derecho de libre asociación. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho de asociarse libremente con otras personas, con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos, laborales o de cualquier otra índole, siempre que sean de carácter lícito y de conformidad a la legislación vigente. Este derecho comprende, especialmente, el derecho a:

- a) Formar parte de asociaciones, inclusive de sus órganos directivos;
- b) Promover y constituir asociaciones conformadas exclusivamente por niñas, niños, adolescentes o ambos, de conformidad con la ley.

**ARTÍCULO 25.-** Derecho a opinar y a ser oído. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a:

- a) Participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en aquellos que tengan interés;
- b) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo.

Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes; entre ellos, al ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo.

**ARTÍCULO 26.-** Derecho al trabajo de los adolescentes - Protección contra la explotación laboral. Los Organismos del Estado deben garantizar el derecho de las personas adolescentes a la educación y reconocer su derecho a trabajar con las restricciones que imponen la legislación vigente y los convenios internacionales sobre erradicación del trabajo infantil, debiendo ejercer la inspección del trabajo contra la explotación laboral de las niñas, niños y adolescentes.

Este derecho podrá limitarse solamente cuando la actividad laboral importe riesgo, peligro para el desarrollo, la salud física, mental o emocional de los adolescentes.

Los Organismos del Estado, la sociedad y en particular las organizaciones sindicales coordinarán sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y limitar toda forma de trabajo legalmente autorizada cuando impidan o afecten su proceso evolutivo.

**ARTÍCULO 27.-** Derecho a la seguridad social. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de la seguridad social.

Los Organismos del Estado deberán establecer políticas y programas de inclusión para las niñas, niños y adolescentes, teniendo en cuenta los recursos y la situación de los mismos y de las personas que sean responsables de su mantenimiento.

**ARTÍCULO 28.-** Garantía estatal de identificación - Inscripción en el Registro del estado y capacidad de las personas. Los Organismos del Estado deben garantizar procedimientos sencillos y rápidos para que los recién nacidos sean identificados en forma gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente después de su nacimiento, estableciendo el vínculo filial con la madre, conforme al procedimiento previsto en las leyes nacionales Nº 24.540 y N 26.061, modificatorias y decretos reglamentarios.

Si al momento de efectuarse los controles prenatales o de ingreso al centro de salud se detectare que alguno de los progenitores del niño por nacer carecen de documentos de identidad, el agente que tome conocimiento debe informar a los organismos competentes a fin de garantizar el acceso a la tramitación y expedición de la documentación requerida de acuerdo a la normativa vigente. Si la indocumentación de alguno de los progenitores continuara al momento del parto, debe consignarse nombre, apellido, fecha de nacimiento, domicilio, edad, huellas dactilares y nacionalidad de los mismos, en el certificado de Constatación de Parto que expida la unidad sanitaria pertinente. A los fines de esta garantía, el Estado Provincial debe habilitar oficinas del Registro Civil en todos los establecimientos públicos que atienden nacimientos.

**ARTÍCULO 29.-** Garantías mínimas de procedimiento - Garantías en los procedimientos judiciales o administrativos. Los Organismos del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías:

- a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente, de manera directa o por medio de sus padres o tutores, cuando por su madurez y

desarrollo no lo pudiese hacer por sí mismo, y con la intervención del ministerio pupilar cuando corresponda (art. 59 del Cód. Civil);

b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte;

c) A ser asistido por un letrado especializado en niñez y adolescencia, personalmente o en sus padres o tutores que lo representen, cuando no haya intereses contrapuestos, desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya, sin perjuicio de la intervención del ministerio pupilar cuando corresponda. En caso de carecer de recursos económicos, el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine;

d) A participar activamente en todo el procedimiento, por sí mismo o por sus representantes; siempre que no existan intereses contrapuestos.-

e) A oponerse, o a recurrir ante el superior frente a cualquier resolución que lo afecte.

**ARTÍCULO 30.-** Deber de comunicar. Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes, deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión.

**ARTÍCULO 31.-** Deber del funcionario de recepcionar denuncias. El agente público que sea requerido para recibir una denuncia de vulneración de derechos de los sujetos protegidos por esta ley, ya sea por la misma niña, niño o adolescente, o por cualquier otra persona, se encuentra obligado a recibir y tramitar tal denuncia en forma gratuita, a fin de garantizar el respeto, la prevención y la reparación del daño sufrido, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en la figura de grave incumplimiento de los Deberes del Funcionario Público.

En caso que la denuncia fuera efectuada en órgano judicial, el mismo deberá sin más trámite y de manera inmediata remitirla a la autoridad administrativa de aplicación de la presente ley, para que tome conocimiento e intervención, conforme a su competencia. No obstante, cuando de la misma denuncia, o de un requerimiento del ministerio pupilar, resultare que se trata de un hecho que prima facie constituiría un delito de orden penal, la autoridad judicial que la receptare además de la remisión referida precedentemente, lo derivará de manera urgente a la Fiscalía de Turno.

En caso de que la denuncia fuese formulada por la niña, niño o adolescente, la ausencia de sus representantes legales nunca podrá obstaculizar su recepción”.

### **TÍTULO III**

#### **SISTEMA PROVINCIAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ARTÍCULO 32.-** Conformación. El Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes está conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado Argentino, La Ley Nacional 26.061, la presente ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en la Constitución Provincial y el ordenamiento jurídico vigente.

Dispónese la implementación del "Sistema Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes", a los efectos de establecer los mecanismos a través de los cuales se asegure a las niñas, niños y adolescentes el goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, Constitución provincial, Convención Internacional de los Derechos del Niño, demás tratados de derechos ratificados por el Estado Argentino y el ordenamiento jurídico nacional, a partir de la vigencia de la ley Nacional 26.061, en el ámbito provincial y de los Municipios y Comunas de su territorio, y en coordinación con el ámbito nacional.

Para el logro de sus objetivos el Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes contará con:

a) Políticas, programas y medidas de promoción y protección de derechos;

b) Procedimientos y Protocolos de intervención.

c) Medidas de protección excepcional de derechos.

d) Organismos administrativos de protección de derechos cuyas funciones sean acordes a lo prescripto por Ley Nacional 26.061, y organismos judiciales de control de la legalidad de las medidas excepcionales

e) Recursos económicos específicos.

La distribución de competencias administrativas no puede ser obstáculo para la intervención inmediata en situaciones de vulneración de derecho o riesgo para la vida o la integridad personal de la niña, niño o adolescente y la tramitación ante la Autoridad que corresponda.

**ARTÍCULO 33.-** Autoridades administrativas de promoción y protección de derechos del ámbito provincial- Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia - La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, o el organismo que en el futuro la reemplace, como la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, de la Ley Nacional 26.061 y del Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral de Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes, y tiene a su cargo el diseño, instrumentación, ejecución, coordinación, articulación y control de políticas dirigidas a niñas, niños y adolescentes y sus familias, y estará a cargo de un Secretario de Estado designado por el Poder



Ejecutivo de la Provincia.

Funciones:

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y la Familia tendrá competencia en todo lo inherente a la elaboración y ejecución de Planes, Programas y Proyectos que promuevan el desarrollo integral de la niñez, la adolescencia y la familia y, en particular:

- a) Determinar los objetivos y la formulación de las políticas del área de su competencia.
- b) La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
- c) La implementación de políticas y programas integrales, con eje fundamental en la garantía de derechos, la promoción, la prevención, la dignidad, la inclusión social, la participación de la comunidad y el desarrollo local y regional.
- d) Reconstruir el entramado Social al diseñar y proponer políticas públicas capaces de dar respuestas efectivas y viables a las problemáticas que atraviesan los niños, niñas, adolescentes y familias.
- e) Crear espacios de planificación y acción en estas diferentes áreas específicas.
- f) Crear programas y planes relacionados con el accionar de la secretaría, que garanticen el efectivo cumplimiento de los derechos y las necesidades específicas de las diversas poblaciones objetivo.
- g) Elaborar políticas que faciliten formas y espacios de participación concertada entre los diferentes niveles y con los diversos actores sociales involucrados en la implementación de las acciones.
- h) Promover la transversalidad en las políticas públicas a partir de actividades y programas conjuntos.
- i) Promover los valores que cohesionan, articulan y hacen posible una vida armoniosa en familia y en sociedad.
- j) Implementar las acciones de capacitación, difusión y sensibilización que aporten al desarrollo de políticas públicas de prevención de la violencia familiar.
- k) Planificar y ejecutar estrategias de atención, orientación, capacitación y fortalecimiento a familias en riesgo.
- l) Fortalecer el reconocimiento de la sociedad de los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de derechos, incluyendo a la familia, y a la tercera edad.
- ll) Atender al fortalecimiento, promoción y atención de las políticas relacionadas con los niños, niñas, adolescentes y su núcleo familiar, tercera edad, a través del desarrollo de tareas preventivas y asistenciales.
- m) Coordinar, controlar y celebrar convenios con organismos públicos y/o privados que atiendan la problemática de las niñas, niños y adolescentes.
- n) Promocionar, desarrollar y ejecutar políticas públicas que recuperen y fortalezcan los mecanismos familiares, comunitarios e institucionales de control, protección, acompañamiento, contención y asistencia a los niños, niñas y adolescentes en procura de su desarrollo integral.
- ñ) Difundir y hacer cumplir los derechos y garantías expresados en la Convención Internacional por los Derechos del Niño -tal como lo formulan la Constitución de la Nación Argentina y la Constitución de la Provincia de Córdoba -a través de la Ley Nacional 26.061.
- o) Promover la reinserción escolar de los niños, niñas y adolescentes que por distintas causas hayan dejado de concurrir a la escuela.
- p) Disponer los recursos necesarios para la capacitación permanente del personal administrativo y técnico que esté afectado a los distintos programas y servicios de atención a niños, niñas, adolescentes y sus familias.
- q) Realizar estudios e investigaciones especializadas en la temática específica, así como el dictado de cursos de formación.
- r) Promover y fortalecer relaciones interinstitucionales con organismos gubernamentales, no gubernamentales, educativos y especialistas vinculados a las áreas específicas.
- s) Generar acciones conjuntas destinadas a la difusión y promoción de las problemáticas específicas de la Secretaría en los Medios de Comunicación Masivos locales y nacionales.
- t) La atención integral a los niños, niñas y adolescentes incurso en el régimen penal aplicable a las personas menores de 18 años a través de institutos, hogares sustitutos y pequeños hogares, readecuando la infraestructura disponible de acuerdo a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes.
- u) Elaboración de planes, programas y proyectos que tiendan al fortalecimiento familiar, y a la asistencia a la tercera edad.
- v) La asistencia con apoyos técnicos y económicos para el fortalecimiento familiar, a través de planes, programas y proyectos que tiendan a la desinternación de niñas, niños y adolescentes.
- w) Promover la articulación con los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que al efecto implementen los Municipios y Comunas.
- x) Ejecutar descentralizadamente políticas de promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

**ARTÍCULO 34.-** Comisión Interministerial de la Niñez, Adolescencia y Familia. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en su carácter de Autoridad de Aplicación del Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, contará con la colaboración de una Comisión Interministerial para la Promoción y Protección de los Derechos del Niño, integrada por miembros cuyo cargo no podrá ser inferior al de Director de Jurisdicción o en su caso nivel equivalente, uno por cada Ministerio y Secretaría perteneciente a la Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo, que estuvieren relacionados directamente con la Protección de derechos

establecida mediante la presente Ley.

Formarán parte de la Comisión Interministerial todos aquellos Ministerios y Secretarías cuya participación resulte necesaria, a los fines del Sistema de Promoción y Protección Integral y estará presidida por la/el Secretaria/o de Niñez Adolescencia y Familia.

Sus funciones serán:

a) La coordinación de las políticas públicas y optimización de los recursos del Estado provincial, sobre la base del plan de acción elaborado por la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia.

b) Coordinar acciones en el abordaje de las situaciones y en la aplicación de las medidas que se adopten entre los organismos, servicios, dispositivos o entidades de los distintos Ministerios y Secretarías de Estado.

c) Colaborar con la Autoridad de Aplicación en el monitoreo, evaluación, diseño, implementación y funcionamiento del Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral de Derechos.

d) Elaborar Protocolos y Procedimientos de Intervención conjunta y articulada.

**ARTÍCULO 35.-** Autoridades administrativas de promoción y protección de derechos del ámbito regional - Dependencias descentralizadas de la autoridad de aplicación - Servicios locales de promoción y protección de derechos.

a) La Autoridad de Aplicación Provincial implementará la descentralización regional en el territorio de la provincia, a los fines de la promoción, protección y restitución de derechos de las personas sujetos de esta Ley, a través de dependencias específicas creadas a esos efectos.

Las dependencias descentralizadas de la Autoridad de Aplicación tendrán como autoridad regional a un Delegado, quien actuará en articulación y en conjunto con las autoridades administrativas locales de municipios y comunas creadas a tales efectos, y con las distintas dependencias de la Secretaría.

La Autoridad de Aplicación Provincial y/o las Unidades de Desarrollo Regionales (UDER) coordinarán y articularán la asistencia técnico - jurídica a los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos para el diseño y articulación de programas y la intervención directa en las situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes y sus familias.

Las dependencias descentralizadas de la Autoridad de Aplicación intervendrán, mediante la adopción y aplicación de medidas de promoción y protección integral y medidas de protección excepcional de derechos conforme procedimiento establecido en la presente, y en coordinación con los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos y las dependencias de la SENAF.

En cada nivel del sistema, la autoridad administrativa coordinará con las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la niñez, las acciones y los programas con el fin de articular y potenciar los recursos existentes.

Los Servicios Locales de Promoción y Protección de derechos de los Municipios y Comunas son aquellas áreas responsables de desarrollar planes y programas de protección de derechos de la infancia a nivel local. La Autoridad de Aplicación Provincial propenderá a que en cada municipio o comuna se establezcan órganos especializados denominados Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos, los cuales podrán depender de la gestión de la provincia, del municipio o comuna, o de gestiones conjuntas a partir de la celebración de convenios con municipalidades o comunas.

Los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos son unidades técnico operativas con una o más sedes, cuya función será promover políticas públicas locales con enfoque de derecho, generar y promover los espacios de participación de niños, niñas y adolescentes y facilitar que las niñas, niños y adolescentes que vean amenazados o violados sus derechos, puedan acceder a los programas y planes disponibles en su comunidad.

Los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos y/o las Unidades de Desarrollo Regional (UDER) deberán contar con equipos profesionales interdisciplinarios, los que se encargarán de adoptar y aplicar las medidas de protección integral con la asistencia técnico-jurídica, acompañamiento y coordinación de la Autoridad Provincial.

## **TÍTULO IV SISTEMA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS APLICACIÓN MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS**

### **CAPÍTULO I - PRIMER NIVEL**

**ARTÍCULO 36.-** Medidas de Promoción de derechos y prevención de su vulneración – Primer Nivel. La Autoridad de Aplicación Provincial coordinará con las dependencias del Estado Nacional, Provincial y Municipal, propendiendo una institucionalidad única para la infancia, la adolescencia y la familia en la provincia de Córdoba, coadyuvando para el fortalecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interdisciplinaria entre los diferentes niveles de la administración del Estado Nacional, Provincial y los Estados Municipales y/o Comunes, como así también con la sociedad civil, con el objetivo de hacer más eficaz y eficiente la política pública y el accionar que se impulsará desde la Secretaría.

Implementará políticas en un primer nivel de actuación, destinadas al desarrollo armónico de la infancia y la adolescencia en familia, mejorando los niveles y la calidad de la educación, de la salud física y mental, del hábitat, de la cultura, de la recreación, del juego, del acceso a los servicios, y de la seguridad social, generando la adecuada inclusión social.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia o el organismo que en el futuro la reemplace, actuará en la promoción de derechos y prevención de su vulneración, a través de Programas,

Planes y Proyectos, y la descentralización regional de los mismos en el territorio provincial.

Las Autoridades Administrativas de Promoción y Protección de Derechos en el Ámbito de los Municipios y Comunas son aquellas áreas responsables de desarrollar planes y programas de promoción y protección de derechos de la Niñez a nivel local.

Integran y deberán funcionar de manera articulada y coordinada, en este primer nivel de intervención con la SENAF como Autoridad de Aplicación Provincial, el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, la Comisión Interministerial, los Municipios o Comunas y los Consejos Locales de Infancia con representación de los miembros de la Sociedad Civil.

## **CAPÍTULO II – SEGUNDO NIVEL**

**ARTÍCULO 37.-** Medidas de Protección de Derechos – Segundo Nivel. Son aquellas adoptadas y emanadas por la Autoridad de Aplicación, sus dependencias, Delegaciones Regionales (UDER) y/o por las Autoridades Administrativas de Promoción y Protección de Derechos en el Ámbito de los Municipios y Comunas, ante la amenaza o violación de los derechos o garantías de una o varias niñas, niños o adolescentes individualmente considerados, para preservar o restituir a los mismos el goce y ejercicio de los derechos amenazados y/o vulnerados o la reparación de las consecuencias de su vulneración.

La amenaza y/o vulneración a que se refiere este artículo puede provenir de la acción u omisión de los padres, la familia, representantes legales o responsables, o de la propia conducta de la niña, niño o adolescente, y/o del Estado, la Sociedad y los particulares.

Ante esta vulneración de derechos, todos los actores sociales involucrados (familias, comunidad, Estado y sociedad civil) deberán poner en práctica estrategias específicas de intervención inmediata y pertinente para restablecer ese derecho.

En ningún caso estas medidas pueden consistir en la separación del niño, niña o adolescente de su familia nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, a excepción de aquellas situaciones en que la permanencia en su medio familiar implique una amenaza o vulneración de sus derechos; debiendo en esta circunstancia adoptarse medidas de protección excepcional.

Las medidas de protección de derechos pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas en cualquier momento por acto de la Autoridad de Aplicación SENAF, sus dependencias, o las UDER cuando las circunstancias que las fundamentaron varíen o cesen.

**ARTÍCULO 38.-** Denuncia. La niña, niño o adolescente, la persona física o jurídica, pública o privada, gubernamental o no gubernamental, que haya por cualquier medio tomado conocimiento de un hecho o acto que vulnere, impida o afecte de cualquier modo la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, puede formular denuncia ante la Autoridad de Aplicación y/o sus dependencias, ante las UDER, Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos o ante cualquier agente público. Éste último deberá inmediatamente derivarla a la Autoridad de Aplicación, sus dependencias, ante la UDER, que de conformidad a su competencia regional deba intervenir.

**ARTÍCULO 39.-** Información. La información recepcionada en los términos del artículo anterior, debe ser documentada en el formulario que por vía reglamentaria se preverá, en el que deben asentarse todos los datos aportados o colectados al tiempo de la denuncia o noticia, sin incursionar en otros detalles que no se hallen especificados. Se debe derivar de modo inmediato la comunicación y de ser pertinente a la persona que haga conocer la noticia a la Autoridad de Aplicación y/o las dependencias correspondientes de la SENAF y/o a la UDER y/o a los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos, que de conformidad a su competencia territorial corresponda intervenir. Estas deberán articular adecuadamente el abordaje de la situación con los recursos locales de promoción y protección de derechos.

Debe evitarse toda intromisión o exposición al relato voluntario o provocado de la niña, niño o adolescente o de la persona que hace conocer las circunstancias que determinan la intervención.

De requerirse atención médica, se debe dar intervención al servicio de salud estatal más próximo, con información concreta que se trata de un caso de protección de derechos de una niña, niño o adolescente.

Comprobada la amenaza o violación de derechos, deben adoptarse, entre otras, las siguientes medidas de Promoción y protección integral:

a) Aquellas tendientes a que Niños, Niñas y Adolescentes permanezcan conviviendo con su grupo familiar;

b) Inclusión de Niños, Niñas y Adolescentes y las Familias respectivas, en programas tendientes a la educación y/o capacitación de los mismos, y/o en su caso a la inserción laboral si conforme a derecho correspondiere.

c) Inclusión de Niños, Niñas y Adolescentes y las Familias respectivas, en programas tendientes al fortalecimiento y apoyo familiar.

d) Cuidado de Niños, Niñas y Adolescentes en su propio hogar, orientando y apoyando a los padres, representantes legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, juntamente con el seguimiento temporal de la Familia y de Niños, Niñas y Adolescentes a través de un programa.

e) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico ambulatorio de Niños, Niñas y Adolescentes o de alguno de sus padres, responsables legales o representantes.

f) Asistencia económica.

g) Inclusión en espacios de participación deportivos y culturales dentro de la comunidad de las niñas, niños y adolescentes y la familia;

La presente enunciación no es taxativa.

Los programas deben desarrollar acciones de reparación y de reinserción social en miras de una intervención que propenda al desarrollo integral y armónico del niño, niña y/o adolescente en su medio familiar y/o comunitario. Se aplicarán prioritariamente aquellas medidas de promoción y protección integral de derechos que tengan por finalidad la preservación y el fortalecimiento de los vínculos familiares con relación a Niños, Niñas y Adolescentes.

Cuando la amenaza o violación de derechos sea consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, económicas, laborales o de vivienda, las medidas de promoción y protección serán los programas dirigidos a brindar ayuda y apoyo, incluso económico, con miras al mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares.

Corresponde a este segundo nivel intervenir en las situaciones de urgencia y en todas las situaciones de amenaza o vulneración de derechos a niñas, niños y adolescentes.

En este segundo nivel de intervención actuarán articuladamente y de acuerdo resulte necesario la Autoridad de Aplicación Provincial, las dependencias de la SENAF, La Comisión Interministerial, las Unidades de Desarrollo Regional (UDER) y los Municipios o Comunas a través de los Servicios locales de Promoción y Protección de Derechos con los efectores de salud, educación, desarrollo social, justicia, industria y trabajo y gobierno, con interacción y gestión asociada con Organizaciones de la Sociedad Civil.

**ARTÍCULO 40.-** Intervención - Entrevista. La Autoridad de Aplicación Provincial, sus dependencias, las UDER según corresponda, y/o los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos, al tomar conocimiento de una situación de vulneración de derechos, dará intervención a los equipos técnicos interdisciplinarios disponibles en el ámbito territorial pertinente, a los fines de relevar y diseñar la estrategia de abordaje, de la misma.

El equipo interdisciplinario debe mantener con la niña, niño o adolescente una entrevista personalizada en un ámbito adecuado a la edad y etapa evolutiva de la niña, niño o adolescente, respetando al máximo los derechos previstos en la presente Ley.

Debe citar a los familiares, representantes, responsables o allegados involucrados de la niña, niño o adolescente, a una entrevista con el equipo interdisciplinario correspondiente. En dicha entrevista se debe poner en conocimiento de los familiares o responsables la petición efectuada, la forma de funcionamiento del Sistema de Promoción y Protección de Derechos, los programas existentes para dar solución a la problemática planteada y su forma de ejecución, los resultados esperados, los derechos de los que goza la niña, niño o adolescente, el plan de seguimiento y el carácter consensuado de la decisión que se adopte.

El Decreto Reglamentario deberá establecer los protocolos de intervención, como así también otras formalidades a cumplir por las dependencias de Promoción y Protección de Derechos del ámbito que correspondiere, incluidos los municipios y comunas.

**ARTÍCULO 41.-** Adopción de la medida de protección. Los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos que conforme al territorio provincial corresponda su actuación, y/o Unidades Descentralizadas de la Autoridad de Aplicación, o la Autoridad de Aplicación y/o sus dependencias, con el informe técnico interdisciplinario adoptarán todas las medidas de protección que dispone la presente Ley, lo que deberá ser debidamente documentado por los organismos intervinientes, constituyéndose así en la fundamentación necesaria ante la eventual adopción de medidas de protección excepcionales.

El procedimiento es escrito y breve, con participación activa de la niña, niño o adolescente, su familia nuclear o ampliada o sus representantes o responsables, y los actos administrativos que se implementen e instrumenten no podrán ser coactivos, ni implicar la separación del niño, niña o adolescente de su familia, como tampoco producir alteraciones sustanciales o permanentes a su condición jurídica.-

### CAPÍTULO III – TERCER NIVEL

**ARTÍCULO 42.-** Medidas Excepcionales – Tercer Nivel. Son aquellas que se adoptan cuando las niñas, niños y adolescentes estuvieran temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio.

Tienen como objetivo la conservación o recuperación por parte del sujeto del pleno ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias y sólo proceden cuando la aplicación de las medidas de protección integral resulten insuficientes o inadecuadas para su situación articular.

Sólo serán procedentes cuando, previamente, se hayan cumplimentado debidamente las medidas dispuestas en los artículos 36, 37 y siguientes de la presente.

Estas medidas son limitadas en el tiempo, no pudiendo exceder de noventa días (90), debiendo ser revisadas periódicamente, plazo que debe quedar claramente consignado al adoptarse la medida y sólo se pueden prolongar mientras persistan las causas que les dieron origen, con el correspondiente control de legalidad.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, las dependencias que ésta autorice y las UDER, son los organismos facultados para adoptar medidas excepcionales, las que deben ser informadas a la Dirección de Asuntos Legales de la SENAF, para que ésta a través de su dependencia jurídica específica, proceda a elevar dentro del término de 24 horas, a la autoridad judicial competente, el respectivo informe, para el debido control de la legalidad, debiendo en todos los casos adjuntar los informes técnicos que den fundamento a la medida adoptada.

Los equipos técnicos de los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos y/o las organizaciones de la Sociedad Civil en su caso, y/o las dependencias de la SENAF procederán a cumplimentar las medidas de protección excepcionales que hubieren sido adoptadas por las

Dependencias Descentralizadas de la Autoridad de Aplicación o la Autoridad de Aplicación y/o sus dependencias conforme a lo establecido en el presente.

La Autoridad de Aplicación, a través de sus dependencias autorizadas al efecto, será la única facultada para disponer los egresos de niños, niñas, y adolescentes que hubieren sido privados de su centro de vida, cualquiera fuere el ámbito en que se encontraren albergados, como así también de las innovaciones a la medida excepcional que oportunamente hubiere dispuesto.

**ARTÍCULO 43.-** Criterios. Las medidas establecidas en el artículo anterior, se aplican conforme a los siguientes criterios:

a) Permanencia temporal en ámbitos familiares considerados alternativos. Las medidas consisten en la búsqueda e individualización de personas vinculadas a ellos a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según costumbre local, en todos los casos teniendo en cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes;

b) Sólo en forma excepcional, subsidiaria y por el más breve lapso posible puede recurrirse a una forma convivencial alternativa a la de su grupo familiar, debiéndose propiciar, a través de mecanismos rápidos y ágiles, el regreso de las niñas, niños y adolescentes a su grupo o medio familiar y comunitario. Al considerar las soluciones se prestará especial atención a la continuidad en la educación de las niñas, niños y adolescentes, y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Estas medidas deberán ser supervisadas por el organismo administrativo local competente y judicial interviniente;

c) Las medidas se implementarán bajo formas de intervención no sustitutivas del grupo familiar de origen, con el objeto de preservar la identidad familiar de las niñas, niños y adolescentes;

d) Las medidas de protección excepcional que se tomen con relación a grupos de hermanos deben preservar la convivencia de los mismos;

e) En ningún caso, las medidas de protección excepcionales pueden consistir en privación de la libertad salvo los casos previstos en las normativas vigentes;

f) No podrá ser fundamento para la aplicación de una medida excepcional, la falta de recursos económicos, físicos, de políticas o programas del organismo administrativo.

g) Permanencia temporal en centros terapéuticos de salud mental o adicciones.

**ARTÍCULO 44.-** Intervención Administrativa. La intervención de las autoridades administrativas puede ser requerida por:

a) La propia niña, niño o adolescente, no siendo necesario que concurra con la asistencia de sus padres o representantes legales.

b) Los representantes legales de las niñas, niños y adolescentes, o miembros de su familia o de su centro de vida. La Autoridad Administrativa evaluará si es necesario proteger la identidad de la persona requirente.

c) Cualquier agente o miembros de los equipos técnicos intervinientes del Estado nacional, provincial municipal o comunal.

d) Por miembros de la comunidad agrupados o no.

La presentación realizada ante la Autoridad Judicial, deberá ser derivada en forma inmediata por ésta a la Autoridad de Aplicación, reservándose el control de la legalidad para su oportunidad.

**ARTÍCULO 45.-** Procedencia. Los respectivos equipos técnicos intervinientes, solicitarán a la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, y/o sus respectivas dependencias, y/o las Unidades de Desarrollo Regional (UDER) y/o los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos, la aplicación de una medida excepcional, una vez que hayan determinado que se ha agotado la aplicación de medidas de protección integral, y que persista la situación de amenaza o vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.

En el pedido fundado debe constar un detalle circunstanciado de las medidas de protección adoptadas, una evaluación de las razones de su fracaso y una sugerencia fundada de la medida de protección excepcional que se estima conveniente adoptar.

El pedido fundado debe acompañarse con los informes de los profesionales del equipo interdisciplinario interviniente.

Los trámites administrativos que demande la adopción de la medida de protección excepcional no obstan su aplicación urgente e inmediata, cuando la respectiva autoridad interviniente evalúe que la no aplicación urgente e inmediata de la misma, implique un grave riesgo para la vida e integridad psicofísica de la niña, niño o adolescente.

**ARTÍCULO 46.-** Intervención de las unidades de desarrollo regional y de la autoridad de aplicación provincial. En la aplicación de una medida de protección excepcional, las Unidades de Desarrollo Regional (UDER), dependientes de la Autoridad de Aplicación Provincial, evaluarán la situación y la conveniencia y procedencia de la medida de protección excepcional cuya adopción soliciten los respectivos equipos técnicos actuantes, pudiendo resolver la adopción de la medida de protección excepcional que se solicita u otra medida, que resulte más conveniente, conforme a los principios, derechos, garantías y procedimientos enunciados en la presente Ley.

**ARTÍCULO 47.-** Resolución. La Autoridad de Aplicación provincial y sus dependencias autorizadas al efecto, incluidas las UDER, son los únicos organismos con competencia para dirigir el procedimiento y para declarar y disponer fundadamente alguna medida de protección excepcional. Las medidas de protección excepcional son de aplicación restrictiva.

En todos los casos deben contar con la intervención jurídica a través de la Dirección de Asuntos Legales de la Secretaría, quien a posteriori de la adopción de la medida, fundamentará legalmente la misma, conforme informes técnicos remitidos por la autoridad interviniente, y elevará el respectivo informe a la autoridad judicial competente a los efectos del debido control de la

legalidad.

**ARTÍCULO 48.-** Notificación. Adoptada una medida excepcional, la misma debe notificarse debidamente a los representantes legales, familiares o responsables de la niña, niño o adolescente.

**ARTÍCULO 49.-** Remisión. Las actuaciones administrativas deben ser puestas a disposición del Juez o Tribunal Colegiado con competencia en la materia, a los fines de la realización del control de legalidad en el día siguiente hábil de adoptada la medida excepcional.

El funcionario que no dé efectivo cumplimiento a esta disposición, será pasible de las sanciones previstas en el Título XI – Libro Segundo - Capítulo IV del Código Penal.

De resultar necesario recurrir al empleo de la fuerza pública para el cumplimiento de la medida de protección excepcional, la autoridad de aplicación de la presente Ley, o las dependencias de la misma que estuvieren autorizadas, requerirán a la autoridad judicial competente las órdenes respectivas, y a ese solo efecto.

El incumplimiento de las medidas excepcionales por parte de la niña, niño o adolescente no pueden suponerle sanción alguna.

#### **CAPÍTULO IV ETAPA JURISDICCIONAL**

**ARTÍCULO 50.-** Control de legalidad. Recibidas las actuaciones por el Tribunal o Juzgado competente en la materia, el Juez dará audiencia a la niña, niño o adolescente, a sus representantes y a quienes tengan interés legítimo en la cuestión con presencia del ministerio pupilar, y resolverá por auto fundado y en el término de cinco días sobre la legalidad de las medidas excepcionales adoptadas por la Autoridad de Aplicación y/o sus dependencias autorizadas, ratificándolas o rechazándolas.

Si una vez recibidas las actuaciones se advierte que los informes técnicos no se hallan actualizados, o resulta indispensable un nuevo estudio relativo a la niña, niño o adolescente, o a su entorno familiar, podrá el Tribunal o Juzgado interviniente posponer la audiencia por un plazo máximo de tres días para posibilitarlo. Mientras se sustancie el trámite no se suspenderán las medidas otorgadas administrativamente.

**ARTÍCULO 51.-** Resolución. Resuelta la ratificación de la medida, el Tribunal o Juez competente notificará a la autoridad que solicitó el control de legalidad.

Rechazada la medida por el Tribunal o Juez competente, éste debe notificar a la respectiva autoridad administrativa que solicitó el control de legalidad, en cuyo caso la niña, niño o adolescente será reintegrado a la familia o centro de vida de donde fue retirado con motivo de las medidas de protección excepcionales.

La resolución adoptada debe ser notificada a la niña, niño o adolescente, su letrado si hubiera intervenido, los representantes legales, familiares o responsables del niño o la niña y sus letrados, el ministerio pupilar y demás partes en el proceso.

En contra de la resolución del Tribunal o Juez competente, procederá el recurso de apelación, el que deberá ser fundado e interpuesto en el término de cinco (5) días de notificado. En ningún caso el recurso interpuesto suspenderá la medida adoptada por la administración hasta tanto exista sentencia dictada por al Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar.

La Autoridad de Aplicación Administrativa podrá, sin embargo, insistir en la medida de protección excepcional antes dispuesta, conforme nuevos informes y fundamentos así lo exijan. En tal caso, el Tribunal o Juez lo evaluará y dispondrá previa audiencia de los interesados en plazo no mayor a cinco días. Cuando las circunstancias lo requieran, adoptará las medidas urgentes indispensables hasta su resolución, que será recurrible para los interesados.

#### **TÍTULO V DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES**

**ARTÍCULO 52.-** Objeto. A los fines de esta Ley se consideran organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia a aquellas que, con Personería Jurídica y en cumplimiento de su misión institucional, desarrollen programas o servicios de información, difusión, promoción, tratamiento, protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

**ARTÍCULO 53.-** Obligaciones. Deben cumplir con los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, los Tratados Internacionales con raigambre Constitucional y Tratados Internacionales sobre los Derechos Humanos en los que nuestro país sea parte, y observar los siguientes principios y obligaciones:

- a) Respetar y preservar la identidad de las niñas, niños y adolescentes y ofrecerles un ambiente de respeto, dignidad y no discriminación.
- b) Respetar y preservar los vínculos familiares o de crianza de las niñas, niños y adolescentes y velar por su permanencia en el seno familiar. No separar grupos de hermanos,
- c) No limitar ningún derecho que no haya sido limitado por una decisión judicial.
- d) Garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que les conciernan como sujetos de derechos.
- e) Mantener constantemente informado a la niña, niño o adolescente sobre su situación legal, en caso de que exista alguna causa judicial donde se pueda tomar una decisión que afecte sus intereses y notificarle, en forma personal y a su representante legal, toda novedad que se produzca en forma comprensible cada vez que la niña, el niño o el adolescente lo requiera.
- f) Brindar a las niñas, niños y adolescentes atención personalizada y en pequeños grupos.
- g) Ofrecer instalaciones debidamente habilitadas y controladas por la autoridad de aplicación

respecto de las condiciones edilicias, salubridad, higiene, seguridad y confort.

h) Rendir cuentas de los fondos recibidos del Estado de acuerdo a lo establecido por el organismo estatal del cual haya recibido el financiamiento.

**ARTÍCULO 54.-** Incumplimiento. En caso de incumplimiento de las obligaciones a las que se encuentran sujetas las organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia mencionadas por esta ley, la Autoridad de Aplicación debe promover ante los organismos competentes, la implementación de las medidas que correspondan.

**ARTÍCULO 55.-** Registro de las organizaciones. Créase en el ámbito de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y en forma coordinada con la Dirección de Personas Jurídicas, el Registro de las Organizaciones No Gubernamentales con Personería Jurídica relacionadas a la niñez y adolescencia, con el objeto de controlar y velar en cada departamento, por el fiel cumplimiento de los principios que establece esta ley, con comunicación a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia con miras a la creación del Registro Nacional de estas Organizaciones.

**ARTÍCULO 56.-** Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia conocerá en los recursos extraordinarios que resultaren procedentes, según la materia de que se trate.

**ARTÍCULO 57.-** Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar. La Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar será competente para conocer y resolver:

a) En única instancia, de los delitos atribuidos a niños y/o adolescentes que fueren punibles conforme a lo dispuesto por la legislación vigente;

b) En la imposición de penas, o medidas socio-educativas y/o correctivas a los niños y adolescentes, cuando la declaración de responsabilidad hubiera correspondido a otro Tribunal;

c) En los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones de los Jueces de Niñez, Juventud y Violencia Familiar y Jueces Penales Juveniles;

d) En las quejas por retardo de justicia y denegación de recursos de los Juzgados de Niñez, Juventud y Violencia Familiar, y de los Juzgados Penales Juveniles;

e) En las cuestiones de competencia que se suscitaren entre los tribunales jerárquicamente inferiores;

f) En la recusación e inhibición de sus miembros y de los Jueces de Niñez, Juventud y Violencia Familiar, y Penales Juveniles.

**ARTÍCULO 58.-** Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar. Será competente:

a) En el control de legalidad de las medidas de protección excepcional adoptadas respecto a niñas, niños y adolescentes por el Órgano Administrativo competente;

b) En el conocimiento y resolución de casos de violencia familiar, ley 9.283;

c) En las medidas de coerción indispensables, a requerimiento del Órgano Administrativo de protección, para hacer efectivas las medidas de protección excepcional que hubiere dispuesto;

d) En las actuaciones sumarias indispensables para el otorgamiento de guardas judiciales, cuando así lo requieran las prestatarias de servicios de la seguridad social, para garantizar a niños y adolescentes los beneficios sociales y asistenciales, conforme lo requiera la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, adjuntando constancia emitida por la prestataria del servicio certificando tales extremos.

e) En las recusaciones e inhibiciones de los Fiscales Penales Juveniles, Asesores y Secretarios, cuando se tratare de causas sustanciadas ante él.

f) En el otorgamiento de guardas preadoptivas, cuyo trámite será sumario.

g) Por denuncias o requerimientos de actuación ante la grave vulneración de los derechos, en los términos del artículo 31 de la presente Ley.

**ARTÍCULO 59.-** Juez Penal Juvenil. El Juez Penal Juvenil será competente para:

a) Juzgar, en única instancia, en las causas por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en perjuicio de niños y adolescentes;

b) Disponer las medidas cautelares, de coerción y de protección, durante la actuación de policía judicial, la investigación preparatoria fiscal y el enjuiciamiento respecto a imputados por delitos cometidos siendo menores de dieciocho años;

c) Resolver las oposiciones e instancias de sobreseimiento que se suscitaren durante la investigación penal preparatoria que practican los Fiscales en lo Penal Juvenil;

d) Conocer y resolver en los delitos atribuidos a niños y adolescentes que no fueren punibles por su edad de acuerdo a lo dispuesto por la legislación vigente;

e) Juzgar las faltas cometidas por menores de dieciocho años;

f) Resolver las recusaciones e inhibiciones de los Fiscales en lo Penal Juvenil, Asesores y Secretarios en las causas que se suscitaren ante ellos.

**ARTÍCULO 60.-** Fiscal Penal Juvenil. Corresponderá al Fiscal Penal Juvenil:

a) Practicar la investigación preparatoria en los delitos de acción pública que se atribuyeren a menores de dieciocho años, y en el delito de incumplimiento de deberes de asistencia familiar en perjuicio de menores de dieciocho años;

b) Ejercer la acción penal pública en juicio ante los Jueces y la Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar.

c) Velar en general por el cumplimiento de las leyes, decretos, ordenanzas y edictos de protección de niños y adolescentes menores de edad, accionando en consecuencia;

d) Intervenir en las cuestiones de jurisdicción y competencia concernientes a los Juzgados Penales Juveniles.

**ARTÍCULO 61.-** Asesor de Niñez y Juventud. Corresponderá al Asesor de Niñez y Juventud:

a) Representar con carácter promiscuo a los niños y adolescentes en los casos a que se refiere la presente Ley y de conformidad a lo previsto por el art. 59 del Código Civil;

b) Asesorar, patrocinar o representar al niño o adolescente ante los jueces de niñez,

Juventud y Violencia Familiar cuando el mismo lo requiriere, y ejercer la defensa del niño o adolescente imputado cuando no propusiere defensor particular o cuando el designado no aceptare el cargo;

c) Cumplir todas las funciones que en especial le asignaren las leyes.

**ARTÍCULO 62.-** Competencia subsidiaria. En todos los lugares de la Provincia en que no hubieren Juzgados de Niñez, Juventud y Violencia Familiar, y/o en su caso Juzgados Penales Juveniles, será competente el Juez de Control, y en su defecto por el Juez de Primera Instancia en lo Civil.

Si no hubiere Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar, la competencia asignada a ésta será ejercida por la Cámara en lo Criminal y la Cámara en lo Civil de acuerdo a la materia en cuestión.

**ARTÍCULO 63.-** Personal. El Tribunal Superior de Justicia establecerá la dotación y distribución del personal jerárquico y auxiliar de los Fueros de Niñez, Juventud y violencia familiar y de Penal Juvenil. Los Secretarios tendrán a su cargo el trámite de los asuntos respectivos, los actos y procedimientos que les encargare el Tribunal, y las relaciones con la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

**ARTÍCULO 64.-** Recusación e inhibición. Los magistrados y funcionarios deberán inhibirse y podrán ser recusados por las causales y procedimientos que contempla el Código Procesal Penal.

**ARTÍCULO 65.-** Informes periódicos. En el caso de niños y/o adolescentes que siendo menores de edad hubieren cometido hechos tipificados como delito penal por el ordenamiento vigente, el Juez Penal Juvenil deberá mantener contactos de manera periódica y personal, con los niños y adolescentes institucionalizados, a los fines de oírlos e informarles periódicamente sobre el estado de las causas respectivas.

**ARTÍCULO 66.-** Equipo Técnico Judicial. Sin perjuicio de la intervención que compete a la autoridad administrativa de aplicación, los Tribunales de Niñez, Juventud y Violencia Familiar podrán disponer del auxilio de un cuerpo técnico judicial especializado, cuyo informes no tendrán efectos vinculantes y su actuación deberá limitarse a las cuestiones que sean de competencia del ámbito judicial conforme la presente Ley.

En las Circunscripciones Judiciales en que no se hubieren organizado los equipos técnicos judiciales, los tribunales podrán recurrir a profesionales pertenecientes a entidades privadas de bien público de trayectoria reconocida.

**ARTÍCULO 67.-** Fines. La actuación del Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar tendrá por objeto proveer a la competencia asignada conforme el artículo 58 de la presente ley. Dicha actuación se cumplirá de conformidad al procedimiento regulado en la presente, y subsidiariamente a las del Código Procesal Civil en cuanto fueren pertinentes.

**ARTÍCULO 68.-** Actuación del Asesor de Niñez y Juventud: El Asesor de Niñez y Juventud conocerá de las situaciones mencionadas en el artículo precedente y las del artículo 61 de la presente Ley. Podrá en su caso convocar a los interesados y luego de oírlos emitir las consideraciones y recomendaciones que estime adecuadas.

**ARTÍCULO 69.-** Conocimiento del niño o adolescente. Avocado el Juez, conforme la competencia acordada por el artículo 58 de la presente Ley, deberá conocer y oír en forma directa y personal al niño o adolescente y a sus representantes legales en el término de cuarenta y ocho (48) horas.

**ARTÍCULO 70.-** Exclusión provisoria del hogar. Cuando se produjese una situación de Violencia Familiar conforme las previstas por la Ley 9283 y resultase víctima de tal violencia un niño, niña y/o adolescente, el Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar en virtud de las competencias que le son inherentes conforme la citada Ley, o a requerimiento de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, deberá excluir provisoriamente del hogar al adulto supuesto responsable, para proteger el derecho de aquel a permanecer en su medio familiar, debiendo poner en conocimiento de manera inmediata a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en relación a los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes.

**ARTÍCULO 71.-** Asistencia y representación. En todas las actuaciones en las que tuviere competencia y actuare el Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de acuerdo a la presente Ley, deberán contar con la intervención del Asesor de Niñez y Juventud, bajo pena de nulidad.

**ARTÍCULO 72.-** Actuación gratuita. Las actuaciones ante el fuero de Niñez, juventud y Violencia Familiar serán gratuitas, a excepción de los honorarios que genere la actuación de profesionales requeridos en forma particular.

**ARTÍCULO 73.-** Carácter de las actuaciones. Las actuaciones en que intervenga la autoridad judicial conforme competencia acordada por la presente Ley, serán reservadas y no podrán ser retiradas del Tribunal, salvo para la intervención del Ministerios Públicos Fiscal o Pupilar, y de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia, conforme competencias acordadas por la presente Ley.

Cuando fueren requeridos por otros tribunales en causas conexas, se remitirán copias de las mismas.

Las partes legitimadas podrán acceder al conocimiento de dichas actuaciones.

El Tribunal deberá otorgar copias a los letrados intervinientes cuando así lo solicitaren por razones de su ministerio.

**ARTÍCULO 74.-** Publicidad. Prohibición. Está prohibida toda publicidad respecto a las actuaciones en el fuero de Niñez, Juventud y Violencia Familiar, salvo expresa autorización de los magistrados.

**ARTÍCULO 75.-** Diligencias. Cuando se tratare de niños y adolescentes que se encontraren en las situaciones mencionadas en el artículo 58 de la presente Ley, el Juez de Niñez, Juventud y



Violencia Familiar podrá practicar todas las diligencias útiles al efecto. Las partes podrán proponer todas las pruebas que hicieren a su interés.

**TÍTULO VI**  
**PROCEDIMIENTO PENAL JUVENIL**

**CAPÍTULO I:**  
**Disposiciones Generales**

**ARTÍCULO 76.-** Objeto primordial. El procedimiento penal juvenil tendrá por objeto primordial la protección y asistencia integral de los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, debiendo partir de un diagnóstico de la situación personal, familiar y ambiental, y garantizar lo conducente al logro de su integración social a través de una atención que dé prioridad al abordaje educativo multidisciplinario, con especial énfasis en su capacitación para el acceso al mercado laboral. Serán de aplicación los artículos 72 y 73 de la presente Ley.

**ARTÍCULO 77.-** Casos de conexión. Las causas serán conexas en los supuestos previstos por el Código Procesal Penal.

Cuando se substanciaren causas conexas ante los Tribunales de Niñez los procesos se acumularán y serán competentes:

- a) El Tribunal competente para juzgar será el que corresponda por la comisión del primer hecho;
- b) Si los hechos fueren simultáneos, o no constare debidamente cuál se cometió primero, el que hubiere prevenido;
- c) En último caso, el que designare la Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar.

**ARTÍCULO 78.-** Excepciones. La acumulación de las actuaciones no será dispuesta cuando determinare un grave retardo para alguna de ellas, aunque en todas deberá intervenir el mismo Tribunal de acuerdo con las normas precedentes.

Cuando hubieren intervenido en el hecho niños o adolescentes sometibles a proceso penal y niños o adolescentes no punibles, la acumulación sólo procederá con relación a los primeros, con la excepción prevista en el párrafo anterior.

Si resultare que un niño o adolescente no punible se encuentra a disposición conjunta de dos o más Tribunales, las medidas tutelares serán ordenadas por el Juez que interviniere en la causa de mayor gravedad, contemplando en lo posible los requerimientos de los demás.

**ARTÍCULO 79.-** Coparticipación o conexión con mayores. Cuando en el mismo hecho hubieren participado un mayor de dieciocho (18) años y un niño o adolescente, la investigación penal preparatoria estará a cargo del Fiscal de Instrucción, el que inmediatamente deberá dar intervención al Juez Penal Juvenil para que proceda al resguardo y vigilancia del niño o adolescente con arreglo al artículo 61, remitiéndole copia de los requerimientos y resoluciones recaídas en la causa.

El Tribunal de Juicio se limitará, en su caso, a la declaración de responsabilidad del niño o adolescente, debiendo remitir copia de la sentencia al Juez Penal Juvenil interviniente.

Durante el proceso se reconocerán al niño o adolescente todas las garantías que le acuerda la presente Ley, debiendo intervenir el Ministerio Público bajo sanción de nulidad.

**ARTÍCULO 80.-** Conocimiento personal. En todos los casos de su competencia, el Juez Penal Juvenil deberá tomar conocimiento directo y personal del niño o adolescente y de sus padres o encargados.

Ordenará los estudios y peritaciones conducentes al mejor conocimiento de la personalidad de aquél y de las condiciones familiares y ambientales en que se encontrare.

**ARTÍCULO 81.-** Medidas tutelares provisionales. Durante la investigación, y previa recepción de los estudios pertinentes, el Juez podrá disponer provisoriamente, en interés del niño o adolescente:

a. Su mantenimiento en el medio familiar o su cuidado bajo la guarda a un tercero, cuando la misma de satisfacción a los siguientes requisitos:

- 1) Documento de identidad;
- 2) Partida de matrimonio, si correspondiere, o convivencia;
- 3) Certificado de carencia de antecedentes penales;
- 4) Certificado de domicilio;
- 5) Certificado de trabajo;
- 6) Certificado de salud física y mental, otorgado por un establecimiento oficial;
- 7) Libreta de Familia o partidas, cuando existiere parentesco entre el niño o adolescente y el solicitante, pudiendo determinar las medidas reguladas en los artículos 37, 38 y 39, 40 y 41 de la presente Ley.

b. La sujeción de la guarda a un régimen de libertad asistida;

c. Su atención integral a través de programas, proyectos y/o centros de protección integral cuando el niño o adolescente careciera de familia o de terceros en condiciones de cumplir eficientemente la guarda y apoyar la libertad asistida;

d. La atención de la especial problemática de salud o de adicciones que pudiese presentar;

e. Su atención integral y excepcional en un establecimiento cuyo régimen incluya medidas que impidan la externación por su sola voluntad, una vez evaluada fehacientemente la ineficacia de las alternativas previstas precedentemente.

En este supuesto, el niño o adolescente deberá permanecer bajo este régimen el menor tiempo posible, el que no podrá exceder los seis (6) meses, salvo que el Juez requiera autorización en forma fundada, remita todos los antecedentes que obraren en la causa a la Cámara de Niñez,

Juventud y Violencia Familiar y ésta otorgue la correspondiente prorroga cuando -evaluados todos los antecedentes- la estime imprescindible para el cumplimiento de la finalidad tuitiva.

El órgano de ejecución informará periódicamente al Juez sobre la situación del niño o adolescente, su evolución y posibles alternativas de movilidad dentro del sistema de protección existente.

**ARTÍCULO 82.-** Innovación. La innovación sobre las medidas provisionales no podrá efectuarse sin previa vista al Asesor de Niñez y Juventud, salvo en los casos de suma urgencia, en que deberá ser notificado en forma inmediata, a los fines pertinentes.

**ARTÍCULO 83.-** Recursos. La imposición o innovación de medidas provisionales será apelable, sin efecto suspensivo, por el Asesor de Niñez y Juventud, el defensor del niño o adolescente y sus padres o encargados.

**ARTÍCULO 84.-** Medida tutelar urgente. Cuando el niño o adolescente deba permanecer en condiciones que no admitan su externación, será colocado en un establecimiento idóneo para la realización de los estudios y peritaciones, y la determinación de las medidas provisionales que prevé el artículo 81.

**ARTÍCULO 85.-** Asistencia letrada. Defensa técnica. Los padres o encargados podrán actuar con patrocinio letrado.

Sin perjuicio de la intervención del Asesor de Niñez y Juventud, el niño o adolescente no punible podrá contar con asistencia letrada particular cuando le fuere provista por sus padres, encargados o personas de su confianza.

Si el niño o adolescente estuviere sometido a proceso penal, deberá disponer de defensor en la forma y bajo las sanciones previstas por el Código Procesal Penal.

## **CAPÍTULO II**

### **Niñas, Niños y Adolescentes no punibles**

**ARTÍCULO 86.-** Reglas aplicables. Cuando al niño o adolescente se le atribuyeren delitos que no autorizan su sometimiento a proceso penal, o faltas, el Juez Penal Juvenil procederá a la investigación del hecho con sujeción a las normas constitucionales y legales en la materia y subsidiariamente al Código Procesal Penal.

**ARTÍCULO 87.-** Remisión. Cuando lo considere conveniente, y sin perjuicio de la investigación, el Juez podrá, de oficio o a solicitud de parte, eximir al niño o adolescente de las medidas tutelares que procedieren, aún en forma provisional, remitiéndolo a servicios alternativos de protección que eviten su disposición judicial, en los términos del Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos previsto en la presente Ley.

**ARTÍCULO 88.-** Medidas de coerción. Si el niño o adolescente hubiere sido privado de su libertad por arresto o aprehensión, con arreglo a lo previsto por el Código Procesal Penal, el Juez hará cesar esta situación de inmediato conforme a lo establecido en los artículos 81 y 84.

Cuando el niño o adolescente no compareciere ante el Tribunal sin grave y legítimo impedimento, o se ausentare de su domicilio o del de sus guardadores, o fugare del establecimiento de internación, el Juez Penal Juvenil emplazará a los padres o encargados para que lo presenten en su sede o lo reintegren al establecimiento, según correspondiere.

Vencido el término acordado al efecto, y no habiéndose obtenido la presentación o el reintegro del niño o adolescente, el Juez Penal Juvenil podrá disponer su retiro del domicilio, u ordenar la ubicación de su paradero.

**ARTÍCULO 89.-** Vista. Audiencia. Concluida la investigación y reunidos los estudios y peritaciones legales, el Juez correrá vista al Asesor de niñez y juventud interviniente. Si de la opinión de éste resultare que el niño o adolescente debe ser entregado definitivamente a sus padres o encargados, el Juez así lo resolverá, archivando las actuaciones.

Si el Juez discrepare con el Asesor de niñez y juventud al respecto, o éste estimare que corresponde disponer definitivamente del niño o adolescente, se fijará una audiencia y se citará al Asesor de niñez y juventud, al niño o adolescente en cuestión, a los padres o encargados y a quienes les prestan asistencia letrada de oficio o patrocinio. También podrá citarse a los profesionales que hubieren producido informes técnicos con relación al caso.

En la audiencia el Juez, luego de tomar nuevo conocimiento y oír al niño o adolescente, ordenará que se lo retire de la audiencia, y acto seguido hará leer en alta voz por Secretaría los estudios y peritaciones reunidos.

Cumplida la lectura, el Juez oír a los profesionales que hubiesen comparecido, a los padres o encargados, a sus abogados y al Asesor de niñez y juventud en este orden, quienes dispondrán del tiempo que aquél prudencialmente fije, para referirse al caso en sus consideraciones de hecho y de derecho.

**ARTÍCULO 90.-** Sentencia. Recursos. Oídos todos, el Juez pasará a deliberar y dará a conocer su resolución definitiva.

Si la complejidad del asunto o circunstancias de tiempo hicieren necesario diferir la redacción de la sentencia, en dicha oportunidad se leerá tan sólo su parte dispositiva, fijándose audiencia para la lectura integral.

Esta se efectuará, bajo pena de nulidad, en el plazo máximo de quince (15) días, y valdrá siempre como notificación para todos los interesados.

La sentencia podrá ser apelada, sin efecto suspensivo, por el Asesor de niñez y juventud de Menores y los padres o encargados.

Habiéndose dispuesto medidas definitivas el Juez procederá a solicitar periódicamente un informe sobre la situación integral del niño o adolescente al órgano de ejecución, y por el lapso que

fuere necesario, hasta que los factores originarios de la situación atendida se reputaren superados.

### CAPÍTULO III

#### Menores de edad sometidos a proceso penal

##### SECCIÓN PRIMERA: Investigación

**ARTÍCULO 91.-** Reglas aplicables. Cuando correspondiere incoar proceso en contra de un menor de dieciocho (18) años, el Fiscal Penal Juvenil procederá con sujeción a las formas y garantías que contemplan las normas constitucionales y legales en la materia, y el Código Procesal Penal practicará la investigación penal preparatoria conforme a las reglas previstas para la investigación jurisdiccional en el Código Procesal Penal, salvo las normas que a continuación se establecen.

Las medidas cautelares, de coerción y de protección serán determinadas, desde el primer momento, por el Juez Penal Juvenil. La que autoriza el art. 95 se dispondrá a solicitud del ministerio fiscal, previa vista a la defensa, en tanto las tutelares se decidirán con arreglo a lo previsto por los arts. 82 y 85 de la presente Ley.

**ARTÍCULO 92.-** Coparticipación o conexión con mayores. En el supuesto previsto por el artículo 77, el Juez penal juvenil remitirá al Fiscal de Instrucción y al Tribunal de Juicio los informes y antecedentes que le fueren requeridos.

Mientras durare la investigación, el Juez penal juvenil podrá aplicar las medidas tutelares provisorias o urgentes, o la privación cautelar de libertad cuando correspondiere y le fuere requerida por el Instructor o el Tribunal de Juicio.

Si el Tribunal de Juicio hubiere declarado la responsabilidad del niño o adolescente, el Juez deberá remitir las actuaciones que obraren en su poder, y los estudios y peritaciones realizados, a la Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar para que se pronuncie sobre la imposición de la pena o de las medidas que fueren procedentes con arreglo a la legislación vigente.

**ARTÍCULO 93.-** Medidas de coerción. Las medidas de coerción quedarán sujetas a los requisitos, formas y garantías previstos por el Código Procesal Penal. No regirá la prisión preventiva.

Por ningún motivo la medida de detención podrá prolongarse más de treinta (30) días. Si la detención llegare al máximo legal y el Tribunal no hubiere adoptado alguna de las medidas que autorizan los artículos 82 y 95, el niño o adolescente será entregado por el órgano de ejecución a sus padres con inmediata noticia a aquél a sus efectos.

Si la demora en la detención y la entrega del niño o adolescente obedecieren al incumplimiento del órgano de ejecución en la producción de los estudios y peritaciones, el Tribunal remitirá los antecedentes al Fiscal de Instrucción en turno a los fines pertinentes.

**ARTÍCULO 94.-** Medida cautelar. La privación cautelar de libertad de un niño o adolescente sometido a proceso penal sólo podrá disponerse excepcionalmente, y por auto debidamente fundado, cuando existieren elementos de convicción suficientes de su participación y fuere absolutamente indispensable para asegurar la investigación y la actuación del régimen legal aplicable al caso, siendo procedente cuando:

a. Se tratare de un hecho ilícito reprimido con pena privativa de libertad cuyo mínimo no sea inferior a tres (3) años;

b. Cuando no dándose dicho supuesto, el niño o adolescente hubiere sido declarado rebelde en un proceso anterior, quebrantado el régimen de libertad asistida o abandonado el domicilio de sus padres o guardadores;

c. La decisión será apelable sin efecto suspensivo.

**ARTÍCULO 95.-** Cese. La privación cautelar de libertad cesará cuando la investigación demostrare que no hay elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación del niño o adolescente en el hecho investigado, o tan pronto hubiere desaparecido la necesidad prevista en el primer párrafo del artículo anterior.

El análisis de esta situación se efectuará, de oficio, cada tres (3) meses.

La decisión será apelable sin efecto suspensivo.

**ARTÍCULO 96.-** Derivación. Cuando fuere privado de su libertad, el niño o adolescente será derivado a un establecimiento idóneo al efecto, garantizándosele su atención educativa multidisciplinaria.

##### SECCIÓN SEGUNDA: Juicio

**ARTÍCULO 97.-** Reglas aplicables. En el juzgamiento, la Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar procederá con arreglo a lo dispuesto para el juicio común por el Código Procesal Penal, salvo las normas específicas establecidas en el presente Capítulo.

El Tribunal, en ningún caso, se integrará con jurados.

Para el ejercicio de su competencia podrá dividirse en Salas Unipersonales, con sujeción a los artículos 34 bis y 361 del Código Procesal Penal, excepto cuando se tratare de causas por delitos cuyos máximos penales superaren los seis (6) años de prisión o reclusión, o hubiere oposición del imputado.

**ARTÍCULO 98.-** Debate. Además de las propias del juicio común, durante el debate se observarán las siguientes normas:

a. El debate se realizará a puerta cerrada, y a la audiencia sólo podrán asistir el Fiscal, las partes, sus defensores, el Asesor de niñez y juventud, los padres, el tutor o guardador del niño o

adolescente, y las personas que tuvieren legítimo interés en presenciarlo;

b. El niño o adolescente sólo asistirá al debate cuando así lo solicitare, y siempre que mediare conformidad de sus representantes legales y del Asesor de niñez y juventud; o cuando su concurrencia fuere imprescindible. En este último supuesto, será alejado de él tan luego se cumpla el objeto de su presencia.

c. Antes de la discusión final se leerán los estudios y peritaciones relativas a la personalidad del niño o adolescente, sus condiciones familiares y ambientales, y se oír a los padres o encargados del niño o adolescente y a la autoridad responsable de la ejecución de las medidas tutelares ordenadas.

En caso de ausencia de estos últimos, sus declaraciones podrán ser suplidas con la lectura de los informes expedidos.

**ARTÍCULO 99.-** Sentencia. Declarada la responsabilidad del niño o adolescente, y verificado el cumplimiento del tratamiento tutelar, o reunida la informativa que lo supla, la Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar resolverá en audiencia, con arreglo al artículo anterior, sobre la eventual imposición de una pena. Si, al vencer el tiempo del tratamiento tutelar, resultare necesario prorrogarlo conforme a la legislación vigente, la Cámara -bajo sanción de nulidad- deberá resolverlo fundadamente.

**ARTÍCULO 100.-** Recursos. En contra de la sentencia declarativa de responsabilidad, como la que dispone la pena o una medida de seguridad, procederán los recursos extraordinarios previstos en el Código Procesal Penal.

### SECCIÓN TERCERA

#### Mayores de edad sometidos a proceso penal

**ARTÍCULO 101.-** Procedencia. El Fiscal Penal Juvenil practicará la investigación penal preparatoria, con arreglo a las disposiciones del Código Procesal Penal, en las causas iniciadas por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, por malos tratos, y por negligencia grave o continuada en perjuicio de menores de dieciocho (18) años.

No procederá la constitución de parte civil.

**ARTÍCULO 102.-** Juzgamiento. En el juzgamiento, el Juez procederá con arreglo a lo dispuesto para el juicio correccional en el Código Procesal Penal, con las modificaciones que siguen.

**ARTÍCULO 103.-** Procedimiento especial. El Juez fijará una audiencia a la que citará, con quince (15) días de antelación, al Fiscal, al Asesor de niñez y juventud, al imputado y sus defensores, como así también al querellante particular si lo hubiere, indicando que -dentro de los tres (3) primeros días del plazo de citación- deberá ofrecer toda la prueba que hiciere a sus respectivos intereses.

La prueba podrá diligenciarse antes de la realización de la audiencia, a pedido del oferente.

Si la investigación se hubiere cumplido en un Tribunal con asiento distinto, los términos previstos en el primer párrafo serán de veinte (20) y de cinco (5) días respectivamente.

En la audiencia, el Juez ordenará la lectura de la acusación, recibirá declaración al imputado y procederá a examinar la prueba rendida. Acto seguido concederá sucesivamente la palabra al Fiscal, al Asesor de niñez y juventud y a los defensores para que, en este orden, emitan sus conclusiones.

El Tribunal dictará sentencia, pudiendo fijar una prestación alimentaria en favor del niño o adolescente.

Contra la sentencia procederán los recursos extraordinarios previstos por el Código Procesal Penal.

### TÍTULO VII

#### DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

**ARTÍCULO 104.-** Defensa particular gratuita. A fin de posibilitar que los niños y adolescentes dispongan de defensa particular en forma gratuita, facúltase al Poder Ejecutivo a celebrar convenios con los Colegios de Abogados de cada Circunscripción Judicial. No regirá en tales casos el Código Arancelario, y habrá exención de pago de las tasas de justicia y sellados de ley.

**ARTÍCULO 105.-** Asesores Letrados Ad Hoc. En caso de ausencia transitoria, vacancia, impedimento del titular ó cuando mediara colisión de intereses entre las partes, la asistencia jurídica como Asesores Letrados a la que se refiere la presente Ley deberá ser prestada en cada una de las jurisdicciones, en primer término, por los procuradores fiscales designados por el Poder Ejecutivo y -en su defecto- por los abogados de la matrícula inscriptos.

**ARTÍCULO 106.-** Ley supletoria. En toda norma procedimental que la presente Ley no haya regulado expresamente, se aplicarán en forma supletoria, la Ley de Procedimiento administrativo, y el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba para las cuestiones de índole proteccional, y el Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba para las de índole Penal.

**ARTÍCULO 107.-** Modifícase el artículo 16 de la Ley 7676, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 16.- Los Tribunales de Familia conocerán de las siguientes causas:

- 1) Oposición a la celebración del matrimonio.
- 2) Venia supletoria matrimonial y otras autorizaciones.
- 3) Separación personal, divorcio y liquidación de la sociedad conyugal.
- 4) Disolución y liquidación de la sociedad conyugal sin divorcio (Artículos 1290 y 1294 del Código Civil.)

- 5) Nulidad del matrimonio y liquidación del patrimonio adquirido durante la unión.
- 6) Alimentos.
- 7) Filiación.
- 8) Otorgamiento de guardas judiciales no asistenciales, de niños, niñas y/o adolescentes, y de las guardas con fines adoptivos.
- 9) Régimen de Visitas.
- 10) Patria potestad.
- 11) Adopción de personas.
- 12) Tutela,
- 13) Autorización para disponer o gravar bienes de niños, niñas y adolescentes, y en los supuestos del Artículo 1277 del Código Civil.
- 14) En conflictos personales en las uniones de hecho estables, sumariamente acreditadas, aunque no haya habido descendencia, cuando hubiere violencia y no fuere competencia de otros fueros.
- 15) Toda otra cuestión personal derivada de la relación de familia."

**ARTÍCULO 108.-** Los actuales Jueces de Menores en lo Prevencional y Civil se desempeñarán en adelante como Jueces de Niñez, Juventud y Violencia Familiar, y los Jueces de Menores en lo Correccional, como Jueces Penales Juveniles, de acuerdo a lo que la presente ley dispone a su respecto.

**ARTÍCULO 109.-** Continuidad. Hasta tanto se instrumente la Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar en la Primera Circunscripción Judicial, las funciones que a la misma le asigna el artículo 57 de la presente Ley, continuarán siendo ejercidas por los órganos jurisdiccionales que las desempeñen al momento de la sanción de la presente.

**ARTÍCULO 110.-** Derogación. Derógase la Ley 9053, los artículos 2, 3, 16 y 20 bis de la Ley 9396 y toda otra norma que se oponga a los contenidos de la presente Ley, de la Convención Internacional sobre los derechos del Niño, de la Ley 23.849 de su aprobación y de la Ley Nacional N° 26061.

**ARTÍCULO 111.-** Dispónese de manera transitoria y ante casos de manifiesta urgencia, para aquellos territorios rurales y/o localidades alejadas de centros urbanos, que se encuentren dotados de dependencias pertenecientes al Poder Judicial y cuyos Municipios y/o Comunas no hayan instrumentado hasta el momento el Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel local, la aplicación por parte de la Autoridad Judicial de las medidas de protección excepcionales reguladas en los artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la presente Ley. En el día hábil inmediatamente posterior de disponer dicha medida, la referida autoridad deberá transferir la causa a la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, para su intervención.

**ARTÍCULO 112.-** Facúltase al Poder Ejecutivo para la creación de un Consejo Consultivo, conformado por expertos y especialistas en materia de niñez y adolescencia, el que tendrá por finalidad efectuar sugerencias, analizar la implementación práctica de la presente Ley, propiciar reformas y toda acción que entienda oportuna y pertinente en relación a todo lo vinculado con la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Estará integrado por un representante de cada uno de los estamentos, instituciones y organizaciones que a continuación se detallan:

- a) Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
- b) Iglesias o confesiones religiosas reconocidas.
- c) Universidades Públicas y privadas con ámbito de actuación en la Provincia de Córdoba.
- d) Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba.
- e) Organizaciones no gubernamentales con reconocida actuación en cuestiones vinculadas a la niñez, adolescencia y familia y que soliciten expresamente su inclusión.
- f) Colegios o Consejos Profesionales.
- g) Toda otra Institución con acreditada actuación en cuestiones vinculadas a niñez, adolescencia y familia y que solicite su inclusión.

El/la Titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia o el órgano que en el Futuro la sustituya será la representante del Poder Ejecutivo Provincial ante dicho Consejo y presidirá el mismo, pudiendo designar un suplente a los fines que la sustituya. Asimismo, brindará la infraestructura y los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento. El Cuerpo dictará su reglamento de funcionamiento.

**ARTÍCULO 113.-** Adhesión Municipios – Comunas. Invítase a los Municipios y Comunas a adherir a la presente Ley, y a suscribir con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, los convenios pertinentes a los fines de establecer y articular las políticas públicas necesarias y de establecer servicios locales de promoción, prevención y protección de derechos de gestión asociada, para que estos en sus localidades actúen de manera coordinada y articulada con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, las Dependencias Descentralizadas de la Autoridad de Aplicación que la misma disponga, los Consejos Locales de Infancia, como así también con los organismos gubernamentales y no gubernamentales de la ciudad o localidad de que se trate.

**ARTÍCULO 114.-** Autorízase al Poder Ejecutivo a modificar las partidas presupuestarias que requieran la aplicación de la presente Ley.

**ARTÍCULO 115.-** Vigencia. La presente Ley regirá desde el día de su publicación en el Boletín Oficial, salvo en lo que respecta a la organización de la Justicia Penal Juvenil que entrará a regir en el plazo de un año, prorrogable a solicitud del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía General a un año más.

**ARTÍCULO 116.-** El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente Ley en un plazo de ciento veinte (120) días.

**ARTÍCULO 117.-** Comuníquese al Poder Ejecutivo.

**Juan Schiaretti, Raquel Krawchik, Jorge Eduardo Córdoba.**

**PROYECTO DE LEY – 05351/L/10  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
SANCIONA CON FUERZA DE  
LEY:**

**PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y  
ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA**

**LIBRO I  
DE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS**

**TÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 1.-** Objeto.

La presente ley tiene por objeto la promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que se encuentren en el territorio de la provincia de Córdoba garantizando el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos y garantías reconocidos en la presente ley, la Constitución Nacional y Provincial la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, los tratados internacionales en que la Nación sea parte, la Ley Nacional 26.061, ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a la que la provincia adhirió por Ley 9396.

Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño.

La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces.

**Artículo 2.-** Aplicación Obligatoria

La normativa mencionada en el Art 1º es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad.

Los derechos y las garantías de los sujetos de esta Ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intangibles.

Los organismos administrativos provinciales, municipales y locales deben revisar la normativa que regula, y afecta el acceso o el ejercicio de derechos reconocidos a niñas, niños y adolescentes, adecuándola a los postulados contenidos en esta Ley.

En la aplicación e interpretación de la misma, de las demás normas y en todas las medidas que tomen o en las que intervengan instituciones públicas o privadas, así como los órganos legislativos, judiciales o administrativos es de consideración primordial el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

**Artículo 3.-** Sujetos comprendidos.

A los efectos de esta Ley, se entiende por niña, niño y adolescente a toda persona hasta los dieciocho (18) años de edad.

Las niñas, niños y adolescentes son titulares de todos los derechos y garantías fundamentales inherentes a su condición de persona y de los derechos específicos consagrados en esta Ley y gozan de su protección jurídica.

**Artículo 4.-** Interés Superior.

A los efectos de la presente Ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidas en esta Ley y los que en el futuro se reconozcan.

El reconocimiento del interés superior del niño implica el respeto a:

- a. La condición específica de las niñas, niños y adolescentes como sujetos sociales de derecho;
- b. El derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta cualquiera sea la forma en que se manifieste según su etapa de desarrollo;
- c. El derecho al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes en su medio familiar, social y cultural;
- d. Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales;
- e. La participación protagónica de niños, niñas y adolescentes en su propio contexto sociocultural;
- f. El equilibrio entre los derechos de los niños, niñas y adolescentes y las exigencias del bien común;

g. Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el conjunto de elementos objetivos y subjetivos de un proceso social que hacen que un lugar, tiempo, personas y cosas determinadas constituyan una individualidad propia del sujeto niño niña o adolescente, de manera tal que lo condicionan en su manera de obrar, sentir y organizar su pensamiento, dotándolos de significado.

Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse.

Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes, frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros; asegurando la máxima satisfacción posible de derechos y la menor restricción de los mismos, no solo en relación al número de derechos sino también a su importancia relativa. Deberá la autoridad administrativa o judicial, para establecer la primacía de un derecho sobre otro, probar en el caso concreto y fundamentar la imposibilidad de satisfacción conjunta.

**Artículo 5.- Políticas Públicas Universales, Integrales y Específicas.**

El diseño de las Políticas Públicas Universales, Integrales y Específicas, centradas en la concepción del niño, niña y adolescente como sujeto social de derecho, se basa en el fortalecimiento de la familia y de las redes de solidaridad social.

El Sistema de Políticas Públicas estará orientado a asegurar el pleno desarrollo de todos los niños, niñas y adolescentes, garantizando el ejercicio de sus derechos.

Se implementarán políticas que garanticen el acceso a los bienes y servicios a toda la población como efectiva práctica de la superación de las desigualdades y de la exclusión social, mediante la descentralización de los organismos de aplicación, de los planes y de los programas específicos de las distintas políticas de protección de derechos, a fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficacia.

Las organizaciones no gubernamentales especializadas en promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes tendrán una participación activa en las políticas de atención de éstos.

**Artículo 6.- Responsabilidad del Estado.**

El Estado provincial promueve y garantiza las condiciones para que los niños, niñas y adolescentes puedan alcanzar su pleno desarrollo físico, psíquico, moral, espiritual y social, en condiciones de libertad, igualdad, dignidad y equidad. Promoverá también la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan o entorpezcan el pleno desarrollo de los niños y su efectiva participación en la comunidad con la debida prioridad absoluta.

La prioridad absoluta implica:

- Protección y auxilio en cualquier circunstancia;
- Prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas;
- Preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas públicas;
- Preferencia de atención en los servicios esenciales.

**Artículo 7.- Principio de Prioridad en la aplicación de los recursos.**

Los Organismos del Estado tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas con carácter integral.

En la formulación, ejecución y control de políticas públicas y su prestación, es prioritario para los Organismos del Estado garantizar especialmente la asignación privilegiada de los recursos públicos.

Toda acción u omisión que se oponga a este principio constituye un acto contrario a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.

**Artículo 8.- Participación de la sociedad civil.**

Las organizaciones no gubernamentales especializadas en niñas, niños y adolescentes cogestionan con los organismos de gobierno en sus distintos niveles, la promoción, protección y restitución de derechos, con el debido fortalecimiento y fiscalización permanente del Estado como responsable de garantizar la vigencia plena del Sistema de Protección Integral.

**Artículo 9.- Prioridad de la convivencia familiar y comunitaria**

El grupo familiar es el ámbito privilegiado para el desarrollo pleno y armonioso de las niñas, niños y adolescentes, para la construcción de su identidad y para su integración cultural y social; siendo el responsable en forma prioritaria de asegurarles el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos.

El Estado garantizará al niño, niña y adolescente, cualquiera sea la situación en que se encuentre, su contención en el grupo familiar y en su comunidad a través de la implementación de políticas de prevención, promoción, asistencia e inserción social, y programas apropiados que permitan al grupo familiar asumir adecuadamente su responsabilidad.

**TÍTULO II  
PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTIAS**

**Artículo 10.-** Principio de Efectividad.

El Estado, la sociedad y la familia tienen el deber de asegurar a las niñas, niños y adolescentes la efectivización de los derechos a la vida, salud, libertad, identidad, alimentación, educación, vivienda, cultura, deporte, recreación, formación integral, respeto, participación efectiva, convivencia familiar y comunitaria y, en general, a procurar su desarrollo integral. Esta enumeración no es taxativa ni implica negación de otros derechos y garantías del niño y adolescente no enumerados.

**Artículo 11.-** Principio de igualdad y no discriminación.

Las disposiciones de esta Ley se aplican por igual a todas las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos raciales, de sexo, género, orientación sexual, edad, idioma, religión, creencias, opinión política, cultura, posición económica, origen social o étnico, capacidades especiales, apariencia física o impedimento físico, de salud, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de la niña, de su padre, de su madre o de sus representantes legales.

**Artículo 12.-** Derecho a la vida.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de un nivel de vida adecuado para sí y su familia, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.

**Artículo 13.-** Derecho a la integridad y a la dignidad personal.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, trabajo infantil, torturas, abusos o negligencias, prostitución, explotación sexual, secuestros, condición cruel, inhumana o degradante o al tráfico de personas para cualquier fin.

La persona que tome conocimiento de malos tratos, o de situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, o cualquier otra violación a sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de aplicación de la presente Ley.

**Artículo 14.-** Derecho a la vida privada e intimidad familiar.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar. Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales.

**Artículo 15.-** Derecho a la identidad.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen, a su orientación sexual y a preservar su identidad e idiosincrasia, salvo la excepción prevista en los artículos 327 y 328 del Código Civil.

Los Organismos del Estado provincial deben facilitar y realizar la búsqueda con la colaboración del organismo nacional, tanto para localización u obtención de información, del padre, madre u otros familiares de las niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar. Tienen derecho a conocer a sus padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con su padre y madre, aun cuando éstos estuvieran separados o divorciados, o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia, salvo que dicho vínculo, amenazare o violare alguno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que consagra la ley. En toda situación de institucionalización de los padres, los Organismos del Estado deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes el vínculo y el contacto directo y permanente con aquéllos, siempre que no contraríe el interés superior del niño.

Sólo en los casos en que ello sea imposible y en forma excepcional tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a tener una familia adoptiva, de conformidad con la ley.

**Artículo 16.-** Garantía estatal de identificación. Inscripción en el Registro del Estado y Capacidad de las Personas.

Los Organismos del Estado deben garantizar procedimientos sencillos y rápidos para que los recién nacidos sean identificados en forma gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente después de su nacimiento, estableciendo el vínculo filial con la madre, conforme al procedimiento previsto en las leyes nacionales Nº 24.540 Régimen de identificación de recién nacidos y Nº 26.061.

a) Si al momento de efectuarse los controles prenatales o de ingreso al centro de salud se detectare que la futura madre o padre carecen de documentos de identidad, el agente que tome conocimiento de tal circunstancia deberá iniciar el trámite de identificación de los mismos, de manera gratuita a fin de garantizar el acceso a la documentación requerida de acuerdo a la normativa vigente.

A los fines de la garantía establecida en el presente inciso, el Estado Provincial debe garantizar la presencia de oficinas del Registro Civil y Capacidad de las personas en todos los establecimientos públicos que atienden nacimientos.

b) Si la indocumentación de la madre o el padre continuara al momento del parto, debe consignarse nombre, apellido, fecha de nacimiento, domicilio, edad, huellas dactilares y



nacionalidad de los mismos, en el certificado de Constatación de Parto que expida la unidad sanitaria pertinente.

c) El Estado facilitara la adopción de medidas específicas para la inscripción gratuita en el Registro del Estado y Capacidad de las Personas, de todos aquellos niños, adolescentes, madres y padres, que no hayan sido inscriptos oportunamente.

**Artículo 17.-** Derecho a la documentación.

Las niñas, niños, adolescentes y madres indocumentadas, tienen derecho a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la normativa vigente y en los términos que establece el procedimiento previsto en la ley Nº 24.540.

**Artículo 18.-** Derecho a la propia imagen.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen.

Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar.

Cuando la exposición, difusión o divulgación de los datos a que hace referencia el párrafo anterior resulte manifiestamente contrario al interés superior del niño, no podrán desarrollarse aun que medie el consentimiento de los sujetos de esta ley o de sus representantes legales.

**Artículo 19.-** Derecho a la libertad ambulatoria.

Todos los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a la libertad ambulatoria, sin más límites que los establecidos por el ordenamiento jurídico vigente. No pueden ser privados de ella ilegal o arbitrariamente.

Por privación de libertad se entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así como internación en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al niño, niña o adolescente, por su propia voluntad.

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al amparo de su libertad ambulatoria de conformidad con la ley y al control judicial de la privación de la libertad ambulatoria.

**Artículo 20.-** Derecho a la libertad expresión y a la participación.

Los niños, niñas y adolescentes tiene derecho a:

a) Tener sus propias ideas según el desarrollo de sus facultades y expresarlas libremente, con las limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico, en todos los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la familia, la comunidad y la escuela.

b) Creer y profesar cultos religiosos, ejerciéndolos bajo la orientación de sus padres, tutores, representantes legales o encargados de los mismos;

c) Participar en la vida política y en las prácticas ciudadanas conforme a su edad.

d) Expresar su opinión como usuarios de todos los servicios públicos y, con las limitaciones de la ley, en todos los procesos judiciales y administrativos que puedan afectar sus derechos.

El Estado provincial y los municipios facilitarán y promoverán la asignación de recursos para financiar iniciativas que promuevan el protagonismo de los niños, niñas y adolescentes a través de la constitución y fortalecimiento de organizaciones y redes integradas por ellos.

**Artículo 21.-** Derecho a opinar y ser oído.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a:

a) Participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en aquellos que tengan interés;

b) A recibir la información necesaria y oportuna para formar su opinión.

c) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo.

Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes; entre ellos, al ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo.

**Artículo 22.-** Derecho de libre asociación, reunión y tránsito.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho de asociarse libremente con otras personas, con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos, laborales o de cualquier otra índole de conformidad a la legislación vigente. En ejercicio de este derecho podrán:

a) Propiciar su participación en asociaciones.

b) Promover y constituir asociaciones conformadas exclusivamente por niñas, niños, adolescentes o ambos.

Tienen derecho a usar, transitar y permanecer en los espacios públicos a reunirse en forma privada o públicamente de conformidad con la ley sin necesidad de permiso previo de las autoridades públicas y sin que ninguna de ellas pueda obstaculizarlos en el ejercicio.

**Artículo 23.-** Derecho a la atención de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad gozan de todos los derechos y garantías consagrados y reconocidos por esta ley, además de los inherentes a su condición especial reconocidos por la Ley 26.378 y conexas.

El Estado debe garantizar el acceso y el proceso de integración al sistema educativo en todos los niveles de escolaridad obligatoria, a través de programas acordes para cada nivel contemplando el tipo y grado de discapacidad.

Asimismo debe garantizar un ágil y amplio acceso a la cobertura de salud que la situación de cada niño requiera. A los fines de cumplir estos objetivos el Estado debe brindar las diferentes prestaciones vinculadas al traslado, acompañamiento, alimentos, y cualquier otra condición que se requiera para hacer efectivos estos derechos.

**Artículo 24.-** Derecho a la salud.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud.

Los Organismos del Estado deben garantizar el acceso universal e igualitario a los servicios de salud.

El derecho a la atención integral de la salud de los adolescentes incluye el abordaje de su salud sexual y reproductiva, previsto en la Ley 25.673. Tienen derecho a ser informados y educados en salud sexual y reproductiva de acuerdo a su desarrollo, teniendo como base la igualdad del hombre y la mujer.

**Artículo 25.-** Medidas para la Protección Integral de la Salud.

A los efectos de garantizar el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes, se establece el acceso gratuito, universal e igualitario, a la atención integral de la salud. El Estado provincial y en su caso municipal adopta medidas para:

- a- Reducir la morbi-mortalidad;
- b- Combatir las enfermedades y la malnutrición;
- c- Asegurar que todos los sectores de la sociedad, los miembros de la familia, y en particular los niñas, niños y adolescentes, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición, las ventajas de la lactancia materna, la higiene, el saneamiento ambiental y todas las medidas de cuidado y prevención;
- d- Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación al grupo familiar conviviente, la educación en materia de salud sexual y reproductiva, tendientes a prevenir el embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual;
- e- Garantizar el derecho de niños y niñas a gozar de la lactancia materna. Respecto a aquellos cuyas madres cumplan penas privativas de libertad, se garantiza tal derecho sin que este se vea interrumpido por la aplicación de ninguna medida.
- f- Garantizar la atención de la salud a toda adolescente embarazada.
- g- Proveer gratuitamente a los niños, niñas y adolescentes de familias de escasos recursos, atención médica, medicamentos, prótesis u otros elementos necesarios para su tratamiento y rehabilitación;
- h- Vacunar gratuitamente según el esquema vigente;
- i- Garantizar la aplicación de los principios consagrados en esta Ley en materia de prestaciones relativas a la salud mental y a capacidades diferentes, en todas las diversidades de diagnósticos;
- j- La prestación de los servicios de salud mental deben brindarse en una base de igualdad con la atención de salud física. Debe asegurarse la provisión de servicios para las poblaciones insuficientemente cubiertas y los mismos deben ser culturalmente apropiados. -Los servicios deben garantizar el acceso a los psicofármacos y a la rehabilitación psicosocial en el marco de la atención comunitaria y promoviendo la desinstitutionalización.
- k- Proporcionar condiciones dignas para que los padres o miembros de la familia ampliada responsable del cuidado del niño, niña o adolescente, permanezcan junto a él todo el tiempo durante el cual se prolongue la internación en establecimientos de salud;
- l- Garantizar a toda niña, niño y adolescente el acceso al agua potable, a los servicios sanitarios y a todo servicio básico indispensable para la salud y el pleno desarrollo en un medio sano y equilibrado.

**Artículo 26.-** Medidas de protección de la maternidad y paternidad.

Las medidas que conforman la protección integral de la salud se extenderán a la madre y al padre durante el embarazo, el parto y al período de lactancia, garantizando condiciones dignas y equitativas para el adecuado desarrollo de su embarazo y la crianza de su hijo.

La mujer privada de su libertad será especialmente asistida durante el embarazo y el parto, y se le proveerán los medios materiales para la crianza adecuada de su hijo mientras éste permanezca en el medio carcelario, facilitándose la comunicación con su familia a efectos de propiciar su integración a ella.

**Artículo 27.-** Atención perinatal.

Los establecimientos públicos y privados que realicen atención del embarazo, del parto y del recién nacido, están obligados a:

- a- Conservar las historias clínicas individuales en resguardo del derecho a la identidad;
- b- Proceder a exámenes con el fin de realizar el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de anomalías del recién nacido, así como dar orientación a los padres y/o familias que realicen acogimiento familiar;

- c- Proveer a la madre y/o padre de la documentación correspondiente a la identificación del recién nacido conforme lo establece la Ley Nacional 24.540;
- d- Promover condiciones para posibilitar la permanencia del recién nacido junto a su madre;
- e- Ejecutar acciones programadas teniendo en cuenta los grupos de mayor vulnerabilidad para garantizar el adecuado seguimiento del embarazo, parto, puerperio;
- f- Garantizar la atención de todas las enfermedades perinatales en el ámbito estatal y privado.

**Artículo 28.-** Derecho a la educación.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación pública, gratuita y laica en todos los niveles y regímenes especiales de conformidad al ordenamiento jurídico vigente, atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo, respetando su identidad cultural y lengua de origen, su libertad de creación y el desarrollo máximo de sus competencias individuales; fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por los derechos humanos, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente.

Tienen derecho al acceso y permanencia en un establecimiento educativo cercano a su residencia. En el caso de carecer de documentación que acredite su identidad, se los deberá inscribir provisoriamente, debiendo los Organismos del Estado arbitrar los medios destinados a la entrega urgente de este documento.

Por ninguna causa se podrá restringir el acceso a la educación debiendo entregar la certificación o diploma correspondiente.

**Artículo 29.-** Garantías mínimas de protección a la educación.

El Estado Provincial asegura respecto del derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes que vivan en su territorio en todos los niveles de escolaridad obligatoria, de conformidad con la Ley Nacional 26.206:

- a) El acceso y permanencia en la escuela pública, gratuita y laica cercana al lugar de su residencia habitual.
- b) La igualdad de condiciones en el acceso, permanencia y egreso del sistema educativo.
- c) El derecho a ser respetado por los integrantes de la comunidad educativa.
- d) El derecho a conocer e informarse de los procedimientos y participar en la construcción de las normativas de convivencia.
- e) El derecho a ser escuchado previamente a decidirse cualquier medida o sanción, las que únicamente deberán tomarse mediante procedimientos y normativas claras y justas y establecidas con anterioridad a la conducta reprochable.
- f) El derecho a ser evaluado por su desempeño y logros conforme a normas acordadas previamente y a conocer u objetar criterios de evaluación pudiendo recurrir a instancias escolares superiores.
- g) El derecho a recurrir a instancias educativas superiores o extraeducativas en caso de medidas que se dispongan relacionadas con sanciones disciplinarias.
- h) El derecho de organización y de participación en entidades estudiantiles.
- i) El conocimiento de sus derechos y de los mecanismos para su ejercicio y defensa.
- j) Que en el proceso educativo se respeten los valores culturales, étnicos, artísticos e históricos de la comunidad en que se desarrolla la niña, el niño o el adolescente.
- l) La adopción de lineamientos curriculares acordes a sus necesidades culturales que faciliten la integración social y fomenten el respeto por la diversidad.
- m) Que en las reglamentaciones, programas, materiales de estudio y actividades escolares se garantice la igualdad de trato entre varones y mujeres.
- n) La implementación de investigaciones, experiencias y nuevas propuestas relativas a los diseños curriculares y a su didáctica, con miras a dar respuesta a las necesidades de integración de la diversidad de la población infantil y adolescente en la educación común.

**Artículo 30.-** Prohibición de discriminar por estado de embarazo, maternidad y paternidad.

Prohíbese a las instituciones educativas públicas y privadas imponer por causa de embarazo, maternidad o paternidad, medidas correctivas o sanciones disciplinarias a las niñas, niños y adolescentes.

En ningún caso la licencia por maternidad en el ámbito escolar deberá ser inferior a las licencias laborales que por idéntico motivo prevé la legislación del trabajo vigente.

Los Organismos del Estado deben desarrollar un sistema conducente a permitir la continuidad y la finalización de los estudios de las niñas, niños y adolescentes, promoviendo programas de acompañamiento pedagógico para aquellas alumnas que deban ausentarse durante el período de maternidad.

**Artículo 31.-** Derecho a la convivencia familiar y comunitaria.

Todo niño tiene derecho a ser criado y educado en el seno de su familia de origen y excepcionalmente en ámbito familiar alternativo, prioritariamente familia ampliada o en su defecto referente de la comunidad, que proporcione contención afectiva y asegure la continuidad de su sentido de pertenencia cultural y comunitaria.

Se entiende como familia de origen a la comunidad formada por padre y madre o al menos por uno de ellos y sus descendientes.

Cuando ésta se encontrare en dificultades para actuar como ámbito de contención primario,

el Estado le garantiza orientación y apoyo, a través de programas de fortalecimiento familiar.

**Artículo 32.- Programa de fortalecimiento familiar.**

La falta o carencia de recursos materiales no constituye motivo para la privación de la patria potestad, ni para la limitación de su ejercicio. Corresponde al Estado procurar mantener al niño en su familia de origen o ampliada, garantizando su inclusión en programas de fortalecimiento familiar.

Se entiende por grupos familiares alternativos, la familia en todas sus modalidades, las familias de la comunidad donde la niña, niño y adolescente reside habitualmente u otras familias.

El Estado, junto a la familia acogedora, debe fortalecer y apoyar a la familia de origen en el afianzamiento de los vínculos entre ésta y el niño, para que en el plazo más breve posible se produzca la consolidación de la relación familiar.

El Estado debe garantizar orientación y apoyo a las familias acogedoras través de programas y políticas públicas a los fines de fortalecer el desempeño de su rol.

**Artículo 33.- Ámbitos familiares alternativos.**

Los ámbitos familiares considerados alternativos, son, en orden de prioridad:

Miembros de la familia ampliada;

Familias de la comunidad donde el niño, niña y adolescente reside habitualmente;

Otras familias, cuando se hayan agotado sin resultados las instancias precedentes.

El proceso de elección de la familia se hará en todo momento considerando la opinión del niño y su grupo familiar y comunitario con el asesoramiento profesional correspondiente.

**Artículo 34.- Derecho a la recreación, juego, deporte y descanso.**

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, recreación, deporte y juego. El ejercicio de estos derechos debe estar dirigido a garantizarles el descanso integral.

Los Organismos del Estado con la activa participación de la sociedad, deben establecer programas que garanticen el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a la recreación, juegos recreativos -en especial aquellos que tengan carácter cooperativo- y deportes, debiendo asegurar programas específicos para aquellos con necesidades diferentes.

**Artículo 35.- Derecho a la protección contra la explotación laboral.**

Los Organismos del Estado deben garantizar el derecho de las personas adolescentes a la educación y reconocer su derecho a trabajar con las restricciones que imponen la legislación vigente y los convenios internacionales en la materia, debiendo las autoridades provinciales correspondientes ejercer la inspección del trabajo a fin de evitar la explotación laboral de niñas, niños y adolescentes a través de medidas concretas y procesos administrativos rápidos, ágiles y expeditos, tendientes a hacer cesar de inmediato el trabajo prohibido.

El Estado, la sociedad y las organizaciones sindicales coordinarán sus esfuerzos para limitar este derecho solamente cuando la actividad laboral importe riesgo, peligro para el desarrollo, la salud física, mental o emocional de los adolescentes.

**Artículo 36.- Derecho a la seguridad social.**

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de la seguridad social.

Los Organismos del Estado provincial en coordinación con el estado nacional deben garantizar a niñas, niños y adolescentes y a las personas que sean responsables de su mantenimiento, el acceso a políticas y programas de inclusión social que permitan satisfacer sus necesidades básicas

El Estado nacional y el Estado provincial dispondrán de los recursos y de la organización operativa para la implementación de una asignación universal para la infancia.

**Artículo 37.- Garantías mínimas en procedimientos judiciales o administrativos.**

Los Organismos del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías:

a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente;

b) A solicitar la presencia de los padres, representantes legales o personas encargadas.

c) A que sus padres, responsables o personas con quien tenga trato afectivo sean informadas de inmediato en caso de aprehensión o detención, del lugar donde se encuentra, hecho que se le imputa y tribunal y fiscalía que interviene. Asimismo los jóvenes tienen derecho a comunicarse privadamente, con sus padres, representante legal, persona encargada o con la que sostenga vínculos afectivos en un plazo no mayor a una hora a partir del momento de su detención

d) Al pleno y formal conocimiento en forma adecuada al nivel cultural y madurez del niño, niña o adolescente del acto que se le atribuye y de las garantías procesales que le corresponden

e) A participar activamente en todo el procedimiento;

f) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte

g) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia en forma privada y confidencial desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado

que lo patrocine.

**Artículo 38.-** Principios interpretativos de normas vinculadas a niños o adolescentes privados de su libertad.

Se consideran principios interpretativos de la presente ley las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing) Resolución Nro. 40/33 de la Asamblea General; las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, Resolución Nro. 45/113 de la Asamblea General y las Directrices de Naciones Unidas para la prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices del RIAD), Resolución 45/112.

**Artículo 39.-** Deber de comunicar la vulneración de derechos.

Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados, todo agente o funcionario público en razón del desempeño de su cargo y/o cualquier persona que tuviere conocimiento de la amenaza o vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes; deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito provincial o local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión.

El procedimiento de comunicación deberá garantizar la integridad física del denunciante y su grupo familiar.

**Artículo 40.-** Deber del funcionario de recepcionar denuncias.

El agente público que sea requerido para recibir una denuncia de amenaza o vulneración de derechos de los sujetos protegidos por esta ley, ya sea por la misma niña, niño o adolescente, o por cualquier otra persona, se encuentra obligado a recibir y tramitar tal denuncia en forma gratuita, a fin de garantizar el respeto, la prevención y la reparación del daño sufrido, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en la figura de grave incumplimiento de los deberes del funcionario público.

Esto no obstaculiza que el órgano administrativo evalúe que se requiera adoptar una medida excepcional o de protección de derechos y se remita al órgano judicial competente, para el correspondiente control de legalidad.

En caso que la denuncia fuera efectuada en órgano judicial, el mismo deberá sin más trámite remitir la actuación en forma inmediata a la autoridad administrativa de aplicación de la presente para que tome conocimiento y debida intervención,

En caso de que la denuncia fuese formulada por la niña, niño o adolescente la ausencia de sus padres o representantes legales nunca podrá obstaculizar la recepción de la misma, ni la modalidad en que la persona menor de edad pueda ejercerla.

## LIBRO II

### DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS

#### TÍTULO I POLÍTICAS PÚBLICAS, UNIVERSALES E INTEGRALES

**Artículo 41.-** Principios Generales.

Las Políticas Públicas Universales e Integrales se implementarán desde un enfoque de derechos a través de programas, recursos y acciones de la Provincia, los municipios y las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo la amplia participación de los miembros de la comunidad, en especial de los niños, niñas y adolescentes, tendientes a lograr la vigencia y el disfrute pleno de los derechos y garantías reconocidos en la presente ley.

A fin de contemplar las realidades locales, se propiciará la descentralización de la atención, invitando a los municipios a promover acciones de promoción, protección y restablecimiento de derechos en el ámbito municipal, con participación activa de las organizaciones no gubernamentales, con la asignación presupuestaria correspondiente por parte del Estado.

**Artículo 42.-** Políticas Públicas. Definición.

Son aquellas conformadas por el conjunto de lineamientos y formulaciones programáticas y presupuestarias que, en concordancia con la Ley 26.061 y emanadas de la concertación del Consejo Federal de Niñez Adolescencia y Familia de la Nación, del Gobierno provincial y del municipio, incluyan metas, propósitos, finalidades, estrategias y recursos para la concreción de los derechos que esta ley consagra.

Para ello, se deberán implementar políticas universales y específicas que garanticen las condiciones básicas para el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en la Provincia.

Estas políticas son desarrolladas por el Poder Ejecutivo en su conjunto.

En la formulación y seguimiento de estas políticas públicas integrales, se promoverá la participación de la sociedad civil.

A los fines de la presente ley, la política pública provincial y municipal, tiene como principal objetivo el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en su medio familiar, social y cultural.

**Artículo 43.-** Pautas para la elaboración de Políticas Públicas. La política pública en materia de niñez se elabora conforme las siguientes pautas:

a) La promoción y protección de los derechos reconocidos y el respeto a la condición de

sujeto de derechos de sus destinatarios.

b) La inclusión de la dimensión de género en la planificación de las políticas públicas de modo que las mismas garanticen la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones.

c) El fortalecimiento del rol del grupo familiar en el cumplimiento de los derechos reconocidos preservando la identidad cultural y garantizando las condiciones para su efectivización.

d) La democratización de los roles familiares que fortalezca la consideración del niño como sujeto de derechos, la autonomía de las mujeres y una mayor participación de los varones en la crianza de los niños, niñas y adolescentes.

e) La coordinación con las políticas implementadas en el ámbito nacional, municipal y comunal.

f) La articulación transversal de las acciones públicas en la elaboración, ejecución y evaluación de planes y programas, evitando la fragmentación y superposición de los recursos.

g) La descentralización de planes y programas y de los organismos de aplicación y ejecución.

h) La participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución y control de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas.

i) Diseño, desarrollo, articulación, monitoreo, y evaluación de los planes, programas y proyectos específicos dirigidos a los niños, adolescentes y sus familias, de las distintas áreas de salud, educación, vivienda, recreación, trabajo, deporte, cultura, seguridad pública y social, con criterios de integralidad, transversalidad, intersectorialidad e interdisciplinariedad y participación activa de la comunidad;

j) Generación y fortalecimiento de redes intersectoriales locales para la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes;

k) Promoción de la constitución de organizaciones y organismos, fortaleciendo los existentes para la defensa y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

l) Propiciar ámbitos de participación protagónica de niños, niñas y adolescentes, en especial redes y organizaciones juveniles, como centros de estudiantes, organizaciones barriales y grupo de jóvenes, generando desde el Estado las condiciones necesarias para su creación y desarrollo.

II) Gestión de los Organismos de gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente;

m) Control a través de los Organismos intersectoriales creados por la presente ley, o leyes anteriores del cumplimiento de los lineamientos de políticas públicas precedentemente enunciados y especialmente en relación a la aplicación de medidas excepcionales que impliquen la separación del niño, niña y adolescente y de su familia o grupo conviviente.

n) Elaborar estándares mínimos de calidad de asistencia, protocolos de intervención y sistema de registro para las áreas de niñez y adolescencia.

o) Promover acciones articuladas en pos de la protección de la infancia, la adolescencia, víctima de delitos y enfrentar en forma coordinada violaciones a los derechos tales como la trata, el tráfico, o la explotación sexual, así como las problemáticas vinculadas a migraciones, y toda otra violación de los derechos fundamentales.

## **TÍTULO II SISTEMA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS**

### **Capítulo I Disposiciones Generales**

#### **Artículo 44.- Disposiciones Generales- Conformación**

A los fines de esta Ley, se entiende por Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos de las niñas, niños y adolescentes, al conjunto de medidas, mecanismos y procedimientos articulados, entre el Estado Nacional, Provincial y Municipal, organizaciones de la sociedad civil, la comunidad y la familia, tendientes a garantizar el goce y ejercicio de los derechos del niño, niña y adolescente.

El Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos de las niñas, niños y adolescente está conformando por todos aquellos organismos, entidades y servicios de gestión estatal y privados que diseñan, coordinan, orientan, ejecutan, supervisan y controlan las políticas públicas, programas y acciones, en el ámbito provincial y municipal, destinadas a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Para el logro de sus objetivos el Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes debe contar con los siguientes medios:

a) Políticas y programas de promoción y protección de derechos;

b) Procedimientos y Protocolos de intervención.

c) Medidas de promoción y protección de derechos

d) Medidas de protección excepcional de derechos

e) Organismos administrativos y judiciales de protección de derechos cuyas funciones sean acordes a lo prescripto por ley nacional 26.061.

f) Recursos económicos específicos y delimitados en cada presupuesto anual provincial.

### **Capítulo II Medidas de Promoción y Protección de Derechos**

**Artículo 45.- Disposiciones Generales -Situaciones comprendidas**

En las situaciones en que la vulneración sea consecuencia de la falta de acceso a una política pública, interviene directamente el programa competente de la órbita provincial o municipal. Ante la ausencia de la misma, la jurisdicción provincial deberá ofrecer la prestación que corresponda hasta tanto se establezca la política pública. La denegación del programa o de dicha prestación da lugar a la intervención de la Secretaría de Niñez y Familia en su carácter de autoridad de aplicación de la presente ley para lograr la efectivización del/ de los derechos vulnerados.

**Artículo 46.- Definición.**

Las medidas de promoción y protección integral de derechos son aquellas que deben ser adoptadas por la autoridad administrativa de promoción y protección competente ante la amenaza, vulneración o violación de los derechos o garantías de uno o varios niños, niñas o adolescentes individualmente considerados con el objeto de preservarlos, restituirlos o reparar sus consecuencias.

La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir de la acción u omisión del Estado, la sociedad, los particulares, el grupo familiar representantes legales, o responsables, o de la propia voluntad de la niña, niño o adolescente.

La falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los representantes legales o responsables de las niñas, niños y adolescentes, sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación de su familia nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización.

**Artículo 47.- Finalidad.**

Las medidas de promoción y protección integral de derechos y las medidas de protección de derechos excepcionales tienen como finalidad garantizar la preservación o restitución a las niñas, niños y adolescentes, del goce y ejercicio de sus derechos amenazados o vulnerados y la reparación de sus consecuencias.

**Artículo 48.- Aplicación.**

Las medidas de protección integral de derechos deben ser adoptadas y aplicadas por la autoridad administrativa de promoción y protección competente.

Se aplicarán prioritariamente aquellas que tengan por finalidad la preservación y el fortalecimiento de los vínculos familiares con relación a las niñas, niños y adolescentes.

Sólo pueden ser acordadas con la participación del niño, niña o adolescente.

**Capítulo III**

**Medidas de Protección Integral de Derechos**

**Artículo 49.- Medidas Aplicables.**

Una vez comprobada la amenaza, vulneración o violación de derechos, los Órganos administrativos competentes respondiendo a los lineamientos determinados en la presente ley deberán adoptar la medida de protección integral correspondiente diseñando la estrategia adecuada y designando los actores corresponsables. Las medidas aplicables, entre otras, deben consistir en las siguientes:

- a) Aquellas tendientes a que las niñas, niños o adolescentes permanezcan conviviendo con su grupo familiar;
- b) Apoyo económico para la inscripción y asistencia a establecimientos educativos, los que deberán incluir en su formación, debida consideración a los deseos y opiniones del niño, niña y adolescente y su grupo familiar.
- c) Asistencia integral a la embarazada;
- d) Inclusión de la niña, niño, adolescente y la familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar;
- e) Cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar, orientando y apoyando a los padres, representantes legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, juntamente con el seguimiento temporal de la familia y de la niña, niño o adolescente a través de programas específicos ;
- f) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la niña, niño o adolescente o de alguno de sus padres, responsables legales o representantes;
- g) Asistencia económica;
- h) Inclusión en espacios de participación deportivos y culturales dentro de la comunidad de las niñas, niños y adolescentes y la familia;
- i) Incorporación en programas de atención diurna, orientación y tratamiento de los problemas relacionados al consumo de drogas.
- j) Incorporación de programas de asistencia interdisciplinaria a la víctima de violencia, abuso y trata.

En los casos en que correspondiere la aplicación de las medidas se realizará en articulación con los efectores de salud y educación tanto a nivel provincial como municipal.

Esta enumeración no es taxativa.

**Artículo 50.- Prohibición**

En ningún caso estas medidas pueden consistir en la separación del niño niña o adolescente de su familia nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, a excepción de aquellas

situaciones en que la permanencia en su medio familiar implique una amenaza o vulneración de sus derechos que afecte su vida o integridad física o psíquica., debiendo en esta circunstancia adoptarse medidas de protección excepcional.

**Artículo 51.- Extinción.**

Las medidas de protección integral pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas en cualquier momento por acto fundado de la autoridad competente que las haya dispuesto y cuando las circunstancias que las causaron varíen o cesen, previa evaluación de los equipos técnicos interdisciplinarios del Servicio de Protección de Derechos que las haya dispuesto. La medida cesará cuando de la evaluación surja que el derecho vulnerado o violado ha sido restituido.

**Capítulo IV**

**Medidas de Protección de Derechos Excepcionales**

**Artículo 52.- Medidas Excepcionales.**

Son aquellas que se adoptan cuando las niñas, niños y adolescentes estuvieran temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio.

Tienen como objetivo la conservación o recuperación por parte del sujeto del ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias.

Estas medidas son limitadas en el tiempo y sólo se pueden prolongar mientras persistan las causas que les dieron origen.

**Artículo 53.- Procedencia de las Medidas Excepcionales.**

Sólo serán procedentes cuando, previamente, se hayan cumplimentado debidamente las medidas dispuestas en el artículo 49, o cuando la gravedad del derecho vulnerado o violado comprometa la integridad física o psíquica del niño o adolescente -

Declarada procedente esta excepción, será la autoridad administrativa local de aplicación en el orden provincial o municipal según corresponda quien decida y establezca el procedimiento a seguir, acto que deberá estar jurídicamente fundado, debiendo notificar fehacientemente dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) horas, la medida adoptada a la autoridad judicial competente en materia de familia de la jurisdicción.

El funcionario que no dé efectivo cumplimiento a esta disposición, será pasible de las sanciones previstas en el Capítulo IV del Código Penal de la Nación.

La autoridad judicial competente, en protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes dentro del plazo de SETENTA Y DOS (72) horas de notificado, con citación y audiencia de los representantes legales, deberá resolver la legalidad de la medida; resuelta ésta, la autoridad judicial competente deberá derivar el caso a la autoridad administrativa local competente de aplicación para que ésta implemente las medidas pertinentes.

**Artículo 54.- Aplicación.**

Las medidas establecidas en el artículo 52, se aplicarán conforme a los siguientes criterios:

a) Permanencia temporal en ámbitos familiares considerados alternativos. Las medidas consisten en la búsqueda e individualización de personas vinculadas a ellos, a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según costumbre local, en todos los casos teniendo en cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes;

b) Sólo en forma excepcional, subsidiaria y por el más breve lapso posible puede recurrirse a una forma convivencial alternativa a la de su grupo familiar, debiéndose propiciar, a través de mecanismos rápidos y ágiles, el regreso de las niñas, niños y adolescentes a su grupo o medio familiar y comunitario. Al considerar las soluciones se prestará especial atención a la continuidad en la educación de las niñas, niños y adolescentes, y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Estas medidas deberán ser supervisadas por el organismo administrativo local competente y judicial interviniente;

c) Las medidas se implementarán bajo formas de intervención no sustitutivas del grupo familiar de origen, con el objeto de preservar la identidad familiar de las niñas, niños y adolescentes; El Estado garantizará el trabajo concreto destinado a la revinculación familiar a través de los recursos técnicos y presupuesto necesario a tal fin

d) Las medidas de protección excepcional que se tomen con relación a grupos de hermanos deben preservar la convivencia de los mismos;

e) Internación decidida fundadamente por profesionales de la salud mental en centros terapéuticos de salud mental o adicciones, públicos o privados con el objetivo de recibir tratamiento adecuado, y orientada a la recuperación de la salud del internado y a su egreso en el tiempo mas breve posible, estableciéndose un tiempo determinado después del cual la medida debe ser revisada y en lo posible modificada por otra menos restrictiva de la libertad.

f) En ningún caso, las medidas de protección excepcionales pueden consistir en privación de la libertad;

g) No podrá ser fundamento para la aplicación de una medida excepcional, la falta de recursos económicos, físicos, de políticas o programas del organismo administrativo.

Estas medidas y estos criterios son de aplicación restrictiva.

**Capítulo V**



**Procedimiento para la aplicación de las medidas de Protección Integral de Derechos**

**Artículo 55.-** Sujetos habilitados para iniciar el Procedimiento

Frente a la vulneración de derechos de niños, niñas o adolescentes, la intervención de la autoridad administrativa de aplicación del Sistema puede ser requerida por:

- a) Toda niña, niño y adolescente, que sufra amenaza, vulneración o violación de sus derechos y/o sea víctima de delito, sin que sea necesario que concorra acompañado por un adulto
- b) Los padres, madres y representantes legales de las niñas, niños y adolescentes, o miembros de su familia o centro de vida;
- c) Los integrantes de los equipos técnicos que se desempeñen como servicios de protección de derechos en el ámbito municipal, regional o provincial;
- d) Cualquier otro agente del Estado nacional, provincial, regional, municipal o comunal que tenga conocimiento de la amenaza, o vulneración de derechos de un niño niña o adolescente;
- e) Cualquier miembro de la comunidad que conozca la existencia de alguna amenaza o vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

La Autoridad Administrativa protegerá la identidad de la persona requirente.

**Artículo 56.-** Comunicación de la amenaza o vulneración de derechos

Las personas mencionadas en el art. anterior podrán comunicar una situación de amenaza o vulneración ante el Servicio de Promoción de Derechos municipal, regional o provincial o en el caso de los incisos a), b) y e) ante cualquier agente público, este último deberá procurar que se le brinde la atención necesaria en el momento que se produce la comunicación o consulta.

En el caso que la persona sea de otra jurisdicción, se atenderá a la persona, se le indicará en forma fehaciente el programa, servicio, lugar y fecha donde será atendida y se remitirá el acto administrativo que detalle fundadamente la situación de vulneración por la cual la persona fuera derivada para su atención en el término de las 24 hs al Servicio de Protección de Derechos de la jurisdicción correspondiente.

La falta de comunicación de esta situación por un funcionario público lo hará pasible de sanción.

En el supuesto que se formule denuncia ante la autoridad judicial o policial ésta deberá ponerla de inmediato en conocimiento al organismo administrativo de aplicación del Sistema de Protección Integral.

**Artículo 57.-** Entrevista.

El Servicio local de Promoción y Protección de Derechos de niñas, niños y adolescentes una vez que haya tomado conocimiento de la comunicación debe citar al niño, niña, o adolescente y a su grupo familiar, responsables y/o allegados y/o convocar a personas que mantengan vínculos afectivos que contribuyan a la resolución de la vulneración de derechos, a una entrevista conjuntamente con el equipo técnico que haya intervenido previamente en el ámbito de actuación territorial correspondiente.

En la entrevista, a cargo del equipo interdisciplinario del Servicio local, se debe poner en conocimiento de los intervinientes concurrentes la comunicación recibida, la forma de funcionamiento del Sistema de Protección y Promoción de Derechos, los programas existentes y las medidas de protección de derechos en el caso que deba ser adoptada para prevenir la vulneración o restituir el derecho vulnerado, la estrategia de ejecución, los actores responsables de cumplirla el plan de seguimiento, las consecuencias esperadas, y los derechos de los que goza el niño..

El decreto reglamentario de la presente ley deberá establecer los protocolos y pautas de intervención, como así también modalidades de trabajo con el niño y su grupo familiar a cumplir por los Servicios de Promoción y Protección de Derechos local, o autoridad administrativa del ámbito regional o provincial correspondiente.

**Artículo 58.-** Adopción de la Medida

Concluidas las deliberaciones y propuesta por el Servicio de Protección de derechos provincial, regional o local la medida de protección a adoptar en su caso, debe confeccionarse un acta que contenga lugar y fecha, motivo de la petición, datos identificatorios de las personas intervinientes, una breve descripción de la situación en la que se señale expresamente los derechos vulnerados surgidos en el marco de la entrevista y de informes que se adjunten de los equipos profesionales estatales, la medida de protección integral de derechos propuesta, el plan a aplicar y la forma de seguimiento del caso particular. Constituyéndose así estos elementos en prueba necesaria para la probable adopción de medidas de protección excepcionales.

El acta debe ser firmada por todas las personas presentes en la entrevista y se les entregará copia de la misma a cada una.

**Artículo 59.-** Información - Prohibición

La información recepcionada en los términos del artículo anterior, debe ser documentada en el formulario que prevea la reglamentación, en el que deben asentarse todos los datos aportados o recolectados al tiempo de la denuncia o noticia, sin incursionar en otros detalles que no se hallen especificados.

Debe evitarse toda intromisión o exposición al relato voluntario o provocado de la niña, niño o adolescente o de la persona que hace conocer las circunstancias que determinan la intervención. De requerirse atención médica, se debe dar intervención al servicio de salud estatal más próximo,

con información concreta que se trata de un caso de protección de derechos de una niña, niño o adolescente, además de dar intervención al Servicio de Promoción y Protección de Derechos del ámbito local , regional o provincial.

**Capítulo VI**  
**Procedimiento para la aplicación de medidas de Protección de Derechos**  
**Excepcionales**

**Artículo 60.-** Órganos competentes y plazos para la adopción de Medidas Excepcionales.

La Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia a través de sus órganos correspondientes y los Servicios regionales de protección de derechos son los organismos facultados para adoptar medidas de protección excepcionales con la debida fundamentación legal y posterior control de legalidad por la autoridad judicial competente en materia de familia

Estas medidas son limitadas en el tiempo, no pudiendo exceder de noventa días. El plazo debe quedar claramente consignado al adoptarse la medida y sólo se puede prolongar por acto fundado de la autoridad administrativa competente mientras persistan las causas que les dieron origen,

Cumplido un año y medio desde la adopción de la medida la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia conjuntamente con el servicio regional correspondiente debe resolver definitivamente la misma.

Una vez que los Servicios de Promoción y Protección de derechos del ámbito municipal a través de sus equipos interdisciplinarios, determinen que se han agotado las medidas de protección integral de derechos y persiste la situación de amenaza o vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, podrán solicitar fundadamente al servicio regional/provincial la adopción de medida excepcional si correspondiera. La solicitud será debidamente fundada y detallará el/ los recursos que la instancia municipal y provincial deberán disponer. La medida estará acompañada de los informes de los equipos que acrediten la situación de vulneración de derechos.

El servicio regional o provincial de promoción y protección de derechos deberá dictaminar la oportunidad de la medida en un plazo que no exceda las 72 hs, debiendo comunicar su resultado al servicio municipal interviniente y comunicar a la autoridad judicial competente para que efectúe el control de la legalidad.

Los trámites administrativos que demande la adopción de la medida de protección excepcional no obstan la aplicación urgente e inmediata de la medida, cuando el Servicio evalúe que la no aplicación implique un grave riesgo para la vida e integridad psicofísica de la niña, niño o adolescente.

**Artículo 61.-** Intervención de la Autoridad Administrativa de Aplicación en la adopción de Medidas Excepcionales.

A partir de la solicitud de la aplicación de una medida de protección excepcional, los Servicios de Protección de Derechos del ámbito regional o provincial intervienen a través de sus equipos interdisciplinarios con la finalidad de evaluar la situación y la conveniencia y procedencia de la medida de protección excepcional cuya adopción se solicita, pudiendo resolver la adopción de la medida solicitada u otra medida excepcional o bien una medida de protección integral. El equipo interdisciplinario debe mantener con la niña, niño o adolescente una entrevista personalizada en un ámbito adecuado a la edad y etapa evolutiva respetando al máximo los derechos previstos en la presente Ley.

Separadamente el equipo interdisciplinario debe citar a una entrevista a los familiares, representantes, responsables o allegados involucrados de la niña, niño o adolescente, a los que se debe poner en conocimiento de los derechos de la niña, niño o adolescente que se encuentran vulnerados, la medida de protección excepcional solicitada, los cursos de acción propuestos, los responsables de la aplicación y control de la misma y los resultados esperados. El Decreto Reglamentario deberá establecer los protocolos y pautas de intervención como así también otras formalidades a cumplir por los equipos interdisciplinarios de la Autoridad administrativa del ámbito regional y/o provincial.

**Artículo 62.-** Notificación al Órgano judicial competente en materia de Familia.

Declarada procedente la medida excepcional será la autoridad local de aplicación del Sistema de Protección Integral quien decida y establezca las características de la medida y el procedimiento a seguir, acto que deberá estar jurídicamente fundado, debiendo notificar fehacientemente dentro del plazo previsto en el Art. 53. Asimismo se deberá notificar la resolución administrativa debidamente a los representantes legales, familiares o responsables.

**Artículo 63.-** Resolución Judicial.

Resuelta la ratificación de la medida, por auto fundado el Tribunal o Juez competente debe oficiar a la Autoridad administrativa del ámbito regional o a la Autoridad de Aplicación provincial que solicitó el control de legalidad, para que se apliquen las medidas continuando con el procedimiento administrativo.

Rechazada la medida por el Tribunal o Juez competente por auto fundado, éste debe oficiar a la Autoridad administrativa del ámbito regional o a la Autoridad de Aplicación provincial que solicitó el control de legalidad. En el curso del procedimiento la niña, niño o adolescente es reintegrado a la familia o centro de vida de donde fue separado con motivo de las medidas de protección excepcionales debiéndose adoptar la medida de protección de derechos adecuada.

La resolución adoptada debe ser notificada a la niña, niño o adolescente, al abogado del niño si hubiera intervenido, los representantes legales, familiares o responsables del niño o la niña y sus defensores y demás partes del proceso.

La resolución es apelable.

El incumplimiento de las medidas excepcionales por parte de los niños no puede suponerle sanción alguna.

**Artículo 64.- Niños Víctimas de Delitos**

A los equipos interdisciplinarios de los Servicios de Promoción y Protección de Derechos del ámbito municipal, regional y provincial les corresponde intervenir en los supuestos en que Niñas, Niños o Adolescentes sean víctimas de delitos de acción pública o dependientes de instancia privada.

El equipo interdisciplinario debe citar en el término de veinticuatro horas de puesta la denuncia o noticia en su conocimiento a una entrevista personalizada a la niña, niño o adolescente víctima de tales delitos en un ámbito adecuado a la edad y etapa evolutiva de la niña, niño o adolescente, garantizando especialmente los derechos descriptos en la presente ley.

Previo al abordaje, debe poner en conocimiento al Tribunal, Juez o Instrucción Fiscal que disponga el Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba.

Se debe evitar en toda circunstancia, la exposición a relatos repetidos o audiencias, entrevistas o comparecencias innecesarias de la niña, niño o adolescente.

**LIBRO IIII**

**INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**TÍTULO I**

**ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS**

**Capítulo I**

**Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia**

**Artículo 65.-** Autoridad Administrativa de Aplicación - Servicios de Promoción y Protección de Derechos

La Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia o el organismo que en el futuro la reemplace, es la autoridad provincial de aplicación de la ley nacional 26.061 y del Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Está a cargo de un/a Secretario/a designado por el Poder Ejecutivo de la Provincia.

Tiene a su cargo el diseño, instrumentación, ejecución y control de políticas públicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes de conformidad con la ley orgánica provincial 9454 y con las funciones especificadas en la presente Ley.

La Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia y sus Organismos descentralizados son las áreas responsables de desarrollar planes programas y políticas de promoción y protección de derechos de la Niñez, en el ámbito territorial de los Departamentos, Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba. La Secretaría deberá promover la creación de los Servicios Regionales y Locales de Promoción y Protección de Derechos los que podrán tener dependencia de la provincia en el caso que no fuera creado por el municipio o de gestiones conjuntas a partir de la celebración de convenios con municipalidades o comunas.

**Artículo 66.-** Funciones de la Secretaría de la Niñez Adolescencia y Familia

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá competencia en todo lo inherente a la elaboración y ejecución de programas que promuevan el desarrollo integral de la niñez, la adolescencia y la familia, ejercerá las funciones previstas en la Ley 9454 y sus modificatorias y en particular, las siguientes:

1. Coordinar el Sistema Provincial de Protección Integral de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes en los ámbitos local, regional y provincial

2. Diseñar y ejecutar previa aprobación del Consejo Provincial de Niñez Adolescencia y Familia, el Plan Provincial de Promoción y Protección de Derechos, donde se fijen los lineamientos de la política pública provincial de acuerdo a los principios establecidos en la presente ley, las acciones prioritarias a desarrollar, las áreas gubernamentales responsables, los plazos previstos y los recursos necesarios. En la elaboración de este Plan deben participar y colaborar los organismos gubernamentales del Poder Ejecutivo Provincial a requerimiento de la Secretaria o de Consejo Provincial de Niñez Adolescencia y Familia.

3. Asignar los recursos públicos para la formulación y ejecución de las políticas y programas previstas en el Plan provincial.

4. Interactuar con todos los poderes del Estado, y con organismos no gubernamentales a fin de lograr la implementación integral y transversal de las políticas de promoción y protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes.

5. Promover el acceso a la salud, a la agilización de los turnos hospitalarios y el acceso inmediato a todas las prestaciones que resguarden el derecho a la salud.

6. Brindar asistencia técnica y capacitación a organismos de la Provincia, Municipios, Comunas y Organizaciones de la Sociedad Civil que participen en Programas o en servicios de

atención directa a los niños, niñas y adolescentes.

7. La atención integral de las personas menores de edad en conflicto con la ley penal en los programas y medidas socioeducativas aplicables.

8. Ejecutar descentralizadamente políticas de promoción y protección de derechos para lo cual deben contar con una estructura que posibilite dar respuesta a las distintas regiones, departamentos y localidades.

9. Crear Servicios Regionales y locales (cuando el Municipio no lo haga) de Promoción y Protección de Derechos a los fines de la aplicación descentralizada y territorial de las medidas de protección integral de derechos

10. Promover la creación de Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en coordinación con Municipios y Comunas.

11. Diseñar normas generales de funcionamiento y circuitos y procedimientos que deben cumplir las instituciones públicas o privadas de promoción, asistencia y protección de derechos de los sujetos de esta ley.

12. Gestionar la obtención y transferencia de los recursos económicos, humanos y programáticos que desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia corresponda remitir para la efectivización de las políticas públicas destinadas a las niñas, niños y adolescentes.

13. Diseñar, organizar y administrar un sistema de información único, descentralizado, discriminando por los menos en las variables de sexo y edad, y que incluya indicadores para el monitoreo, evaluación y control de las políticas y programas de Niñez, Adolescencia y Familia.

14. Establecer en coordinación con el Consejo Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas a la promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

## **Capítulo II**

### **Comisión Interministerial de Niñez Adolescencia y Familia**

#### **Artículo 67.- Creación -Funciones**

Crease una Comisión Interministerial, para la Promoción y Protección de los Derechos del Niño, conformada por miembros cuyo cargo no podrá ser inferior a Subsecretario, uno por cada Ministerio y Secretaría perteneciente a la Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo.

Esta Comisión Interministerial tendrá como funciones:

a) La coordinación de las políticas y optimización de los recursos del Estado provincial, teniendo en cuenta el plan de acción elaborado por la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia y aprobado por el Consejo Provincial de Niñez Adolescencia y Familia.

b) Garantizar la concertación de acciones, la articulación y corresponsabilidad en el abordaje de las situaciones y en la aplicación de las medidas que se adopten entre los organismos, servicios, dispositivos o entidades de los distintos Ministerios

c) Colaborar con la Autoridad de Aplicación en el diseño e implementación de las políticas de promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

d) Colaborar con la Autoridad de Aplicación en la elaboración del Plan Provincial de Promoción y Protección de Derechos, en el que quedarán definidas las metas a alcanzar y las responsabilidades de cada uno de los Ministerios.

e) Colaborar con la Autoridad de Aplicación en el monitoreo y evaluación de la implementación y funcionamiento del Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral de Derechos.

La Comisión Interministerial estará presidida por la/el Secretaria/o de Niñez Adolescencia y Familia e integrada por los Ministerios de Gobierno, Justicia, Producción, Salud, Dirección General de Cultura y Educación, así como las Secretarías de Derechos Humanos y de Deportes y Turismo y Economía La Comisión funcionará a convocatoria del/ la Presidente con una frecuencia mínima de una reunión cada dos meses, o cuando el/la Presidente o por lo menos tres miembros lo solicite.

La/el Presidente de la Comisión convocará a una sesión con anterioridad al envío del proyecto de presupuesto a la Legislatura Provincial en cuyo orden del día se incluirá el tratamiento del art. 81 de la presente ley. Durante el primer trimestre del año se convocará a una sesión en la que se discutirá el Plan de Acción Provincial. Las sesiones deberán ser actuadas. La Comisión dictará su reglamento de funcionamiento interno.

## **Capítulo III**

### **Consejos de Niñez Adolescencia y Familia**

**Artículo 68.-** Modifícase: el inciso f) del artículo 3º de la Ley 9591, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Inc. f) El interior provincial estará representado por un delegado de cada uno de los seis Consejos Regionales de Niñez Adolescencia y Familia.- Asimismo se incorporará en su integración dos niños o jóvenes representantes del Consejo Provincial de Niños y Adolescentes a crearse por la presente ley.-

#### **Artículo 69.-** Créanse los Consejos Regionales de Niñez Adolescencia y Familia

Los Consejos Regionales se integrarán de la siguiente manera:

a) El Consejo Regional de la zona centro conformado por representantes de los Consejos Departamentales correspondiente a los departamentos de Colon, Punilla, Río Primero y Santa María;

b) El Consejo Regional de la Zona Norte lo integrarán representantes de los Consejos Departamentales correspondiente a los departamentos de Ischilín, Río Seco, Sobremonte, Totoral y Tulumba;

c) El Consejo Regional de la zona Este se integrarán con representantes de los Consejos Departamentales correspondiente a los departamentos de General San Martín; Marcos Juárez; Río Segundo, San Justo y Unión;

d) El Consejo Regional de la zona Oeste lo integrarán representantes de los Consejos Departamentales correspondiente a los departamentos de Cruz del Eje, Calamuchita, Minas, Pocho, San Alberto, y San Javier

e) El Consejo Regional zona sur que comprende los Consejos Departamentales correspondientes a los departamentos de General Roca; Juárez Celman; Río Cuarto; Tercero Arriba y Presidente Roque Sáenz Peña y

f) El Consejo Regional de capital, que coincide con el Consejo Departamental de Capital que estará integrado directamente por representantes del Consejo Municipal de la ciudad de Córdoba.

**Artículo 70.-** Créanse los Consejos Departamentales de Niñez Adolescencia y Familia.

Cada uno de los 26 Consejos Departamentales estará integrado como mínimo por un representante gubernamental y un representante de las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de los distintos Consejos Municipales/locales de Niñez Adolescencia y Familia creados o a crearse en cada Municipio o comuna correspondiente a cada Departamento de la provincia, Esta descentralización territorial permitirá la elaboración de diagnósticos y planes de acción acordes a las distintas realidades regionales con el fin de que estos lleguen al Consejo Provincial de Niñez Adolescencia y Familia para que sean tenidos en cuenta en el diagnóstico y plan de acción provincial de promoción y protección de derechos de niñas niños y adolescentes .y en la distribución de los recursos correspondientes.

**Artículo 71.-** Funciones del Consejo Provincial de Niñez Adolescencia y Familia.

El Consejo Provincial de Niñez Adolescencia y Familia tendrá además de las atribuciones comprendidas en el art. 2 de la ley provincial 9591 las siguientes:

a) Consensuar, Aprobar y Articular en coordinación con la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia el Plan Provincial Anual de Promoción y Protección de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes ,para fijar los lineamientos de acuerdo a los principios establecidos en la presente ley, las acciones prioritarias a desarrollar, las áreas gubernamentales responsables, los plazos previstos y los recursos necesarios.

b) Aprobar el presupuesto anual destinado al funcionamiento del Sistema Integral de Promoción y Protección de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes que permita la ejecución de todas acciones y medidas previstas en la presente ley.

c) Solicitar información acerca de la distribución de recursos, el funcionamiento de servicios y programas, y toda otra acción desarrollada por el Estado destinada a los sujetos de esta ley y recibir informes desde la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia sobre el funcionamiento del Sistema de Protección Integral a nivel provincial.-

d) Recibir anualmente el informe del Defensor Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes y solicitar la información que se encuentre en el ámbito de su Defensoría.

e) Realizar estudios y diagnósticos en articulación con los organismos gubernamentales pertinentes, tendientes a avanzar hacia una progresiva desconcentración y descentralización en la ejecución de las políticas del área;

f) Crear y administrar un Registro Único de organizaciones civiles que ejercen sus funciones dentro de la provincia vinculadas a la promoción, defensa y protección de los derechos de niñas niños y adolescentes y sus familias.-

g) Elaborar y publicar un informe anual de gestión que será aprobado por la mayoría simple de sus miembros y presentado ante la legislatura provincial.

h) Promover la participación y organización de los niños y los adolescentes, tendiente a su progresiva incorporación al Consejo.

**Capítulo I V**

**Servicios de Promoción y Protección de Derechos de Niños y Adolescentes**

**Artículo 72.-** Servicios Regionales de Promoción y Protección de Derechos.

La Secretaria de la Niñez Adolescencia y Familia creará un Servicio Regional de Promoción y Protección de Derechos en un número mínimo de un Servicio por Departamento y para el Departamento Capital teniendo en cuenta la densidad de su población creará un Servicio dividido en cuatro zonas; norte, sur, este y oeste.

Para garantizar los objetivos enunciados en esta ley en cada Servicio Regional la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia debe garantizar programas e instituciones con la modalidad de puertas abiertas como centros de día, centros de atención inmediata, paradores nocturnos, albergues temporarios u otros con especificidad para el abordaje de situaciones de calle, de abandono real o simbólico, consumo de sustancias, maltrato, violencia familiar, abuso sexual, entre otras.

Los programas con la modalidad de puertas abiertas a ejecutar deben ser financiados y gestionados por la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia o sus Servicios Regionales de Promoción y Protección de Derechos o en convenio con Municipios y Comunas u organizaciones de la sociedad civil. En cada nivel del sistema la autoridad administrativa es responsable de coordinar

con las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la niñez, las acciones y los programas con el fin de potenciar los recursos existentes.

**Artículo 73.- Funciones.**

Los Servicios Regionales y Locales de Promoción y Protección de Derechos son unidades técnico operativas con una o más sedes, desempeñando las funciones de facilitar que las niñas, niños y adolescentes que tengan amenazados o violados sus derechos, puedan acceder a los programas y planes disponibles en su comunidad.

Corresponde a este nivel intervenir en las situaciones de urgencia y en todas las situaciones de amenaza o vulneración de derechos a niñas, niños y adolescentes, así como desarrollar programas y actividades de promoción de derechos.

Los Servicios Regionales y Locales de Promoción y Protección de Derechos estarán integrados por equipos profesionales interdisciplinarios conformados por lo menos con un trabajador social, un abogado, un profesional de la salud y de educación.

Su actuación corresponde a la promoción, protección y defensa de los derechos. Los servicios locales deberán:

a. Diseñar y ejecutar programas locales acorde a la realidad de donde se localicen con la asistencia técnico financiera del municipio y/o provincia.

b. Aplicar las medidas de protección integral con la asistencia técnico - financiera de la Nación a través de la provincia de acuerdo a lo establecido por la Ley 26.061.

c. Solicitar y ejecutar medidas de protección excepcionales adoptadas por los Servicios Regionales o provinciales de Promoción y Protección de Derechos conforme a lo establecido en la presente ley.

d. Garantizar el pleno goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes o la restitución de los mismos ante la vulneración

e. Garantizar el acceso a programas, dispositivos o servicios que posibiliten el ejercicio efectivo de los derechos.

f. Garantizar cuando sea necesario la contención en ámbitos de cuidados familiares alternativos, de acuerdo a los lineamientos contenidos en la presente Ley.

g. Brindar asistencia técnico – jurídica a los Servicios Locales a través del acompañamiento y apoyo en la intervención; la formulación de propuestas o estrategias y la evaluación y supervisión de la intervención realizada.

h. Evaluar y en su caso adoptar y supervisar las medidas de protección excepcional propuestas por los Servicios locales de Protección de Derechos, actuando en coordinación con los mismos.

La intervención de estos organismos no es excluyente de la actuación articulada de otros organismos que aborden la temática de niñez.

**Artículo 74.- Servicios locales de Promoción y Protección de Derechos.**

En la medida en que los Municipios y Comunas creen sus propios Sistemas locales de Promoción y Protección de Derechos coordinarán la aplicación de las medidas de protección integral y las solicitudes de aplicación de las medidas excepcionales con los Servicios Regionales de Promoción y Protección de Derechos del Departamento que corresponda y con los juzgados de familia de la circunscripción correspondiente para el respectivo control de legalidad de las medidas excepcionales que se adopten.

Será responsabilidad del Poder Ejecutivo provincial promover la descentralización de políticas públicas dirigidas a la niñez adolescencia y familias en los municipios y comunas asignando los recursos económicos y financieros en base a cálculos proporcionales a la cantidad de personas que vivan en cada jurisdicción municipal y la cantidad de población bajo la línea de la pobreza y de indigencia

Los Servicios locales de Promoción y Protección de Derechos son los que intervienen en primera instancia en razón de la proximidad con la problemática a abordar. Ello implica:

a) Atención de la situación en el territorio

b) Incorporación a Programas

c) Articulación con las áreas o servicios que intervienen en el territorio

d) Articulación con el Servicio Regional de Protección correspondiente cuando se hayan agotado o notablemente reducido sus posibilidades de intervención eficaz o cuando el abordaje de la situación exceda las posibilidades reales de intervención en un nivel local o primer nivel.

Los Servicios locales de Promoción y Protección de Derechos tendrán las siguientes funciones:

- Desarrollar acciones de promoción y protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito territorial de cada Municipio o Comuna.

- Promover acciones tendientes al fortalecimiento familiar.

- Diseñar e implementar programas, dispositivos o servicios que viabilicen el acceso efectivo al ejercicio de los derechos.

- Garantizar la atención durante las 24 horas en forma activa o con una guardia pasiva.

- Recibir denuncias e intervenir de oficio ante el conocimiento de una amenaza o vulneración en el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se configure en su ámbito de actuación territorial, adoptando -previa evaluación de la situación- las medidas de protección integral que correspondan.

- Planificar, implementar y supervisar las alternativas tendientes a evitar la separación de la niña, niño o adolescente del medio familiar o centro de vida en el que se encuentre.

- Proponer a la Autoridad Administrativa de Protección de Derechos del Ámbito Regional o Provincial, la adopción de medidas de protección excepcional de acuerdo a lo establecido en la presente ley.

- Llevar un legajo por cada niña, niño o adolescente o por grupo familiar conforme a las pautas establecidas en la presente ley y en su reglamentación.

- Confeccionar protocolos de intervención que a su vez prevean el resguardo de la documentación y la confección de informes.

- Informar a la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia de la provincial la intervención a los fines del cumplimiento de lo preceptuado en el art. 66 inc.13 de la presente ley.

La conformación de los Equipos Profesionales Interdisciplinarios en cuanto a la cantidad de profesionales, especificidad e incumbencia será determinada en cada caso de acuerdo a la particularidad de cada ámbito territorial.

Estos equipos podrán también conformarse con profesionales de diversas áreas o reparticiones provinciales, municipales o comunales y de Organizaciones No Gubernamentales a cuyo efecto se suscribirán los convenios correspondientes.

## **TÍTULO II CONSEJO PROVINCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES**

### **Artículo 75.- Conformación.**

Estará conformado por seis niños o jóvenes representantes de cada región en las que se divide la provincia, con el acompañamiento de educadores/as pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil de atención a la niñez.

### **Artículo 76.- Funciones. Este Consejo tendrá las siguientes funciones:**

a) Propiciar la participación activa, real y comprometida de niños/as y adolescentes en los asuntos vinculados a la defensa, exigibilidad, ejercicio y promoción de sus derechos.

b) Propiciar la creación de Consejos locales de Niños/as y adolescentes a nivel municipal o comunal.

c) Promover redes de niños y jóvenes a nivel departamental, regional y provincial.

d) Participar en el diseño de las políticas y acciones que se implementen desde los diferentes niveles del estado y que afecten en forma directa a niños/as y adolescentes y sus derechos.

e) Participar en la planificación de los presupuestos estatales vinculados a las políticas para la niñez, atendiendo a las problemáticas e intereses de los niños/as, adolescentes, sus familias y comunidades.

f) Participar en el consejo provincial de promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de representantes elegidos en asamblea

g) Elevar propuestas para el diseño de programas de atención a la niñez, realizando el seguimiento en la recepción, evaluación y aplicación de éstas en los distintos niveles del Estado.

h) Recibir las propuestas e inquietudes de redes, grupos y organizaciones de niños, niñas y adolescentes que desarrollen sus acciones a nivel provincial, articulándose con organizaciones y movimientos a nivel nacional e internacional.

i) Requerir a las instituciones públicas y privadas mecanismos y espacios institucionales para que niños, niñas y adolescentes puedan participar, opinar e incidir en las decisiones que se tomen en todo asunto que los afecte.

j) Establecer redes de trabajo junto a otros colectivos de niños/as y adolescente en el ámbito municipal, provincial, nacional e internacional, que les permita el intercambio de experiencias y el ejercicio de una participación democrática

k) Articular acciones de protección y promoción de derechos con los diferentes organismos creados por la presente ley.

l) Requerir el acompañamiento de adultos educadores como mediadores de los aprendizajes en los procesos de participación, en las tomas de decisiones, en la elaboración de propuestas y en la evaluación de los mecanismos de los procesos de representación. Esta presencia adulta no debe interferir en la participación real de los niños/as y adolescentes como así tampoco convertirse en un mecanismo de manipulación de los intereses y modos organizativos de los mismos.

m) Realizar asambleas a los fines de elegir los representantes que integrarán el Consejo Provincial de Promoción y Protección de Derechos.

n) Convocar a encuentros regionales de niños, niñas y adolescentes para elegir a sus representantes institucionales que formarán parte de los Consejos Municipales y Departamentales de Niñez Adolescencia y Familia.

## **TÍTULO III ORGANOS Y COMPETENCIAS JUDICIALES**

### **Artículo 77.- Competencia Jurisdiccional.**

Los Juzgados de Familia provinciales agregarán a la competencia que tienen asignada por ley provincial 7676 la siguiente:

a.- Son los órganos judiciales competentes para realizar el control de la legalidad de las medidas excepcionales contempladas en la presente ley, que hubieren adoptado los Servicios Regionales y provinciales de protección de derechos debiendo quedar plenamente garantizados el derecho a ser escuchado, y los otros principios sustentados por la normativa enumerada en la presente Ley.

b.- Resolver la aplicación de la medida de protección integral dispuesta por el órgano administrativo correspondiente en caso de oposición del niño y/o su familia o representante legal.

**TÍTULO IV  
DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES**

**Artículo 78.- Objeto.**

A los fines de la presente Ley se consideran organizaciones no gubernamentales en condiciones de articular con los Organismos del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a aquellas que, con Personería Jurídica y en cumplimiento de su misión institucional desarrollen programas de promoción, protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

**Artículo 79.- Obligaciones.**

Las organizaciones no gubernamentales mencionadas en esta ley deben respetar y garantizar en el desarrollo de su misión institucional y actividades el respeto por los derechos de los niños, niñas y adolescentes y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, Tratados Internacionales sobre los de Derechos Humanos en los que la República Argentina sea parte, Ley Nacional 26.061, y observar los siguientes principios y obligaciones:

- a) Respetar y preservar la identidad de las niñas, niños y adolescentes y ofrecerles un ambiente de respeto, dignidad y no-discriminación;
- b) Respetar y preservar los vínculos familiares o de crianza de las niñas, niños y adolescentes y velar por su permanencia en el seno familiar;
- c) No separar grupos de hermanos;
- d) No limitar ningún derecho que no haya sido limitado por una decisión judicial;
- e) Garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que les conciernan como sujetos de derechos;
- f) Promover y garantizar la participación y el ejercicio de ciudadanía de niños, niñas y adolescentes, al interior de las propias organizaciones y en los diversos ámbitos comunitarios
- g) Promover la permanente formación y capacitación en relación a la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes
- h) Difundir los principios emanados de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y propiciar y apoyar todas aquellas acciones que promuevan dichos derechos
- i) Mantener constantemente informado a la niña, niño o adolescente sobre su situación legal, en caso de que exista alguna causa judicial donde se pueda tomar una decisión que afecte sus intereses, y notificarle, en forma personal y a través de su representante legal, toda novedad que se produzca en forma comprensible cada vez que la niña, el niño o el adolescente lo requiera;
- j) Brindar a las niñas, niños y adolescentes atención personalizada y en pequeños grupos;
- k) Rendir cuentas en forma anual ante la autoridad de aplicación, de los gastos realizados clasificados según su naturaleza; de las actividades desarrolladas descriptas en detalle; de las actividades programadas para el siguiente ejercicio descriptas en detalle, su presupuesto, los gastos administrativos y los recursos con que será cubierto. Se dará cuenta también de las actividades programadas para el ejercicio vencido que no hubieran sido cumplidas, y las causas que motivaron este incumplimiento.

Las actividades de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la promoción y protección de derechos deberán desarrollarse en todo de acuerdo a los principios de la presente ley, la ley nacional 26.061 y a los lineamientos establecidos por el Consejo Federal de Niñez Adolescencia y Familia para la ejecución de las políticas públicas de infancia.

**Artículo 80.- Incumplimiento.**

En caso de incumplimiento de las obligaciones a que se hallan sujetas las organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia mencionadas por esta ley, la autoridad local de aplicación promoverá ante los organismos competentes, la implementación de las medidas disciplinarias y sanciones que correspondan.

**LIBRO IV  
PRESUPUESTO ANUAL Y FONDO ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL**

**Artículo 81.- Presupuesto Anual de Gastos y Recursos.**

El Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos de la provincia debe identificar las partidas presupuestarias cuyos beneficiarios directos sean los niños, niñas y adolescentes.

Las partidas presupuestarias asignadas a la promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes deben incrementarse de acuerdo a indicadores e información surgida de registros de datos estadísticos provinciales que deben incluir la variable niñez.

El presupuesto asignado a la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia debe constar desagregado en Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos.

**Artículo 82.- Integración del Fondo Especial.**

Se creará un Fondo Especial para garantizar el funcionamiento del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el que se integrará con los siguientes recursos:



- a) Partidas específicas establecidas por el presupuesto general de gastos y recursos de todas las áreas que ejecutan programas destinados a niños, niñas y adolescentes del estado provincial ;
- b) Los recursos provenientes de organismos provinciales, nacionales e internacionales;
- c) Préstamos, legados, donaciones, contribuciones y aportes de personas de existencia física o jurídica, públicas o privadas, internacionales, nacionales, provinciales y municipales;
- d) Los intereses que se devenguen u originen con relación al depósito o inversión de recursos del Fondo;
- e) Otros recursos y fondos especiales vigentes establecidos por normas específicas, con destino a la implementación de programas para la protección integral de los derechos de niños, niñas, adolescentes y la familia, que al momento de la sanción de la presente ley administren los diversos organismos públicos.

**Artículo 83.- Destino del Fondo Especial.**

Los fondos mencionados se asignarán exclusivamente a la ejecución de políticas que garanticen la aplicación de las medidas previstas en la presente ley.- Este fondo reviste el carácter de intangible, entendiendo por esto que bajo ninguna circunstancia pueden ser destinados a otros fines. El fondo se destinará a:

- a) Otorgar apoyos económicos a niños, niñas y adolescentes y a sus familias en la implementación de las medidas de protección de derechos previstas en la presente ley.
- b) Atender los gastos de insumos, equipamientos, mantenimiento y servicio que demande la aplicación de las políticas de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes diseñadas por los Organismos creados en la presente ley.
- c) Otorgar subvenciones o subsidios a organizaciones de la sociedad civil que acrediten experiencia en la promoción y protección de los derechos del niño y presenten programas acordes a los lineamientos y principios establecidos en la presente ley.
- d) Atender a los gastos que deriven de la conformación de los servicios de protección y del fortalecimiento de los mismos, capacitación de los integrantes de los distintos organismos del Sistema Integral de Promoción y Protección de Derechos.

El otorgamiento de las distintas partidas presupuestarias a los Órganos que integran el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes se realizará conforme a los distintos planes y programas que se propongan implementar. Cada organismo deberá elevar al Consejo Provincial de Promoción y Protección de Derechos los informes económicos correspondientes determinando tanto los gastos realizados como los objetivos y resultados alcanzados.

**LIBRO V  
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS**

**DEROGACIONES Y MODIFICACIONES NORMATIVAS**

**Artículo 84.-** Deróganse los artículos 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 12 incisos a) y b); el Título II; Título III y Título IV de la Ley 9053.

**Artículo 85.-** Modifícase el inciso c) del artículo 8 de la Ley 9053, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“inc c) En los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones de los Jueces de Menores Correccionales”.-

**Artículo 86.-** Deróganse los artículos 2; 3 y 16 de la Ley 9396.

**Artículo 87.-** Derógase el inc. 3 del art. 12 de la Ley 7676.

**Artículo 88.-** Modifícase el inciso 8) del artículo 16 de la Ley 7676, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“inc.8) Otorgamiento de guarda de Niños y adolescentes.

**Artículo 89.-** Intégrase: el artículo 16 de la Ley 7676 con los incs. 16 y 17; los que quedarán redactados de la siguiente manera:

“inciso. 16) Causas en las que exista oposición a la medidas de protección integral adoptada por la autoridad administrativa por parte del Niño, adolescente, familia o representante legal.

“Inciso 17) El control de legalidad de las medidas de protección excepcionales dispuestas por la autoridad administrativas en las condiciones establecidas en la presente Ley.”

**Artículo 90.-** Modifícase el inciso 4º) del artículo 21 de la Ley 7676; el que quedará redactado de la siguiente manera:

“inciso 4º) En la fijación provisoria de alimentos, litis expensas, régimen de visitas, exclusión del conyugue del hogar conyugal y guarda de niños y adolescentes, y en los casos previstos en el art. 16, Incs. 14) y 15). En estos últimos casos también podrán ordenarse medidas de protección temporales, cuando la urgencia y circunstancias del caso las justifiquen procurando dar solución inmediata al conflicto.”

**Artículo 91.-** Modifícase el artículo 9 de la Ley 9283, el que quedará redactado de la

siguiente manera:

"Artículo 9: Los Tribunales de familia, y los juzgados de Primera Instancia con competencia múltiple entenderán también en cuestiones de violencia familiar, personales o patrimoniales que se deriven de ella."

**Artículo 92.-** Deróganse los incisos 1 y 2 de la Ley 7982.

**Artículo 93.-** Modifícase el inciso 2 bis de la Ley 7982, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"inciso 2 bis) Asesorar, patrocinar o representar a niños y jóvenes en conflicto con la ley penal, cuando no designe defensor o cuando ninguno aceptare el cargo."

**Artículo 94.-** Asimismo, quedan derogadas toda disposición en contrario de los objetivos y contenido de la presente ley emanada del Poder Legislativo Ejecutivo o Judicial y todo tipo de actos de alcance general y/o particular con carácter normativo o no, producidos por cualquier órgano del Estado Provincial, Municipal y Comunal, por los cuales se regulen políticas, programas, dispositivos, servicios o que de cualquier manera afecten de manera directa o indirecta el acceso o el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

**Artículo 95.-** Servicio Jurídico Gratuito - Abogado del Niño.

A los fines de dar cumplimiento a lo establecido y garantizar servicios jurídicos gratuitos para los niños y jóvenes que tengan sus derechos vulnerados o amenazados la autoridad de aplicación deberá confeccionar una lista de abogados de oficio integradas preferentemente por letrados especializados en niñez y adolescencia. La misma podrá estar integrada por abogados que integren la planta de personal permanente o no permanente del Estado Provincial, Municipal o Comunal y/o de profesionales aportados por organizaciones no gubernamentales, colegios de abogados o universidades, en caso de inexistencia o insuficiencia de personal estatal especializado para conformar la misma, en virtud de la suscripción de convenios con este fin.

**Artículo 96.-** Modificaciones de competencias jurisdiccionales.

Facúltase al Poder Judicial para que en un plazo de (1) año arbitre las medidas conducentes a modificar la competencia de los Juzgados de Familia para adecuarla a la prevista por la presente Ley Nacional 26.061.

**Artículo 97.-** Conflicto de normas.

Todo conflicto normativo que se produzca en la aplicación e interpretación de la presente Ley se resolverá en beneficio de la misma.

**Artículo 98.-** Vigencia de la ley.

Esta ley entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Provincia.

**Artículo 99.-** Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

**Roberto Birri, Adela Coria, Omar Ruiz, Liliana Olivero, Nadia Fernández, Silvia Rivero, Hugo Pozzi.**

#### **FUNDAMENTOS**

Habiendo sido sancionada en el año 2005 la ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes que plantea una transformación integral en el modo en que el Estado debe abordar las políticas públicas de infancia, nuestra provincia aún no ha realizado la completa y necesaria adecuación legislativa que permita la total aplicación de la misma.

Efectivamente, en Córdoba, en el año 2007 se sancionó la ley 9396 de adhesión a la ley nacional, luego en el 2008 se creó por ley 9591 el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia. Si bien estas normas significaron un paso adelante, la vigencia de las mismas en paralelo con la ley 9053 de protección judicial del niño cuyo contenido es totalmente opuesto a la ley nacional 26.061 y a la Convención Internacional de los Derechos del Niño lleva que en la práctica la ley nacional no se pueda aplicar en sus contenidos esenciales.

Sin haberse creado legislativamente el Sistema de Protección Integral de los Derechos del Niño, con la estructura administrativa y las articulaciones que el implica y sosteniéndose la vigencia de una ley tutelar que responde al Paradigma anterior de Patronato del Menor en Córdoba nos encontramos con una situación normativa totalmente ambigua y contradictoria que impide el abordaje de la vulneración de derechos de los niños y jóvenes a través de las medidas y acciones previstas tanto en la ley nacional como en los Tratados Internacionales que regulan la temática a los que nuestra Nación adhirió.

Por otro lado el Tribunal Superior de Justicia de manera contradictoria a lo que prescriben las normas mencionadas, en los años 2009 y 2010 ha dictado Acordadas donde unilateralmente determina que competencias le deriva al Poder Ejecutivo provincial y que competencias se reserva basándose en la ley 9053, cuando en realidad la autoridad de aplicación de la ley nacional es la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia dependiente del Poder Ejecutivo provincial. De esta manera el Tribunal Superior de Justicia invierte el orden jerárquico establecido en el art. 31 de la Constitución Nacional según el cual la totalidad de las normas y actos provinciales deben subordinarse a ella, y a los Tratados Internacionales (con jerarquía constitucional), a las leyes que

dicte el Congreso nacional (como la ley 26.061) y a toda norma u acto que emane del gobierno federal.

Sobre la primer Acordada Nro. 987 del Tribunal Superior de Justicia, la Secretaria Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF) se ha pronunciado por Nota 475/09 dirigida a la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia de Córdoba. (REF. DOC. Nro E.Senaf-12422.2009-Acuerdo Reglamentario Nro 987 del Excmo. Tribunal de Justicia de la Provincia de Córdoba) a través del abogado Ernesto Martín Navarro del Departamento de Asistencia jurídica y el Dr. Gabriel Lerner, Subsecretario de Derechos para la Niñez Adolescencia y Familia, ambos de SENAF, expresando "que el Acuerdo Reglamentario 987/2009 implica lisa y llanamente, la negación de la vigencia de la ley Nº 26.061 en sus Títulos III y IV..." ".....De lo expuesto en el punto anterior tenemos que la totalidad de las normas contenida en la ley 9053 en virtud de las cuales se crea el fuero prevencional de menores y se asigna la competencia en materia de protección de derechos a dichos magistrados, a la vez que se regula el procedimiento judicial pertinente, no tiene virtualidad alguna porque han sido derogadas en la medida que no se corresponden con el sistema que impone la ley 26.061 y que incorpora en su totalidad la ley 9396.

En consecuencia mal puede pretender el TSJ la permanencia de la competencia en cabeza de los jueces de menores en lo prevencional y asignándoles a los mismos la casi totalidad de las medidas de protección (tanto comunes cuanto excepcionales) que precisamente en el sistema de la ley 26.061 se encuentran en cabeza de la autoridad administrativa de aplicación"

Por estos motivos urge la derogación de la ley 9053 en su aspecto prevencional, ya que su vigencia implica la continuidad del abordaje judicial de los problemas de la niñez, de conformidad a la ley nacional derogada de Patronato del Menor Nº 10.903, lo que significa que los conflictos sociales en los que se encuentran los niños y las familias mas vulnerables se derivan a un "juez de menores" quien desde un poder discrecional decide unilateralmente que medidas "tutelares" impone, la que en la mayoría de los casos, consiste en la separación del niño de su familia y su posterior institucionalización. En este proceder subyace la vieja mirada, centrada en una actividad judicial destinada a controlar, informar, diagnosticar, e indicar tratamientos, antes que ha restituir derechos.

La ley nacional vigente es clara al establecer que el modo de restablecer los derechos vulnerados de la infancia es a través de políticas publicas integrales y medidas de protección de derechos fijadas por la Administración pública. Estas medidas sólo serán controladas por el Poder Judicial cuando exista oposición por parte de la familia del niño o cuando implique separación del niño de su grupo conviviente, en el excepcional caso que se lo determine.

La Ley Nacional de Protección Integral del Niño y del Adolescente, no solo propone la articulación de la sociedad civil, la familia y el Estado en todo lo que atañe a la vida de niños y adolescentes, sino también la participación de estos últimos en las decisiones de políticas publicas que los afecten.

Consideramos que es fundamental adecuar la ley provincial a los postulados de la ley nacional ya que de otra manera continuarán existiendo contradicciones sustanciales y vacíos normativos que generan permanentes confusiones entre las familias y los distintos operadores del sistema sin que se defina claramente los ámbitos de responsabilidades de los distintos agentes del Estado.

Una ley provincial adecuada a los lineamientos de la ley nacional 26.061 como la que aquí se propone no puede dejar de incluir, entre otros los siguientes principios:

- Conformación de un Sistema Integral de Protección de Derechos integrado por distintos Órganos Administrativos que permitan la aplicación descentralizada de las políticas públicas dirigidas a los niños jóvenes y sus familias.

- La Coordinación de la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia en su carácter de autoridad de aplicación del Sistema Integral de Protección con las distintas áreas del gobierno provincial a los fines de lograr la articulación de las políticas y programas dirigidos a la niñez y a la familia que eviten la superposición y el deficiente uso de recursos.

- La creación de Órganos multisectoriales tanto a nivel provincial como municipal que propongan, diseñen y ejecuten las políticas públicas dirigidas a la Infancia en los que estén representadas junto con las áreas del gobierno, la sociedad civil que trabaje en la promoción y defensa de los derechos del niño con representantes de estos ámbitos a nivel provincial regional y municipal.

- La creación de Servicios provinciales, regionales y locales / municipales de promoción y protección de derechos a los fines de que frente a la vulneración o amenaza de violación de derechos que sufran los niños y jóvenes la respuesta estatal sea la mas y de carácter territorial que permita para la adecuada restitución del derecho vulnerado.

- La clara determinación dentro del presupuesto provincial del porcentaje destinado a políticas universales y especificas dirigidas a la niñez y sus familias, y la creación de un Fondo de Presupuesto propio para la aplicación del Sistema Integral de Protección de Derechos que sea intangible y administrado de forma transparente con acceso a la información pública en relación a su integración y destino.

La continuidad de la vigencia de la ley provincial 9.053 no permite la satisfacción máxima de los derechos de niños y jóvenes, ni contempla de ninguna manera los principios anteriormente expuestos que son estructurales a la ley nacional.

La presente ley propone órganos administrativos descentralizados para aplicar las políticas publicas con una real articulación con los diversos actores que integran la sociedad civil, a la vez que regionaliza la mirada de nuestra niñez, teniendo en cuenta las diferentes demandas y realidades que existen al interior provincial. En ella se estipulan la creación de organismos,

instancias y formas de protección y participación en la defensa de los derechos de nuestra niñez.

La situación de numerosos niños y jóvenes que han desarrollado sus vidas privados de libertad dentro de Institutos totalmente alejados de su familia y comunidad por situaciones vinculadas a la falta de acceso a derechos básicos en la provincia sumados a los miles que se encuentran judicializados sin resolver sus necesidades y problemáticas, amerita una urgente interpelación sobre las prácticas del Estado en su accionar hacia los niños y necesita un tratamiento serio y acorde sobre “qué es proteger integralmente derechos”.

Acordamos con las palabras de Emilio García Méndez cuando se refiere a la precitada Ley nacional “...me parece importante decirlo sin la menor ambigüedad, la ley 26.061 constituye la innovación jurídica mas importante en materia de infancia, por lo menos desde el retorno de la democracia hasta hoy. Tanto es así, que si la conciencia jurídica media se encontraba, antes de la reforma, muy por delante de la vergonzosa ley Agote de 1919, (ley 10.903) la profundidad de los cambios que encierra la nueva ley ha colocado a la conciencia jurídica (ni hablemos de las practicas) muy por detrás de los desafíos que encierra la ley 26.061”.

Hacemos saber que, además, el presente proyecto ha sido fruto de aportes de distintos sectores involucrados en la problemática, especialmente del denominado Colectivo Cordobés por los Derechos de Niñas, Niños, y Jóvenes, conformado por distintas organizaciones de la sociedad civil, como Cecopal, Sehas, Serviproh, Seap, La Minga, Programa del Sol, Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho UNC- Programa del Sol, Foro de Ongs. de Promoción y Desarrollo, lo que legitima más aún al mismo.

Creemos, y estamos convencidos, que tanto la Ley nacional 26.061 como la iniciativa que ahora nos ocupa van en la misma línea tanto de la Convención como de los acuerdos internacionales precitados, por lo que solicitamos a esta Legislatura la aprobación del presente proyecto de Ley.

**Roberto Birri, Adela Coria, Omar Ruiz, Liliana Olivero, Nadia Fernández, Silvia Rivero, Hugo Pozzi.**

#### **DESPACHO DE COMISIÓN**

Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD y DERECHOS HUMANOS, de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 6484/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece la Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia y derogando la Ley Nº 9053 y diversos artículos de la Ley Nº 9396, Compatibilizado con el Proyecto de Ley Nº 5351/L/10, iniciado por el Bloque del Frente Cívico y Social y los Legisladores Rivero, Olivero, Coria, Fernández, Ruiz y Pozzi, instituyendo la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia y modificando artículos de las Leyes Nº 7676, 7982, 9053, 9396 y 9591, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:

#### **LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:**

#### **PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA**

#### **TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES**

#### **Capítulo Único De los Aspectos Fundamentales**

**Artículo 1º.- Objeto.** Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles, intransigibles y tienen por objeto la “Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba”, mediante la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de sus derechos.

Los derechos y garantías que se enumeran en la presente norma deben entenderse como complementarios de los derechos y garantías reconocidos en el ordenamiento jurídico provincial, nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte.

**Artículo 2º.- Sujetos comprendidos.** A los efectos de esta Ley quedan comprendidas todas las personas, niñas, niños y adolescentes hasta los dieciocho (18) años de edad.

**Artículo 3º.- Interés superior.** A los efectos de la presente Ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente a la máxima satisfacción -integral y simultánea- de los derechos y garantías reconocidos en esta Ley y los que en el futuro pudieren reconocérsele. La determinación del interés superior debe respetar:

- a) Su condición de sujeto activo y portador de derechos;
- b) Su derecho a ser oído cualquiera sea la forma en que se manifieste, y a que su opinión sea tenida en cuenta;
- c) El pleno desarrollo personal, armónico e integral de sus derechos en su medio familiar, social y cultural;

d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales;

e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común, y

f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida de la niña, niño y el adolescente a la residencia o lugar donde ellos hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustará el ejercicio de la misma, filiación, restitución de la niña, el niño o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores, cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse. Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.

**Artículo 4º.- Aplicación obligatoria.** Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, de las normas y medidas que se adopten en las que intervengan organismos públicos o privados, órganos legislativos, judiciales o administrativos, la familia y la sociedad civil en general, se considerará en forma primordial el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Las normativas que regulan y/o repercuten en el acceso y/o ejercicio de derechos reconocidos a las niñas, niños y adolescentes deberán adecuarse al principio rector de niño sujeto activo de derechos. La Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Nacional Nº 26.061, su Decreto Reglamentario Nº 415/06 y esta Ley son de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas comprendidas en la presente norma.

Los órganos administrativos locales de los municipios y comunas deben revisar y adecuar la normativa a los postulados referidos en la presente Ley.

Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos en todos los ámbitos, cualquiera sea la forma en que se manifiesten.

**Artículo 5º.- Políticas Públicas integrales.** El Estado Provincial adoptará las medidas tendientes a efectivizar los derechos reconocidos por esta Ley, adecuando sus políticas públicas a los efectos de garantizar los principios y normas aquí contenidas.

**Artículo 6º.- Autoridad de Aplicación.** Es Autoridad de Aplicación de la presente Ley y del "Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba", la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia o el organismo que en el futuro la sustituya.

**Artículo 7º.- Implementación de las Políticas Públicas.** La Autoridad de Aplicación será la encargada de la implementación y aplicación de las Políticas Públicas para la promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en coordinación con los demás Ministerios y Secretarías de Estado, y las mismas comprenderán:

a) El fortalecimiento de la familia como ámbito natural de cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, aplicándose el concepto de "familia ampliada", es decir, el de todo ámbito familiar por consanguinidad, por afinidad o de otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad, o ámbitos familiares considerados como de convivencia alternativa;

b) La gestión asociada entre los distintos organismos de gobierno -nacional, provincial, municipal o comunal- y la sociedad civil que se realicen en marcos adecuados de capacitación, fiscalización y promoción para el cumplimiento de los derechos establecidos;

c) La efectivización de redes locales articulando espacios públicos y privados de promoción y protección de derechos;

d) La coordinación con municipios y comunas para proceder a la creación de organismos locales de promoción, prevención, protección y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a los efectos de la presente Ley;

e) La coordinación con las políticas implementadas en el ámbito nacional, municipal y comunal;

f) La articulación transversal de las acciones públicas en la elaboración, ejecución y evaluación de planes y programas entre Ministerios y Secretarías del Gobierno Provincial mediante la Comisión Interministerial, y

g) La promoción de la participación activa de las niñas, niños y adolescentes.

**Artículo 8º.- Responsabilidad gubernamental.** Los organismos del Estado -provincial, municipal o comunal- tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas. En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación es prioritario para los organismos del Estado mantener siempre presente el interés superior de las personas amparadas por esta Ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos que las garanticen.

Las políticas públicas de los organismos del Estado deben garantizar, con absoluta prioridad, el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

La prioridad absoluta implica preferencia en:

a) La protección y auxilio en cualquier circunstancia;

b) La exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen con los intereses de los adultos o de las personas jurídicas -privadas o públicas-;

c) La atención, formulación y ejecución de las políticas públicas, y

d) La atención en los servicios esenciales.

**Artículo 9º.- Responsabilidad familiar.** La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías.

Los progenitores tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos.

Los organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones.

## **TÍTULO II PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

### **Capítulo I De los Principios**

**Artículo 10.- Principio de igualdad y no discriminación.** Las disposiciones de esta Ley se aplicarán por igual a todas las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos raciales, de sexo, color, edad, idioma, religión o creencias, opinión política, cultura, posición económica, origen social o étnico, discapacidad, apariencia física o impedimento físico, de salud, de nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

**Artículo 11.- Principio de efectividad.** Los organismos del Estado, la sociedad y la familia deben adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos reconocidos en esta Ley y en todo el ordenamiento jurídico nacional, provincial, municipal y comunal.

### **Capítulo II De los Derechos**

**Artículo 12.- Derecho a la vida.** Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de vida.

**Artículo 13.- Derecho a la dignidad y a la integridad personal.** Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a:

- a) La dignidad como sujetos de derecho y de personas en desarrollo;
- b) No ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante o intimidatorio;
- c) No ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante, y
- d) A su integridad física, sexual, psíquica y moral.

La persona que tome conocimiento de malos tratos o de situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de una niña, niño o adolescente -o cualquier otra violación a sus derechos-, debe comunicar dicha situación a la autoridad local de aplicación de la presente Ley.

Los organismos del Estado deben garantizar programas gratuitos de asistencia y atención integral de todas las niñas, niños y adolescentes.

**Artículo 14.- Derecho a la convivencia familiar y comunitaria.** Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados y desarrollarse dentro de su grupo familiar de origen y con sus vínculos afectivos y comunitarios. Sólo excepcionalmente, y para los casos en que ello sea imposible, tendrán los mismos derechos en un grupo familiar alternativo, de conformidad con la ley.

Se entiende por grupos familiares alternativos, la familia en todas sus modalidades, las familias de la comunidad donde la niña, niño y adolescente reside habitualmente u otras familias.

El Estado, junto a la familia receptora, debe fortalecer y apoyar a la familia de origen en el afianzamiento de los vínculos entre ésta y la niña, niño o adolescente para que en el plazo más breve posible se produzca la consolidación de la relación familiar.

El Estado debe garantizar orientación y apoyo a las familias receptoras, a través de programas y políticas públicas, a los fines de fortalecer el desempeño de su rol.

En toda situación de institucionalización de alguno de los progenitores, los organismos del Estado deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes el vínculo y el contacto directo y permanente con aquellos, siempre que no contraríe su interés superior.

Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales.

**Artículo 15.- Derecho a la identidad.** Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia, salvo la excepción prevista en los artículos 327 y 328 del Código Civil.

Los organismos del Estado deben facilitar y colaborar en la búsqueda, localización u obtención de información de los padres u otros familiares de las niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar.

Tienen derecho a conocer a sus padres biológicos y a crecer y desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres, aun cuando éstos estuvieran separados o divorciados o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia, salvo que dicho vínculo amenazare o violare alguno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que consagra la ley.

**Artículo 16.- Derecho a la documentación.** Las niñas, niños, adolescentes y progenitores indocumentados tienen derecho a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad

de conformidad con la normativa vigente y en los términos que establece el procedimiento previsto en la Ley Nacional Nº 24.540.

**Artículo 17.- Derecho a la salud.** Los organismos del Estado deben garantizar:

a) El acceso a los servicios de salud respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por la familia y la comunidad a la que pertenecen, siempre que no constituyan peligro para su vida e integridad;

b) Programas de asistencia integral, rehabilitación e integración;

c) Programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia, y

d) Campañas permanentes de difusión y promoción de sus derechos dirigidas a la comunidad a través de los medios de comunicación social.

Toda institución de salud debe atender prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes y mujeres embarazadas.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud.

**Artículo 18.- Derecho a la educación.** Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita, atendiendo a:

a) Su desarrollo integral;

b) Su preparación para el ejercicio de la ciudadanía;

c) Su formación para la convivencia democrática y el trabajo respetando su identidad cultural y lengua de origen;

d) Su libertad de creación y el desarrollo máximo de sus competencias individuales;

e) El fortalecimiento de los valores de solidaridad;

f) El respeto por los derechos humanos, la tolerancia, la identidad cultural y la conservación del ambiente, y

g) El derecho al acceso y permanencia en un establecimiento educativo cercano a su residencia.

Por ninguna causa se puede restringir el acceso a la educación, y en el supuesto de carecer de la documentación que acredite su identidad, se los debe inscribir provisoriamente, debiendo los organismos del Estado arbitrar los medios idóneos para la tramitación y entrega de la misma.

Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen todos los derechos y garantías consagrados y reconocidos por esta Ley, además de los inherentes a su condición específica. Los organismos del Estado, la familia y la sociedad deben asegurarles el pleno desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, así como el goce de una vida plena y digna.

**Artículo 19.- Gratuidad de la educación.** La educación pública será gratuita en todos los servicios estatales, niveles y regímenes especiales, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.

**Artículo 20.- Prohibición de discriminar por estado de embarazo, maternidad y paternidad.** Prohíbese a las instituciones educativas públicas y privadas imponer -por causa de embarazo, maternidad o paternidad- medidas correctivas o sanciones disciplinarias a las niñas, niños y adolescentes.

Los organismos del Estado deben desarrollar un sistema conducente a permitir la continuidad y la finalización de los estudios de las niñas, niños y adolescentes.

La mujer privada de su libertad será especialmente asistida durante el embarazo y el parto, y se le proveerán los medios materiales para la crianza adecuada de su hijo mientras éste permanezca en el medio carcelario, facilitándose la comunicación con su familia a efectos de propiciar su integración a ella.

**Artículo 21.- Medidas de protección a la maternidad y paternidad.** Las medidas que conforman la protección integral se extenderán a los progenitores durante el embarazo, el parto y el período de lactancia, garantizando condiciones dignas y equitativas para el adecuado desarrollo de su embarazo y la crianza de su hijo.

**Artículo 22.- Derecho a la libertad.** Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad. Este derecho comprende:

a) Tener sus propias ideas, creencias o culto religioso según el desarrollo de sus facultades y con las limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico, y ejercerlo bajo la orientación de sus padres, tutores, representantes legales o encargados de los mismos;

b) Expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la familia, la comunidad y la escuela, y

c) Expresar su opinión como usuarios de todos los servicios públicos y -con las limitaciones de la ley- en todos los procesos judiciales y administrativos que puedan afectar sus derechos.

Las personas sujetos de esta Ley tienen derecho a su libertad personal, sin más límites que los establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. No pueden ser privados de ella ilegal o arbitrariamente.

La privación de libertad personal y ambulatoria, entendida como ubicación de la niña, niño o adolescente en un lugar de donde no pueda salir por su propia voluntad, debe realizarse de conformidad con la normativa vigente.

**Artículo 23.- Derecho al descanso, recreación, deporte y juego.** Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, recreación, deporte y juego. El ejercicio de estos derechos debe estar dirigido a garantizarles el descanso integral.

Los organismos del Estado, con la activa participación de la sociedad, deben establecer programas que garanticen el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la recreación, al esparcimiento, a los juegos recreativos y a los deportes, debiendo asegurar programas específicos para aquellos con discapacidad.

**Artículo 24.- Derecho al ambiente saludable.** Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a la preservación y disfrute del paisaje.

**Artículo 25.- Derecho a la dignidad.** Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen.

Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente, a los sujetos de esta Ley a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar.

**Artículo 26.- Derecho a la libre asociación.** Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho de asociarse libremente con otras personas con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos, laborales o de cualquier otra índole, siempre que sean de carácter lícito y de conformidad a la legislación vigente.

Este derecho comprende especialmente la posibilidad de:

- a) Formar parte de asociaciones, inclusive de sus órganos directivos, y
- b) Promover y constituir asociaciones conformadas exclusivamente por niñas, niños, adolescentes o ambos, de conformidad con la Ley.

**Artículo 27.- Derecho a opinar y a ser oído.** Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a:

- a) Participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en aquellos que tengan interés, y
- b) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo.

Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes; entre ellos, al ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo.

**Artículo 28.- Derecho al trabajo de los adolescentes - Protección contra la explotación laboral.** Los organismos del Estado deben garantizar el derecho de las personas adolescentes a la educación y reconocer su derecho a trabajar con las restricciones que imponen la legislación vigente y los convenios internacionales sobre erradicación del trabajo infantil, debiendo ejercer la inspección del trabajo contra la explotación laboral de las niñas, niños y adolescentes.

Este derecho podrá limitarse solamente cuando la actividad laboral importe riesgo, peligro para el desarrollo, la salud física, mental o emocional de los adolescentes.

Los organismos del Estado, la sociedad y en particular las organizaciones sindicales coordinarán sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y limitar toda forma de trabajo legalmente autorizada cuando impidan o afecten su proceso evolutivo.

**Artículo 29.- Derecho a la seguridad social.** Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de la seguridad social.

Los organismos del Estado deben establecer políticas y programas de inclusión para las niñas, niños y adolescentes teniendo en cuenta los recursos y la situación de los mismos y de las personas que sean responsables de su mantenimiento.

### Capítulo III De las Garantías

**Artículo 30.- Garantía estatal de identificación e inscripción en el respectivo Registro.** Los organismos del Estado deben garantizar procedimientos sencillos y rápidos para que los recién nacidos sean identificados en forma gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente después de su nacimiento, estableciendo el vínculo filial con la madre, conforme al procedimiento previsto en las Leyes Nacionales Nº 24.540 y Nº 26.061, sus modificatorias y decretos reglamentarios.

Si al momento de efectuarse los controles prenatales o de ingreso al centro de salud se detectare que alguno de los progenitores del niño por nacer carece de documentos de identidad, el agente que tome conocimiento debe informar a los organismos competentes a fin de garantizar el acceso a la tramitación y expedición de la documentación requerida de acuerdo a la normativa vigente.

Si la indocumentación de alguno de los progenitores continuara al momento del parto, debe consignarse nombre, apellido, fecha de nacimiento, domicilio, edad, huellas dactilares y nacionalidad de los mismos, en el certificado de constatación de parto que expida la unidad sanitaria pertinente. A los fines de esta garantía, el Estado Provincial debe habilitar oficinas del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en todos los establecimientos públicos que atienden nacimientos.

**Artículo 31.- Garantías mínimas de procedimiento - Garantías en los procedimientos judiciales o administrativos.** Los organismos del Estado deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías:

a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente, de manera directa o por medio de sus padres o tutores cuando por su madurez y desarrollo no lo pudiese hacer por sí mismo, y con la intervención del ministerio pupilar cuando corresponda (Art. 59 del Código Civil);

b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte;

c) A ser asistido por un letrado especializado en niñez y adolescencia, personalmente o en sus padres o tutores que lo representen, cuando no haya intereses contrapuestos, desde el inicio del



procedimiento judicial o administrativo que lo incluya, sin perjuicio de la intervención del ministerio pupilar cuando corresponda. En caso de carecer de recursos económicos, el Estado debe asignarle de oficio un letrado que lo patrocine;

d) A participar activamente en todo el procedimiento, por sí mismo o por sus representantes, siempre que no existan intereses contrapuestos, y

e) A oponerse o a recurrir ante el superior frente a cualquier resolución que lo afecte.

**Artículo 32.- Deber de comunicar.** Los miembros de los establecimientos educativos y de salud -públicos o privados- y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de los derechos de las niñas, niños o adolescentes debe comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión.

**Artículo 33.- Deber del funcionario de recepcionar denuncias.** El agente público que sea requerido para recibir una denuncia de vulneración de derechos de los sujetos protegidos por esta Ley, ya sea por la misma niña, niño o adolescente o por cualquier otra persona, se encuentra obligado a recibir y tramitar tal denuncia en forma gratuita, a fin de garantizar el respeto, la prevención y la reparación del daño sufrido, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en la figura de grave incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En caso de que la denuncia fuera efectuada en órgano judicial, el mismo debe -sin más trámite y de manera inmediata- remitirla a la autoridad administrativa de aplicación de la presente Ley para que tome conocimiento e intervención conforme a su competencia. No obstante, cuando de la misma denuncia o de un requerimiento del ministerio pupilar resultare que se trata de un hecho que prima facie constituiría un delito de orden penal, la autoridad judicial que la receptare, además de la remisión referida precedentemente, lo derivará de manera urgente a la fiscalía de turno.

En caso de que la denuncia fuese formulada por la niña, niño o adolescente, la ausencia de sus representantes legales nunca podrá obstaculizar su recepción.

### **TÍTULO III SISTEMA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

#### **Capítulo Único De los Organismos Intervinientes**

**Artículo 34.- Conformación.** El Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba está conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, ejecutan y supervisan las políticas públicas de gestión estatal o privadas en el ámbito provincial, municipal o comunal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado Argentino, la Ley Nacional Nº 26.061, la presente Ley, la Constitución Provincial y el ordenamiento jurídico vigente.

Dispónese la implementación del "Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba", a los efectos de establecer los mecanismos a través de los cuales se asegure a las niñas, niños y adolescentes el goce de los derechos y garantías reconocidos en la normativa citada, en el ámbito provincial y de los municipios y comunas de su territorio, en coordinación con el ámbito nacional.

**Artículo 35.- Recursos para el logro de los objetivos.** Para el logro de sus objetivos el Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba contará con:

a) Políticas, programas y medidas de promoción y protección de derechos;

b) Procedimientos y protocolos de intervención;

c) Medidas excepcionales de protección de derechos;

d) Organismos administrativos de protección de derechos cuyas funciones sean acordes a lo prescripto por la Ley Nacional Nº 26.061 y organismos judiciales de control de la legalidad de las medidas excepcionales, y

e) Recursos económicos específicos.

La distribución de competencias administrativas no puede ser obstáculo para la intervención inmediata en situaciones de vulneración de derecho o riesgo para la vida o la integridad personal de la niña, niño o adolescente y la tramitación ante la autoridad que corresponda.

**Artículo 36.- Autoridad administrativa de promoción y protección de derechos en el ámbito provincial.** La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia o el organismo que en el futuro la reemplace, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la presente Ley, tiene a su cargo el diseño, instrumentación, ejecución, coordinación, articulación y control de políticas dirigidas a niñas, niños y adolescentes y sus familias, y estará a cargo de un Secretario de Estado designado por el Poder Ejecutivo de la Provincia.

**Artículo 37.- Funciones.** La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia tiene competencia en todo lo inherente a la elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos que promuevan el desarrollo integral de la niñez, la adolescencia y la familia y, en particular, desarrollará las siguientes funciones:

a) Determinar los objetivos y la formulación de las políticas del área de su competencia;

b) Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Provincial;

c) Implementar políticas y programas integrales con eje fundamental en la garantía de derechos, la promoción, la prevención, la dignidad, la inclusión social, la participación de la comunidad y el desarrollo local y regional;

d) Reconstruir el entramado social al diseñar y proponer políticas públicas capaces de dar respuestas efectivas y viables a las problemáticas que atraviesan las niñas, niños, adolescentes y familias;

e) Crear espacios de planificación y acción en estas diferentes áreas específicas;

f) Crear programas y planes relacionados con el accionar de la Secretaría que garanticen el efectivo cumplimiento de los derechos y las necesidades específicas de las diversas poblaciones objetivo;

g) Elaborar políticas que faciliten formas y espacios de participación concertada entre los diferentes niveles y con los diversos actores sociales involucrados en la implementación de las acciones;

h) Promover la transversalidad en las políticas públicas a partir de actividades y programas conjuntos;

i) Promover los valores que cohesionan, articulan y hacen posible una vida armoniosa en familia y en sociedad;

j) Implementar las acciones de capacitación, difusión y sensibilización que aporten al desarrollo de políticas públicas de prevención de la violencia familiar;

k) Planificar y ejecutar estrategias de atención, orientación, capacitación y fortalecimiento a familias en riesgo;

l) Fortalecer el reconocimiento de la sociedad a las niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de derechos, incluyendo a la familia y a la tercera edad;

m) Atender al fortalecimiento, promoción y atención de las políticas relacionadas con las niñas, niños, adolescentes, su núcleo familiar y la tercera edad a través del desarrollo de tareas preventivas y asistenciales;

n) Coordinar, controlar y celebrar convenios con organismos públicos o privados que atiendan la problemática de las niñas, niños y adolescentes;

ñ) Promocionar, desarrollar y ejecutar políticas públicas que recuperen y fortalezcan los mecanismos familiares, comunitarios e institucionales de control, protección, acompañamiento, contención y asistencia a las niñas, niños y adolescentes en procura de su desarrollo integral;

o) Difundir y hacer cumplir los derechos y garantías expresados en la Convención Internacional por los Derechos del Niño -tal como lo formulan la Constitución de la Nación Argentina y la Constitución de la Provincia de Córdoba - a través de la Ley Nacional Nº 26.061 y sus modificatorias;

p) Promover la reinserción escolar de las niñas, niños y adolescentes que por distintas causas hayan dejado de concurrir a la escuela;

q) Disponer los recursos necesarios para la capacitación permanente del personal administrativo y técnico que esté afectado a los distintos programas y servicios de atención a las niñas, niños, adolescentes y sus familias;

r) Realizar estudios e investigaciones especializadas en la temática específica, así como el dictado de cursos de formación;

s) Promover y fortalecer relaciones interinstitucionales con organismos gubernamentales, no gubernamentales y educativos y con especialistas vinculados a las áreas específicas;

t) Generar acciones conjuntas destinadas a la difusión y promoción de las problemáticas específicas de la Secretaría en los medios de comunicación masivos locales y nacionales;

u) Brindar atención integral a las niñas, niños y adolescentes incurso en el régimen penal aplicable a las personas menores de dieciocho (18) años a través de institutos, hogares sustitutos y pequeños hogares, readecuando la infraestructura disponible de acuerdo a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes;

v) Elaborar planes, programas y proyectos que tiendan al fortalecimiento familiar y a la asistencia a la tercera edad;

w) Brindar asistencia con apoyos técnicos y económicos para el fortalecimiento familiar a través de planes, programas y proyectos que tiendan a la desinternación de niñas, niños y adolescentes;

x) Promover la articulación con los Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que al efecto implementen los municipios y comunas, e

y) Ejecutar de manera descentralizada políticas de promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

**Artículo 38.- Comisión Interministerial de la Niñez, Adolescencia y Familia.** La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en su carácter de Autoridad de Aplicación del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba contará con la colaboración de una Comisión Interministerial integrada por miembros cuyo cargo no podrá ser inferior al de Director de Jurisdicción o nivel equivalente, a razón de uno (1) por cada ministerio y secretaría de estado perteneciente a la estructura orgánica del Poder Ejecutivo Provincial que estuvieren relacionados directamente con la protección de los derechos establecida en la presente Ley. Estará presidida por el titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

**Artículo 39.- Comisión Interministerial. Funciones.** La Comisión Interministerial tiene las siguientes funciones:

a) Coordinar las políticas públicas y la optimización de los recursos del Estado Provincial sobre la base del plan de acción elaborado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia;

b) Coordinar acciones en el abordaje de las situaciones y en la aplicación de las medidas que se adopten entre los organismos, servicios, dispositivos o entidades de los distintos ministerios y secretarías de estado;

c) Colaborar con la Autoridad de Aplicación en el monitoreo, evaluación, diseño, implementación y funcionamiento del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y

d) Elaborar protocolos y procedimientos de intervención conjunta y articulada.

**Artículo 40.- Autoridad administrativa de promoción y protección de derechos en el ámbito regional y local.** La Autoridad de Aplicación implementará la descentralización regional en el territorio de la Provincia a los fines de la promoción, protección y restitución de derechos de las personas sujetos de esta Ley, a través de dependencias específicas creadas a esos efectos.

Las dependencias descentralizadas de la Autoridad de Aplicación tendrán como autoridad regional a un delegado, quien actuará en articulación y en conjunto con las autoridades administrativas locales de municipios y comunas creadas a tales efectos y con las distintas dependencias de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

La Autoridad de Aplicación y las Unidades de Desarrollo Regionales (UDER) coordinarán y articularán la asistencia técnico-jurídica a los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos para el diseño y articulación de programas y la intervención directa en las situaciones de vulneración de derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias.

Las dependencias descentralizadas de la Autoridad de Aplicación intervendrán, mediante la adopción y aplicación de medidas de promoción y protección integral y medidas excepcionales de protección de derechos conforme al procedimiento establecido en la presente Ley, en coordinación con los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos y las dependencias de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

En cada nivel del sistema la autoridad administrativa coordinará con las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a las niñas, niños y adolescentes las acciones y los programas con el fin de articular y potenciar los recursos existentes.

Los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos de los municipios y comunas son aquellas áreas responsables de desarrollar planes y programas de protección de derechos de la infancia a nivel local. La Autoridad de Aplicación propenderá a que en cada municipio o comuna se establezcan órganos especializados denominados "Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos", los cuales podrán depender de la gestión de la provincia, del municipio o comuna o de gestiones conjuntas a partir de la celebración de convenios entre ellos.

Los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos son unidades técnico-operativas con una o más sedes, cuya función es la de promover políticas públicas locales con enfoque de derecho, generar y promover los espacios de participación de las niñas, niños y adolescentes y facilitar que las niñas, niños y adolescentes que vean amenazados o violados sus derechos puedan acceder a los programas y planes disponibles en su comunidad.

Los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos y las Unidades de Desarrollo Regional (UDER) deben contar con equipos profesionales interdisciplinarios, los que se encargarán de adoptar y aplicar las medidas de protección integral con la asistencia técnico-jurídica, acompañamiento y coordinación de la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

## **TÍTULO IV APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

### **Capítulo I Medidas y Procedimientos de Primer Nivel**

**Artículo 41.- Medidas de promoción de derechos y prevención de su vulneración.**

La Autoridad de Aplicación coordinará con las dependencias de los Estados nacional, provincial, municipal y comunal propendiendo a una institucionalidad única para la infancia, la adolescencia y la familia en la Provincia de Córdoba, coadyuvando al fortalecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interdisciplinaria entre los diferentes niveles de la administración pública, como así también con la sociedad civil, con el objetivo de hacer más eficaz y eficiente la política pública y el accionar que se impulsará desde su órbita.

Asimismo, implementará políticas en un primer nivel de actuación, destinadas al desarrollo armónico de la infancia y la adolescencia en familia, mejorando los niveles y la calidad de la educación, de la salud física y mental, del hábitat, de la cultura, de la recreación, del juego, del acceso a los servicios y de la seguridad social, generando una adecuada inclusión social.

Actuará también en la promoción de derechos y prevención de su vulneración a través de programas, planes y proyectos y la descentralización regional de los mismos en el territorio provincial.

Las autoridades administrativas de promoción y protección de derechos en el ámbito de los municipios y comunas son aquellas áreas responsables de desarrollar planes y programas de promoción y protección de derechos de la niñez, adolescencia y familia a nivel local. Integran y deben funcionar de manera articulada y coordinada, en este primer nivel de intervención, con la Autoridad de Aplicación, con el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, con la Comisión Interministerial, con los municipios o comunas y con los Consejos Locales de Infancia con representación de los miembros de la sociedad civil.

### **Capítulo II Medidas y Procedimientos de Segundo Nivel**

**Artículo 42.- Medidas de protección de derechos.** Son aquellas adoptadas y

emanadas de la Autoridad de Aplicación, sus dependencias, Unidades de Desarrollo Regional (UDER) o por las autoridades administrativas de promoción y protección de derechos en el ámbito de los municipios y comunas, ante la amenaza o violación de los derechos o garantías de una o varias niñas, niños o adolescentes individualmente considerados, para preservar o restituir a los mismos el goce

y ejercicio de los derechos amenazados o vulnerados o la reparación de las consecuencias de su vulneración.

La amenaza o vulneración a que se refiere este artículo puede provenir de la acción u omisión de los padres, la familia, representantes legales o responsables, de la propia conducta de la niña, niño o adolescente o del Estado, de la sociedad y de los particulares.

Ante esta vulneración de derechos, todos los actores sociales involucrados (familias, comunidad, Estado y sociedad civil) deben poner en práctica estrategias específicas de intervención inmediata y pertinente para restablecer ese derecho.

En ningún caso estas medidas pueden consistir en la separación de la niña, niño o adolescente de su familia nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, a excepción de aquellas situaciones en que la permanencia en su medio familiar implique una amenaza o vulneración de sus derechos, debiendo en esta circunstancia adoptarse medidas excepcionales.

Las medidas de protección de derechos pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas en cualquier momento por acto de la Autoridad de Aplicación, sus dependencias o las Unidades de Desarrollo Regional (UDER), cuando las circunstancias que las fundamentaron varíen o cesen.

**Artículo 43.- Denuncia.** La niña, niño o adolescente, la persona física o jurídica, pública o privada, gubernamental o no gubernamental que haya por cualquier medio tomado conocimiento de un hecho o acto que vulnere, impida o afecte de cualquier modo la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, puede formular denuncia ante la Autoridad de Aplicación o sus dependencias, ante las Unidades de Desarrollo Regional (UDER), ante los servicios locales de promoción y protección de derechos o ante cualquier agente público. Este último debe inmediatamente derivarla a la Autoridad de Aplicación, sus dependencias o a la Unidad de Desarrollo Regional (UDER) que de conformidad a su competencia territorial deba intervenir.

**Artículo 44.- Información.** La información recepcionada en los términos del artículo 43 de esta Ley, debe ser documentada en el formulario que por vía reglamentaria se preverá, en el que deben asentarse todos los datos aportados o colectados al tiempo de la denuncia o noticia, sin incursionar en otros detalles que no se hallen especificados. Se debe derivar de modo inmediato la comunicación y de ser pertinente a la persona que haga conocer la noticia a la Autoridad de Aplicación, a sus dependencias, a la Unidad de Desarrollo Regional (UDER) o a los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos que de conformidad a su competencia territorial corresponda intervenir. Estas deberán articular adecuadamente el abordaje de la situación con los recursos locales de promoción y protección de derechos.

Debe evitarse toda intromisión o exposición al relato voluntario o provocado de la niña, niño o adolescente o de la persona que hace conocer las circunstancias que determinan la intervención.

De requerirse atención médica, se debe dar intervención al servicio de salud estatal más próximo, con información concreta que se trata de un caso de protección de derechos de una niña, niño o adolescente.

**Artículo 45.- Medidas a adoptar.** Comprobada la amenaza o violación de derechos deben adoptarse, entre otras, las siguientes medidas de promoción y protección integral:

- a) Aquellas tendientes a que las niñas, niños y adolescentes permanezcan conviviendo con su grupo familiar;
- b) Inclusión de niñas, niños, adolescentes y las familias respectivas en programas tendientes a la educación y capacitación de los mismos o, en su caso, a la inserción laboral si conforme a derecho correspondiere;
- c) Inclusión de niñas, niños, adolescentes y las familias respectivas en programas tendientes al fortalecimiento y apoyo familiar;
- d) Cuidado de niñas, niños y adolescentes en su propio hogar, orientando y apoyando a los padres, representantes legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, juntamente con el seguimiento temporal de la familia y de las niñas, niños y adolescentes a través de un programa;
- e) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico ambulatorio de niñas, niños y adolescentes o de alguno de sus padres, responsables legales o representantes;
- f) Asistencia económica, y
- g) Inclusión en espacios de participación deportivos y culturales dentro de la comunidad de las niñas, niños y adolescentes y la familia.

La presente enunciación no es taxativa.

Los programas deben desarrollar acciones de reparación y de reinserción social en miras de una intervención que propenda al desarrollo integral y armónico del niño, niña o adolescente en su medio familiar o comunitario.

Se aplicarán prioritariamente aquellas medidas de promoción y protección integral de derechos que tengan por finalidad la preservación y el fortalecimiento de los vínculos familiares con relación a las niñas, niños y adolescentes.

Cuando la amenaza o violación de derechos sea consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, económicas, laborales o de vivienda, las medidas de promoción y protección serán los programas dirigidos a brindar ayuda y apoyo, incluso económico, con miras al mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares.

Corresponde a este segundo nivel intervenir en las situaciones de urgencia y en todas las situaciones de amenaza o vulneración de derechos a las niñas, niños y adolescentes.

En este segundo nivel de intervención actuarán articuladamente y de acuerdo resulte necesario la Autoridad de Aplicación, sus dependencias, la Comisión Interministerial, las Unidades de Desarrollo Regional (UDER) y los municipios o comunas a través de los Servicios Locales de Promoción y Protección

de Derechos con los efectores de salud, educación, desarrollo social, justicia, industria, trabajo y gobierno, con interacción y gestión asociada de organizaciones de la sociedad civil.

**Artículo 46.- Intervención - Entrevista.** La Autoridad de Aplicación, sus dependencias, las Unidades de Desarrollo Regional (UDER) o los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos -según corresponda-, al tomar conocimiento de una situación de vulneración de derechos dará intervención a los equipos técnicos interdisciplinarios disponibles en el ámbito territorial pertinente a los fines de relevar y diseñar la estrategia de abordaje de la misma.

El equipo interdisciplinario debe mantener con la niña, niño o adolescente una entrevista personalizada en un ámbito adecuado a su edad y etapa evolutiva, respetando al máximo los derechos previstos en la presente Ley.

Debe citar a los familiares, representantes, responsables o allegados involucrados de la niña, niño o adolescente, a una entrevista con el equipo interdisciplinario correspondiente. En dicha entrevista se debe poner en conocimiento de los familiares o responsables la petición efectuada, la forma de funcionamiento del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, los programas existentes para dar solución a la problemática planteada y su forma de ejecución, los resultados esperados, los derechos de los que goza la niña, niño o adolescente, el plan de seguimiento y el carácter consensuado de la decisión que se adopte.

Por vía reglamentaria se deben establecer los protocolos de intervención, como así también otras formalidades a cumplir por las dependencias de promoción y protección de derechos del ámbito que correspondiere, incluidos los municipios y comunas.

**Artículo 47.- Adopción de medidas de protección.** La Autoridad de Aplicación, sus dependencias, las Unidades de Desarrollo Regional (UDER) y los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos que conforme al territorio provincial corresponda su actuación, con el informe técnico interdisciplinario adoptarán todas las medidas de protección que dispone la presente Ley, lo que debe ser debidamente documentado por los organismos intervinientes, constituyéndose así en la fundamentación necesaria ante la eventual adopción de medidas excepcionales.

El procedimiento es escrito y breve, con participación activa de la niña, niño o adolescente, su familia nuclear o ampliada o sus representantes o responsables y los actos administrativos que se implementen e instrumenten no podrán ser coactivos, ni implicar la separación del niño, niña o adolescente de su familia, como tampoco producir alteraciones sustanciales o permanentes a su condición jurídica.

### Capítulo III

#### Medidas y Procedimientos de Tercer Nivel

**Artículo 48.- Medidas excepcionales.** Son aquellas que se adoptan cuando las niñas, niños o adolescentes estuvieran temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio.

Tienen como objetivo la conservación o recuperación por parte del sujeto del pleno ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias y sólo proceden cuando la aplicación de las medidas de protección integral resulten insuficientes o inadecuadas para su situación articular.

Sólo serán procedentes cuando, previamente, se hayan cumplimentado debidamente las medidas dispuestas en los artículos 41, 42 y siguientes de la presente Ley.

Estas medidas son limitadas en el tiempo, no pudiendo exceder de noventa (90) días, debiendo ser revisadas periódicamente, plazo que debe quedar claramente consignado al adoptarse la medida y sólo se pueden prolongar mientras persistan las causas que les dieron origen, con el correspondiente control de legalidad. Cumplido un año y medio desde la adopción de la medida, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia conjuntamente con el servicio regional correspondiente debe resolver definitivamente la misma.

La Autoridad de Aplicación, las dependencias que ésta autorice y las Unidades de Desarrollo Regional (UDER) son los organismos facultados para adoptar medidas excepcionales, las que deben ser informadas a la Dirección de Asuntos Legales de la Autoridad de Aplicación para que ésta, a través de su dependencia jurídica específica, proceda a elevar dentro del término de veinticuatro (24) horas a la autoridad judicial competente, el respectivo informe para el debido control de legalidad, debiendo en todos los casos adjuntar los informes técnicos que den fundamento a la medida adoptada.

Los equipos técnicos de los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos o las organizaciones de la sociedad civil -en su caso-, y las dependencias de la Autoridad de Aplicación procederán a cumplimentar las medidas excepcionales que hubieren sido adoptadas por los organismos facultados para hacerlo.

La Autoridad de Aplicación, a través de sus dependencias autorizadas al efecto, será la única facultada para disponer los egresos de las niñas, niños y adolescentes que hubieren sido privados de su centro de vida, cualquiera fuere el ámbito en que se encontraren albergados, como así también de las innovaciones a la medida excepcional que oportunamente hubiere dispuesto.

**Artículo 49.- Criterios.** Las medidas establecidas en el artículo 48 de esta Ley se aplican conforme a los siguientes criterios:

a) Permanencia temporal en ámbitos familiares considerados alternativos. Las medidas consisten en la búsqueda e individualización de personas vinculadas a ellos a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según costumbre local, en todos los casos teniendo en cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes;

b) Sólo en forma excepcional, subsidiaria y por el más breve lapso posible puede recurrirse a una forma convivencial alternativa a la de su grupo familiar, debiéndose propiciar, a través de mecanismos rápidos y ágiles, el regreso de las niñas, niños y adolescentes a su grupo o medio familiar y comunitario. Al considerar las soluciones se prestará especial atención a la continuidad en la educación de las niñas,

niños y adolescentes y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Estas medidas deben ser supervisadas por el organismo administrativo local competente y el judicial interviniente;

c) Las medidas se implementarán bajo formas de intervención no sustitutivas del grupo familiar de origen con el objeto de preservar la identidad familiar de las niñas, niños y adolescentes;

d) Las medidas excepcionales que se tomen con relación a grupos de hermanos deben preservar la convivencia de los mismos;

e) En ningún caso las medidas excepcionales pueden consistir en privación de la libertad salvo los casos previstos en las normativas vigentes;

f) No podrá ser fundamento para la aplicación de una medida excepcional la falta de recursos económicos, físicos, de políticas o programas del organismo administrativo, y

g) Permanencia temporal en centros terapéuticos de salud mental o adicciones.

**Artículo 50.- Intervención administrativa.** La intervención de las autoridades administrativas puede ser requerida por:

a) La propia niña, niño o adolescente, no siendo necesario que concurra con la asistencia de sus padres o representantes legales;

b) Los representantes legales de las niñas, niños y adolescentes, o miembros de su familia o de su centro de vida. La autoridad administrativa evaluará si es necesario proteger la identidad de la persona requirente;

c) Cualquier agente o miembro de los equipos técnicos intervinientes del Estado nacional, provincial municipal o comunal, y

d) Por miembros de la comunidad, agrupados o no.

La presentación realizada ante la autoridad judicial debe ser derivada en forma inmediata por ésta a la Autoridad de Aplicación reservándose el control de la legalidad para su oportunidad.

**Artículo 51.- Procedencia.** Los respectivos equipos técnicos intervinientes solicitarán a la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, a sus respectivas dependencias, a las Unidades de Desarrollo Regional (UDER) o a los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos la aplicación de una medida excepcional una vez que hayan determinado que se ha agotado la instrumentación de medidas de protección integral y que persista la situación de amenaza o vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes.

En el pedido fundado debe constar un detalle circunstanciado de las medidas de protección adoptadas, una evaluación de las razones de su fracaso y una sugerencia fundada de la medida excepcional que se estima conveniente adoptar.

El pedido fundado debe acompañarse con los informes de los profesionales del equipo interdisciplinario interviniente.

Los trámites administrativos que demande la adopción de la medida excepcional no obstan su aplicación urgente e inmediata cuando la respectiva autoridad interviniente evalúe que la no aplicación urgente e inmediata de la misma implique un grave riesgo para la vida e integridad psicofísica de la niña, niño o adolescente.

**Artículo 52.- Intervención de las Unidades de Desarrollo Regional y de la Autoridad de Aplicación.** En la aplicación de una medida excepcional las Unidades de Desarrollo Regional (UDER) dependientes de la Autoridad de Aplicación, evaluarán la situación y la conveniencia y procedencia de la medida excepcional cuya adopción soliciten los respectivos equipos técnicos actuantes, pudiendo resolver la adopción de la medida excepcional que se solicita u otra medida que resulte más conveniente, conforme a los principios, derechos, garantías y procedimientos enunciados en la presente Ley. La medida estará acompañada de los informes de los equipos técnicos que acrediten la situación de vulneración de derechos.

**Artículo 53.- Resolución.** La Autoridad de Aplicación y sus dependencias autorizadas al efecto, incluidas las Unidades de Desarrollo Regional (UDER), son los únicos organismos con competencia para dirigir el procedimiento y para declarar y disponer fundadamente alguna medida excepcional. Las medidas excepcionales son de aplicación restrictiva.

En todos los casos deben contar con la intervención jurídica a través de la Dirección de Asuntos Legales dependiente de la Autoridad de Aplicación, quien a posteriori de la adopción de la medida fundamentará legalmente la misma conforme informes técnicos remitidos por la autoridad interviniente, y elevará el respectivo informe a la autoridad judicial competente a los efectos del debido control de la legalidad.

**Artículo 54.- Notificación.** Adoptada una medida excepcional, la misma debe notificarse debidamente a los representantes legales, familiares o responsables de la niña, niño o adolescente.

**Artículo 55.- Remisión.** Las actuaciones administrativas deben ser puestas a disposición del juez o tribunal colegiado con competencia en la materia a los fines de la realización del control de legalidad en el día siguiente hábil de adoptada la medida excepcional.

El funcionario que no dé efectivo cumplimiento a esta disposición será pasible de las sanciones respectivas previstas en el Código Penal.

De resultar necesario recurrir al empleo de la fuerza pública para el cumplimiento de la medida excepcional, la Autoridad de Aplicación de la presente Ley o las dependencias de la misma que estuvieren autorizadas, requerirán a la autoridad judicial competente las órdenes respectivas y a ese solo efecto.

El incumplimiento de las medidas excepcionales por parte de la niña, niño o adolescente, no pueden suponerle sanción alguna.

#### Capítulo IV Etapas Jurisdiccional

**Artículo 56.- Control de legalidad.** Recibidas las actuaciones por el Tribunal o Juzgado competente en la materia, el Juez dará audiencia a la niña, niño o adolescente, a sus representantes y a quienes tengan interés legítimo en la cuestión con presencia del ministerio pupilar y resolverá por auto fundado y en el término de cinco (5) días sobre la legalidad de las medidas excepcionales adoptadas por la Autoridad de Aplicación o sus dependencias autorizadas, ratificándolas o rechazándolas.

Si una vez recibidas las actuaciones se advierte que los informes técnicos no se hallan actualizados o resulta indispensable un nuevo estudio relativo a la niña, niño, adolescente o a su entorno familiar, podrá el Tribunal o Juzgado interviniente posponer la audiencia por un plazo máximo de tres (3) días para posibilitarlo. Mientras se sustancie el trámite no se suspenderán las medidas otorgadas administrativamente.

**Artículo 57.- Resolución.** Resuelta la ratificación de la medida, el Tribunal o Juez competente notificará a la autoridad que solicitó el control de legalidad.

Rechazada la medida por el Tribunal o Juez competente, éste debe notificar a la respectiva autoridad administrativa que solicitó el control de legalidad, en cuyo caso la niña, niño o adolescente será reintegrado a la familia o centro de vida de donde fue retirado con motivo de las medidas excepcionales.

La resolución adoptada debe ser notificada a la niña, niño o adolescente, su letrado si hubiera intervenido, los representantes legales, familiares o responsables y sus letrados, el ministerio pupilar y demás partes en el proceso.

En contra de la resolución del Tribunal o Juez competente procederá el recurso de apelación, el que deberá ser fundado e interpuesto en el término de cinco (5) días de notificado. En ningún caso el recurso interpuesto suspenderá la medida adoptada por la administración hasta tanto exista sentencia dictada por la Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar.

La Autoridad de Aplicación podrá, sin embargo, insistir en la medida excepcional antes dispuesta conforme nuevos informes y fundamentos que así lo exijan. En tal caso, el Tribunal o Juez lo evaluará y dispondrá -previa audiencia de los interesados- en un plazo no mayor a cinco (5) días. Cuando las circunstancias lo requieran, adoptará las medidas urgentes indispensables hasta su resolución que será recurrible para los interesados.

## **TÍTULO V ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES**

### **Capítulo Único De las Funciones y Obligaciones**

**Artículo 58.- Objeto.** A los fines de esta Ley se consideran organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia a aquellas que, con Personería Jurídica y en cumplimiento de su misión institucional, desarrollen programas o servicios de información, difusión, promoción, tratamiento, protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

**Artículo 59.- Obligaciones.** Las organizaciones no gubernamentales deben cumplir con los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, los Tratados Internacionales con raigambre Constitucional y Tratados Internacionales sobre los Derechos Humanos en los que nuestro país sea parte, y observar los siguientes principios y obligaciones:

- a) Respetar y preservar la identidad de las niñas, niños y adolescentes y ofrecerles un ambiente de respeto, dignidad y no discriminación;
- b) Respetar y preservar los vínculos familiares o de crianza de las niñas, niños y adolescentes y velar por su permanencia en el seno familiar, sin separar grupos de hermanos;
- c) No limitar ningún derecho que no haya sido limitado por una decisión judicial;
- d) Garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que les conciernan como sujetos de derechos;
- e) Mantener constantemente informado a la niña, niño o adolescente sobre su situación legal en caso de que exista alguna causa judicial donde se pueda tomar una decisión que afecte sus intereses y notificarle, en forma personal y a su representante legal, toda novedad que se produzca en forma comprensible cada vez que la niña, el niño o el adolescente lo requiera;
- f) Brindar a las niñas, niños y adolescentes atención personalizada y en pequeños grupos;
- g) Ofrecer instalaciones debidamente habilitadas y controladas por la Autoridad de Aplicación respecto de las condiciones edilicias, salubridad, higiene, seguridad y confort, y
- h) Rendir cuentas de los fondos recibidos del Estado de acuerdo a lo establecido por el organismo estatal del cual haya recibido el financiamiento.

**Artículo 60.- Incumplimiento.** En caso de incumplimiento de las obligaciones a las que se encuentran sujetas las organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia mencionadas por esta Ley, la Autoridad de Aplicación debe promover ante los organismos competentes la implementación de las medidas que correspondan.

**Artículo 61.- Registro de las organizaciones.** Créase en el ámbito de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y en forma coordinada con la Dirección de Personas Jurídicas el "Registro de las Organizaciones No Gubernamentales con Personería Jurídica" relacionadas a la niñez y adolescencia con el objeto de controlar y velar en cada departamento, por el fiel cumplimiento de los principios que establece esta Ley, con comunicación a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia con miras a la creación del Registro Nacional de estas organizaciones.

## **TÍTULO VI ÓRGANOS JUDICIALES**

**Capítulo I**  
**De las Competencias**

**Artículo 62.- Tribunal Superior de Justicia.** El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba conocerá en los recursos extraordinarios que resultaren procedentes, según la materia de que se trate.

**Artículo 63.- Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar.** La Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar es competente para conocer y resolver en:

- a) Única instancia en los delitos atribuidos a niñas, niños o adolescentes que fueren punibles conforme a lo dispuesto por la legislación vigente;
- b) La imposición de penas o medidas socio-educativas o correctivas a las niñas, niños y adolescentes cuando la declaración de responsabilidad hubiera correspondido a otro Tribunal;
- c) Los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones de los Jueces de Niñez, Juventud y Violencia Familiar y Jueces Penales Juveniles;
- d) Las quejas por retardo de justicia y denegación de recursos de los Juzgados de Niñez, Juventud y Violencia Familiar y de los Juzgados Penales Juveniles;
- e) Las cuestiones de competencia que se suscitaren entre los tribunales jerárquicamente inferiores, y
- f) En la recusación e inhibición de sus miembros y de los Jueces de Niñez, Juventud y Violencia Familiar y Jueces Penales Juveniles.

**Artículo 64.- Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar.** Los Jueces de Niñez, Juventud y Violencia Familiar son competentes para conocer y resolver en:

- a) El control de legalidad de las medidas excepcionales adoptadas respecto a las niñas, niños y adolescentes por el órgano administrativo competente y en caso de oposición del niño y/o su familia o representante legal en la adopción de dicha medida;
- b) El conocimiento y resolución de casos de violencia familiar conforme a la Ley Nº 9283;
- c) Las medidas de coerción indispensables, a requerimiento del órgano administrativo de protección, para hacer efectivas las medidas excepcionales que hubiere dispuesto;
- d) Las actuaciones sumarias indispensables para el otorgamiento de guardas judiciales, cuando así lo requieran las prestatarias de servicios de la seguridad social, para garantizar a niñas, niños y adolescentes los beneficios sociales y asistenciales conforme lo requiera la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, adjuntando constancia emitida por la prestataria del servicio certificando tales extremos;
- e) Las recusaciones e inhibiciones de los Fiscales Penales Juveniles, Asesores y Secretarios, cuando se tratare de causas sustanciadas ante él;
- f) En el otorgamiento de guardas pre-adoptivas, cuyo trámite será sumario, y
- g) Por denuncias o requerimientos de actuación ante la grave vulneración de los derechos, en los términos del artículo 33 de la presente Ley.

El Tribunal Superior de Justicia podrá asignar o reasignar la competencia para los actuales jueces de violencia familiar a fin de mejorar el servicio de administración de justicia.

**Artículo 65.- Juez Penal Juvenil.** El Juez Penal Juvenil es competente para:

- a) Juzgar, en única instancia, en las causas por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en perjuicio de niñas, niños y adolescentes;
- b) Disponer las medidas cautelares, de coerción y de protección, durante la actuación de la policía judicial, la investigación preparatoria fiscal y el enjuiciamiento respecto a imputados por delitos cometidos siendo menores de dieciocho (18) años de edad;
- c) Resolver las oposiciones e instancias de sobreseimiento que se suscitaren durante la investigación penal preparatoria que practican los Fiscales en lo Penal Juvenil;
- d) Conocer y resolver en los delitos atribuidos a niñas, niños y adolescentes que no fueren punibles por su edad de acuerdo a lo dispuesto por la legislación vigente;
- e) Juzgar las faltas cometidas por menores de dieciocho (18) años de edad, y
- f) Resolver las recusaciones e inhibiciones de los Fiscales en lo Penal Juvenil, Asesores y Secretarios en las causas que se suscitaren ante ellos.

**Artículo 66.- Fiscal Penal Juvenil.** Corresponde al Fiscal Penal Juvenil:

- a) Practicar la investigación preparatoria en los delitos de acción pública que se atribuyeren a menores de dieciocho (18) años de edad y en el delito de incumplimiento de deberes de asistencia familiar en perjuicio de menores de dieciocho (18) años de edad;
- b) Ejercer la acción penal pública en juicios ante los Jueces y la Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar;
- c) Velar en general por el cumplimiento de las leyes, decretos, ordenanzas y edictos de protección de niñas, niños y adolescentes menores de edad, accionando en consecuencia, y
- d) Intervenir en las cuestiones de jurisdicción y competencia concernientes a los Juzgados Penales Juveniles.

**Artículo 67.- Asesor de Niñez y Juventud.** Corresponde al Asesor de Niñez y Juventud:

- a) Representar con carácter promiscuo a las niñas, niños y adolescentes en los casos a que se refiere la presente Ley y de conformidad a lo previsto por el artículo 59 del Código Civil;
- b) Asesorar, patrocinar o representar a niñas, niños o adolescentes ante los jueces de Niñez, Juventud y Violencia Familiar cuando el mismo lo requiriere, y ejercer la defensa de la niña, niño o adolescente imputado cuando no propusiere defensor particular o cuando el designado no aceptare el cargo, y
- c) Cumplir todas las funciones que en especial le asignaren las leyes.

**Artículo 68.- Competencia subsidiaria.** En todos los lugares de la Provincia de Córdoba en que no hubiere Juzgados de Niñez, Juventud y Violencia Familiar o, en su caso, Juzgados Penales Juveniles



con competencia exclusiva, es competente el Juez de Control con excepción de los casos previstos en el artículo 64 inciso b) –violencia familiar– de la presente Ley, que está a cargo del Juez en lo Civil o de Familia en turno. En ausencia de Juez de Control será competente el Juez de Primera Instancia en lo Civil.

Si no hubiere Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar, la competencia asignada a ésta será ejercida por la Cámara en lo Criminal y la Cámara en lo Civil, de acuerdo a la materia en cuestión.

## Capítulo II

### De los Trámites y Actuaciones Judiciales

**Artículo 69.- Personal.** El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba establecerá la dotación y distribución del personal jerárquico y auxiliar de los fueros de niñez, juventud y violencia familiar y de penal juvenil. Los secretarios tendrán a su cargo el trámite de los asuntos respectivos, los actos y procedimientos que les encargare el Tribunal y las relaciones con la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

**Artículo 70.- Recusación e inhibición.** Los magistrados y funcionarios deben inhibirse y podrán ser recusados por las causales y procedimientos que contempla la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-.

**Artículo 71.- Informes periódicos.** En el caso de niñas, niños o adolescentes que siendo menores de edad hubieren cometido hechos tipificados como delito penal por el ordenamiento vigente, el Juez Penal Juvenil deberá mantener contactos de manera periódica y personal con las niñas, niños y adolescentes institucionalizados, a los fines de oírlos e informarles periódicamente sobre el estado de las causas respectivas.

**Artículo 72.- Equipo técnico judicial.** Sin perjuicio de la intervención que compete a la Autoridad de Aplicación, los Tribunales de Niñez, Juventud y Violencia Familiar pueden disponer del auxilio de un cuerpo técnico judicial especializado cuyos informes no tendrán efectos vinculantes y su actuación debe limitarse a las cuestiones que sean de competencia del ámbito judicial conforme a la presente Ley.

En las circunscripciones judiciales en que no se hubieren organizado los equipos técnicos judiciales, los tribunales pueden recurrir a profesionales pertenecientes a entidades privadas de bien público de trayectoria reconocida.

**Artículo 73.- Fines.** La actuación del Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar tiene por objeto proveer a la competencia asignada conforme el artículo 64 de la presente Ley. Dicha actuación se cumplirá de conformidad al procedimiento regulado en esta norma legal y subsidiariamente a las de la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba- en cuanto fueren pertinentes.

**Artículo 74.- Actuación del Asesor de Niñez y Juventud.** El Asesor de Niñez y Juventud conocerá de las situaciones mencionadas en los artículos 67 y 73 de la presente Ley. Podrá en su caso convocar a los interesados y luego de oírlos emitir las consideraciones y recomendaciones que estimare adecuadas.

**Artículo 75.- Conocimiento de la niña, niño o adolescente.** Avocado el Juez conforme la competencia acordada por el artículo 64 de la presente Ley, debe conocer y oír en forma directa y personal a la niña, niño o adolescente y a sus representantes legales en el término de cuarenta y ocho (48) horas.

**Artículo 76.- Exclusión provisoria del hogar.** Cuando se produjese una situación de violencia familiar conforme lo previsto por la Ley Nº 9283 y resultase víctima de tal violencia una niña, niño o adolescente, el Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar en virtud de las competencias que le son inherentes conforme la citada Ley, o a requerimiento de la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, debe excluir provisoriamente del hogar al adulto supuesto responsable para proteger el derecho de aquél a permanecer en su medio familiar, debiendo poner en conocimiento de manera inmediata a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en relación a los derechos vulnerados de las niñas, niños y adolescentes.

**Artículo 77.- Asistencia y representación.** En todas las actuaciones en las que tuviere competencia y actuare de acuerdo a la presente Ley, el Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar debe contar con la intervención del Asesor de Niñez y Juventud, bajo pena de nulidad.

**Artículo 78.- Actuación gratuita.** Las actuaciones ante el fuero de Niñez, Juventud y Violencia Familiar son gratuitas, a excepción de los honorarios que genere la actuación de profesionales requeridos en forma particular.

**Artículo 79.- Carácter de las actuaciones.** Las actuaciones en que intervenga la autoridad judicial, conforme a la competencia acordada por la presente Ley, serán reservadas y no podrán ser retiradas del Tribunal, salvo para la intervención del Ministerio Público Fiscal o Pupilar y de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia, cuando así corresponda según las previsiones establecidas en este plexo normativo.

Cuando fueren requeridos por otros tribunales en causas conexas se remitirán copias de las mismas.

Las partes legitimadas pueden acceder al conocimiento de dichas actuaciones.

El Tribunal debe otorgar copias a los letrados intervinientes cuando así lo solicitaren por razones de su ministerio.

**Artículo 80.- Publicidad. Prohibición.** Está prohibida toda publicidad respecto a las actuaciones en el fuero de Niñez, Juventud y Violencia Familiar, salvo expresa autorización de los magistrados.

**Artículo 81.- Diligencias.** Cuando se tratare de niñas, niños y adolescentes que se encontraren en las situaciones mencionadas en el artículo 64 de la presente Ley, el Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar puede practicar todas las diligencias útiles al efecto. Las partes pueden proponer todas las pruebas que hicieren a su interés.

**TÍTULO VII**  
**PROCEDIMIENTO PENAL JUVENIL**

**Capítulo I**  
**Disposiciones Generales**

**Artículo 82.- Objeto primordial.** El procedimiento penal juvenil tiene por objeto primordial la protección y asistencia integral de las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, garantizando lo conducente al logro de su integración social a través de una atención que dé prioridad al abordaje educativo multidisciplinario, con especial énfasis en su capacitación para el acceso al mercado laboral. Son de aplicación los artículos 79 y 80 de la presente Ley.

**Artículo 83.- Casos de conexión.** Las causas serán conexas en los supuestos previstos por la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-.

Cuando se substanciaren causas conexas ante los Tribunales de Niñez los procesos se acumularán y serán competentes:

- a) El Tribunal competente para juzgar será el que corresponda por la comisión del primer hecho;
- b) Si los hechos fueren simultáneos o no constare debidamente cuál se cometió primero, el que hubiere prevenido, y
- c) En último caso, el que designare la Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar.

**Artículo 84.- Excepciones.** La acumulación de las actuaciones no será dispuesta cuando determinare un grave retardo para alguna de ellas, aunque en todas debe intervenir el mismo Tribunal de acuerdo con las normas precedentes.

Cuando hubieren intervenido en el hecho niñas, niños o adolescentes sometibles a proceso penal y niñas, niños o adolescentes no punibles, la acumulación sólo procederá con relación a los primeros, con la excepción prevista en el párrafo anterior.

Si resultare que una niña, niño o adolescente no punible se encuentra a disposición conjunta de dos o más Tribunales, las medidas provisionales serán ordenadas por el Juez que interviniera en la causa de mayor gravedad, contemplando en lo posible los requerimientos de los demás.

**Artículo 85.- Coparticipación o conexión con mayores.** Cuando en el mismo hecho hubieren participado un mayor de dieciocho (18) años de edad y una niña, niño o adolescente, la investigación penal preparatoria estará a cargo del Fiscal de Instrucción, el que inmediatamente debe dar intervención al Juez Penal Juvenil para que proceda al resguardo y vigilancia de la niña, niño o adolescente con arreglo al artículo 67 de esta Ley, remitiéndole copia de los requerimientos y resoluciones recaídas en la causa.

El Tribunal de Juicio se limitará, en su caso, a la declaración de responsabilidad de la niña, niño o adolescente, debiendo remitir copia de la sentencia al Juez Penal Juvenil interviniente.

Durante el proceso se reconocerán a la niña, niño o adolescente todas las garantías que le acuerda la presente Ley, debiendo intervenir el Ministerio Público bajo sanción de nulidad.

**Artículo 86.- Conocimiento personal.** En todos los casos de su competencia el Juez Penal Juvenil debe tomar conocimiento directo y personal de la niña, niño o adolescente.

**Artículo 87.- Medidas provisionales.** Durante la investigación el Juez podrá disponer provisoriamente, en interés de la niña, niño o adolescente:

a) Su mantenimiento en el medio familiar o su cuidado bajo la guarda a un tercero cuando la misma dé satisfacción a los siguientes requisitos:

- 1) Documento de identidad;
- 2) Partida de matrimonio -si correspondiere- o certificado de convivencia;
- 3) Certificado de carencia de antecedentes penales;
- 4) Certificado de domicilio;
- 5) Certificado de trabajo;
- 6) Certificado de salud física y mental otorgado por un establecimiento oficial, y
- 7) Libreta de Familia o partidas, cuando existiere parentesco entre la niña, niño o

adolescente y el solicitante, pudiendo determinar las medidas reguladas en los artículos 42, 43, 44, 45, 46 y 47 de la presente Ley.

b) La sujeción de la guarda a un régimen de libertad asistida;

c) Su atención integral a través de programas, proyectos o centros de protección integral cuando la niña, niño o adolescente careciera de familia o de terceros en condiciones de cumplir eficientemente la guarda y apoyar la libertad asistida;

d) La atención de la especial problemática de salud o de adicciones que pudiere presentar, y

e) Su atención integral y excepcional en un establecimiento cuyo régimen incluya medidas que impidan la externación por su sola voluntad una vez evaluada fehacientemente la ineficacia de las alternativas previstas precedentemente. En este supuesto la niña, niño o adolescente debe permanecer bajo este régimen el menor tiempo posible, el que no podrá exceder los seis (6) meses, salvo que el Juez requiera autorización en forma fundada, remita todos los antecedentes que obraren en la causa a la Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar y ésta otorgue la correspondiente prórroga cuando -evaluados todos los antecedentes- la estime imprescindible para el cumplimiento de la finalidad tuitiva.

El órgano de ejecución informará periódicamente al Juez sobre la situación de la niña, niño o adolescente, su evolución y posibles alternativas de movilidad dentro del sistema de protección existente.

**Artículo 88.- Innovación.** La innovación sobre las medidas provisionales no podrá efectuarse sin previa vista al Asesor de Niñez y Juventud, salvo en los casos de suma urgencia en que debe ser notificado en forma inmediata, a los fines pertinentes.

**Artículo 89.- Recursos.** La imposición o innovación de medidas provisorias será apelable, sin efecto suspensivo, por el Asesor de Niñez y Juventud, el defensor de la niña, niño o adolescente y sus padres o encargados.

**Artículo 90.- Medida urgente.** Cuando la niña, niño o adolescente deba permanecer en condiciones que no admitan su externación será ubicado en un establecimiento idóneo para su protección y la determinación de las medidas provisorias que prevé el artículo 87 de esta Ley.

**Artículo 91.- Asistencia letrada. Defensa técnica.** Los padres o encargados pueden actuar con patrocinio letrado.

Sin perjuicio de la intervención del Asesor de Niñez y Juventud, la niña, niño o adolescente no punible podrá contar con asistencia letrada particular cuando le fuere provista por sus padres, encargados o personas de su confianza.

Si la niña, niño o adolescente estuviere sometido a proceso penal, debe disponer de defensor en la forma y bajo las sanciones previstas por la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-.

## Capítulo II

### Niñas, Niños y Adolescentes no Punibles

**Artículo 92.- Reglas aplicables.** Cuando a la niña, niño o adolescente se le atribuyeren delitos que no autorizan su sometimiento a proceso penal o faltas, el Juez Penal Juvenil procederá a la investigación del hecho con sujeción a las normas constitucionales y legales en la materia y, subsidiariamente, a la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-.

**Artículo 93.- Remisión.** Cuando lo considere conveniente, y sin perjuicio de la investigación, el Juez puede de oficio o a solicitud de parte eximir a la niña, niño o adolescente de las medidas tutelares que procedieren, aún en forma provisional, remitiéndolo a servicios alternativos de protección que eviten su disposición judicial en los términos del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes previsto en la presente Ley.

**Artículo 94.- Medidas de coerción.** Si la niña, niño o adolescente hubiere sido privado de su libertad por arresto o aprehensión, con arreglo a lo previsto por la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-, el Juez hará cesar esta situación de inmediato conforme a lo establecido en los artículos 87 y 90 de esta Ley.

Cuando la niña, niño o adolescente no compareciere ante el Tribunal sin grave y legítimo impedimento, se ausentare de su domicilio o del de sus guardadores o fugare del establecimiento de internación, el Juez Penal Juvenil emplazará a los padres o encargados para que lo presenten en su sede o lo reintegren al establecimiento, según correspondiere.

Vencido el término acordado al efecto y no habiéndose obtenido la presentación o el reintegro de la niña, niño o adolescente, el Juez Penal Juvenil puede disponer su retiro del domicilio u ordenar la ubicación de su paradero.

**Artículo 95.- Vista. Audiencia.** Concluida la investigación y reunidos los estudios y peritaciones legales, el Juez correrá vista al Asesor de Niñez y Juventud interviniente. Si de la opinión de éste resultare que la niña, niño o adolescente debe ser entregado definitivamente a sus padres o encargados, el Juez así lo resolverá, archivando las actuaciones.

Si el Juez discrepare con el Asesor de Niñez y Juventud al respecto o éste estimare que corresponde disponer definitivamente de la niña, niño o adolescente, se fijará una audiencia y se citará al Asesor de Niñez y Juventud, a la niña, niño o adolescente en cuestión, a los padres o encargados y a quienes les prestan asistencia letrada de oficio o patrocinio. También podrá citarse a los profesionales que hubieren producido informes técnicos con relación al caso.

En la audiencia el Juez, luego de tomar nuevo conocimiento y oír a la niña, niño o adolescente, ordenará que se lo retire de la audiencia y acto seguido hará leer en alta voz por Secretaría los estudios y peritaciones reunidos.

Cumplida la lectura el Juez oír a los profesionales que hubiesen comparecido, a los padres o encargados, a sus abogados y al Asesor de Niñez y Juventud -en este orden- quienes dispondrán del tiempo que aquél prudencialmente fije para referirse al caso en sus consideraciones de hecho y de derecho.

**Artículo 96.- Sentencia. Recursos.** Oídos todos, el Juez pasará a deliberar y dará a conocer su resolución definitiva.

Si la complejidad del asunto o circunstancias de tiempo hicieren necesario diferir la redacción de la sentencia en dicha oportunidad se leerá tan sólo su parte dispositiva, fijándose audiencia para la lectura integral.

Esta se efectuará, bajo pena de nulidad, en el plazo máximo de quince (15) días y valdrá siempre como notificación para todos los interesados.

La sentencia puede ser apelada, sin efecto suspensivo, por el Asesor de Niñez y Juventud y los padres o encargados.

Habiéndose dispuesto medidas definitivas el Juez procederá a solicitar periódicamente un informe sobre la situación integral de la niña, niño o adolescente al órgano de ejecución y por el lapso que fuere necesario hasta que los factores originarios de la situación atendida se reputaren superados.

## Capítulo III

### Menores de Edad sometidos a Proceso Penal

#### Sección Primera

### Investigación

**Artículo 97.- Reglas aplicables.** Cuando correspondiere incoar proceso en contra de un menor de dieciocho (18) años de edad el Fiscal Penal Juvenil procederá con sujeción a las formas y garantías que contemplan las normas constitucionales y legales en la materia y la Ley Nº 8123 - Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-.

Practicará la investigación penal preparatoria conforme a las reglas previstas para la investigación jurisdiccional en la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-, salvo las normas que a continuación se establecen.

Las medidas cautelares, de coerción y de protección serán determinadas, desde el primer momento, por el Juez Penal Juvenil.

La que autoriza el artículo 100 de esta Ley se dispondrá a solicitud del Ministerio Público Fiscal, previa vista a la defensa, en tanto las provisiones se decidirán con arreglo a lo previsto por los artículos 87 y 90 de la presente Ley.

**Artículo 98.- Coparticipación o conexión con mayores.** En el supuesto previsto por el artículo 83 de esta Ley, el Juez Penal Juvenil remitirá al Fiscal de Instrucción y al Tribunal de Juicio los informes y antecedentes que le fueren requeridos.

Mientras durare la investigación, el Juez Penal Juvenil puede aplicar las medidas provisionales o urgentes, o la privación cautelar de libertad cuando correspondiere y le fuere requerida por el Instructor o el Tribunal de Juicio.

Si el Tribunal de Juicio hubiere declarado la responsabilidad de la niña, niño o adolescente, el Juez debe remitir las actuaciones que obraren en su poder y los estudios y peritaciones realizados a la Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar para que se pronuncie sobre la imposición de la pena o de las medidas que fueren procedentes con arreglo a la legislación vigente.

**Artículo 99.- Medidas de coerción.** Las medidas de coerción quedarán sujetas a los requisitos, formas y garantías previstos por la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-. No regirá la prisión preventiva.

Por ningún motivo la medida de detención podrá prolongarse más de treinta (30) días. Si la detención llegare al máximo legal y el Tribunal no hubiere adoptado alguna de las medidas que autorizan los artículos 87 y 100 de esta Ley, la niña, niño o adolescente será entregado por el órgano de ejecución a sus padres con inmediata noticia a aquél a sus efectos.

Si la demora en la detención y la entrega de la niña, niño o adolescente obedecieren al incumplimiento del órgano de ejecución en la producción de los estudios y peritaciones, el Tribunal remitirá los antecedentes al Fiscal de Instrucción en turno a los fines pertinentes.

**Artículo 100.- Medida cautelar.** La privación cautelar de libertad de una niña, niño o adolescente sometido a proceso penal sólo podrá disponerse excepcionalmente, y por auto debidamente fundado, cuando existieren elementos de convicción suficientes de su participación y fuere absolutamente indispensable para asegurar la investigación y la actuación del régimen legal aplicable al caso, siendo procedente cuando:

a) Se tratare de un hecho ilícito reprimido con pena privativa de libertad cuyo mínimo no sea inferior a tres (3) años, y

b) Cuando no dándose dicho supuesto, la niña, niño o adolescente hubiere sido declarado rebelde en un proceso anterior, quebrantado el régimen de libertad asistida o abandonado el domicilio de sus padres o guardadores.

La decisión será apelable sin efecto suspensivo.

**Artículo 101.- Cese.** La privación cautelar de libertad cesará cuando la investigación demostrare que no hay elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación de la niña, niño o adolescente en el hecho investigado o tan pronto hubiere desaparecido la necesidad prevista en el primer párrafo del artículo anterior.

El análisis de esta situación se efectuará, de oficio, cada tres (3) meses.

La decisión será apelable sin efecto suspensivo.

**Artículo 102.- Derivación.** Cuando fuere privado de su libertad, la niña, niño o adolescente será derivado a un establecimiento idóneo al efecto, garantizándosele su atención educativa multidisciplinaria.

### Sección Segunda

#### Juicio

**Artículo 103.- Reglas aplicables.** En el juzgamiento la Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar procederá con arreglo a lo dispuesto para el juicio común por la Ley Nº 8123 - Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-, salvo las normas específicas establecidas en el presente Capítulo.

El Tribunal, en ningún caso, se integrará con jurados.

Para el ejercicio de su competencia podrá dividirse en Salas Unipersonales, con sujeción a los artículos 34 bis y 361 de la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-, excepto cuando se tratare de causas por delitos cuyos máximos penales superaren los seis (6) años de prisión o reclusión, o hubiere oposición del imputado.

**Artículo 104.- Debate.** Además de las propias del juicio común, durante el debate se observarán las siguientes normas:

a) El debate se realizará a puerta cerrada y a la audiencia sólo podrán asistir el Fiscal, las partes, sus defensores, el Asesor de Niñez y Juventud, los padres, el tutor o guardador de la niña, niño o adolescente y las personas que tuvieran legítimo interés en presenciarlo;

b) La niña, niño o adolescente sólo asistirá al debate cuando así lo solicitare y siempre que mediare conformidad de sus representantes legales y del Asesor de Niñez y Juventud, o cuando su

conurrencia fuere imprescindible. En este último supuesto será alejado de él tan luego se cumpla el objeto de su presencia, y

c) Antes de la discusión final se leerán los estudios y peritaciones relativas a la personalidad de la niña, niño o adolescente, sus condiciones familiares y ambientales, y se oirá a los padres o encargados de la niña, niño o adolescente y a la autoridad responsable de la ejecución de las medidas provisionales ordenadas. En caso de ausencia de estos últimos, sus declaraciones podrán ser suplidas con la lectura de los informes expedidos.

**Artículo 105.- Sentencia.** Declarada la responsabilidad de la niña, niño o adolescente y verificado el cumplimiento de las medidas dispuestas en el artículo 87 de esta Ley, o reunida la informativa que lo supla, la Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar resolverá en audiencia, con arreglo al artículo 104 del presente plexo normativo, sobre la eventual imposición de una pena. Si al vencer el plazo máximo establecido en el artículo 87 ibídem resultare necesario prorrogarlo conforme a la legislación vigente, la Cámara -bajo sanción de nulidad- debe resolverlo fundadamente.

**Artículo 106.- Recursos.** En contra de la sentencia declarativa de responsabilidad, como la que dispone la pena o una medida de seguridad, procederán los recursos extraordinarios previstos en la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-.

#### Capítulo IV

##### Mayores de Edad sometidos a Proceso Penal

**Artículo 107.- Procedencia.** El Fiscal Penal Juvenil practicará la investigación penal preparatoria, con arreglo a las disposiciones de la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-, en las causas iniciadas por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, por malos tratos y por negligencia grave o continuada en perjuicio de menores de dieciocho (18) años de edad.

No procederá la constitución de parte civil.

**Artículo 108.- Juzgamiento.** En el juzgamiento el Juez procederá con arreglo a lo dispuesto para el juicio correccional en la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-, con las modificaciones establecidas en esta Sección.

**Artículo 109.- Procedimiento especial.** El Juez fijará una audiencia a la que citará, con quince (15) días de antelación, al Fiscal, al Asesor de Niñez y Juventud, al imputado y sus defensores, como así también al querellante particular si lo hubiere, indicando que -dentro de los tres (3) primeros días del plazo de citación- deberá ofrecer toda la prueba que hiciere a sus respectivos intereses.

La prueba podrá diligenciarse antes de la realización de la audiencia a pedido del oferente.

Si la investigación se hubiere cumplido en un Tribunal con asiento distinto, los términos previstos en el primer párrafo serán de veinte (20) y de cinco (5) días respectivamente.

En la audiencia el Juez ordenará la lectura de la acusación, recibirá declaración al imputado y procederá a examinar la prueba rendida. Acto seguido concederá sucesivamente la palabra al Fiscal, al Asesor de Niñez y Juventud y a los defensores para que, en este orden, emitan sus conclusiones.

El Tribunal dictará sentencia pudiendo fijar una prestación alimentaria en favor de la niña, niño o adolescente.

Contra la sentencia procederán los recursos extraordinarios previstos por la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-.

#### TÍTULO VIII

##### DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

#### Capítulo I

##### Normas Complementarias

**Artículo 110.- Defensa particular gratuita.** A fin de posibilitar que las niñas, niños y adolescentes dispongan de defensa particular en forma gratuita se faculta al Poder Ejecutivo Provincial a celebrar convenios con los Colegios de Abogados de cada Circunscripción Judicial. No regirá en tales casos el Código Arancelario y habrá exención de pago de las tasas de justicia y sellados de ley.

**Artículo 111.- Asesores Letrados Ad Hoc.** En caso de ausencia transitoria, vacancia, impedimento del titular o cuando mediara colisión de intereses entre las partes, la asistencia jurídica como Asesores Letrados a la que se refiere la presente Ley, debe ser prestada en cada una de las jurisdicciones, en primer término, por los procuradores fiscales designados por el Poder Ejecutivo y -en su defecto- por los abogados de la matrícula inscriptos.

**Artículo 112.- Leyes supletorias.** En toda norma procedimental que la presente Ley no haya regulado expresamente se aplicarán en forma supletoria la Ley Nº 5350 de Procedimiento Administrativo -Texto Ordenado por Ley Nº 6658- y la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba- para las cuestiones de índole proteccional y la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba- para las de índole penal.

**Artículo 113.- Sustitución de competencias judiciales.** Los actuales Jueces de Menores en lo Prevencional y Civil se desempeñarán en adelante como Jueces de Niñez, Juventud y Violencia Familiar, y los Jueces de Menores en lo Correccional como Jueces Penales Juveniles, de acuerdo a lo que la presente Ley dispone al respecto.

**Artículo 114.- Consejo Consultivo.** Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a crear un Consejo Consultivo conformado por expertos y especialistas en materia de niñez, adolescencia y familia, el que tendrá por finalidad efectuar sugerencias, analizar la implementación práctica de la presente Ley, propiciar reformas y toda acción que entienda oportuna y pertinente en relación a todo lo vinculado con la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Estará integrado por un (1) representante de cada uno de los estamentos, instituciones y organizaciones que a continuación se detallan:

- a) Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial de la Provincia de Córdoba;
- b) Iglesias o confesiones religiosas reconocidas;
- c) Universidades públicas y privadas con ámbito de actuación en la Provincia de Córdoba;
- d) Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba;
- e) Organizaciones no Gubernamentales con reconocida actuación en cuestiones vinculadas a la niñez, adolescencia y familia que soliciten expresamente su inclusión;
- f) Colegios o consejos profesionales, y
- g) Toda otra institución con acreditada actuación en cuestiones vinculadas a niñez, adolescencia y familia que solicite su inclusión.

El titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia o del órgano que en el futuro la sustituya será el representante del Poder Ejecutivo Provincial ante dicho Consejo y presidirá el mismo, pudiendo designar un suplente a los fines de su sustitución. Asimismo, brindará la infraestructura y los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento. El cuerpo dictará su reglamento de funcionamiento.

**Artículo 115.- Intangibilidad.** Declárase la intangibilidad de los recursos que anualmente se asignen al financiamiento de los programas específicos, acciones y políticas para el Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba.

**Artículo 116.- Identificación.** La Ley Anual de Presupuesto identificará los programas, acciones y políticas mencionados en el artículo anterior, establecerá el origen de los recursos necesarios para financiarlo y los afectará específicamente.

**Artículo 117.- Modificación Ley Nº 7676.** Modifícase el artículo 16 de la Ley Nº 7676, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 16.- Los Tribunales de Familia conocerán de las siguientes causas:

- 1) Oposición a la celebración del matrimonio;
- 2) Venia supletoria matrimonial y otras autorizaciones;
- 3) Separación personal, divorcio y liquidación de la sociedad conyugal;
- 4) Disolución y liquidación de la sociedad conyugal sin divorcio (Artículos 1290 y 1294 del Código Civil);
- 5) Nulidad del matrimonio y liquidación del patrimonio adquirido durante la unión;
- 6) Alimentos;
- 7) Filiación;
- 8) Otorgamiento de guardas judiciales no asistenciales de niñas, niños y adolescentes y de las guardas con fines adoptivos;
- 9) Régimen de Visitas;
- 10) Patria potestad;
- 11) Adopción de personas;
- 12) Tutela;
- 13) Autorización para disponer o gravar bienes de niñas, niños y adolescentes en los supuestos del artículo 1277 del Código Civil;
- 14) En conflictos personales en las uniones de hecho estables, sumariamente acreditadas aunque no haya habido descendencia, cuando hubiere violencia y no fuere competencia de otros fueros, y
- 15) Toda otra cuestión personal derivada de la relación de familia.”

**Artículo 118.- Convenios con municipios y comunas.** Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a suscribir con la Autoridad de Aplicación los convenios pertinentes a los fines de establecer y articular las políticas públicas necesarias y de implementar Servicios Locales de Promoción, Prevención y Protección de Derechos de gestión asociada, para que estos en sus localidades actúen de manera coordinada y articulada con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, sus dependencias descentralizadas, los Consejos Locales de Infancia, como así también con los organismos gubernamentales y no gubernamentales de la ciudad o localidad de que se trate.

**Artículo 119.- Vigencia.** La presente Ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, salvo en lo que respecta a la organización de la Justicia Penal Juvenil que comenzará a regir en el plazo de un (1) año, prorrogable por otro período igual a solicitud del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba.

**Artículo 120.- Reglamentación.** El Poder Ejecutivo Provincial debe reglamentar la presente Ley en un plazo de ciento veinte (120) días contados a partir de su entrada en vigencia.

**Artículo 121.- Derogación.** Deróganse la Ley Nº 9053, los artículos 2, 3, 16 y 20 bis de la Ley Nº 9396 y toda otra norma que se oponga a los contenidos de la presente Ley, de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de las Leyes Nacionales Nº 23.849 y Nº 26.061 y sus modificatorias.

**Capítulo II**  
**Normas Transitorias**

**Artículo 122.- Continuidad.** Hasta tanto se instrumente la Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar en la Primera Circunscripción Judicial, así como los Juzgados de Niñez, Juventud y Violencia Familiar con competencia exclusiva y los Juzgados Penales Juveniles con competencia exclusiva en el interior provincial –con excepción de la primera circunscripción judicial-, las funciones que a aquella le asigna el artículo 63 y la competencia en materia de violencia familiar a los demás juzgados conforme a la presente Ley, continuarán siendo ejercidas por los órganos jurisdiccionales que las desempeñen al momento de la sanción de este plexo legal.

**Artículo 123.- Aplicación transitoria de medidas excepcionales.** Dispónese de manera transitoria y ante casos de manifiesta urgencia, para aquellos territorios rurales y/o localidades alejadas de centros urbanos que se encuentren dotados de dependencias pertenecientes al Poder Judicial y cuyos municipios o comunas no hayan instrumentado hasta el momento el Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a nivel local, la aplicación por parte de la Autoridad Judicial de las medidas excepcionales reguladas en los artículos 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 de la presente Ley. En el día hábil inmediatamente posterior de disponer dicha medida, la referida autoridad deberá transferir la causa a la Autoridad de Aplicación de la presente Ley para su intervención.

**Artículo 124.- Partidas presupuestarias.** Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a modificar las partidas presupuestarias que requieran la aplicación de la presente Ley.

**Artículo 125.- Asignación de recursos.** Incorpóranse a la Ley Nº 9873 -Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el Año 2011- formando parte del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, los programas y sus respectivos recursos intangibles en los términos del artículo 115 de esta Ley, cuyo detalle consta en el siguiente cuadro descriptivo:

RECURSOS	PROGRAMA	IMPORTE
Utilidades del inciso d) del artículo 21 del Estatuto de la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado - Ley Nº 8665.	50 - (CE) Políticas de Asistencia a Niñas, Niños y Adolescentes - Cuenta Especial Ley Nº 8665.	\$ 20.000.000,00
	55 - (CE) Organismos de Gestión Asistida (OGAs) - Talleres - Cuenta Especial Ley Nº 8665.	\$ 7.200.000,00
Impuesto de Sellos	51 - Las Niñas, Niños y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.	\$ 8.585.000,00
	52 - Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia - Actividades Comunes.	\$ 113.629.000,00
	53 - Oportunidades de Desarrollo Personal para Adolescentes.	\$ 5.096.000,00
	54 - Fortalecimiento Familiar y Comunitario.	\$ 555.000,00
	56 - Descentralización Territorial - Nueva Institucionalidad.	\$ 273.000,00
TOTAL GENERAL		\$ 155.338.000,00

**Artículo 126.- Compensación de partidas.** Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial, en los términos de la Ley Nº 9086 y su reglamentación, a compensar entre sí o a incrementar los montos asignados a cada uno de los programas enunciados en el artículo precedente, no pudiendo en ningún caso disminuir el total general asignado.

**Artículo 127.- De Forma.** Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

**DIOS GUARDE A V.H.**

**Alesandri, Bressan, Gamaggio Sosa, Valarolo, Vega, Brügge, Chiofalo, Cid, Saieg, Sella, Genta, Heredia.**

**Sr. Presidente (Busso).**- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados de última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.

**Sra. Secretaria (Pastor).**- (Leyendo):

XXXV

7431/L/11

**Proyecto de Declaración:** Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, adhiriendo al Centenario del Conservatorio Superior de Música "Félix Tomás Garzón", cuya celebración se desarrollará el 22 de mayo en la Sala Mayor del Teatro Libertador.

XXXVI

7432/L/11

**Proyecto de Declaración:** Iniciado por los todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo, rindiendo homenaje a los tripulantes del "Crucero ARA General Belgrano", al haberse cumplido el pasado 2 de mayo, el 29º aniversario de su cruel hundimiento.

XXXVII

7434/L/11

**Proyecto de Declaración:** Iniciado por la Legisladora Lizzul, declarando de Interés Legislativo al "Selectivo de Menores para el Mundial de Padel 2011", a llevarse a cabo los días 14 y 15 de mayo.

XXXVIII

DESPACHOS DE COMISIÓN

**Despacho de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización**

6484/E/10 – 5351/L/10

**Compatibilizados**

**Proyectos de Ley:** Iniciados por el Poder Ejecutivo Provincial y por el Bloque Frente Cívico y Social y los Legisladores Rivero, Olivero, Coria, Fernández, Ruiz y Pozzi, instituyendo la "Promoción y Protección Integral de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba", modificando artículos de las Leyes Nº 7676, 9396 y 9873 y derogando la Ley Nº 9053.

**Sr. Presidente (Busso).**- Quedan reservados en Secretaría.

**Sra. Secretaria (Pastor).**- (Leyendo):

**Despachos de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización**

1)7238/E/11

**Proyecto de Ley:** Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio comunal de la localidad de Capilla de Sitón, departamento Totoral.

2)7239/E/11

**Proyecto de Ley:** Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la localidad de Alcira, departamento Río Cuarto.

**Sr. Presidente (Busso).**- Al Orden del Día de la próxima sesión.

-11-

A) X CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS POLÍTICAS "DEMOCRACIA, INTEGRACIÓN Y CRISIS EN EL NUEVO ORDEN GLOBAL: TENSIONES Y DESAFÍOS PARA EL ANÁLISIS POLÍTICO", EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.

B) OBRA DE TEATRO "EL GARRA", DE EVA BERTAINA. INTERÉS LEGISLATIVO.

C) CONSTITUCIÓN NACIONAL. SANCIÓN. ANIVERSARIO. ADHESIÓN.

D) SRTA. MELINA GARIONE, DE LA CIUDAD DE BRINKMANN. PARTICIPACIÓN EN EL 2º ENCUENTRO AUSTRAL DEL DEPORTE, ARTE Y PRODUCCIONES ESPECIALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

E) SRA. MARÍA EVA DUARTE DE PERÓN. NATALICIO. 92º ANIVERSARIO. HOMENAJE.

F) DÍA DEL CORAJE CIVIL. ADHESIÓN.



G) ERNESTO SÁBATO, CIENTÍFICO Y ESCRITOR. FALLECIMIENTO. PROFUNDO PESAR.

H) ESCUELA MIYAZATO DE KARATE-DO, SUCURSAL HUINCA RENANCÓ. METODOLOGÍA PARA MEJORAR ASPECTOS FÍSICOS, PSÍQUICOS Y SOCIALES EN PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN. IMPLEMENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

I) VI CONGRESO INTERNACIONAL DE MUNICIPIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS "CAMINO A LAS CIUDADES SUSTENTABLES". ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

J) LOCALIDAD DE ITALÓ, DPTO. GENERAL ROCA. 103º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

K) HIMNO NACIONAL ARGENTINO. SANCIÓN. ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

L) IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA EN PAISAJES URBANOS (PULSO URBANO), EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.

M) SEMINARIO DE FORMACIÓN DE LUDO EDUCADORES, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.

N) EXPOCAMPO 2011, EN LA LOCALIDAD DE LAS VERTIENTES, DPTO. RÍO CUARTO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.

O) ASIGNACIÓN POR EMBARAZO PARA PROTECCIÓN SOCIAL. IMPLEMENTACIÓN. RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.

P) SR. NDABA MANDELA. VISITANTE ILUSTRE. DECLARACIÓN.

Q) FIESTAS PATRONALES EN HONOR A JESÚS MISERICORDIOSO, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA DE VILLA DE SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

R) CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA "FÉLIX TOMÁS GARZÓN". CENTENARIO. BENEPLÁCITO.

S) CRUCERO ARA GENERAL BELGRANO. 29º ANIVERSARIO DEL HUNDIMIENTO. HOMENAJE.

T) SELECTIVO DE MENORES PARA EL MUNDIAL DE PADEL 2011. INTERÉS LEGISLATIVO.

Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno

**Sr. Presidente (Busso).**- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno, se va a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos: 7321, 7351, 7388, 7389, 7392, 7394, 7396, 7399, 7401, 7403, 7405, 7409, 7410, 7411, 7412, 7414, 7418, 7419, 7431, 7432 y 7434/L/11, sometiéndolos todos a votación conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.

En consideración los proyectos enumerados.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueban.

**Sr. Presidente (Busso).**- Aprobados.

**PROYECTO DE DECLARACION – 07321/L/11  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CORDOBA  
DECLARA:**

De Interés Legislativo el X Congreso Nacional de Ciencia Política "Democracia, Integración y Crisis en el Nuevo Orden Global: Tensiones y desafíos para el análisis político", a realizarse entre los días 27 y 30 de julio de 2011 en la ciudad de Córdoba, con la Organización de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y la Universidad Católica de Córdoba (UCC).

**Daniel Passerini.**

**FUNDAMENTOS**

La Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), es una asociación civil sin fines de lucro que reúne a politólogos y profesionales ligados a la Ciencia Política. Fue fundada en el año 1982, y es la representante de la Argentina en la Internacional Political Science Association (IPSA), la Asociación Internacional de Ciencia Política fundada en 1949 bajo el auspicio de la UNESCO.

Como entidad científica y académica, la SAAP tiene como objetivos contribuir a la mayor difusión y desarrollo de la Ciencia Política, estableciendo relaciones de cooperación con Universidades, Centros de Investigación y Asociaciones afines. Es por esto que se organizan las Reuniones de Autoridades de carreras de grado y posgrado de universidades públicas y privadas de Ciencia Política, se brinda información académica del campo disciplina, entre otras actividades.

---

## PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION - 04-V-2011

---

Además la SAAP representa a la comunidad científica vinculada con la disciplina ante la Internacional Political Science Association (IPSA).

Objetivos Propuestos:

- Contribuir a la mayor difusión y desarrollo de la Ciencia Política y disciplinas afines en el campo científico, académico, docente y de la investigación, con el objeto de mejorar sus métodos, técnicas y resultados.

- Establecer relaciones de cooperación con Universidades, Postgrados, Facultades y Departamentos –tanto públicos como privados-- como así también, con Centros de Investigación y Asociaciones afines y conexos con el campo del análisis político, de la teoría política y de áreas de estudios de carácter científico que se especialicen en las relacionadas con Ciencia Política, tanto de nuestro país como del extranjero.

- Potenciar y desarrollar el intercambio de información, documentación e investigación en el área de la Ciencia Política en el ámbito nacional e internacional.

- Difundir entre la comunidad académica, conclusiones de los trabajos científicos realizados por diversos equipos de investigación y generar lazos de cooperación entre Instituciones que aborden temáticas afines con el objeto de avanzar en su desarrollo.

El X Congreso Nacional de Ciencia Política "Democracia, Integración y Crisis en el Nuevo Orden Global: Tensiones y desafíos para el análisis político" es organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y la Universidad Católica de Córdoba, y está prevista su realización entre los días 27 y 30 de julio de 2011, en la Ciudad de Córdoba.

El X Congreso Nacional de Ciencia Política se ha organizado en nueve áreas, en las cuales se desarrollarán ponencias y paneles sobre diversas temáticas. Las áreas son: a) Teoría y Filosofía Política; b) Relaciones Internacionales; c) Estado, Administración y Políticas Públicas; d) Opinión Pública, Comunicación y Marketing Político; e) Historia y Política; f) Política Comparada; g) Instituciones Políticas; h) Género y Política y i) Desarrollo, Enseñanza y Metodología de la Ciencia Política.

Además de las ponencias que se desarrollarán en cada área temática específica, se organizarán mesas especiales en las que se trabajarán temas de la coyuntura política actual y disertarán importantes y destacados invitados nacionales e internacionales expertos en política.

Por todo lo expuesto, y dada la importancia, trascendencia e interés que implica el X Congreso Nacional de Ciencia Política, tanto para los profesionales vinculados a la disciplina, como por sus aportes para la sociedad, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de declaración.

**Daniel Passerini.**

### **PROYECTO DE DECLARACION – 07351/L/11 LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA DECLARA:**

De Interés Legislativo la presentación de la obra de teatro "El Garra", de Eva Bertaina, con la actuación de Toto López y la dirección de Susana Palomas.

**Liliana Olivero.**

### **FUNDAMENTOS**

Atravesamos un tiempo histórico que hoy nos permite la recuperación política y social de la memoria. En tal sentido nos animamos a abrir lo más siniestro, descubrir la intimidad del saqueo y la impunidad, lo que nos ocurrió, como habitantes de una generación.

El teatro es una herramienta para cumplir con una función que consideramos esencial: actuar para no olvidar, actuar para encontrar la verdad. El teatro toma nuestros fantasmas, para combatirlos, para disolverlos, para nunca descansar en el trabajo de exorcizarlos. Porque son oscuridades que a nada temen más que a la reflexión. Pocas cosas son tan efectivas en este combate como la sensibilidad, la duda, la emoción, el recuerdo, la acción y el desesperado intento de entendernos y convivir. Y esto es el teatro: duda, acción, emoción y convivencia.

Esta obra nos permite reflexionar a través de la puesta del cuerpo y letra de tres militantes de los '70 que vivieron los horrores y que nos llevan a un tiempo donde la memoria vuelve.

Finalmente, sostengo que apoyar proyectos de este tipo es vital cuando consideramos que la memoria debe buscar espacios para volver, desde el arte, a la construcción colectiva de la comunidad.

Por lo anteriormente expuesto, pido a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

**Liliana Olivero.**

### **PROYECTO DE DECLARACION – 07388/L/11 LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA DECLARA:**

De Interés Legislativo el "XX Encuentro Nacional de Poetas", a realizarse los días 4, 5 y 6 de agosto del corriente año en la ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo.

---

## PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION - 04-V-2011

---

**Carlos Giaveno**<sup>Error! Marcador no definido.</sup>, **Dante Rossi**, **Norma Poncio**, **María Calvo Aguado**, **Ítalo Gudiño**, **Alicio Cargnelutti**, **Ana Dressino**, **María Matar**, **Hugo Pozzi**.

### FUNDAMENTOS

Nuevamente, como todos los años, la ciudad de Brinkmann es sede de este importante evento que reúne las inquietudes de escritores y poetas de todo nuestro país.

Esta vez para celebrar nada menos que veinte (20) años de trayectoria literaria, fortaleciendo y enriqueciendo la cultura de la ciudad y de la región.

Este XX Encuentro Nacional de Poetas es sin lugar a dudas un evento de singular importancia en nuestra Provincia que permite la interacción de cientos de poetas y escritores de todas las latitudes unidos por el arte literario y por su común necesidad de expresar por escrito sus sentimientos.

Es de destacar que esta iniciativa es llevada a cabo por S.A.D.E. (Seccional Brinkmann), el Taller Literario "Belisario Roldan" y "AMA" (América Filial Brinkmann), reconocidos en esta Ciudad por su trayectoria literaria, y que vienen bregando por la comunicación cultural de sus actividades.

También cabe reconocer que Municipalidades y Comunas de localidades de toda la región, como ser: Brinkmann, Suardi, La Paqueta, San Guillermo, Portaña, Colonia Vignaud, Balnearia, Morteros; que en ediciones anteriores recibieron en su ámbito a escritores y poetas, adherirán, una vez más, a este trascendental encuentro.

El principal lugar donde se desarrollarán las actividades es en el Aula Magna del Instituto Manuel Belgrano, que gentilmente todos los años cede sus instalaciones.

No escapa a nuestra valoración la trascendencia de este Encuentro como expresión e intercambio con la Comunidad fruto de la misma.

Muy pocos hombres y mujeres poseen ese bello don, de expresar con palabras organizadas en rimas, estrofas y versos, los más profundos secretos del alma. El don de la poesía no tiene límites de espacio ni tiempo y se manifiesta en todos los órdenes de la vida.

Este encuentro se lleva a cabo, sin duda alguna, gracias al trabajo y esfuerzo de muchas personas, pero debemos reconocer, en la figura de Elbis Gilardi de Bruna, a su principal impulsora, quien desde hace veinte años encabeza la organización del encuentro.

Para finalizar queremos hacer una mención especial al pueblo de Brinkmann, el que con una enorme solidaridad alberga año tras año a todos los visitantes, y sus acompañantes, sin importar su procedencia, sus edades o sus creencias.

Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

**Carlos Giaveno**<sup>Error! Marcador no definido.</sup>, **Dante Rossi**, **Norma Poncio**, **María Calvo Aguado**, **Ítalo Gudiño**, **Alicio Cargnelutti**, **Ana Dressino**, **María Matar**, **Hugo Pozzi**.

### PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7388/L/11

#### TEXTO DEFINITIVO

#### LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

#### DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la realización del "XX Encuentro Nacional de Poetas", que se desarrollará del 4 al 6 de agosto de 2011 en la ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo.

### PROYECTO DE DECLARACION – 07389/L/11

#### LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

#### DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la participación en el 2º Encuentro Austral de Deporte, Arte y Producciones Especiales", a realizarse en junio del corriente año en Colombia, de la señorita Melina M. Garione de la ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo.

**Carlos Giaveno**, **Dante Rossi**, **Norma Poncio**, **María Calvo Aguado**, **Ítalo Gudiño**, **Alicio Cargnelutti**, **Ana Dressino**, **María Matar**, **Hugo Pozzi**.

### FUNDAMENTOS

La Srta. Melina M. Garione, de 26 años de edad, es una joven oriunda de Brinkmann, con Capacidades Diferentes (psicomotrices e intelectuales) que practica Patín Competitivo.

Esta actividad deportiva comenzó a realizarla en dicha ciudad desde enero del año 2003 hasta el año 2006; a partir del año 2007 realiza sus prácticas en la ciudad de San Francisco, dirigida por la profesora Alejandra Zonghetti.

Al comenzar allí, formó pareja de baile con un joven de esa ciudad: Marcelo Romero.

No solo compitieron en los Campeonatos Provinciales Oficiales, sino que comenzaron a participar en Competencias Argentinas representando a Córdoba a nivel país, siempre obteniendo el 1º Puesto como Solista y en Pareja, y en la actualidad, son la única pareja del país en la se unen jóvenes con capacidades diferentes (Down y Psicomotriz e Intelectual).

En el año 2010 participaron del 1º Encuentro Austral de Deporte, Arte y Producciones Especiales (Córdoba, en Septiembre de 2010).

El proyecto de este año es continuar con las Competencias como en los años anteriores, y por haber participado en el 1º Encuentro Austral, compartiendo este evento con niños de Colombia,

---

## PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION - 04-V-2011

---

Venezuela y Uruguay, tienen la posibilidad de participar en Junio de 2011 del 2º Encuentro que se realizará en Colombia.

Cabe destacar, que a la familia le resulta difícil sostener los costos de esta actividad, ya que el ingreso económico de la madre es el sueldo de su trabajo y una pensión mínima por el fallecimiento del padre de Melina, lo que hace imposible que en estas condiciones económicas pueda viajar a Colombia a participar de tal evento.

Sin otro particular, y esperando una pronta y favorable respuesta lo saludo cordialmente.

**Carlos Giaveno, Dante Rossi, Norma Poncio, María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño, Alicia Cargnelutti, Ana Dressino, María Matar, Hugo Pozzi.**

### **PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7389/L/11**

#### **TEXTO DEFINITIVO**

#### **LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA**

#### **DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la participación de la señorita Melina M. Garione, oriunda de la ciudad de Brinkmann - Departamento San Justo, en el "2º Encuentro Austral de Deporte, Arte y Producciones Especiales", a realizarse en junio del corriente año en Colombia.

### **PROYECTO DE DECLARACION – 07392/L/11**

#### **LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**

#### **DECLARA:**

Su más sincero homenaje a la memoria de María Eva Duarte de Perón, Evita, al conmemorarse el próximo 7 de mayo el 92º aniversario de su nacimiento.

Evita significó y significa mucho para el pueblo argentino, tanto que hoy se encuentra elevada a la categoría de máximo Mito Popular, y desde hace tiempo también de importancia a nivel mundial, fundamentalmente para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Su entrega y sacrificio militante, su lucha hasta desfallecer, su fortaleza espiritual, deben ser recordadas como un ejemplo de amor y solidaridad por la dignidad del hombre.

**Pedro Ochoa Romero**Error! Marcador no definido..

#### **FUNDAMENTOS**

Inmenso es el desafío al intentar decir algo que no se haya dicho cada 7 de mayo, al recordar la figura política de Evita, pero hoy, en este nuevo aniversario de su nacimiento, celebramos su vida de amor a los trabajadores, su lealtad y su fuerza para luchar por una sociedad más justa, su incansable militancia, convencida que el proyecto político de su esposo, el general Perón, de una "Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana" era posible y por su instauración luchó hasta el fin.

Fue Evita la que con tesón logró que la mujer argentina fuera la primera que votara en nuestra América. El voto femenino es uno de sus grandes logros. Evita fue una mujer hecha y derecha, enamorada de su esposo y volcada hacia los más desprotegidos.

Este bloque sistemáticamente ha presentado proyectos de declaración rindiendo homenaje a los aniversarios, tanto de su nacimiento como de su desaparición física, porque estamos plenamente convencidos que, como Peronistas, no podemos dejar pasar por alto estas fechas que son tan caras a nuestras convicciones y por consiguiente, a todos nuestros años de militancia.

Por estas razones es que solicito a mis colegas legisladores me acompañen aprobando este proyecto.

**Pedro Ochoa Romero.**

### **PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7392/L/11**

#### **TEXTO DEFINITIVO**

#### **LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA**

#### **DECLARA:**

Su más sincero homenaje a la memoria de María Eva Duarte de Perón, EVITA, al conmemorarse el día 7 de mayo de 2011 el 92º aniversario de su nacimiento.

EVITA significó y significa mucho para el pueblo argentino, tanto que hoy se encuentra elevada a la categoría de máximo MITO PUPULAR, y desde hace tiempo también de importancia a nivel mundial, fundamentalmente para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Su entrega y sacrificio militante, su lucha hasta desfallecer, su fortaleza espiritual, deben ser recordadas como un ejemplo de amor y solidaridad por la dignidad del hombre.

### **PROYECTO DE DECLARACION – 07394/L/11**

#### **LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**

#### **DECLARA:**

Su adhesión al "Día del Coraje Civil", establecido en recuerdo y homenaje de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo, el 30 de abril de 1977, alrededor de la Pirámide y como reacción a la desaparición de sus hijos.

**Roberto Birri.**

**FUNDAMENTOS**

Hace 34 años, un puñado de madres de desaparecidos encabezados por Azucena Villaflor daba su primera vuelta a la Pirámide de Mayo. Cuando un grupo de ellas se reunió en ese lugar y ante la orden de "circulen" de la policía decidió hacer caso, dando vueltas alrededor de la pirámide.

El comienzo del reclamo nació como una iniciativa de madres de detenidos y desaparecidos el 30 de abril de 1977 en Buenos Aires. Su objetivo inicial, - según la propia página oficial de Madres- era poder tener una audiencia con el presidente de facto argentino Jorge Rafael Videla. Para ello se reunieron en la Plaza de Mayo y efectuaron una manifestación pública pacífica pidiendo saber el paradero de sus hijos. La elección de la Plaza de Mayo se debe a que está situada frente a la Casa Rosada, sede de la Presidencia y lugar donde tradicionalmente se han efectuado manifestaciones políticas.

La idea surgió mientras el grupo inicial de madres estaba esperando que las atendiera el secretario del Vicario Castrense. Una de ellas, Azucena Villaflor de Vicenti, propuso entonces: «Individualmente no vamos a conseguir nada. ¿Por qué no vamos todas a la Plaza de Mayo? Cuando vea que somos muchas, Videla tendrá que recibirnos».

Ese mismo día, 14 madres iniciaron una jornada a la cual, con el paso del tiempo, se acercarían otras madres afectadas. Desde entonces, todos los jueves repetirían una caminata (originada cuando las fuerzas de seguridad les exigieron «circular» por causa del estado de sitio) alrededor de la pirámide central de la plaza.

Entre aquellas primeras Madres estuvieron Azucena Villaflor de Vicenti, Berta Braverman, Haydée García Buelas, María Adela Gard de Antokoletz, Julia Gard, María Mercedes Gard y Cándida Gard (4 hermanas), Delicia González, Pepa García de Noia, 2 Mirta Baravalle, Kety Neuhaus, Raquel Arcushin, Sra. De Caimi y una joven que no dio su nombre. Al viernes siguiente aparecieron más madres, entre ellas Hebe de Bonafini, de la ciudad de La Plata. La presencia de las madres en la Plaza era conocida por comentarios de boca en boca, puesto que así como no existían los «desaparecidos» para la prensa, tampoco existían las Madres. Al tercer día se cambió el viernes por el jueves. Acordaron que fueran los jueves de 15:30 a 16:00 h de la tarde por ser un día y una hora en la que transitaba mucha gente por la Plaza. Ellas permanecían en grupo y de pie sin caminar. Fueron los policías que custodiaban la plaza quienes les indicaron que marcharan de a dos porque como el país estaba bajo estado de sitio estaban prohibidos los grupos de tres o más personas. Por lo tanto y dadas esas condiciones, comenzaron las marchas alrededor de la pirámide de Mayo, símbolo de la libertad. Para reconocerse, comenzaron a usar un pañuelo blanco en la cabeza hecho en un principio con tela de los pañales que se usaban para bebés, representando así a los hijos. Ese pañuelo se convirtió en su símbolo. Las Madres intentaron dar a conocer sus dramas y así participaron de marchas religiosas numerosas y populares en las cuales era conveniente que pudieran reconocerse.

Nuestro homenaje y reconocimiento por siempre, a las Madres que fueron y son la consciencia de la Nación.

Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de Declaración.

**Roberto Birri.**

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7394/L/11**

**TEXTO DEFINITIVO**

**LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA**

**DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día del Coraje Civil", que fuera establecido en recuerdo y homenaje de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo desarrollada el 30 de abril de 1977 alrededor de la Pirámide y como reacción por la desaparición de sus hijos.

**PROYECTO DE DECLARACION – 07396/L/11**

**LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CORDOBA**

**DECLARA:**

Su más profundo pesar por el fallecimiento de escritor Ernesto Sábato, uno de los escritores más importantes de la historia argentina, hombre comprometido con la democracia y una de las voces de denuncia más fuerte en defensa de los derechos humanos.

**Esmeralda RodrígueziError! Marcador no definido., César Seculini.**

**FUNDAMENTOS**

Ernesto Sábato, uno de los escritores más importantes y trascendentes de la literatura argentina, falleció el pasado sábado 30 de Abril en la tranquilidad de su casa de Santos Lugares, a los 99 años.

Nacido en Rojas, provincia de Buenos Aires, hizo su doctorado en física y cursos de filosofía en la Universidad de La Plata. Trabajó luego en el Laboratorio Curie, en París, y abandonó definitivamente la ciencia en 1945 para dedicarse exclusivamente a la literatura. Ha escrito varios libros de ensayos sobre el hombre en la crisis de nuestro tiempo y sobre el sentido de la actividad literaria: El escritor y sus fantasmas (1963), Apologías y rechazos (1979).

La fama internacional le llegó a Sábato en 1961 con la novela Sobre Héroes y Tumbas y la consagración en 1974 con Abaddón el exterminador, que fue premiada en Francia, donde es nombrado Caballero de las Artes y las Letras.

Esas dos obras completaron una trilogía junto a su primera novela El Túnel (1948), cuya versión adaptada llegó a los escenarios de España en abril de 2006.

Galardonado con el Premio Cervantes en 1984, el escritor llegó a ser propuesto en el año 2007 por la Sociedad General de Autores y Editores de España como candidato al Premio Nobel de Literatura. Fue honrado con numerosos premios, como el Menéndez Pelayo (1997) y el Gabriela Mistral (1983), pero uno de los reconocimientos más emotivos de su vida le llegó en el año 2004, en el III Congreso de la Lengua, en la ciudad de Rosario (Argentina), en el cual fue ovacionado.

Ernesto Sábato también fue reconocido por su defensa a los derechos humanos. Con muchos cuestionamientos, en 1984 presidió la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) que redactó el "Informe Sábato" o "Nunca Más" acerca de los horrores de la última dictadura militar. Aún así, a pesar de las controversias, la postura comprometida de Sábato no le restó lectores: su ensayo La resistencia (2000), que se publicó primero por Internet a pesar de los reparos del escritor a todo lo que signifique globalización, fue un éxito y la primera edición impresa, de 100.000 ejemplares, se agotó rápidamente.

Políticos, intelectuales y decenas de seguidores acompañaron y despidieron desde el sábado hasta el día de hoy los restos del escritor, quien iba a ser homenajeado este domingo en la Feria del Libro. Por la trayectoria y legado de uno de los últimos mitos de la literatura argentina, pido a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto.

**Esmeralda Rodríguez**Error! Marcador no definido., **César Seculini.**

**PROYECTO DE DECLARACION – 07419/L/11  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CORDOBA  
DECLARA:**

Su profundo pesar por la desaparición física del científico y escritor Ernesto Sábato, acaecida en la madrugada del 30 de abril del 2011 en su hogar de Santos Lugares; destacando sus cualidades de hombre íntegro y sencillo, de profundas convicciones democráticas y comprometido con la sociedad de la que formaba parte; expresando su condolencias y acompañamiento a su hijo Mario Sábato y demás familiares.

**Bloque de la Unión Cívica Radical.**

**FUNDAMENTOS**

Profundo pesar a causado en toda la ciudadanía Argentina, el fallecimiento de Ernesto Sábato.

Una personalidad tan compleja, diversa y si se quiere polémica, sería injusto definirla en pocas palabras como también lograr encontrar una línea única en su larga vida de casi 100 años.

Alguien que en sus primeros 40 años de vida se dedicó a la ciencia, como objeto central de su interés, dedicado a la investigación en las áreas de matemáticas y física, y que comprendía que la búsqueda de muchos interrogantes de la humanidad se asentaban en la racionalidad y el positivismo; se contraponen a la posterior decisión de dedicarse completamente a la escritura, el arte y abandonar el estricto racionalismo para las grandes respuestas de la especie humana, por una etapa en donde priman la espiritualidad y la comprensión del ser desde la literatura y un profundo humanismo que lo identificó hasta el último momento.

Aquí queda marcada la riqueza de este gran hombre, que en la diversidad de sus acciones y en lo múltiple de sus convicciones lo elevan en un saber renacentista, convirtiendo a su figura a un referente ineludible de la cultura Argentina.

Los valores humanos que lo destacaron a lo largo de su vida, necesariamente lo obligaba a ser protagonista de su tiempo, participando de la sociedad en que vivía, desde la militancia política en su juventud hasta expresar su visión social desde diferentes ensayos o notas periodísticas, elevando su voz y generando en más de una oportunidad críticas, que no lograron acallararlo, ya que una personalidad de su talla, no podía pasar por su tiempo como un ser individual y aislado de la sociedad de la que era parte.

Aquí es necesario destacar, su aporte más importante a la sociedad Argentina, que representó presidir la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, comisión encargada de investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el proceso militar en el período 1976-1983.

Etapa compleja, que puso de manifiesto sus convicciones, liderazgo y agallas para semejante obra, experiencia inédita en el mundo y que se encontraba ante la permanente amenaza por parte de los militares que recientemente entregaban el poder a un gobierno civil, encabezado

por Raúl Alfonsín.

Finalmente el 20 de setiembre de 1984 entregó a Alfonsín el informe de la comisión, que se transformaría en el libro del Nunca Más, texto que retrata las atrocidades ocurridas durante la cruel dictadura, símbolo mundial de la lucha por los Derechos Humanos en el mundo.

Su obra literaria es enorme, recibiendo el premio Cervantes entre otros reconocimientos en el mundo, su papel en la historia política argentina lo tiene como un hombre importante, pero lo más importante a destacar es su perfil humilde que hasta su último suspiro mantuvo, que quedó representado en su deseo de ser velado junto a los suyos, como un vecino más, en su querido Santos Lugares.

Es por ello que solicitamos del resto de los Bloques legislativos acompañen con su voto positivo el presente proyecto.

**Bloque de la Unión Cívica Radical.**

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7396/L/11 y 7419/L/11  
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
DECLARA:**

Su más profundo pesar por el fallecimiento del científico y escritor Ernesto Sábato, acaecida el 30 de abril de 2011 en su hogar de la ciudad de Santos Lugares, Provincia de Buenos Aires, destacando sus cualidades de hombre íntegro y sencillo, de profundas convicciones democráticas y comprometido con la sociedad de la que formaba parte, siendo uno de los escritores más importantes de la historia argentina y una de las voces de denuncia más fuerte en defensa de los derechos humanos, expresando condolencias y acompañamiento a sus familiares.

**PROYECTO DE DECLARACION – 07399/L/11  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CORDOBA  
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la implementación de pautas metodológicas por parte de la Escuela Miyazato de Karate-Do, Sucursal Huinca Renancó, en pos de mejorar aspectos físicos, psíquicos y sociales en personas con Síndrome de Down.

**Roberto Pagliano**Error! Marcador no definido..

**FUNDAMENTOS**

La ciudad de Huinca Renancó, se encuentra distante a unos 410 Km. de Córdoba Capital, en el Departamento General Roca.

En esta ciudad, se encuentra una Sucursal de la Escuela Miyazato Doyo, sinónimo de tradición marcial, heredera de siglos de evolución en el arte del Karate Do, la cual ofrece desde hace 51 años en la Argentina, un método seguro y eficaz para iniciarse y avanzar en el estudio y práctica del arte marcial.

El Doyo Miyazato, imparte el arte marcial del Karate Do en 17 países, y en Argentina particularmente, es representada por 88 Sucursales en 15 Provincias.

Cabe destacar, que los objetivos de esta Escuela es desplegar sus valores de la mano de las Artes Marciales, siendo los más importantes la honradez, el respeto, el esfuerzo, la verdad, haciendo primar la razón sobre la fuerza.

Puntualmente, esta sucursal ha incorporado a partir del 2010, niños con capacidades diferentes, apuntando a la superación personal de los mismos, ampliando su tarea con proyección al 2011 y años sucesivos.

En este sentido, la Sucursal Huinca Renancó de la Escuela Miyazato de Karate Do, a implementado el empleo de Artes Marciales como medio de mejora de aspectos físicos, psíquicos y sociales en personas con Síndrome de Down; sumando esta disciplina a las experiencias ya avanzadas en este plano por parte del Atletismo, Natación, Equitación, etc.

A partir de este trabajo, se intenta intervenir desde el Karate Do en el plano Psicológico, logrando mejoras en los niveles cognitivos, atencionales, perceptivos, intelectuales, lingüísticos, conductuales, etc. De la misma manera, se intenta abordar el plano Físico, logrando mejoras en la performance motora y psicomotora con actividades básicas y coordinativas. Por último, se trabaja el desempeño Social con preponderancia de actividades lúdicas, logrando ampliar la capacidad socioafectiva.

Todos los detalles y especificaciones sobre el abordaje del presente proyecto están adjuntados en el Anexo I.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

**Roberto Pagliano.**

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7399/L/11  
TEXTO DEFINITIVO  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA**

**DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la implementación de pautas metodológicas tendientes a mejorar aspectos físicos, psíquicos y sociales en personas con Síndrome de Down desarrolladas por la Escuela Miyazato de Karate-Do, ubicada en la localidad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.

**PROYECTO DE DECLARACION – 07401/L/11  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CORDOBA**

**DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito al VI Congreso Internacional de Municipios y Servicios Públicos “Camino a Ciudades Sustentables” organizado por el Instituto de Investigación de Servicios Públicos e Infraestructura (IISPI) y la Maestría en Administración de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, a realizarse los días 4, 5, 6 y 7 de mayo de 2011 en el Pabellón Amarillo del Complejo Ferial Córdoba, FICO, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital.

**María Amelia Chiofalo.**

**FUNDAMENTOS**

La ciudad de Córdoba será sede del “IV Congreso Internacional de Municipios y Servicios Públicos Camino a ciudades Sustentables” a desarrollarse los días 4, 5, 6 y 7 de mayo de 2011 en el Pabellón Amarillo del complejo Ferial Córdoba FICO, organizado por el Instituto de Investigación de Servicios Públicos e infraestructura (IISPI) y la Maestría en Administración de la Facultad de Ciencias Exactas, física y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba; donde se abordaran temas relacionados con la gestión de servicios públicos sustentables, políticas de Estado para un desarrollo sustentable, inclusión social para una ciudad sustentable, entre otros.

Adherimos a los objetivos del Congreso de generar un espacio para que los diferentes actores sociales involucrados en la gestión pública local y en la prestación de servicios públicos puedan intercambiar experiencias y analizar sus problemáticas identificando su rol para el desarrollo económico, social, ambiental y cultural de sus respectivas regiones, frente a las amenazas, oportunidades y desafíos del actual escenario local.

Por ello y por las razones que se expondrán al momento de su tratamiento es que solicito la aprobación de este proyecto de declaración.

**María Amelia Chiofalo.**

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7401/L/11  
TEXTO DEFINITIVO  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la realización del VI Congreso Internacional de Municipios y Servicios Públicos “Camino a Ciudades Sustentables” que, organizado conjuntamente por el Instituto de Investigación de Servicios Públicos e Infraestructura (IISPI) y la Maestría en Administración de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, se desarrollará del 4 al 7 de mayo de 2011 en el Pabellón Amarillo del Complejo Ferial Córdoba de la ciudad Capital de la Provincia.

**PROYECTO DE DECLARACION – 07403/L/11  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CORDOBA  
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por el 103º aniversario de la localidad de Italó, Departamento General Roca, a conmemorarse el día 3 de mayo de 2011.

**Roberto Pagliano.**

**FUNDAMENTOS**

La localidad de Italó, ubicada en el Departamento General Roca, es un punto importante de referencia histórica tanto regional como provincial.

Sus inicios se remontan a los primeros intentos de conquista del territorio que hoy conforman el sur de Córdoba y el norte de La Pampa. En el año 1858 llega el Cnel. Emilio Mitre con 2000 hombres al paraje “Vuta-loo”, que en lengua Araucana se desglosa Vuta: Grande o Alto y Loo: Médano, en intento de abatir a los indios en su territorio y fracasa. En marzo de 1876, llega al mismo paraje el Cnel. Leopoldo Nelson quien funda la Comandancia “Italó” (surgido por deformación idiomática de “Vuta-loo”) en pos de la custodia de la Zanja de Alsina. En 1881 la Nación vende las tierras que van desde el Río Popopis (Actual Río Quinto) hacia el sur comprando a su vez 55.000 has. que rodean la Comandancia Italó. Estas tierras fueron asiento para los primeros condominios civiles, entre ellos el Dr. José María Rosa, Mariano de María, Pedro Paso, Estanislao López, etc. registrándose las primeras escrituras en junio de 1881. Al año siguiente, se funda en la Comandancia la Compañía Ganadera S.A. de Italó.



En el año 1885, se retira el Ejército de la Comandancia de Italó y esta pasa a ser un Puesto de Estancia llamado "Fortín Italó", quien fue asiento de autoridades de la primitiva Pedanía Italó, que abarcaba todo el territorio del actual Departamento General Roca y ya contaba con un precario destacamento policial y un juzgado. En 1886 la Compañía Ganadera S. A. funda el primitivo pueblo Italó a una distancia de 6 km. al sur del Puesto Fortín Italó. De esta manera, comienza a desarrollarse un prospero caserío pero hacia finales de la década decae su crecimiento con la llegada del Ferrocarril. En 1891 el puesto estaba en decadencia; y en febrero de 1893, el Banco Hipotecario Nacional vende por orden del deudor, José Fuentes, las tierras que rodean al anterior Fortín Italó y al primitivo Pueblo Italó, a Juan B. Etchegoyhen.

En junio de 1900, se habilita al público la estación ferroviaria, la que fue punta de línea por algún tiempo. En mayo de 1906, fallece el Sr. Etchegoyhen y sus familiares realizan la declaratoria de herederos, quienes en mayo de 1908 disponen realizar las ventas de Chacras, Quintas y Solares. Pasada esta distribución de tierras, se inicio un masivo asentamiento de pobladores, con lo cual se construyeron casas de material y también ranchos de adobe. Esta situación fue favorecida dado que Italó, a través del tendido ferroviario, queda sobre el corredor bioceánico de Buenos Aires al Pacífico.

Es así que, el 03 de Mayo de 1908 se coloca la piedra fundamental del Pueblo de Italó, en el terreno donde hoy está construida la Iglesia "Sagrado Corazón de Jesús", motivo por el cual se toma dicha fecha como el aniversario del Pueblo.

Hoy en día, Italó es una localidad del departamento General Roca que cuenta con una población de 1250 habitantes, pudiendo acceder a la misma por la Ruta Provincial Nº 26. Esta Localidad dista a unos 500 km de la Ciudad de Córdoba, capital provincial, y a unos 80 km de Villa Huidobro, capital departamental.

El factor fundamental de crecimiento local se debe a la actividad Agrícola Ganadera pudiendo exponer como logros sociales la formación de Cooperativas, Instituciones Intermedias, Empresas, etc.

Como se ha descripto, además de su papel histórico debe reconocerse el esfuerzo de sus habitantes para lograr el Crecimiento y Desarrollo de su Localidad dentro del ámbito Departamental y su continua búsqueda de la prosperidad Regional.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento del presente Proyecto de Declaración.

**Roberto Pagliano** iError! Marcador no definido..

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7403/L/11**  
**TEXTO DEFINITIVO**  
**LA LEGISLATURA DE LA**  
**PROVINCIA DE CÓRDOBA**  
**DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 103º aniversario de la fundación de la localidad de Italó, Departamento General Roca, celebrado el pasado 3 de mayo de 2011.

**PROYECTO DE DECLARACION – 07405/L/11**  
**LA LEGISLATURA DE LA**  
**PROVINCIA DE CORDOBA**  
**DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito al cumplirse un aniversario más de la sanción del Himno Nacional Argentino aprobado y sancionado por la Asamblea del año 1813.

**Esmeralda Rodríguez.**

**FUNDAMENTOS**

La necesidad de tener una canción patriótica se sintió en Buenos Aires en 1812, antes de la Declaración de Independencia.

Las llamadas entonces Provincias Unidas de Sudamérica se habían dado un gobierno propio el 25 de mayo de 1810, y en 1812 el gobierno del Triunvirato entendió que debía darle al pueblo un canto nacional de mayor importancia que el que hasta entonces se entonaba y envía un oficio el 22 de julio de 1812, dirigido al Cabildo, sugiriéndole a éste que mandase a componer "la marcha de la patria", para ser ejecutada al principio de las funciones teatrales, debiendo el público escucharla de pie así como en las escuelas al finalizar diariamente las clases.

Luego de un tiempo, el 6 de marzo de 1813, la Asamblea mandó a componer la letra del Himno Nacional, la cual fue aprobada el 11 de mayo de 1813.

El título de nuestra máxima canción sufrió algunas alteraciones y cambios.

En 1813 se lo llamó "Marcha Patriótica", luego "Canción Patriótica Nacional", y más tarde se lo conoció como "Canción Patriótica".

Una copia de 1847 lo tituló como "Himno Nacional Argentino", denominación que recibe en la actualidad.

La letra del Himno Nacional estuvo a cargo de Vicente López y Planes y la música fue compuesta por Blas Parera.

Se estima que se entonó por primera vez antes del 25 de mayo de 1813 (aunque antes, en privado, se habría escuchado en la tertulia de Mariquita Sánchez de Thompson), ya que el 28 de ese mismo mes, se cantó en un teatro, durante la función patriótica efectuada por la noche.

Considerado como himno nacional, la Canción Patriótica de López, por un largo período fue interpretada de acuerdo con el texto original.

Más tarde, desaparecido el furor de la contienda con España, en aras de un sentimiento legítimo de acercamiento y comprensión con ese país, la canción nacional sufrió en su enunciado una modificación en lo relativo a aquella parte que pudiera tener en el presente un concepto peyorativo, ya sin objeto para la soberanía del Estado.

Durante la presidencia del general Roca en el año 1900 fue sancionado un decreto refrendado con la firma del Presidente de la Nación y la de sus ministros.

Que, sin producir alteraciones en el texto del Himno Nacional, hay en él estrofas que responden perfectamente al concepto que universalmente tienen las naciones respecto de sus himnos en tiempo de paz y que armonizan con la tranquilidad y la dignidad de millares de españoles que comparten nuestra existencia, las que pueden y deben preferirse para ser cantadas en las festividades oficiales, por cuanto respetan las tradiciones y la ley sin ofensa de nadie, el presidente de la República, en acuerdo de ministros decreta:

Artículo 1.- En las fiestas oficiales o públicas, así como en los colegios y escuelas del Estado, sólo se cantarán la primera y la última cuarteta y coro de la canción nacional sancionada por la Asamblea General el 11 de marzo de 1813".

El himno nacional encierra en su lírica la expresión del sentimiento patriótico y es una síntesis literaria del origen de nuestra patria.

Pido a mis pares me acompañen en el presente proyecto con la intención de que podamos reconocerlo como la marca de nuestra identidad argentina que se ahonda cada vez más en nuestro ser argentino al entonarlo.

**Esmeralda Rodríguez.**

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7405/L/11  
TEXTO DEFINITIVO  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la sanción del Himno Nacional Argentino, que fuera aprobado y sancionado por la Asamblea General Constituyente del año 1813.

**PROYECTO DE DECLARACION – 07409/L/11  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CORDOBA  
DECLARA:**

Su beneplácito por la realización del IV Festival Internacional de Danza Contemporánea en Paisajes Urbanos -Pulso Urbano-, organizado por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba a través de la Subdirección de Artes Escénicas - Área Danza Contemporánea, desde el 5 al 7 de mayo, con intervenciones en diferentes espacios públicos de la Ciudad de Córdoba.

**Estela Bressani**Error! Marcador no definido..

**FUNDAMENTOS**

Organizado por la secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba, a través de la Subdirección de Artes Escénicas - Área Danza Contemporánea, los días 5, 6 y 7 de mayo del corriente año tendrá lugar la IV edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea en Paisajes Urbanos -Pulso Urbano-.

Durante tres días la danza contemporánea intervendrá distintos espacios de nuestra ciudad como teatros, plazas, paseos, hospitales y correccionales, además de eventos especiales con talleres, seminarios, videos y charlas, a cargo de directores e integrantes de las distintas compañías que conforman el Festival y que están destinados a favorecer la interacción de los artistas visitantes con nuestros bailarines y estudiantes de danza, garantizando la práctica de la comunicación dinámica y la enseñanza.

En esta IV edición llegan desde el exterior los grupos de España (Bilbao) Natxo Montero-danza, de México la compañía Onírico y de Francia Carpe Diem / Marie-Anne Michel. Además desde Buenos Aires contaremos con la presencia de la Compañía TangoKinesis y de La Rioja el Ballet Clásico Contemporáneo.

Las producciones locales que participan son los grupos que asistieron y fueron elegidos del Taller Interdisciplinario Danza y Música realizado en forma previa al Festival y de la convocatoria abierta destinada a los jóvenes creadores.

Cabe destacar que la Compañía Tangokinesis, dirigida y creada por la prestigiosa coreógrafa Ana María Stekelman es la encargada de la apertura y cierre del festival; en ambos casos presentará el trabajo denominado "Tango y Folk", una fusión entre danza, tango y folklore, además interpretarán "4 Piazzolla" en homenaje al gran músico Astor Piazzolla y como final harán 3 mambos de Pérez Prado.

Este evento de Danza en Espacios Urbanos, se realiza en treinta ciudades del mundo que integran la Red Internacional "Ciudades que Danzan", en la cual la ciudad de Córdoba se incluye desde la 1º edición de Pulso Urbano en el 2008.

Programación General:

- Jueves 5 de mayo  
Espectáculos  
Plaza San Martín  
12:00 / Córdoba  
Em-plazamientos y Des-plazamientos \*  
Idea y Dirección: José Halac  
12:30 / Córdoba  
Civiles Bícibles  
Elenco Municipal de Danza Teatro  
Coreografía y Dirección: Marola Farías  
13:00 / Córdoba  
A vuelo de pájaro\*\*  
Coreografía: Cecilia Priotto  
Hall Central Patio Olmos  
19:00 / Córdoba  
Calidoscopio\*  
Coreografía: Teresa del Cerro  
19:30 / La Rioja  
En vuelo  
Ballet Clásico Contemporáneo  
Municipal de La Rioja  
Coreografía y Dirección: Mario González  
Acto Inaugural  
Ciudad de las Artes  
20:30 / Buenos Aires  
Tango y Folk  
Cía. Tangokinesis  
Dirección: Ana María Stekelman  
Eventos Especiales  
Auditorio Museo Evita | Palacio Ferreyra  
10:00 a 14:00 / México  
Workshop:  
La interpretación a través de la mima corporal  
Prof. Ramón Solano – Cía. Onírico  
Escuela Dr. Alejandro Carbó  
9:00 a 11:00 / Córdoba  
Clase de Acrodanza  
Prof. Silvia Vilita  
Auditorio Museo Evita | Palacio Ferreyra  
15:00 a 16:30  
Ciclo de Vídeos de Danza: Cuando miro... qué veo?  
Programa: Obras de Martha Graham,  
Mats Ek, Cesc Gelabert, entre otros  
Bar del Museo Evita | Palacio Ferreyra  
17:00 a 18:30  
Encuentro con la Cía. Onírico (México)  
Y la Cía. Natxo Montero (España)  
- Viernes 6 de mayo  
Espectáculos  
Plaza San Martín  
12:30 / La Rioja  
En vuelo  
Ballet Clásico Contemporáneo Mun. de La Rioja  
Coreografía y Dirección: Mario González  
13:00 / Córdoba  
A vuelo de pájaro\*\*  
Coreografía: Cecilia Priotto  
13:30 / Córdoba  
Civiles Bícibles  
Elenco Municipal de Danza Teatro  
Coreografía y Dirección: Marola Farías  
14:00 / Córdoba  
Em-plazamientos y Des-plazamientos\*  
Idea y Dirección: José Halac  
Paseo Del Buen Pastor  
16:30 / Córdoba  
Punto en Fuga - Danza Intervención\*\*  
Coreografía: Ariana Andreoli  
17:00 / España  
Carni di prima qualità  
Cía. Natxo Montero  
17:30 / México

En espera  
Cía. Onírico – Danza Teatro del Gesto  
Hall Central Patio Olmos  
19:00 / Córdoba  
Calidoscopio\*  
Coreografía: Teresa del Cerro  
Sala Carlos Giménez Teatro Real  
21:00 / Francia  
Rivages  
Grupo Carpe Diem  
Eventos Especiales  
Auditorio Museo Evita | Palacio Ferreyra  
10:00 a 14:00 / México  
Workshop:  
La interpretación a través de la mima corporal  
Prof. Ramón Solano – Cía Onírico  
Escuela Garzón Agulla  
9:00 a 11:00 / Córdoba  
Clase de Acrodanza  
Prof. Silvia Vilta  
Auditorio Museo Evita | Palacio Ferreyra  
15:00 a 16:30  
Ciclo de Videos de Danza: Cuando miro... qué veo?  
Programa: Obras de Coreógrafos italianos  
contemporáneos y Coreógrafos Cordobeses  
Bar del Museo Evita | Palacio Ferreyra  
18:00 a 20:00  
Entrevista Abierta a Ana María Stekelman  
- Sábado 7 de mayo  
Espectáculos  
Plaza San Martín  
12:00 / La Rioja  
En vuelo  
Ballet Clásico Contemporáneo Mun. de La Rioja  
Coreografía y Dirección: Mario González  
12:30 / Córdoba  
Em-plazamientos y Des-plazamientos\*  
Idea y Dirección: José Halac  
13:00 / México  
El camino más largo  
Cía. Onírico – Danza Teatro del Gesto  
13:30 / Córdoba  
A vuelo de pájaro\*\*  
Coreografía: Cecilia Priotto  
Paseo Del Buen Pastor  
16:00 / Córdoba  
Punto en Fuga - Danza Intervención\*\*  
Coreografía: Ariana Andreoli  
16:30 / La Rioja  
En vuelo  
Ballet Clásico Contemporáneo Mun. de La Rioja  
Coreografía y Dirección: Mario González  
17:00 / España  
Carni di prima qualità Cía. Natxo Montero  
17:30 / Córdoba  
Punto en Fuga - Danza Intervención\*\*  
Coreografía: Ariana Andreoli  
Hall Central Patio Olmos  
19:00 / Córdoba  
Calidoscopio\*  
Coreografía: Teresa del Cerro  
Sala Azucena Carmona Teatro Real  
18:30  
Dínamos Grupo Andanzas  
Idea y Coreografía: Silvia Vilta  
Cierre del Festival  
Sala Carlos Giménez Teatro Real  
21:00 / Buenos Aires  
Tango y Folk y Obras de Piazzola  
Cía. Tangokinesis  
Dirección: Ana María Stekelman  
Eventos Especiales

Primer Piso del Teatro Real  
10:00 a 13:00 / España  
Workshop de Danza Contemporánea  
a cargo del coreógrafo Natxo Montero  
Sala El Panal  
14:00 a 16:00 Taller: Lo sonoro y lo cinético  
en la construcción del espacio escénico  
Dictado por: José Halac.  
- Actividades de extensión  
Centro Socio-Educativo CeCAM  
Obispo Trejo 736 Bº Nueva Córdoba  
5 y 6 de mayo - 15:00 a 17:00  
Seminario / Moverse adentro  
(un acercamiento a la danza)  
Docente: María José Díaz Cerutti  
Nuevo Hospital de Niños Santísima Trinidad  
Bajada Pucará 1900  
6 de mayo - 16:00  
iiiUy... se ha perdido la historia!!!  
Compañía Vacilante  
Hospital Pediátrico del Niño Jesús  
Escuela Hospitalaria Semillas del Corazón  
Castro Barros 650  
7 de mayo - 17:00  
iiiUy... se ha perdido la historia!!! Compañía Vacilante  
\* Producción del Curso de Capacitación:  
Taller Interdisciplinario Danza y Música del Teatro Real  
\*\*Convocatoria Jóvenes Creadores

Por todo lo expuesto, y exaltando la importancia de esta expresión artística que con su belleza y dinámica le ofrece el transeúnte cotidiano de la ciudad una oportunidad de recreación y disfrute, pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

**Estela Bressan.**

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7409/L/11  
TEXTO DEFINITIVO  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la realización del IV Festival Internacional de Danza Contemporánea en Paisajes Urbanos -Pulso Urbano- que, organizado por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba a través de la Subdirección de Artes Escénicas - Área Danza Contemporánea, se desarrollará del 5 al 7 de mayo de 2011 con intervenciones en diferentes espacios públicos de la ciudad de Córdoba.

**PROYECTO DE DECLARACION – 07410/L/11  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CORDOBA  
DECLARA:**

Su beneplácito y adhesión a la realización de la "Seminario de Formación de Ludo Educadores" que se realizará desde el 6 de mayo al 12 de julio del corriente año en la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba., Departamento de Río Cuarto.

**Milena Rosso**Error! Marcador no definido..

**FUNDAMENTOS**

En la ciudad de Río Cuarto, la Ludoteca Infantil "Mi Rincón Favorito", con el área de Proyectos Especiales de la Fundación EGE, están organizando un seminario de Formación de Ludo Educadores entre los meses de mayo y julio del 2011.

Con el objetivo de desarrollar alternativas pedagógicas que renuevan e integren nuevas propuestas para enriquecer los ámbitos formales y no formales de la educación, la salud y la comunidad, desde una perspectiva lucida, creativa, crítica y reflexiva.

Dicha formación será dictado por profesionales especializados de la Asociación Internacional por el Derecho del Niño a Jugar (IPA), y bajo la coordinación de la profesora y presidente en la argentina de IPA, profesora Beatriz Caba.

La importancia de la formación y de las disertantes merece que le otorguemos la Declaración de interés ya que es una contribución al estímulo orientado al compromiso social.

Estas instituciones trabajan para el bien publico y tienen la capacidad de ofrecer a la ciudad y la región las posibilidades de informarse, conocer, formarse y convertirse en ciudadanos activos para participar y encaminar la sociedad de la que es parte.

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

**Milena Rosso**Error! Marcador no definido..

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7410/L/11**

**TEXTO DEFINITIVO**

**LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA**

**DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la realización del "Seminario de Formación de Ludo Educadores", a desarrollarse desde el 6 de mayo al 12 de julio de 2011 en la ciudad de Río Cuarto.

**PROYECTO DE DECLARACION – 07411/L/11**

**LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CORDOBA**

**DECLARA:**

Su beneplácito y adhesión a la realización de la "Expocampo 2011" que se realizará desde el 5 al 7 de mayo del corriente año en la localidad de Las Vertientes, Departamento de Río Cuarto.

**Milena Rosso, Horacio Vega.**

**FUNDAMENTOS**

El Expo Campo, es una mega muestra agrícola a cielo abierto, que estará enclavada en una ubicación estratégica para el rubro agroalimentario y agroindustrial en el departamento de Río Cuarto.

La propuesta surge de dos empresas especializadas en la organización de eventos vinculados al agro y con larga trayectoria en el periodismo: Revista Chacra y Sembrando Satelital. Se llevara a cabo entre el 5 y el 7 de Mayo en el establecimiento "Mis Sueños", de la localidad de Las Vertientes, ruta 8 Km. 637 provincia de Córdoba.

La Expo Campo 2011 tiene como principales temas de exposición, la Tecnología y el Valor Agregado. El agro requiere constante actualización en sus cuestiones, implementación y difusión, como por ejemplo: la integración vertical, las energías renovables, la sustentabilidad, los productos orgánicos, la ganadería de precisión, el cambio climático, la demanda mundial de alimentos, entre otros. Estos serán los ejes que se expondrán en este evento, es una muestra diferente, actual, dinámica y educativa para los productores de Argentina que trabajan y adoptan tecnologías apropiadas para llevar adelante sus producciones agrícolas y ganaderos a tal punto de que son considerados en esta relación como uno de los más eficientes del mundo.

El objetivo es que el productor se vaya superando en conocimiento para seguir esta tendencia. En esta muestra las empresas más importantes apostarán a traer lo último disponible en el mercado nacional e internacional, para un público ávido de incorporar este tipo de tecnologías para superarse tanto en los rendimientos a lograr como en calidad de trabajo.

En los próximos años en la Argentina el objetivo es poder dar valor agregado a la producción en origen. El productor puede llegar a realizar el trabajo ideal para posicionar a la Argentina como uno de los países líderes en provisión y comercialización de alimentos al mundo. Esta muestra tendrá 250 hectáreas dedicadas a demostraciones dinámicas: cosecha de maíz y soja; cosecha de forrajes; corte, rastrillado y henificación; pulverización; siembra y fertilización, siempre en el marco de una agricultura de precisión.

Para estas actividades ya se sembraron lotes de maíz y soja, y el clima acompaña con las lluvias el desarrollo de los cultivos y se espera que lleguen de la mejor manera, expresando su potencial al momento de la feria. Para el sector estático y los visitantes, se ha acondicionando el predio para que puedan recorrer cómodamente los stands de las empresas que acercarán todas sus novedades en bienes y servicios. También habrá una carpa especialmente acondicionada para que se puedan brindar charlas técnicas y conferencias sobre los temas que requieren actualización permanente.

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

**Milena Rosso, Horacio Vega.**

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7411/L/11**

**TEXTO DEFINITIVO**

**LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA**

**DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la realización de la Mega Muestra Agrícola "Expo Campo 2011 - Córdoba", a desarrollarse del 5 al 7 de mayo en la localidad de Las Vertientes, Departamento de Río Cuarto.

**PROYECTO DE DECLARACION – 07412/L/11**

**LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CORDOBA**

**DECLARA:**

Su reconocimiento y beneplácito por la implementación de la Asignación por Embarazo para Protección Social para la mujer embarazada, dado que este nuevo beneficio constituye un avance

sustantivo respecto de la protección integral del niño y de la madre y una importante herramienta de inclusión, en la disminución de la desigualdad social y la mortalidad materno infantil.

**Bloque de la Concertación Plural.**

**FUNDAMENTOS**

Por el presente proyecto queremos declarar beneplácito y reconocimiento a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de implementar la Asignación por Embarazo para Protección Social.

A través del Decreto Nacional 466/2011, publicado el 19 de abril de 2011, se formalizó esta nueva prestación, que comenzará a ser percibida desde el presente mes de mayo, en virtud de la necesidad de seguir ampliando la cobertura de las asignaciones familiares y a efectos de darle protección a la mujer embarazada que se encuentra en las condiciones que las personas que acceden a la Asignación Universal por Hijo (AUH), es decir, en situación de mayor vulnerabilidad.

En el mismo sentido que la AUH, la Asignación por Embarazo para Protección Social tiene como fin la equidad distributiva, de género e inclusión social y en particular, la disminución de la mortalidad maternal, perinatal, neonatal e infantil, garantizando el acceso a los servicios de salud, exigiendo los controles médicos pertinentes.

En efecto, el beneficio, de carácter no retributivo, se otorgará a todas las mujeres embarazadas desde la décimo segunda semana de gestación, que se encuentren desocupadas o trabajen en el sector informal o en el servicio doméstico y percibiendo un salario igual o inferior al mínimo, vital y móvil.

Corresponderá la percepción de la prestación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo, no siendo incompatible con cobertura de obra social particular.

Los requisitos para acceder, están orientados a la protección de la mujer embarazada y del niño en gestación, en tanto exigen la acreditación del estado de gravidez mediante la inscripción en el "Plan Nacer", controles prenatales completos, a través de una Tarjeta de Seguimiento, y consejería integral en salud sexual y en el cuidado de la salud y del recién nacido.

Esta medida se inscribe en una serie de acciones que vienen impulsándose desde el 2003 en materia de política sanitaria y social, que tienen por prioridad la justicia social y la redistribución del ingreso.

Ya es manifiesto el impacto de la AUH en los indicadores de bienestar social y en la reducción del porcentaje de pobreza e indigencia. Asimismo, debe considerarse la contribución al ejercicio de derechos básicos como la salud y la educación por medio del cumplimiento de las condicionalidades, vislumbrando beneficios a futuro a partir de la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza.

Con la Asignación por Embarazo para Protección Social, se estima que se beneficiará a más de 177 mil mujeres embarazadas, es decir cerca del 21,3% de los nacimientos para 2011 con cobertura social, con servicios de atención médica adecuados, en pos de evitar la mortalidad materna y neonatal con diagnósticos precisos y tratamiento oportuno.

Considerando que esta medida tiende a igualar las oportunidades de las mujeres que se encuentran fuera del sistema de empleo formal, y tiene como principal objetivo la protección integral de la madre y el niño, es que solicitamos a nuestros pares presten aprobación al presente Proyecto de Declaración.

**Bloque de la Concertación Plural.**

**PROYECTO DE RESOLUCION – 07414/L/11**

**LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CORDOBA**

**RESUELVE:**

Declarar "Visitante Ilustre al Sr. Ndaba Mandela", nieto del ex Presidente sudafricano Nelson Mandela, primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente mediante sufragio universal, líder de la lucha del pueblo negro por la abolición del apartheid en ese país.

**Daniel Passerini.**

**FUNDAMENTOS**

Entre el 6 y el 16 de mayo del corriente año, Córdoba recibirá la visita oficial del Consejero Político de la Embajada de Sudáfrica en Argentina, el Sr. Mbulelo Mitilwa, quien estará acompañado por Ndaba Mandela, nieto de una de las figuras más prominentes de la historia reciente en el mundo.

Luchador incansable contra el apartheid que enlodó a Sudáfrica durante tanto tiempo, quien soportó décadas de injusta prisión por el solo hecho de oponerse a esa vergüenza mundial que era el régimen racista sudafricano, inauditable en su causa por la igualdad y la libertad, Nelson Mandela se ha convertido en un símbolo de las causas nobles de nuestro tiempo. Liberado tras 26 años de encierro, lideró al pueblo sudafricano en la marcha a su emancipación y fue su primer presidente democráticamente elegido a la caída del régimen que postergaba a las mayorías negras de la vida civil y política.

Su nieto, quien nos honrará con su visita en mayo de 2011, fue y es también un luchador y un difusor de los valores que llevaron a Sudáfrica a despojarse del oprobio que el apartheid significó hasta finales del siglo XX. Vinculado a la Fundación Nelson Mandela, Ndaba presta colaboración en distintas representaciones diplomáticas sudafricanas por el mundo y promueve los

valores de la igualdad y la solidaridad como miembro de la fundación que lleva el nombre de su abuelo.

El pueblo de Córdoba al que la Legislatura representa, ha de sentirse orgulloso y honrado de tan distinguida visita, y por ello es que damos por descontada la aceptación de la presente declaración por parte de todos los señores legisladores.

**Daniel Passerini.**

**PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 7414/L/11**

**TEXTO DEFINITIVO**

**LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA**

**RESUELVE:**

**Artículo 1º.-** Declarar "Visitante Ilustre al Sr. Ndaba Mandela", nieto del ex Presidente sudafricano Nelson Mandela, primer Presidente de Sudáfrica elegido democráticamente mediante sufragio universal, líder de la lucha del pueblo negro por la abolición del Apartheid en ese país.

**Artículo 2º.-** PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese.

**PROYECTO DE DECLARACION – 07418/L/11**

**LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CORDOBA**

**DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito a los actos organizados con motivo de la Celebración de las "Fiestas Patronales en honor a Jesús Misericordioso", perteneciente a la Parroquia de Villa de Soto, Departamento Cruz del Eje, que organizado por la Comisión de dicha Gruta, se llevará a cabo el día 8 de mayo de 2011.

**José Monier.**

**FUNDAMENTOS**

La Comisión Pro-Gruta, se encuentra avocada a la Organización de los Actos Celebratorios de Las Fiestas Patronales en honor a "Jesús Misericordioso" perteneciente a la Parroquia de Villa de Soto, que se llevará a cabo el día 08 de Mayo de 2011.

Dicha Comisión comienza su vida Institucional a partir del Año 2003 y con mucho esfuerzo y colaboración de la Feligresía Católica, construye una moderna Gruta en la que ha partir de dicha fecha comienza la Celebración de su Fiesta Patronal, convocando un importante cantidad de Asistentes, lo que la proyecta como una de la Fiesta Patronal mas destacada de la Localidad de Villa de Soto.

Los festejos se llevarán a cabo el día 08 de Mayo, donde se prevé la realización de Misas, Procesión y posteriormente una Peña Folklórica para recaudar fondos destinados a Obras de Infraestructura de la Gruta.

Esta Legislatura participa del Júbilo que tan importante encuentro representa para toda la comunidad de Villa de Soto.

Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresaremos en su tratamiento solicitamos a este Cuerpo Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido formulado.

**José Monier.**

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7418/L/11**

**TEXTO DEFINITIVO**

**LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA**

**DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales en honor a "Jesús Misericordioso", perteneciente a la Parroquia de la localidad de Villa de Soto, Departamento Cruz del Eje, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 8 de mayo de 2011 bajo la organización de los integrantes de la Comisión de la mencionada Gruta.

**PROYECTO DE DECLARACION – 07431/L/11**

**LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CORDOBA**

**DECLARA:**

Su beneplácito por el 100 aniversario de la creación de Conservatorio Superior de Música Félix Tomás Garzón y por la celebración del acto central del Centenario, con la actuación de la Orquesta Sinfónica y coros del Conservatorio Félix Tomás Garzón a desarrollarse el día 22 de mayo a las 20:30 en la Sala Mayor Teatro del Libertador.

**Modesta Genesio de Stabio**Error! Marcador no definido..

**FUNDAMENTOS**



Desde sus orígenes el Conservatorio fue sinónimo de profesionalismo y no ha perdido su excelencia y trascendencia musical. Muchos de sus instrumentistas pueblan hoy diversas orquestas sinfónicas y conjuntos de cámaras, no sólo de Argentina sino también del extranjero.

Hablar de Félix T. Garzón es hablar de una institución implantada en el predio de la Ciudad de las Artes, la misma que a lo largo de los años, demasiado quizás, deambuló por varios espacios hasta encontrar su lugar definitivo en el que hoy se desarrolla toda esa actividad.

El Conservatorio fue creado en enero de 1911, dependiendo del Gobierno de la Provincia de Córdoba, bajo los buenos auspicios de la sociedad cordobesa; es el segundo Conservatorio en importancia de nuestro país, y es la única institución de la provincia (junto con el Conservatorio Manuel de Falla de Buenos Aires), tanto de la esfera pública como de la privada, que forma instrumentista en 17 especialidades: Violín, Viola, Violoncello, Contrabajo, Arpa, Guitarra, Flauta Traversa, Oboe, Clarinete, Fagot, Trompeta, Corno, Trombón, Saxofón, Percusión, Piano y Canto.

Cabe destacar que es la única institución pública de Córdoba que brinda educación musical a niños y jóvenes desde los 8 años de edad.

Cuenta con dos carreras de nivel superior, un trayecto de nivel medio y un ciclo de iniciación. Las ofertas académicas son:

- 1- Tecnicatura Superior en Música.
- 2- Profesorado en Artes Especialidad Música.
- 3- Trayecto Artístico Profesional, Especialidad Instrumentista.
- 4- Nivel Inicial.

**Modesta Genesio de Stabio.**

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7431/L/11**

**TEXTO DEFINITIVO**

**LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA**

**DECLARA:**

Su beneplácito por la conmemoración del Centenario de creación del Conservatorio Superior de Música "Félix Tomás Garzón"; adhiriendo al acto central de celebración que, con la actuación de la Orquesta Sinfónica y Coros del mencionado Conservatorio, se desarrollarán el día 22 de mayo de 2011 en la Sala Mayor del Teatro Libertador de la ciudad de Córdoba.

**PROYECTO DE DECLARACION – 07432/L/11**

**LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CORDOBA**

**DECLARA:**

Su más sentido homenaje y admiración a los valientes tripulantes del "Crucero ARA General Belgrano ", bastión heroico de la Guerra de Malvinas, al haberse cumplido el 29º aniversario de su cruel hundimiento.

**Todos los Legisladores integrantes del Cuerpo.**

**FUNDAMENTOS**

El Poder Legislativo de Córdoba no debe estar ajeno a un homenaje permanente a nuestros héroes de Malvinas y recordarlos cada 2 de mayo es una mínima devolución de afecto para con aquel/os que brindaron su vida por la Patria.

Una de las jornadas más lamentables de aquella guerra inútil, fue el día en que se cometió un atroz crimen de guerra con el hundimiento, por parte del submarino nuclear británico HMS Conqueror, del buque de la Armada Argentina General Belgrano, que con 1093 personas a bordo navegaba fuera de la zona de exclusión y con rumbo distinto a la zona de guerra.

No debemos olvidar este salvaje atentado ni dejar de rendir nuestro justo y modesto homenaje, todos los 2 de mayo, a quienes murieron y sobrevivieron a ésta brutal agresión violatoria del Derecho Internacional.

El crucero General Belgrano fue torpedeado a las 16.01hs. del 2 de mayo de 1982 con 1093 tripulantes a bordo. En el naufragio murieron 323 hombres y sobrevivieron 770.

A veintinueve años de dicha tragedia, como argentinos debemos recordar y homenajear a quienes perdieron su vida en este triste acontecimiento y a quienes valientemente sobrevivieron a él.

**Todos los legisladores integrantes del Cuerpo.**

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7432/L/11**

**TEXTO DEFINITIVO**

**LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA**

**DECLARA:**

Su más sincero homenaje y admiración para con los valientes tripulantes del "Crucero A.R.A. General Belgrano" bastión heroico de la Guerra de Malvinas, al haberse cumplido el pasado 2 de mayo el 29º aniversario de su cruel hundimiento.

**PROYECTO DE DECLARACION – 07434/L/11**

**LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CORDOBA  
DECLARA:**

De interés Legislativo al "Selectivo de Menores para el Mundial de Padel 2011", organizado por la Asociación Cordobesa de Padel, a llevarse a cabo el próximo 14 y 15 de mayo del corriente año, el cual tendrá lugar en la Provincia de Córdoba y contará con la presencia de jugadores-menores de todo el país.

**Nancy Lizzul.**

**FUNDAMENTOS**

La Asociación Cordobesa de Padel (ACP), personería jurídica N° "A" 202, es una Institución sin fines de lucro que promueve el padel a nivel provincial y nacional a través de distintos proyectos deportivos.

En el año en curso la Asociación Padel Argentino (APA) organiza 3 selectivos de menores y un master final, clasificatorios para el Mundial de Padel de Menores 2011, los cuales se realizarán en la Provincia de Buenos Aires y Córdoba capital.

La provincia de Córdoba, a través de la Asociación Cordobesa de Padel, en el mes de mayo, tiene el honor de recibir a jugadores de padel - menores de diferentes provincias del país, los cuales asisten con el fin de clasificar para el Mundial que se desarrollará en el mes de octubre en Portugal.

Este evento que reunirá a más de 150 jóvenes de las distintas provincias argentinas que practican y fomentan esta disciplina deportiva, no resulta un torneo más, sino, la más importante competencia del país en materia de menores jugadores de padel.

Estos Datos Revelan la Importancia del Evento; y el Reconocimiento a la Labor que ha desarrollado la Asociación Cordobesa de Padel al Obtener la Designación de una de las Sedes de este Selectivo, logrando traer a nuestra Provincia un Espectáculo que es motivo de Orgullo para el Deporte.

Entre los fundamentos esgrimidos por los organizadores se resalta que "detrás del evento deportivo propiamente dicho se encolumnan una cantidad de niños y jóvenes de nuestra Provincia que se beneficiarán directamente al poder asistir a este tipo de torneos, los cuales hasta le momento se desarrollaban únicamente en la Provincia de Buenos Aires. Así mismo, se otorga a la familia de los jóvenes la posibilidad de compartir con ellos este tipo de eventos deportivos, a los cuales muchas veces por razones económicas no asisten.

El apoyo al deporte es un compromiso y obligación por parte de todos nosotros.

El padel, como toda actividad deportiva, es un elemento de contención social, que permite a sus jóvenes adherentes obtener expectativas positivas y asimilar patrones y valores morales y éticos fundamentales para nuestra sociedad.

Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

**Nancy Lizzuli**Error! Marcador no definido..

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7434/L/11  
TEXTO DEFINITIVO  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la realización del "2º Selectivo de Menores clasificatorio al Mundial de Padel 2011" que, organizado conjuntamente por la Asociación Cordobesa de Padel y la Asociación Padel Argentino, se desarrollará durante los días 14 y 15 de mayo en la ciudad de Córdoba contando con la participación de jugadores de todo el país.

**-12-**

**FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA. PROYECTO DE LEY PRESENTADO  
ANTE EL CONGRESO DE LA NACIÓN. ADHESIÓN AL CONTENIDO. APROBACIÓN.  
SOLICITUD A LOS LEGISLADORES NACIONALES.**

Moción de tratamiento sobre tablas

**Sr. Presidente (Busso).**- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 459/L/08, la que será leída a continuación.

**Sra. Secretaria (Pastor).**- (Leyendo):

Córdoba, 3 de mayo de 2011.

**Señor Héctor Oscar Campana  
Presidente de la Legislatura  
de la Provincia de Córdoba  
S. / D.**

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 459/L/08, adhesión al proyecto de ley presentado por la Federación Agraria Argentina de extranjerización de tierras, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, rehabilitado con Nº 5464/L/10.

Sin otro particular, salúdole atentamente.

**Omar Antonio Ruiz**

Legislador provincial

**Sr. Presidente (Busso).**- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y rechaza.

**Sr. Presidente (Busso).**- Rechazada.

Tiene la palabra el legislador Omar Ruiz.

**Sr. Ruiz.**- Gracias, señor presidente.

He considerado oportuno traer al recinto un pedido de tratamiento sobre tablas y pedir la reconsideración en un tema que en las últimas semanas se ha puesto nuevamente en la agenda, cual es la necesidad que tiene nuestro país de contar con una legislación que establezca restricciones y límite a la compra de tierras por parte de extranjeros.

Este no es un tema nuevo. Ya en el año 2002 la Federación Agraria Argentina presentó un proyecto de ley en el Congreso nacional, respaldado por más de 60.000 productores en todo el país y que en mi caso, como legislador de la Provincia, presenté en el año 2008 para que la Legislatura de Córdoba le pida al Congreso de la Nación se aboque al tratamiento de este proyecto y, seguramente, de otros que serán presentados o de las ideas que surjan de los diputados y senadores nacionales o del propio Poder Ejecutivo nacional como recientemente se ha pronunciado.

En el momento en que la Federación Agraria presentó el proyecto, señor presidente, algunas encuestas de opinión indicaban que más del 90 por ciento de los argentinos consideraban necesaria una legislación que estableciera restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. Uno de los casos más emblemáticos es el de la adquisición de más de 900 mil hectáreas en el sur de nuestro país por parte de los hermanos Benetton, aunque la lista es muy larga en cuanto a numerosas personalidades, particulares y empresas de distintos países del mundo que han adquirido grandes extensiones de tierra.

Por eso, consideramos necesario que esta Legislatura de Córdoba le pida al Congreso de la Nación que se trate este tema. Numerosos países del mundo cuentan con esta legislación. Lejos está de la intención de este legislador y de todas las personas que adhieren a esta idea el desalentar inversiones; incluso en los principales países capitalistas del mundo existe este tipo de restricciones que tienen que ver con el interés nacional, con la soberanía alimentaria, con una palabra que se usa poco que es la geopolítica, pero fundamentalmente con una hipótesis de conflicto que pone a la disputa de los recursos naturales como el agua y los minerales en el futuro del mundo.

Nuestro país, como lo hace Brasil con la protección del Amazonas, debe cuidar las fuentes de agua como los glaciares y el acuífero Guaraní, y las grandes extensiones de tierra, de minerales y de otros recursos naturales. Argentina solamente cuenta con una legislación de protección para la adquisición de tierras por parte de extranjeros en zonas de frontera; necesitamos avanzar con esta legislación que tiene también otro tipo de objetivos –según lo propone la Federación Agraria- que es disminuir la concentración de tierras en nuestro país.

En el año 2002, el Censo Nacional Agropecuario indicaba que el 43 por ciento de la tierra argentina productiva estaba en manos del 1,3 por ciento de los productores. Estos son argumentos de sobra para justificar este pedido de tratamiento del tema. Si vuelve nuevamente a comisión espero que la misma, como lo trató en algún momento durante el año 2009, le dé nuevamente tratamiento y podamos poner a Córdoba entre las provincias impulsoras de una legislación de este tipo en defensa del interés nacional, pero por sobre todo en defensa de la soberanía alimentaria y de la producción nacional.

**Sr. Presidente (Busso).**- En consideración la moción de reconsideración solicitada por el legislador Ruiz.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y rechaza.

**Sr. Presidente (Busso).**- Rechazada.

---

**PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION - 04-V-2011**

---

No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Marcelo Frossasco a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.

– Así se hace.

**Sr. Presidente (Busso).**- Queda levantada la sesión.

- Es la hora 19 y 35.

**Sra. Graciela Maretto**  
**Directora del Cuerpo de Taquígrafos**

**Dra. Silvana Sabatini**  
**Directora del Cuerpo de Taquígrafos**

---

**Héctor Oscar Campana**  
Vicegobernador

**Fredy Daniele**  
Secretario de Coordinación  
Operativa y de Comisiones

**Guillermo Arias**  
Secretario Legislativo